GUSTAVO CANIHUANTE

LA REVOLUCION CHILENA

BIBLIOTECA NACIONAL
0059960

BIBLIOTECA POPULAR NASCIMENTO

BIBLIOTECA POPULAR NASCIMENTO

Director: Hernán Loyola

GUSTAVO CANIHUANTE

LA REVOLUCION CHILENA

AA M 0821

BIBLIOTECA NACIONAL CHILE

EDITORIAL NASCIMENTO
SANTIAGO DE CHILE 1971

BIBLIOTECA NACIONAL
Sección Central

Impreso en los talleres de
la Editorial Nascimento, S. A.
— Arturo Prat 1428 —
Santiago de Chile, 1971.

N.º 3523

ADVERTENCIA PRELIMINAR

Desde el Informe a un Congreso de la Juventud Obrera Católica (1952) hasta LA REALIDAD CHILENA (1971) *he publicado varios trabajos referentes a los problemas que vive nuestro país. La principal causa y consecuencia de ellos ha sido el intenso diálogo sostenido con trabajadores y estudiantes para resolver consultas sobre el acontecer nacional. En el presente trabajo he querido ordenar las respuestas referentes a las cuestiones que plantea la iniciación de un proceso revolucionario en nuestro país.*

Los problemas son muchos y me ha parecido necesario agruparlos en seis partes. En la primera se abordan los problemas generales, dándoles mayor profundidad de análisis en la quinta, destinada especialmente a los que están más compenetrados de la situación. En la parte segunda se aborda el hecho crucial del cambio de sistema económico. En la tercera se discute sobre el candente problema del desafío económico en que se encuentra el actual Gobierno y en la cuarta me refiero brevemente a los cambios políticos y culturales. Por último la sexta parte está destinada a un análisis particular de los partidos políticos chilenos.

Una de las tareas principales de toda revolución es la educación política de las masas. Esta se realiza en forma sistemática o refleja. La primera opera con cursos y otras for-

mas de discusión de grupos; en este trabajo los militantes populares encontrarán pautas ordenadas para sus charlas y foros, las que podrán utilizar de acuerdo a sus visiones de la realidad. La educación refleja se da con las informaciones que toda la gente lee o escucha; las personas que no participan en política tendrán aquí ese mismo material pero en forma ordenada.

No pretendo ser imparcial, pero sí trato de enfrentar los hechos principales dejando de lado las interminables discusiones sobre puntos de vista y al mismo tiempo proporcionando los elementos objetivos sobre los cuales cada cual pueda hacer su propia interpretación. Mi ocupación de investigador y profesor me ha permitido dedicar a este afán un tiempo que para otros está recargado de tareas ejecutivas. Durante todo este período (1950-1970) me he mantenido como independiente de izquierda, siguiendo aproximadamente la misma evolución ideológica de las fuerzas que ahora se agrupan en el MAPU y en la Izquierda Cristiana. Ello me ha permitido ver desde un ángulo particularmente favorable los problemas y las esperanzas de los trabajadores chilenos, problemas y esperanzas que, en cierto modo, son también los de toda la humanidad.

Al entregar este trabajo quiero expresar mi deuda de gratitud para con un luchador prematuramente fallecido al despuntar el día de los trabajadores. En 1956 conocí en San Fernando a Yerko Moretic Castillo *y de él aprendí, con el profundo realismo y fuerza que él tenía, lo fundamental del socialismo. Estas páginas no son más que una parte de su enorme presencia en esta gran tarea del hombre que era y es su tarea.*

Santiago, septiembre de 1971.

INTRODUCCION

El proceso iniciado en septiembre del año pasado, producto de una larga génesis, tenía que significar necesariamente un trastorno de la vida nacional. A esta inevitable confusión se agrega el hecho de que, por el carácter mismo del conflicto entre dos fuerzas absolutamente opuestas, se aprecia la tendencia a explicar la realidad chilena como una película en que sólo hay jovencitos y bandidos. La gente desconfía de estas versiones simplistas y algunos están hastiados de toda discusión política; otros en cambio desean comprender lo que realmente pasa para tomar una posición consciente al respecto, ya que adivinan que el proceso que vivimos de alguna manera afecta a la vida de todas las personas y de todas las familias.

No es posible pretender una visión imparcial de la realidad, ya que de una u otra manera toda interpretación está impregnada de una posición concorde en lo substancial con alguna de las fuerzas en conflicto. Pero si es posible dejar de lado los adjetivos y tratar de entender lo substancial utilizando para ello los datos más objetivos de que podamos disponer y sabiendo aceptar las debilidades de nuestro propio bando, porque también las hay. Es obvio que hay gente porfiada que se queda en detalles para obstinarse en sus viejas posiciones; la razón de ello es que los factores que explican esa actitud son más poderosos que la verdad. Pero también hay mucha gente que honradamente quiere tener

una visión lo más certera posible y que está dispuesta al diálogo cuando se supera las actitudes cerradas; este trabajo es una parte de ese diálogo.

En estos precisos momentos la tarea es particularmente difícil.

A un año de la elección de septiembre el proceso chileno se encuentra en un momento que el Presidente Allende ha calificado de extraño e interesante. Una ola de desconcierto, y aun de desaliento, recorre a las mayorías nacionales e incluso alcanza a los más fervorosos revolucionarios. Es fácil caer en simplismos que no tienen nada que ver con la densidad de la situación. Se ha dicho que Chile tiene una loca geografía pero una historia sabia; es justamente el momento, la hora de probarlo.

Lo que más llama la atención es la liviandad con que se toman las cosas. Este país que ha sido acomplejado con la obsesión de tener campeones mundiales, lo que tienen en abundancia otros países, más pequeños, no se da cuenta que en este momento Chile es el país más importante para la historia mundial.

La historia del hombre en el siglo veinte es la culminación de un cambio total en la forma de vivir, cambio que incluye como base fundamental la transformación de los sistemas económicos y concretamente la transición del capitalismo al socialismo. En la primera fase esos cambios se hicieron en medio de duras crisis y con deformaciones que fueron producto de esas circunstancias; Chile tiene la posibilidad de iniciar un modelo de cambio que signifique una revolución limitada en su dolor y progresiva en sus frutos.

Es muy erróneo creer que el eventual fracaso de Allende sería muy similar a todos los anteriores. En la historia de Chile se han abierto las compuertas de las fuerzas populares; la disyuntiva es clara, o se encauza el torrente o la inundación deteriora al país por mucho tiempo. Creo que la actitud del hombre común y de la gente consciente no puede ser alegrarse por los problemas que vienen ni quedarse mirando para

ver qué pasa. O se mejora la experiencia socialista o se pierden muchos años tratando inútilmente de volver a cerrar las compuertas. Sin duda que a la mayoría le interesa lo primero. El torrente, encauzado o libre, tendrá que aplastar el poder de unos pocos por lo mismo que era un poder que no dejaba florecer la tierra; dejémoslos a ellos protestando por su fin, pero que no engañen a la mayoría para comprometerla en una tarea regresiva. Ahora sí que Chile tiene un compromiso histórico y es necesario ponerse a su altura.

Los resultados de la elección de abril pueden haber inducido a engaño a algunos políticos y hacerles creer que la cosa iba viento en popa; los hechos posteriores han permitido comprender que la situación no es en absoluto clara. La Unidad Popular subió de un 36 por ciento del electorado a un cincuenta, pero permanece el hecho de que entre el 40% que es partidario decidido de la revolución y el 30% que se opone también decididamente a ella, hay un cuarenta por ciento que oscila y cuya definición es decisiva para la prosecución del proceso. En las anteriores revoluciones, cuando la conquista y manejo del poder se radicalizaba de partida con procedimientos violentos, este hecho no importaba demasiado, pero en un proceso que piensa mantenerse en la legalidad y con el consenso electoral tal problema alcanza una importancia crucial.

La derecha lo sabe y ha utilizado la mejor de sus tácticas. Ocultar el problema central, que es la pérdida de su poder económico a manos de los que lo producen, y ha tendido una cortina de humo formada por problemas tales como la escasez de pollos, las ocupaciones ilegales o la seudodefensa de la dignidad humana. Con ello logran engañar a los incautos que no saben ver más allá de ellos y a los no tan incautos que prefieren gozar de la protección de las minorías y tienen la esperanza de volver a esa situación.

Se dice con razón que toda revolución implica una campaña de educación masiva de la población. En esto consiste la formación de conciencia que la reacción ataca con bastante

razón; esta misma gente se ha opuesto siempre a la educación popular, sobre todo si ésta inculca en la gente ideas tan sectarias como el afirmar que los trabajadores tienen derecho al fruto de su trabajo. La educación política de masas es una tarea urgente, pero no se debe olvidar que la mejor escuela es la práctica, de tal modo que la educación debe hacerse en función de ella, es decir, para cumplir mejor las responsabilidades concretas que la gente va asumiendo. La revolución no es una tarea de intelectuales ni de individualidades; es la tarea de la clase trabajadora organizada.

I. LAS IDEAS GENERALES

Los propósitos del Gobierno y el momento actual

La primera inquietud ciudadana es saber qué es lo que se propone el Gobierno y qué es lo que efectivamente se está haciendo.

El senador democratacristiano Renán Fuentealba ha declarado recientemente: "El Dr. Allende cumple con hacer la anestesia ciudadana, a través de discursos, mientras a alto nivel los cirujanos operan". Es significativa la coincidencia entre esta apreciación con lo planteado por uno de los tantos voceros de la reacción que hablaba de la "operación valium", dando a entender que el Gobierno adormecía al país con frases legalistas para luego implantar la "dictadura comunista".

Con ello se forma la imagen de que a este Gobierno no hay que creerle lo que dice, sino adivinar más allá de las palabras sus verdaderas intenciones. Al parecer esto es una manera de responder al desconcierto que les ha producido el hecho de que no se cumplieran los negros vaticinios sobre el ascenso de un gobierno de inspiración marxista y revolucionaria.

Se pueden resumir los planteamientos del Gobierno de la

Unidad Popular en dos propósitos fundamentales. El primero, es que el objetivo fundamental es *iniciar la transformación revolucionaria de la sociedad chilena con vistas a la construcción del socialismo*. Junto con ello se plantea la decisión de que, de acuerdo con las condiciones concretas que presenta la realidad, tal proceso se haga con el menor costo social posible, respetando las leyes existentes, incluso para cambiarlas y basándose en las elecciones sobre la base del pluripartidismo. Todo ello se designa en forma un tanto imprecisa como *vía legal o democrática de la transición*.

La sola comprensión de estos propósitos es difícil para mucha gente debido a la larga mentalización que ha ejercido la burguesía dominante. Se han utilizado algunas características de otras construcciones socialistas para formar una imagen tan negativa de lo que es el socialismo que ha provocado en gran parte de la población una actitud francamente adversa, o a lo menos muy reticente frente a tal perspectiva.

En términos muy simples el socialismo no es más que una forma de organización social en la que el poder lo ejercen los trabajadores y en la que se eliminan los mecanismos de explotación y, especialmente, la propiedad oligárquica de los medios productivos. Es evidente que tal cambio implica pérdidas de privilegios para una pequeña minoría que ha ejercido un injusto poder y mantiene un régimen que lo acrecienta, pero este hecho no tiene por qué significar que socialismo sea sinónimo de arbitrariedad, caos económico o tiranía ideológica y política. Socialismo es crisis para la minoría pero para la inmensa mayoría es apertura hacia la verdadera democracia.

El socialismo no responde a la negra imagen que ha formado de él la reacción, pero tampoco es un dios que convierte

a la tierra en un paraíso. Es algo más modesto pero categórico: la posibilidad real de construir una sociedad en que las mayorías puedan realmente progresar, liberarse gradualmente de dominaciones innecesarias y reemplazar las luchas y tensiones por la colaboración solidaria entre seres humanos en un plano de iguales oportunidades.

En la parte quinta de este estudio, al abordar los problemas de fondo, estudiaremos con mayor detalle lo que significa el poder de los trabajadores y en esta parte primera analizaremos en qué consiste la vía chilena hacia el socialismo como asimismo las modalidades que puede asumir este sistema en Chile.

A decir verdad los reaccionarios no dudan, simplemente juegan todas sus cartas para impedir el proceso. Las dudas verdaderas vienen de otros sectores. Gran parte de la población tiene reservas acerca de la posibilidad de avanzar hacia el socialismo dentro de la vía legal y libertaria que se ha elegido. Incluso algunos grupos dudan de que efectivamente haya una revolución en Chile y ante el título de este trabajo preguntan ¿de qué revolución nos hablan? Hay que responder a unos y a otros.

Para establecer la relación entre planteamientos y hechos no hay otro camino seguro, una vez conocidos los planteamientos, que examinar los hechos.

En diez meses de gobierno se han expropiado y devuelto a la comunidad de trabajadores unas treinta empresas grandes y otras tantas medianas, pero estratégicas; se ha aprobado un mecanismo legal para nacionalizar todos los recursos mineros y particularmente las empresas del cobre; se ha triplicado el ritmo de la Reforma Agraria respecto al gobierno de Frei, y sobre todo, se ha cambiado radicalmente la orien-

tación de la economía. Puede discutirse el ritmo y profundidad del cambio estructural, pero no se puede negar que, a pesar de las limitaciones legales y políticas, se ha manifestado en forma concreta la voluntad revolucionaria hacia el socialismo.

Que estos pasos se han dado respetando las leyes y el estado de derecho existente es demasiado claro para que tenga que ser probado. Las expropiaciones e intervenciones se han hecho de acuerdo con leyes que tienen antigua vigencia en el país; se han respetado dictámenes adversos de la Corte Suprema y de la Contraloría; el Congreso (en el cual el Gobierno es minoría aún) sigue imponiendo su voluntad legislativa. Es cierto que ha habido algunos asesinatos políticos y actividades extralegales, pero en cuanto al número, ellas no difieren de las que hubo en los anteriores gobiernos y sólo se puede señalar que ahora han caído también algunos personeros capitalistas y un general asesinado por la reacción antipopular. Incluso el índice de atentados políticos en el Chile revolucionario es muy inferior al de casi todas las "democracias" latinoamericanas. Tan evidente es el respeto a la legalidad, que la reacción se ha visto en el ridículo de decir que la democracia está amenazada en Chile porque el diputado Palestro tiene malos modales o porque se cuida la vida del Presidente de la República.

No se puede negar que objetivamente hay consecuencia entre la política que se lleva a cabo y los propósitos enunciados. Pero que haya esta consecuencia no significa que el proceso revolucionario tenga un desarrollo completamente exitoso. Por el contrario, a un año de la elección del Gobierno Popular, la revolución chilena parece llegar a un momento crítico en la vía elegida. Para la gente común esto se mani-

tación de la economía. Puede discutirse el ritmo y profundidad del cambio estructural, pero no se puede negar que, a pesar de las limitaciones legales y políticas, se ha manifestado en forma concreta la voluntad revolucionaria hacia el socialismo.

Que estos pasos se han dado respetando las leyes y el estado de derecho existente es demasiado claro para que tenga que ser probado. Las expropiaciones e intervenciones se han hecho de acuerdo con leyes que tienen antigua vigencia en el país; se han respetado dictámenes adversos de la Corte Suprema y de la Contraloría; el Congreso (en el cual el Gobierno es minoría aún) sigue imponiendo su voluntad legislativa. Es cierto que ha habido algunos asesinatos políticos y actividades extralegales, pero en cuanto al número, ellas no difieren de las que hubo en los anteriores gobiernos y sólo se puede señalar que ahora han caído también algunos personeros capitalistas y un general asesinado por la reacción antipopular. Incluso el índice de atentados políticos en el Chile revolucionario es muy inferior al de casi todas las "democracias" latinoamericanas. Tan evidente es el respeto a la legalidad, que la reacción se ha visto en el ridículo de decir que la democracia está amenazada en Chile porque el diputado Palestro tiene malos modales o porque se cuida la vida del Presidente de la República.

No se puede negar que objetivamente hay consecuencia entre la política que se lleva a cabo y los propósitos enunciados. Pero que haya esta consecuencia no significa que el proceso revolucionario tenga un desarrollo completamente exitoso. Por el contrario, a un año de la elección del Gobierno Popular, la revolución chilena parece llegar a un momento crítico en la vía elegida. Para la gente común esto se mani-

fiesta en los problemas económicos (algunas deficiencias de abastecimientos y actividades especulativas) y en algunos problemas políticos y sociales secundarios (cambios de posición de parlamentarios, surgimiento de nuevos partidos, luchas gremiales, etc.). Para los políticos el punto clave es que *el Gobierno Popular tiene la voluntad de hacer una revolución legal y no cuenta con el elemento primordial para ello que es el real control del poder político.* Su posición minoritaria en el Congreso, la mantención del aparato estatal anterior y el respeto a la legalidad existente (no se ha cambiado la Constitución) se traducen en que no se cuenta con las herramientas necesarias, ni para realizar una transformación tan radical como la propuesta ni tampoco para enfrentar con éxito los naturales desajustes y problemas que origina todo cambio de esta naturaleza.

Para lograr el objetivo principal del Gobierno, que es iniciar la transformación de la sociedad, se requiere de la conquista del poder por los trabajadores; conquista del poder económico, cultural y político, este último como determinante de los otros dos. Este problema es el centro de la revolución y demuestra por un lado los grandes esfuerzos hechos por el Gobierno y por el otro las grandes limitaciones dentro del panorama actual de fuerzas. Se logró el control del Ejecutivo, que en Chile tiene muchas facultades, pero, a pesar del cambio de posición de algunos parlamentarios democratacristianos (ocho) que se han plegado a los intereses populares, en el Congreso sigue teniendo mayoría la oposición. Se ha iniciado el proceso de conquista del poder económico pero, luego de un ritmo acelerado, se ha entrado a una fase de estancamiento por problemas jurídicos y económicos y además asoman algunas tendencias burocratizantes y oportunistas.

Alguna gente se escandaliza porque se pretende la conquista del poder para los partidos que representan a los trabajadores. Control del poder no significa necesariamente la totalidad de él, pero sí la mayoría decisiva y es absolutamente legítimo que quienes son la mayoría nacional tengan la mayoría del poder; negar este derecho es demostar abiertamente convicciones antidemocráticas.

Cuando se plantea la conquista del poder dentro de la vía legal y electoral resulta indispensable que el Gobierno tenga éxito en su política económica y social, sobre todo en un país que conjuga un cierto nivel de desarrollo con una tradición que vincula las elecciones con los problemas de grupos. En otras palabras, en el caso chileno *siendo la conquista del poder la principal tarea, ella se concretiza y se hace posible a través del éxito económico o batalla de la producción.* La educación política debe complementar la conquista del poder y el mejoramiento económico objetivo, pero no puede reemplazarlos en un caso de vía electoral. Esto es una limitación de la vía elegida.

Y justamente aquí se presentan los dos tipos de problemas que hemos mencionado: los económico-sociales que tienen que ver con la extensión del apoyo social y electoral al Gobierno y los políticos que tienen que ver con la posibilidad de lograr el traspaso del poder a los trabajadores y la superación de las dificultades anteriormente señaladas.

El que haya problemas no es un privilegio de la revolución chilena. Toda revolución, por lo mismo que es un cambio radical de la forma de vida social, implica problemas y desajustes: las estructuras que antes mantenían un sistema se deterioran y las nuevas formas se demoran en operar eficientemente. En las anteriores experiencias revolucionarias socialis-

tas estos problemas se han agravado por la situación previa que era muy precaria o por las grandes dificultades con que ha tenido que luchar la revolución: guerras civiles, invasiones, bloqueos, etc. En el caso chileno tiene que haber problemas y los hay pero, dada la naturaleza del cambio, se piensa que éstos no deben alcanzar tan alto grado de criticidad. El mismo carácter de la revolución exige que estos problemas no se conviertan en crisis, ya que en nuestro caso no se cuenta con la totalidad del poder que permite que la revolución siga, a pesar de las dificultades. En esto consiste la criticidad del momento que vive la revolución chilena.

¿En qué consiste la "vía chilena" hacia el socialismo?

En su primer Mensaje al Congreso Nacional, el Presidente Allende dijo expresamente: *"Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista.* Este desafío despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias... Por mi parte, estoy seguro que tendremos la energía y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, democrático, pluralista y libertario".

La "vía chilena" entusiasma a moros y cristianos. Para unos es la convicción de que en Chile, gracias a la evolución de la historia, el necesario paso al socialismo será menos doloroso que en otras partes. Para otros es la esperanza de que la vía chilena se convierta en un nuevo mecanismo que haga imposible la revolución y que mantenga el sistema capitalista imperante. Es importante precisar su contenido para evitar estas ambigüedades.

El problema tiene sus raíces en la historia de la humanidad. Pasar del capitalismo oligárquico al socialismo de los trabajadores es hacer una revolución y la experiencia histórica ha enseñado cómo se producen las revoluciones: conflictos profundos y violentos, luchas civiles, exterminación de grupos, autoridad revolucionaria impositiva. En la revolución socialista, los dirigentes han tomado conciencia científica del proceso y han formulado *la teoría de la revolución*. Ella enseña cuáles son los problemas comunes o leyes históricas del cambio: carácter de clase del conflicto, el papel de la clase revolucionaria, la necesidad de un período de autoridad impositiva y ordenadora de la clase revolucionaria, el papel del Estado en el período de transición, la función de los partidos en la dirección del proceso.

Pero las revoluciones no son simples derivaciones de la teoría revolucionaria sino que son procesos concretos que surgen de las *condiciones particulares* que presenta cada sociedad y de la forma como los dirigentes políticos interpretan esa realidad.

Al enfrentar un quehacer revolucionario se pueden cometer dos errores. Uno consiste en menospreciar la experiencia histórica y tomar el proceso como un incidente aislado o una aventura local. Este error lleva a la frustración de las revoluciones convirtiéndolas en simples revueltas o en nuevos mecanismos reformistas como ha acontecido en nuestra América Latina. El segundo error consiste en tomar las leyes no sólo en su aspecto general, sino en su contenido específico, es decir, darle carácter de ley a lo que es una simple modalidad de ellas. Este dogmatismo, que cree extraer la revolución de los libros, tiende a olvidar las condiciones concretas de cada país y, al hacerlo, suele conducir al fracaso a los movimien-

dos revolucionarios o a pagar un precio más alto del necesario. Lo peor de todo en esta última posición es la tendencia a negarle el carácter creador y progresista a la historia, olvidando que ella no está hecha sino que se va haciendo.

Cada revolución es la forma concreta en que se presentan las leyes del cambio, de acuerdo con las condiciones generales y particulares. Cada revolución es una vía específica. La razón por la cual se le asigna tanta importancia a la vía chilena es que hasta ahora las revoluciones socialistas se han dado en condiciones concretas similares que conforman un tipo o modelo de transición. En cambio, en el caso chileno las condiciones específicas de su desarrollo y de la forma del desencadenamiento revolucionario, así como el momento histórico mundial en que se produce, permiten esperar que constituyan una experiencia tan distinta que llegue a configurar el inicio de un nuevo modelo o tipo de transición.

¿Cuáles son esas condiciones específicas del caso chileno que permiten plantear un modelo distinto de transición?

a) *Solidez del movimiento popular.*—La lucha organizada de los trabajadores chilenos tiene una antigüedad y sobre todo una continuidad que es excepcional en el mundo subdesarrollado. Hace treinta años los partidos revolucionarios representaban ya casi un tercio del electorado. Aunque su progresión electoral ha sido muy lenta y la organización sindical ha tenido altibajos, el movimiento popular chileno no ha tenido grandes desviaciones ni frustraciones que surjan de su propio seno. Un hecho particular de esta evolución es la articulación de los diversos sectores de la clase trabajadora en distintos partidos cuya división se convirtió en factor positivo al converger *en un solo bloque político* capaz de expresar la mayoría en forma orgánica para la conquista electoral del poder.

Fue la amplitud de esta unidad la que permitió la victoria electoral de 1970 y su ampliación en abril de 1971.

b) *El carácter de la democracia liberal chilena.*—Casi todas las anteriores revoluciones se han debido hacer contra poderes absolutistas y despóticos: el absolutismo zarista, la dictadura del Kuomintang, la tiranía de Batista, etc. En Chile el proceso se realiza frente a una democracia liberal que, a pesar de sus limitaciones esenciales, ha mantenido un respeto tradicional a la constitución y a las leyes y en la cual la arbitrariedad y el despotismo han sido absolutamente excepcionales. En este sistema las fuerzas populares han podido desarrollarse legalmente y lograr conquistas que limitan la dominación de la burguesía, es decir se han logrado ciertos avances democráticos dentro del capitalismo y, lo que es más importante, esta tradición ha dificultado el recurso a la represión arbitraria del movimiento popular. En comparación con cualquier otro caso, la institucionalidad burguesa chilena es más permeable a un cambio dentro de las vías legales.

c) *El grado y forma del avance económico.*—Aunque no hay la menor duda de que Chile ha sido subdesarrollado por el imperialismo, no es menos cierto que dentro de ese esquema ha logrado un cierto grado y forma de desarrollo que lo diferencia cualitativamente de Rusia, China, Cuba prerrevolucionarias, y sólo lo asemeja a la situación checoslovaca antes del socialismo. Modernización y diversificación de la economía, gran expansión del aparato estatal y de mecanismos neocapitalistas, formación de sectores medios con un nivel de vida superior al de simple subsistencia son los elementos de esta situación excepcional. Estos hechos determinan que la transición puede hacerse sin grandes crisis económicas y al mismo tiempo la necesidad de mantener la vinculación tec-

nológica con el resto del mundo y de garantizar a los amplios sectores medios a lo menos la mantención de su nivel de vida.

d) *Cambio en la forma de reacción del imperialismo.*—La consolidación del socialismo en un amplio sector de la humanidad, el desarrollo de una irrefrenable ola nacionalista en el mundo subdesarrollado y los cambios operados en el desarrollo económico han hecho variar la actitud del imperialismo frente a los movimientos progresistas y ofrece al proceso revolucionario chileno un contexto mundial con el cual no contaron las experiencias anteriores. Si bien el imperialismo ha dado señales recientes de sus tendencias represivas para tratar de evitar lo inevitable, la verdad es que resulta evidente su retroceso frente a la lucha de los pueblos por su autonomía y por el cambio de sus estructuras internas.

e) *Análisis crítico de las experiencias socialistas.*—Superadas las condiciones que llevaron a los primeros países socialistas a asumir posiciones defensivas cerradas, se ha iniciado desde 1956 un creciente análisis crítico de las modalidades que ha asumido la construcción del socialismo en esos países. Este análisis, que está en pleno desarrollo, ha permitido comprobar que algunas de las modalidades que asumió tal proceso no son de ninguna manera necesarias en toda construcción socialista y más bien obedecieron a las condiciones especialmente difíciles en que ellos se desarrollaron o bien fueron deformaciones que deben evitarse. Chile inicia su proceso en un momento de apertura y de gran avance científico y práctico del socialismo en el mundo: es el primer país que puede beneficiarse de estas nuevas visiones del quehacer revolucionario.

Estos son los hechos que han determinado la particularidad de la vía chilena de transición al socialismo. Algunas personas creen que la vía chilena es sólo una maniobra táctica

transitoria para hacer más aceptable el socialismo. Otros creen que es producto de una actitud más humanista de los dirigentes políticos de nuestra izquierda. Ni lo uno ni lo otro; la adopción de un modelo especial de transición no obedece ni al maquiavelismo ni al buen corazón de los dirigentes revolucionarios, simplemente es el resultado de las condiciones históricas en que se presenta esta revolución, condiciones que la dirección revolucionaria interpreta y a las cuales se adapta.

¿Cuáles son los caracteres que configuran la "vía chilena" de tránsito al socialismo? En su descripción se suelen emplear conceptos ambiguos por lo que es importante precisar sus contenidos:

1.—Carácter *gradual*. Las condiciones en que se ha iniciado el proceso y particularmente la alianza de clases y de fuerzas que sustenta el Gobierno Popular han llevado a sus dirigentes a plantear que la revolución chilena se realice en etapas progresivas. Primero una etapa inicial o preparatoria que junto con medidas nacionales y democráticas consulta la introducción de las bases económicas y políticas del socialismo procurando la conquista de estos poderes por los trabajadores. Luego una etapa de construcción socialista bajo la dirección de los trabajadores sobre la cual se llega a la tercera etapa en que opera la democracia del trabajo o sociedad comunista. Todas las revoluciones han tenido etapas. Lo distintivo de la chilena es el carácter y ritmo de ellas, su progresión y sobre todo su continuidad, esto es, que no son distintas revoluciones, sino pasos de una misma revolución. La vía electoral elegida significa que la política del Gobierno debe expresar los intereses del bloque político que lo apoya y seguir el proceso de acuerdo con la conciencia y claridad que vaya adqui-

riendo tal bloque. Esto determina el ritmo moderado pero sólido de nuestra experiencia revolucionaria.

2.—Carácter *legal*. El aspecto más vulgarizado de la revolución chilena ha sido confusamente llamado carácter legal, electoral y aun pacífico de ella. Concretamente significa que el inicio de la conquista del poder se ha logrado en una elección popular y que en Chile se desea evitar la guerra civil que ha caracterizado otras revoluciones. Ello ya se ha logrado en cierta medida y este Gobierno considera esencial el ir ampliando el apoyo masivo en la medida que la mayoría trabajadora vaya comprendiendo cuáles son sus reales intereses. Se ha dicho con razón que el control de la violencia no significa que la vía sea pacífica puesto que ya ha habido violencia como lo demuestra el asesinato del general Schneider por los reaccionarios y una serie de conflictos violentos que el proceso naturalmente desencadena; más exacto sería decir que es una vía moderada o de violencia controlada y no generalizada. Más preciso es el carácter legal del proceso en el sentido de que se respetarán las normas legales existentes, incluso para cambiarlas, es decir que las medidas se harán dentro de un estado de derecho que se irá poniendo al servicio de los intereses de las mayorías, gracias al apoyo de ellas. Incluso la necesaria dominación o dictadura del proletariado que podrá desarrollarse en el futuro no implicará en Chile la supresión de las garantías positivas que tiene nuestra democracia, sino que sólo implicará poner su aparato jurídico y estatal al servicio de los trabajadores.

La combinación de los caracteres gradual y legal le concede a nuestro proceso un matiz de moderación, pero al mismo tiempo de mayor solidez y le da la posibilidad de que se evitan graves crisis o situaciones difíciles para la nación.

Ello es fruto, por una parte de las características de la economía y política chilenas y por otra de la configuración de la alianza de fuerzas que apoyan al actual Gobierno, la cual implica defender los intereses de todas ellas, incluidos los sectores medios que tienen una menor disposición a jugarlo todo en aras de la revolución.

3.—Carácter *integral*. Las anteriores experiencias revolucionarias se dieron en tales condiciones que los dirigentes se vieron compelidos a preocuparse sólo de los problemas cruciales para el éxito del proceso; en el caso chileno en cambio se presenta la posibilidad de enfrentar simultáneamente varios objetivos de la revolución: desplazamiento de la burguesía y conquista del poder obrero, crecimiento económico, desarrollo de la democracia política e integral, revolución cultural y conductual, etc. El análisis de las experiencias anteriores permite tomar conciencia de esta necesidad y, aunque no es posible esperar éxito pleno en todas las tareas, por lo menos es posible enfrentar toda la complejidad de la revolución. Un aspecto especial de este integralismo, que se relaciona con el tipo de socialismo a instaurar, es el que se refiere a la *real distribución del poder en los distintos niveles de la clase trabajadora*, lo cual se traduce en que la función del Estado no será tan absoluta como en otras construcciones socialistas. Es decir, se podrá aplicar lo de legítimo que hay en el planteamiento comunitario.

4.—Carácter *pluralista*. El pluralismo en la revolución chilena tiene dos alcances. Significa que en la actual etapa es una alianza de clases y que en el desarrollo socialista se mantendrá pluralidad de opciones políticas tanto dentro del bloque del proletariado como en la sociedad general, es decir que se respetarán las divergencias políticas e ideológicas. Pero el

pluralismo no significa la mantención de las clases explotadoras y menos la colaboración entre explotadores y explotados. El pluralismo no es una táctica pasajera sino una característica que se mantendrá mientras las condiciones objetivas y la voluntad mayoritaria así lo decidan.

Estas son las características principales de la manera de instaurar el socialismo en Chile que han permitido hablar de un segundo modelo al cual el Presidente Allende le asignó los adjetivos de democrático, pluralista y libertario. Naturalmente que esto no tiene nada que ver con la versión derechista de la vía chilena, la cual habla de un camino no marxista y democrático; esto sólo es un intento más de negar la revolución y utilizar ideológicamente un concepto científico para convertirlo en herramienta de los intereses y privilegios de las minorías. La vía chilena es marxista, es proletaria. Más aún: sería un error concebir la vía chilena como una conciliación entre el sentido común burgués y la teoría revolucionaria. Los que así proceden facilitan enormemente las deformaciones pequeño burguesas que están latentes en el proceso chileno. Es esencial enfatizar lo substantivo, que es hacer la revolución por sobre lo adjetivo, que es su modalidad; no hacer esto es correr el riesgo de que el entusiasmo por el estilo haga perder el contenido.

Es sabido que hay sectores de la izquierda que niegan la validez de esta vía. Es importante distinguir entre ellos a los que niegan toda posibilidad revolucionaria al actual proceso de los que sólo tienen enfoques estratégicos particulares sobre la forma de su continuación y profundización. Ello será abordado al tratar sobre la ultraizquierda y la izquierda revolucionaria en el capítulo de las fuerzas políticas.

El éxito o fracaso de la vía chilena no es sólo un problema

de Allende y la Unidad Popular: es un asunto de todos los trabajadores chilenos y en cierto sentido compromete a toda la humanidad.

¿Cómo será el socialismo chileno?

La vía chilena se entiende en un sentido preciso como un *modelo de tránsito del capitalismo al socialismo*, es decir la forma como se conquista el poder económico y político de los trabajadores para construir la nueva sociedad.

Pero muchas personas extienden el concepto a la forma que tendrá el socialismo en nuestro país, es decir al *tipo de socialismo que se piensa instaurar en Chile*. Se ha puesto de moda esta exigencia por un socialismo distinto en Chile. Son muchos los que dicen: socialismo sí, pero ¿qué socialismo? Jaime Castillo ha señalado: "es absurdo plantearse en Chile la meta del socialismo sin preguntarse cuál de las diversas vías va a ser escogida" y ello lo dice entendiendo como vía el tipo de socialismo. La revista *Mensaje* y otros órganos de prensa han venido exigiendo un socialismo democrático y recientemente se ha publicado un conjunto de ensayos de alto nivel con el título de *Chile, Búsqueda de un Nuevo Socialismo*. Aunque estos planteamientos tienen cierta validez, a medida de que la exigencia de un "socialismo a la chilena" se generaliza se va creando una gran confusión al respecto y se introducen de contrabando las más contradictorias posiciones. Todo ello hace indispensable su esclarecimiento.

El planteamiento de un tipo de socialismo distinto viene desde tres frentes que es necesario distinguir. La derecha ha llegado a decir que acepta el socialismo siempre que no sea marxista y cuando concretiza tal pensamiento se ve que lo

acepta siempre que no le quite el poder, es decir siempre que no sea socialista. Por lo demás, el solo hecho de que la derecha sea partidaria del socialismo ya nos puede indicar de qué se trata. El centrismo democratacristiano y socialdemócrata es el que con mayor énfasis afirma la necesidad de "otro socialismo". Dada la importancia de este enfoque lo analizaremos luego en particular. También desde la izquierda se hacen observaciones acerca de la modalidad que debe asumir el socialismo en Chile, pero con dos salvedades: que la modalidad que asuma el socialismo en Chile no puede predeterminarse, pues dependerá de las condiciones en que se vaya dando el proceso y que, en todo caso, el problema actual no consiste en hacer distingos dentro del socialismo, sino en iniciar efectivamente la transformación de la sociedad. Lo esencial es el socialismo, su caracterización es un proceso dialéctico que no debe utilizarse para dificultar lo principal.

La Democracia Cristiana ha dicho reiteradamente que ella está de acuerdo con el socialismo, pero que su propósito es desarrollar un *socialismo humanista y comunitario* que se opone al socialismo marxista que plantea la Unidad Popular. Esta afirmación tiene gran importancia porque aparece como la única justificación para seguir considerando a ese partido como alternativa política realmente distinta. Si el análisis de fondo nos indica que la oposición entre uno y otro socialismo no es substancial sino de modalidad, lo lógico sería que los que sostienen el socialismo comunitario se plegaran a la tarea fundamental de construir el socialismo. Al no hacerlo se hace evidente que tal planteamiento no es más que un pretexto para colaborar en forma encubierta a la mantención del capitalismo. Este hecho es el que explica la actual disgregación y proceso de definición que sufre ese partido.

Antes de analizar los contenidos concretos de esta divergencia hay que esclarecer dos cuestiones que dificultan la correcta comprensión del problema. La primera es el distinto carácter que tienen las diferencias entre sistemas. La diferencia entre capitalismo y socialismo es fundamental y la distinción entre modalidades del socialismo es adjetiva o accidental. Colocar en mismo plano las diferencias entre capitalismo y socialismo con que las que existen entre un socialismo centralizado y uno de autogestión es distorsionar por completo la realidad y confundir a la gente honrada. Claro es que hay algunos que quieren confundirse porque en el fondo no desean el socialismo y de hecho procuran la mantención de la sociedad oligárquica capitalista aunque no se atreven a decirlo y por eso usan el pretexto de un socialismo distinto.

La otra cuestión aclara aún más el panorama. Es la distinción entre lo que se dice y lo que se hace. Un partido puede declarar que su oposición fundamental es con los capitalistas y que su diferencia con la Unidad Popular se refiere sólo a la modalidad socialista, pero puede que en la conducta práctica de ese partido se ponga más énfasis en la diferencia con el Gobierno Popular y en desprestigiarlo poniendo dificultades al primer esfuerzo efectivo para construir el socialismo. Aunque hay algunos indicadores de estas actitudes, como el rechazo a la redistribución del ingreso (apoyo de la DC a la excepción de los funcionarios del Congreso) y en el proyecto sobre funcionamiento de los bancos, la verdad es que esto aún está por verse frente a los proyectos más radicales. A través de los hechos, y no de las declaraciones, la historia podrá ver cuál es la honestidad de los cristianos y de las demás personas que propician un socialismo humanista.

Al precisar en qué consisten concretamente las diferencias entre los llamados socialismo comunitario y marxista se discuten problemas tanto económicos como políticos.

En el plano económico el problema se centra en la pretendida oposición entre el poder directo de los trabajadores en las empresas y el poder del estado; esta idea se traduce en la consigna: *empresas para los trabajadores pero no para el Estado.* Algunos plantean estas divergencias en torno a la propiedad de los medios de producción, pero los que comprenden mejor el proceso económico y social lo plantean en torno a las decisiones o poder económico, cuya base es la propiedad, pero que no se identifica con ella. Sintetizando estos conceptos podemos decir que algunos partidarios del socialismo comunitario sostienen que la propiedad, gestión y poder económico deben residir en los colectivos o comunidades de trabajadores de cada empresa y no en el Estado, el cual sólo debe tener una parte del poder y tomar algunas decisiones. Conviene recordar que estas decisiones se refieren a la designación de jefes, contratación de personal, determinación de la producción, fijación de precios, inversiones, ampliaciones, innovaciones técnicas, etc.

A decir verdad, en el socialismo pueden distinguirse tres modalidades al respecto: *centralizada, descentralizada y de autogestión.* En la primera las decisiones importantes las toma un aparato central del Estado y los organismos sectoriales y empresas, incluidos sus gerentes, no son más que ejecutores de la política estatal. En la segunda las decisiones se comparten entre el Estado y las empresas, teniendo esta última bastante autonomía en materias tales como contratación del personal, modalidades técnicas, distribución de excedentes, etc. En la tercera las decisiones las toman principalmente las em-

presas, cuyos trabajadores eligen sus autoridades, y sólo obedecen algunas directrices muy generales del Estado. Ya veremos más adelante que en Chile se está adoptando la segunda modalidad con una cierta mayor acentuación del papel del Estado en el primer período del nuevo ordenamiento.

Tomando pie en el socialismo de autogestión los partidarios del socialismo comunitario enfatizan su posición en orden a desvalorizar y aun criticar abiertamente la intervención del Estado en la economía con lo cual justificarían su oposición a las características iniciales que evidenciaría el socialismo en Chile.

Pero los defensores de esta posición cometen dos profundas deformaciones. Por un lado olvidan que en el sistema capitalista la explotación no se da sólo en cada empresa a través de la relación utilidades-salarios sino que opera como fruto de la totalidad del sistema (división del trabajo, precios y salarios, mecanismos de dominación). La solución no reside sólo en la mejor distribución del producto de cada empresa, sino en *cambiar radicalmente toda la estructura económica y sus criterios de decisiones que no sólo provocan la explotación sino también el estancamiento económico*. Para lograr este cambio se hace necesario el control de la economía por toda la clase trabajadora a través de sus niveles superiores (expresiones políticas y sindicales) y ello es posible sólo controlando el Estado y haciendo que su aparato imponga el nuevo orden económico.

Y aquí reside el segundo error de los planteamientos democratacristianos. Insisten en su carácter comunitario, pero curiosamente niegan u olvidan el hecho clave de que *en la forma actual de vida humana la principal comunidad no es el colectivo de trabajadores de una empresa, sino el conjunto de trabajadores de una sociedad*. De allí que la oposición que estos

teóricos hacen en abstracto entre el Estado y los trabajadores no sólo es equivocada por no tomar en cuenta el problema de quién controla el Estado, sino que es malintencionada porque pretende desconocer la dimensión global de la clase trabajadora que es la esencial. Cuando el Estado lo controlan los trabajadores, que aún no es nuestro caso sino parcialmente, no hay oposición entre él y las empresas de trabajadores, sino que son dos dimensiones del poder de las mayorías. En las condiciones actuales negarles a los trabajadores el derecho a manejar la economía a través del Estado es lo mismo que negarles el poder.

De esta manera estos teóricos meten en un mismo saco el planteamiento relativamente válido de un socialismo de autogestión con la distorsión que significa oponer Estado y trabajadores como grupos necesariamente distintos, olvidando que en el estado popular no hay tal oposición y que sólo son dos dimensiones del mismo poder obrero. Para hacer aún más digerible este pretexto ideológico le agregan las afirmaciones generales del personalismo cristiano creando una ensalada con la cual se pretende describir el socialismo comunitario como algo radicalmente opuesto al socialismo marxista para justificar actitudes que en la práctica favorecen a la reacción capitalista.

Con razón el economista F. Hinkelammert desentraña la debilidad de fondo que suele haber bajo la apariencia de acierto formal de estos planteamientos:

"Vimos así encontrándose el concepto de la autogestión, la ideología de la participación, las estructuras de la ideología liberal y las supervivencias de la doctrina social de la Iglesia. Forman un conjunto que, bajo un ropaje socialista, mantienen prácticamente intactas las estructuras capitalistas.

"¿A qué se debe la falla fundamental de todo este concepto de la participación? A nuestro entender reside en la concepción misma de la estructura de decisión. La ideología de la participación cree que el contenido de las decisiones cambiará por el simple hecho de que sean tomadas de manera formalmente democrática. Por eso no se preocupa del contenido mismo de las decisiones... no se preocupa de analizar hasta qué grado estructuras económicas orientadas por la ganancia excluyen la posibilidad de decisiones, que otros tipos de orientaciones podrían permitir.

"Esto es extremadamente grave si tenemos que admitir que el subdesarrollo actual es el resultado de la aplicación del criterio de la maximización de las ganancias a la estructura económica de los países atrasados. Si tal es el caso, necesariamente la participación a través de la autogestión no es nada más que una nueva etapa de este subdesarrollo, más engañosa todavía que las anteriores.

"Ahora bien, esta contradicción existe claramente. La orientación por la ganancia acentúa el mismo subdesarrollo. Lo acentúa con o sin participación. El obrero no gana nada con poder participar en decisiones, que de todas maneras reproducen el subdesarrollo y con esto su propia miseria. No le sirve de nada participar en decisiones que lo marginan cada vez más".

Es importante reconocer que hay algunos elementos de las exigencias de un socialismo distinto que son plenamente válidas y que, debido a que se fundamentan en los mismos hechos objetivos que la vía chilena para la conquista del poder trabajador, es explicable que se confundan con ella. Nos referiremos sólo a los aspectos principales.

En el plano económico es efectivo que en la experiencia

chilena la acentuación de la función estatal no tiene por qué ser tan fuerte y extendida como en las experiencias anteriores en las que circunstancias adversas llevaron a una economía de guerra que exigía una férrea dirección. A ello se refiere el pensamiento de O. Lange. "Esos métodos de planeación y administración centralizados no son peculiares del socialismo, sino más bien son técnicas de economía de guerra. La dificultad empieza cuando esos métodos de economía de guerra se identifican con la esencia del socialismo y se les trata como esenciales a éste".

Por lo demás la decisión de procurar que el socialismo chileno evite la excesiva centralización y el burocratismo es muy clara para los dirigentes del actual Gobierno. El presidente de la CUT, diputado comunista Luis Figueroa ha dicho claramente: *"El camino hacia el socialismo será descentralizado porque los trabajadores no queremos la burocratización sino ejercer, participar en la forma más amplia y colectiva en la construcción del socialismo"*. Y lo más decisivo es que en los hechos se aplica desde ya este principio de distribución de las decisiones entre el nivel global de la clase (Estado-partidos) y el nivel particular de los colectivos de trabajadores de cada empresa.

Esta fórmula especial del socialismo chileno puede llamarse descentralizada y algunos llaman de cogestión del Estado y los trabajadores, aunque sería más correcto denominarla de *gestión bidimensional* de la clase trabajadora, es decir en sus dimensión global como clase y en su dimensión parcial como colectivo empresarial.

Pero la principal originalidad del socialismo chileno no reside tanto en el problema de la administración económica, puesto que varios países ya han avanzado en ello. En nuestra

opinión la más interesante originalidad se presenta en el plano político y particularmente en el pluripartidismo y en el carácter de la dominación del proletariado.

Algunos piensan que la existencia de varios partidos en la dirección del proceso es sólo transitoria e inicial. Ello sólo es válido en cuanto al número y carácter de los partidos, pero no en cuanto al hecho substancial de que la clase trabajadora pueda optar entre distintas alternativas políticas que le puedan garantizar el mejor desarrollo del socialismo, es decir su carácter humanista. La experiencia mundial señala que la distinción de partidos se justifica esencialmente por las contradicciones de clases, pero que en otro plano también se explica una cierta distinción partidista aunque de diversa naturaleza que la primera. En suma, se trata de que los trabajadores puedan tener diversas opciones de expresión política y de administración del socialismo. Aunque no es posible adelantarse a los hechos es legítimo señalar que el pluralismo partidista no sólo es un aspecto positivo de esta etapa sino una manera de evitar deformaciones burocratizantes o de cualquier índole antisocialista y antidemocráticas. Es obvio que el panorama partidista se simplificará y que las relaciones entre partidos tendrán otro carácter pero ello no significa que desaparecerá la distinción de partidos dentro de un bloque político del proletariado. Incluso podemos señalar que el pluripartidismo presenta más consecuencias negativas en la actual situación ya que debilita el frente ante el enemigo común, en cambio consolidada la nueva sociedad será factible una distinción partidista que sea un aporte más positivo a la eficiencia social. Tal forma de organización no se opone al concepto básico del frente político único del proletariado ni al hecho de que los trabajadores coincidan en una posición política fundamental que

sea unitaria. La amplitud y convergencia de varias fuerzas en esta unidad es una característica de gran valor en el socialismo chileno.

El problema de la modalidad de la dominación del proletariado, que será analizada más adelante, se relaciona con la llamada mantención de las libertades políticas e ideológicas que es otro aspecto que enfatizan los sostenedores del socialismo democrático. Se dice que dada la naturaleza del proceso chileno la dominación del proletariado no implicará la supresión de lo valioso que hay en la democracia representativa actual, lo cual significa en concreto que no se conculcarán las libertades positivas que existan, sino por el contrario se procurará su ampliación a todas las personas. La reacción introduce de contrabando en este planteamiento dos ideas que son inaceptables: que actualmente hay democracia y libertades mayoritarias amenazadas por el socialismo y que la mantención de las libertades existentes implica la persistencia del derecho a explotar. Se ha dicho claramente que se mantendrán las libertades democráticas, es decir aquellas que perfeccionan la vida de los individuos en el conjunto social pero no se mantendrán las libertades clasistas como es el caso de la libertad de explotar que tiene actualmente la burguesía. El desarrollo socialista en Chile no sólo debe garantizar las conquistas positivas logradas por algunos sectores de la población sino que debe centrar su quehacer en ampliar tales conquistas a las mayorías postergadas por el capitalismo; tal es el caso de la libertad de expresión creativa, la libertad de información, la libertad de organización, etc.

En suma, en la exigencia de un nuevo socialismo en Chile hay elementos muy positivos que llevan al perfeccionamiento de la historia y hay elementos ambiguos que es necesario cla-

rificar. ¿Cómo distinguir cuando se trata de uno u otro tipo de elementos? La principal guía no es otra que la conducta práctica de los que plantean estas cosas. Si lo hacen apoyando las medidas básicas de la construcción socialista y planteando sus divergencias respecto a las modalidades, podemos pensar que son sinceros. Si, en cambio lo hacen como un mecanismo para desalentar a los trabajadores frente al actual proceso oponiéndose en la práctica a medidas tales como la socialización de las empresas, la redistribución efectiva de los ingresos, la democratización del poder político, etc., es por que su exigencia de un socialismo distinto no es más que la exigencia de que no se haga el socialismo. Aquí radica la sutil pero importantísima diferencia entre la oposición constructiva y la colaboración crítica al actual Gobierno. La primera acentúa el substantivo oposición y tiende a hacer fracasar la actual perspectiva que efectivamente permite el real ascenso del poder de los trabajadores; la segunda en cambio acentúa la colaboración aunque mantiene su legítimo derecho a discrepar de las modalidades y a dar las batallas para que se impongan sus puntos de vista. Es la línea que separa a los que están con los capitalistas y a los que están con los trabajadores.

¿Cuáles son las perspectivas de éxito de la experiencia chilena?

En el número de junio de la revista *Mensaje* se ha publicado, no sabemos con qué intenciones, un artículo de Claudio Véliz sobre Ceilán que nos parece interesante reproducir en sus principales párrafos:

"Hace once meses, el Frente Unido de Izquierda de Ceilán, dirigido por la Sra. Sirimavo Bandaranaike, obtuvo un resonante triunfo en las elecciones generales. Varios años de "re-

formismo desarrollista", entusiastamente apoyado por el Fondo Monetario Internacional y entidades afines, desembocaban así en el triunfo de una amplia coalición de izquierda que presagiaba —aparentemente— un cambio cualitativo no sólo para los cingaleses, sino para toda la vasta región subcontinental. Incluso hubo quienes hicieron sesudas especulaciones acerca de la "vía cingalesa" hacia el socialismo, considerando, naturalmente, que el objetivo del Frente Unido era llevar a Ceilán hacia el socialismo por una vía legal y democrática, cuyo origen había sido precisamente una vía electoral inobjetable.

"No ha pasado aún un año desde aquel triunfo, y se necesitaría una dosis muy enorme de optimismo para estimar que las cosas no han resultado catastróficamente diferentes de lo que parecían en esa época que hoy se ve tan lejana. En primer lugar, el programa económico del nuevo gobierno, quizás por razones muy atendibles, no tuvo el éxito inmediato que esperaba el electorado. La postergación de decisiones en el campo de la inversión privada —fenómeno usual en situaciones de este tipo— se sumó a la ineficiencia proverbial de un sistema burocrático central tremendamente recargado por la rápida expansión del sector público que resultó de la drástica política de nacionalizaciones emprendidas por el nuevo gobierno, y ambos fenómenos se agregaron a una desusada tasa de desempleo que, indudablemente, a pesar de los esfuerzos del gobierno continúa elevándose. Si se considera que parte muy importante, quizás mayoritaria, del apoyo que recibió el Frente Unido de Izquierda era de tipo redistributivo y participatorio, antes que de tipo doctrinario, entonces podrá comprenderse el desencanto de un electorado que esperaba una redistribución masiva y se enfrentó con un desempleo creciente

"A principios de este año el deterioro de la economía cingalesa era evidente. Una misión del Banco Mundial emitió un informe ante un consorcio reunido en París para tratar de ayudar al gobierno del Frente Unido. En uno de sus acápites, el informe expresa: En 1961, el país tenía sobre 100 millones de dólares en reservas no comprometidas. Hoy día . . . las reservas del Banco Central son prácticamente inexistentes.

"Frente a esta situación, hubo dos actitudes principales; por una parte, el gobierno del Frente Unido estimó necesario llegar a una consolidación de lo que ya se había logrado en cuanto a cambios estructurales, puntualizando esta política con frecuentes, y sin duda alguna, sinceros llamados al pueblo a aumentar la producción y a la burocracia a mostrar un incremento de su eficiencia administrativa. Por otra parte, los grupos de extrema izquierda que no estaban incorporados dentro del Frente Unido, atribuyeron las dificultades económicas del país a la cautela, la falta de celo revolucionario y la actitud pusilánime del gobierno. Entre estos grupos . . . se destacó evidentemente el Frente de Liberación Popular . . . Ha sido este grupo el que precipitó la actual crisis cingalesa al levantarse en rebelión armada en contra del régimen. El gobierno tuvo, además, el apoyo decidido y eficaz de las fuerzas armadas, a pesar de que hace apenas algunos meses atrás se rumoreaba la posibilidad de fricciones importantes entre el régimen socialista de izquierda y los altos mandos de las fuerzas armadas".

No puede haber, sin recurrir a especulaciones, una descripción más precisa de lo que la derecha espera que ocurra en Chile.

Pero éste no es más que un aspecto del problema o más bien una de las actitudes de la reacción. El problema de las

perspectivas de la revolución chilena es algo más que el éxito o fracaso del actual Gobierno y presenta varias fases: estabilidad del Gobierno de Allende, conquista del poder por los partidos representativos de las mayorías trabajadoras, avance real e irreversible del socialismo y modalidades que éste va asumiendo.

La estabilidad de Allende en el Gobierno ha preocupado desde el mismo 4 de septiembre. Muchos opinaron que el ascenso al Gobierno de un presidente que encabezaba a un grupo de partidos decididos a iniciar la construcción socialista no sería aceptado por la burguesía, la cual recurriría al golpe de estado para evitarlo. Que la opinión no era disparatada quedó probado en los intentos que hubo y particularmente en aquel que culminó con el asesinato del general Schneider. Pero algo anduvo mal en los intentos sediciosos y da la impresión de que con el tiempo se ha ido diluyendo la posibilidad del golpe militar aunque sin duda el problema no está definitivamente resuelto. Al parecer cada día es más difícil que las Fuerzas Armadas como totalidad (como pronunciamiento) caigan en el sinnúmero de "trampas" que les coloca la reacción para que, olvidando su función constitucional y nacional, se pongan al servicio de las minorías explotadoras: los militares van adquiriendo plena conciencia de que eso de evitar el caos, defender el orden y las leyes, etc., no son más que burdos pretextos que las minorías explotadoras han utilizado en todas partes para mover las tropas contra los trabajadores. Por variadas y complejas razones históricas resulta difícil engañar a los militares chilenos, que sólo exigen el respeto al orden legal.

Naturalmente que este panorama de dejar que Allende siga en el Gobierno indigna a los elementos más frustrados de

la reacción. Aquel título de "Un gobierno de incapaces para un país de cobardes" destila la desesperación de quienes sin trabajar gozaban de la protección de la oligarquía. Pero *Sepa*, *Tribuna*, y *PEC* no son más que estertores de la mediocridad frustrada. La burguesía es por cierto mucho más inteligente que ellos.

Esta burguesía, un tanto desconcertada en los primeros meses, ha ido comprendiendo mejor la situación y ha optado básicamente por una estrategia distinta de la insurreccional, sin que por ello se deje de considerar el golpe militar como un mecanismo complementario o eventual. La estrategia tiene dos objetivos: *evitar que el socialismo avance y, al mismo tiempo, jugar al fracaso económico del actual Gobierno* para así poder recuperar el Gobierno escudada en la Democracia Cristiana; la burguesía reunifica fuerzas y busca su tradicional aliado: el centrismo reformista. Esta estrategia parece muy factible porque la suma del PDC y Derecha es mayoría en el Congreso y en un proceso de transición es fácil procurar el fracaso de una política económica que controla sólo partes de la estructura económica. Incluso es posible que intenten el golpe legal mediante acusaciones constitucionales y que vayan acentuando tácticas desesperadas a medida que avance el poder popular.

Por su parte la clase trabajadora para superar estas dificultades y avanzar hacia la democracia socialista no tiene otra alternativa que la conquista del poder. Los elementos reaccionarios se hacen los escandalizados con esta frase y la acusan de tener un contenido totalitario. La verdad es muy distinta y simple. Para construir una sociedad humanista y democrática es necesario que las mayorías tengan el poder; negarlo es simplemente mostrar el subconsciente antidemocrático. Pues bien, en Chile las mayorías trabajadoras no han conquistado

sino una porción muy pequeña del poder, muy inferior a lo que les corresponde como mayoría. El poder político en Chile está integrado por varias instituciones y mecanismos: Ejecutivo o Gobierno, Congreso, Tribunales de Justicia, aparato institucional, Fuerzas Armadas y las leyes; ello aparte de los poderes económico y cultural. Las fuerzas populares controlan el Ejecutivo y la parte directiva del aparato gubernamental; la burguesía y sus aliados controlan el Congreso, los Tribunales de Justicia y el poder económico y cultural, además del hecho de que las leyes expresan principalmente sus intereses. Las Fuerzas Armadas están en una posición por el momento imparcial y expectante manteniendo el respeto a la Constitución. Lo crucial es que la principal herramienta de poder que es el Congreso Nacional no representa a la mayoría nacional porque sus mecanismos impiden que así ocurra; si en abril de 1971 se hubiese realizado una elección parlamentaria la situación sería muy distinta.

El panorama político se ha complicado recientemente a tal punto que algunos consideran que a un año de la elección de Allende la revolución se encuentra en un momento crítico. Tres hechos se conjugan para dar esta impresión: la división y multiplicación de partidos, las dificultades económicas actuales y sobre todo las dificultades para avanzar en las transformación económica debido a la falta de poder político (mayoría congresal) y a la resistencia del aparato jurídico e institucional que se ha mantenido intacto. Aunque esto no implica de ningún modo una crisis insuperable esta situación es útil porque exige una mayor clarificación política y se entra a una etapa más decisiva del proceso.

Frente a esta situación, Allende y la Unidad Popular se encuentran frente a varias alternativas políticas: esperar las

elecciones parlamentarias de 1973 para contar con mayoría congresal; propiciar y obtener una Reforma Constitucional que permita el control del poder por las mayorías; lograr la ampliación de las bases políticas del Gobierno mediante la incorporación de grupos que configuren mayoría y concertar acuerdos específicos con la Democracia Cristiana para lograr la aprobación de mecanismos legales que permitan avanzar al proceso y superar las actuales dificultades.

La tercera alternativa parecía la más expedita y rápida y estuvo a punto de concretarse si se hubiesen marginado de la Democracia Cristiana el real número de parlamentarios que deseaban una radicalización (unos doce parlamentarios más de los que se marginaron). El hecho de que sólo se hayan marginado ocho parlamentarios no permitió formar tal mayoría, pero el asunto no está aún terminado y esta alternativa que es la más simple y rápida puede aún tener validez. Pero no hay que olvidar que es probable que ante tal coyuntura la reacción recurra a mecanismos desesperados para evitar la consolidación del poder popular.

No hay duda que la tarea principal es ir logrando que los trabajadores vayan descubriendo sus verdaderos intereses y ello se traduzca en la ampliación de las bases sociales y electorales de apoyo al gobierno revolucionario. Este proceso debería manifestarse en las elecciones parlamentarias de 1973, pero tenemos la impresión que la reacción seguirá saboteando el éxito económico y utilizará hábilmente el tradicional negativismo nacional para crear una imagen adversa por lo que pensamos que en cierto sentido, no habrá tiempo para esperar hasta las elecciones de 1973 y nadie puede profetizar en qué contexto se darán ellas. De allí que se insista en otros mecanismos adicionales de solución.

La actitud frente a la Democracia Cristiana ha dividido las opiniones entre los partidarios del socialismo. Aparentemente el proceso de definición que vive ese partido ha aclarado el panorama ya que se han marginado los más consecuentes con los intereses populares y el partido ha dado muestras concretas de su alianza con la reacción, pero el asunto no es tan simple y aún no se ha dicho la última palabra al respecto. Aunque se ha descartado la posibilidad de ingreso al Gobierno que algunos imaginaban, se mantiene la posibilidad de que la DC apoye algunas medidas básicas para la construcción del socialismo como ya lo hicieron con la nacionalización del cobre. Las simples coincidencias en algunos puntos aislados no son suficientes y es difícil pensar en un pacto, pero sí es posible pensar en acciones conjuntas para aprobar unas leyes que permitan superar los actuales problemas y echar las bases para la transformación de la sociedad (ley de socialización, de redistribución del ingreso, de inversiones, de delito económico, etc.). Sin ser demasiado optimistas estos proyectos tendrían la ventaja de concretizar la definición de ese partido en el cual sin duda aún queda mucha gente honestamente convencida de su verdad y, lo que es más importante, por el cual votan muchos trabajadores.

El mecanismo más discutido en este momento es el de la Reforma Constitucional que algunos consideran el mecanismo clave para romper el actual impasse político. Sus posibles contenidos serán analizados más adelante, pero en síntesis se trata de que el poder legislativo represente más auténticamente a la mayoría popular y de que la tramitación de las leyes sea más expedita. De esta manera se expresaría mejor la actual correlación de fuerzas y el Gobierno tendría las herramientas eficaces para gobernar y terminar con los innumera-

bles obstáculos que ha ido creando el sistema institucional de Chile. Lo que hace vacilar es la perspectiva de éxito que tendría el plebiscito que correspondería realizar para definir entre la opinión del Ejecutivo y la del Congreso, que se supone será adversa. Se estima que una eventual derrota del Gobierno, factible por la utilización de las dificultades económicas, sería de proyecciones muy negativas. Sin embargo, predomina la idea de que una adecuada educación política y movilización popular harían posible lograr el apoyo de un pueblo que está cansado de la tramitación política del Parlamento, el cual tiene una imagen negativa en el pueblo.

Conviene señalar que las alternativas descritas no son excluyentes entre sí y se puede intentar todas ellas; la conducción política consiste en clarificar este quehacer popular. Al parecer la salida más eficiente a los actuales problemas es un cambio en la correlación de fuerzas políticas, lo cual es factible y conveniente.

Algunos sectores consideran que todos estos esfuerzos en el plano político son secundarios y que lo esencial es la movilización popular y la conquista progresiva del poder económico de los trabajadores. Esto sin duda encierra una verdad, pero no puede olvidarse que en Chile el crecimiento del poder proletario tiene una expresión política legal y electoral por lo cual —movilización popular, conquista del poder económico por los trabajadores y control del poder político— son tres elementos de la revolución que necesariamente deben converger e identificarse en una sola gran tarea.

No hay duda de que la conquista progresiva del poder económico por los trabajadores es el hecho que define los procesos revolucionarios. A través del desafío práctico de manejar las empresas y la economía del país, los trabajadores que

miento de una guerra civil que nadie puede desear. La tarea no puede ser otra que garantizar que la nueva sociedad sea realmente humanista, es decir que sea auténticamente socialista. La tarea es mejorar el socialismo porque todo intento de impedirlo no tiene otro destino que el dolor nacional por satisfacer egoísmos de unos pocos. La experiencia de otros países es aleccionadora para Chile y no puede ser olvidada.

II. EL CAMBIO VERDADERO

La breve experiencia chilena ha permitido comprobar una tesis elemental del marxismo: que lo que caracteriza a un sistema es la forma de propiedad de los medios productivos y las relaciones de producción que de ello se derivan. La burguesía puede soportar todo, cualquier ideología, cualquier partido o cualquier hombre en el gobierno, menos una cosa: que los trabajadores recuperen el capital que han producido. Cuando esto sucede entonces es el fin del mundo. Reina el caos y la violencia, se atropella la dignidad humana, peligra la democracia, etc., y los Edwards, los Orregos y los Hasbunes forman un solo coro de preocupación por los destinos de la patria. Cuando nos preguntamos sobre la causa de fondo de tanta inquietud, toda esta hipocresía queda en descubierto: se han expropiado algunas empresas. Esa es la verdadera preocupación, el profundo dolor de la clase dominante.

Hace tiempo que se anunciaba en Chile la hora de la verdad. La historia demuestra que la verdad está llegando. La verdad es que ninguna revolución es tal si las mayorías trabajadoras no recuperan el poder económico que les ha arrebatado la burguesía mediante el sistema capitalista. Lo que

miento de una guerra civil que nadie puede desear. La tarea no puede ser otra que garantizar que la nueva sociedad sea realmente humanista, es decir que sea auténticamente socialista. La tarea es mejorar el socialismo porque todo intento de impedirlo no tiene otro destino que el dolor nacional por satisfacer egoísmos de unos pocos. La experiencia de otros países es aleccionadora para Chile y no puede ser olvidada.

II. EL CAMBIO VERDADERO

La breve experiencia chilena ha permitido comprobar una tesis elemental del marxismo: que lo que caracteriza a un sistema es la forma de propiedad de los medios productivos y las relaciones de producción que de ello se derivan. La burguesía puede soportar todo, cualquier ideología, cualquier partido o cualquier hombre en el gobierno, menos una cosa: que los trabajadores recuperen el capital que han producido. Cuando esto sucede entonces es el fin del mundo. Reina el caos y la violencia, se atropella la dignidad humana, peligra la democracia, etc., y los Edwards, los Orregos y los Hasbunes forman un solo coro de preocupación por los destinos de la patria. Cuando nos preguntamos sobre la causa de fondo de tanta inquietud, toda esta hipocresía queda en descubierto: se han expropiado algunas empresas. Esa es la verdadera preocupación, el profundo dolor de la clase dominante.

Hace tiempo que se anunciaba en Chile la hora de la verdad. La historia demuestra que la verdad está llegando. La verdad es que ninguna revolución es tal si las mayorías trabajadoras no recuperan el poder económico que les ha arrebatado la burguesía mediante el sistema capitalista. Lo que

distingue a un gobierno revolucionario de uno reformista, es que el primero procura efectivamente un cambio en el poder económico y el segundo encubre con mil argucias y hermosos discursos su decisión de no cambiar el poder económico y mantener intacta la estructura capitalista. Cuando se produce realmente el cambio, el grito de dolor de la burguesía se oye en todas partes y de mil maneras. O es la abierta indignación de la derecha, o es la hipócrita preocupación por los "valores fundamentales" que el centrismo reformista esgrime para encubrir su actitud reaccionaria. Cuando el cambio es verdadero duele y se nota.

Es verdad que el Gobierno ha decidido que este cambio sea hecho dentro de las vías legales, por etapas y sin recurrir a la violencia generalizada, es decir, manteniendo la democracia formal que impera en el país. A pesar de ello la reacción es igual, si no fuera por ello la oposición sería tradicional: la imagen de catástrofe se debe justamente a que el cambio ha puesto el dedo en la llaga. El común de los chilenos desea comprender la verdadera naturaleza de este cambio, y sus repercusiones.

Ya se ha dicho que el objetivo fundamental del Gobierno Popular es la transformación económica del país con miras a la edificación socialista. Esta transformación implica un cambio en los criterios de decisiones u orientación de la economía, un cambio en los mecanismos formales de decisiones o institucionalidad económica y necesariamente un cambio en la detentación del poder económico, lo que exige un cambio de la propiedad económica tanto en su dominio como en su uso y goce.

Algunos teóricos acusan al marxismo de ser "propietarista" por asignar demasiada importancia al problema de la pro-

piedad de los medios productivos, siendo que para ellos lo esencial es el poder de decisiones. Hasta el más sencillo trabajador entiende que en el sistema capitalista el que tiene la propiedad se va enriqueciendo más y más a costa de los trabajadores. Sin duda cuando se habla de la socialización de los medios productivos se está planteando la socialización del poder y de las decisiones económicas; el problema del dominio jurídico de la propiedad sólo interesa a los teorizantes desligados de la lucha concreta.

La Unidad Popular ha sido muy explícita para señalar los alcances que tiene la transformación económica y particularmente la estructura de la propiedad en esta etapa. No se trata de socializar todos los medios productivos, sino solamente aquellos que se consideran básicos y claves para echar las bases de la construcción de una sociedad democrática. Más adelante se precisará el alcance concreto de esta política, pero conviene señalar que no es una política para un año, sino para todo el Gobierno Popular y por lo tanto no hay la menor intención de socializar las empresas pequeñas y medianas que forman la gran mayoría, ni incluso aquellas grandes que no sean consideradas básicas. Excepcionalmente se socializa alguna empresa mediana por factores muy específicos señalados en cada caso.

Toda transformación económica implica serios problemas porque produce un desajuste económico. En Chile estos problemas pueden agravarse por el método gradual y legal elegido, pero ello mismo puede ayudar a que los trastornos sean menores aunque es imposible eliminarlos, y ello lo siente el país. La voluntad es que el precio social del cambio sea el menor posible.

¿Por qué las expropiaciones?

El poder económico de los trabajadores no se construye en el aire, sino sobre una situación ya dada. En verdad, todo el poder económico de la sociedad moderna ha sido construido sin duda fundamentalmente por las clases productoras y particularmente por la clase obrera, pero el sistema capitalista consiste justamente en que, a pesar de ello, el poder ha sido apropiado en forma creciente por la burguesía capitalista. Transformar el sistema económico y democratizar el poder significa justamente recuperar las empresas de manos de los capitalistas y devolvérselas a los trabajadores, y esto se traduce en expropiaciones.

La gente se acostumbra al orden existente sin preguntarse demasiado sobre su generación y su justicia y debido a ello cualquier alteración de ese orden le resulta un tanto chocante. Los que ejercen el poder se las arreglan para extremar esta apreciación y forman la imagen de que la expropiación implica una injusticia. De allí que la primera tarea sea el comprender a fondo la razón de las expropiaciones para valorizar su justicia. Las dudas de la gente común sobre la forma de expropiar, las indemnizaciones y el alcance de las expropiaciones serán analizadas más adelante.

Las expropiaciones tienen razones de justicia, de función social y de base política para el proceso. Algunos sólo ven una parte de estas razones y juzgan, por ejemplo, que las expropiaciones, aunque injustas, son necesarias para controlar la economía; otros no ven la función del cambio y sólo las apoyan porque estiman que se hace justicia: ambas apreciaciones son incompletas. La afirmación corriente de que la expropiación

implica un abuso o una injusticia desconoce el proceso económico verdadero.

Veamos el caso de una empresa que se ha desarrollado durante veinte años y que tiene actualmente un capital de diez millones de escudos. Tal empresa se inició con un capital equivalente a cien mil escudos actualmente, un centésimo de lo actual, ¿cómo se ha logrado formar ese capital? Supongamos que en el primer año de operación la empresa produjo trescientos mil escudos con el trabajo de veinte obreros y del empresario; ese producto social se ha distribuido de la siguiente manera: cien mil para los 20 obreros, cincuenta mil para el empresario y ciento cincuenta mil se destinaron para nuevo capital (comprar más máquinas). Aquí vemos la injusticia básica; es explicable que el empresario haya ganado más (diez veces más que el promedio obrero) porque su trabajo es más complejo e igualmente es necesario que se haya hecho una fuerte capitalización inicial (50%), pero *lo que es absolutamente ilegítimo es que el empresario se haya apropiado en forma absoluta de ese nuevo capital que pertenece a todos.* Su mayor trabajo y esfuerzo ya está pagado: la apropiación adicional de la mitad del producto común no es más que una injusta apropiación que permite el sistema capitalista. Así ha sucedido cada año y cada vez es mayor la cantidad de la cual se apropian injustamente los empresarios. Incluso al haber avanzado ya la empresa se producen otros mecanismos de apropiación injusta, como son los altísimos sueldos que ganan los empresarios y sus protegidos inmediatos. Alguna gente cree que esto es lo más grave del capitalismo, pero la verdad es que ello es sólo adicional: lo esencial es la ilegítima apropiación que se ha hecho del capital. En estricta justicia el 95% del capital acumulado actualmente pertenece legíti-

mamente a los trabajadores y expropiarlos, o sea devolverlos a los trabajadores, no sólo no es injusto sino que es la única manera de hacer justicia. Equivale a lo que se llama devolución de especies en el manejo de los hurtos pequeños. Se trata de "expropiar a los expropiadores".

Este es el caso de la totalidad de las grandes empresas. Y también lo es de la mayoría de las medianas y pequeñas, aunque es posible que excepcionalmente haya alguna pequeña empresa en que el capital actual haya sido puesto esencialmente por el dueño.

Es un error también afirmar que si no hubiera sido por la iniciativa de esos empresarios y sus sacrificios iniciales no habría progreso. Muchas empresas chilenas, y de las mejores, no han necesitado de esa iniciativa de empresarios particulares (piénsese en CAP, ENAP, ENDESA, IANSA, INSA, etc.). Más aún: el esfuerzo y sacrificio iniciales ya han sido pagados con creces en unos pocos años. Lo que ha pasado es que para la gran mayoría el proceso de apropiación capitalista es legítimo porque lo permiten las leyes, es decir confunden la justicia con la legalidad olvidando que las leyes las ha hecho la burguesía precisamente para justificar su apropiación ilegítima.

De manera que con las expropiaciones no sólo no se atropella la injusticia, sino por el contrario son la encarnación misma de ella. Pero ésa no es la razón principal de las expropiaciones.

La justificación profunda de las expropiaciones viene de la evolución histórica del hombre y de la función que cumplen los medios de producción. Los bienes de capital o medios productivos tienen como objetivo fundamental la producción de bienes; tomarlo como medio de poder o de enriquecimien-

mamente a los trabajadores y expropiarlos, o sea devolverlos a los trabajadores, no sólo no es injusto sino que es la única manera de hacer justicia. Equivale a lo que se llama devolución de especies en el manejo de los hurtos pequeños. Se trata de "expropiar a los expropiadores".

Este es el caso de la totalidad de las grandes empresas. Y también lo es de la mayoría de las medianas y pequeñas, aunque es posible que excepcionalmente haya alguna pequeña empresa en que el capital actual haya sido puesto esencialmente por el dueño.

Es un error también afirmar que si no hubiera sido por la iniciativa de esos empresarios y sus sacrificios iniciales no habría progreso. Muchas empresas chilenas, y de las mejores, no han necesitado de esa iniciativa de empresarios particulares (piénsese en CAP, ENAP, ENDESA, IANSA, INSA, etc.). Más aún: el esfuerzo y sacrificio iniciales ya han sido pagados con creces en unos pocos años. Lo que ha pasado es que para la gran mayoría el proceso de apropiación capitalista es legítimo porque lo permiten las leyes, es decir confunden la justicia con la legalidad olvidando que las leyes las ha hecho la burguesía precisamente para justificar su apropiación ilegítima.

De manera que con las expropiaciones no sólo no se atropella la injusticia, sino por el contrario son la encarnación misma de ella. Pero ésa no es la razón principal de las expropiaciones.

La justificación profunda de las expropiaciones viene de la evolución histórica del hombre y de la función que cumplen los medios de producción. Los bienes de capital o medios productivos tienen como objetivo fundamental la producción de bienes; tomarlo como medio de poder o de enriquecimien-

to es alterar totalmente esta función y eso es lo que hace al capitalismo burgués. Por lo demás la interdependencia de la economía es tal que cada trabajador ha contribuido a la fabricación de cada maquinaria y cada trabajador necesita de todas las maquinarias. Los trabajadores del calzado no dependen solamente de la maquinaria del calzado, sino de la metalúrgica, textil, transportes, etc. Por lo tanto cada máquina, el capital de cada empresa, tienen como finalidad producir bienes para toda la sociedad. En consecuencia, para que cumpla esta función y para que no se utilicen los medios productivos como medios de explotación o de dominación (de poder) es indispensable que tales medios sean sólo propiedad de la sociedad global que los requiere y no propiedad de particulares ni de grupos determinados de esa sociedad, porque en ese caso se caería en conflictos de dominación entre diversos grupos de la sociedad y no se podría construir una sociedad humanista, es decir basada en la colaboración solidaria de sus miembros. Los medios productivos, como el aire o el agua, no deben ser objeto de apropiación sino de uso de toda la humanidad y toda ella es responsable de su cuidado.

Uno de los errores más divulgados al respecto es considerar que la consigna de que las empresas deben ser *para los que las trabajan* está basada en el personalismo cristiano. El cristianismo no tiene nada que ver con esta tesis que es del más puro corte liberal. El cristianismo ha sostenido siempre que la tierra, los medios productivos de hoy, son patrimonio de toda la humanidad y que el poder económico no es un fin en sí sino un medio para la solidaridad humana. Es decir, hay una plena coincidencia entre el planteamiento ideológico del cristianismo con el planteamiento científico-político del marxismo. Pretender profundas divergencias en este campo no

es más que una nueva demostración de los engaños a que recurre la reacción para defender sus privilegios.

Algunas personas captan una parte de la función social de la propiedad, pero en un sentido muy limitado. En efecto, sostienen que el Estado debe controlar la economía al servicio de las mayorías y que para ello debe tener la propiedad de los sectores claves de ella. Esto justificaría en la etapa de transición el gran poder estatal, es decir justificaría la economía de transición pero no justifica en sí la propiedad social de los medios productivos que es el problema de fondo; esta última no es sólo una urgencia de la reordenación, sino que es una exigencia de la historia humana.

Por lo demás los planteamientos reformistas neoliberales que propician la propiedad de la comunidad de trabajadores de cada empresa olvidan que la principal dimensión de los trabajadores es su organización global y que por lo tanto propiedad social es propiedad de los trabajadores en su más exacta dimensión. Las pequeñas comunidades o grupos no expresan adecuadamente a la comunidad humana, sino en determinadas y muy limitadas funciones. Tomar la clase trabajadora como pequeños grupos que luchan entre sí y no como el conjunto de trabajadores, es no entender nada de lo que es la clase trabajadora. La argucia de separar la clase en varios compartimentos conflictivos entre sí es la más utilizada y descarada de las maniobras de la reacción, disfrazada por una máscara reformista o seudocomunitaria.

En las condiciones concretas de Chile, las expropiaciones tienen un objetivo político adicional que alcanza gran importancia. En efecto, expropiar significa en la práctica trasladar el poder económico de la burguesía al proletariado; es decir, ir provocando el cambio en la correlación de las dos fuerzas

en conflicto. No hay posibilidad de una real revolución socialista si no crece la fuerza de la clase mayoritaria en detrimento de la clase explotadora. El gran mérito de las expropiaciones es que van haciendo concreto y dando este cambio de poder al crecentar sus bases materiales. En este sentido, mientras más empresas pasen al área social, a la propiedad de los trabajadores, más difícil será echar pie atrás en el proceso. Incluso es posible que en un momento dado las necesidades políticas obliguen a rebasar los postulados programáticos de la Unidad Popular y lleven a entregar más poder a los trabajadores para garantizar la continuidad del proceso. Si los trabajadores toman conciencia de su poder económico será poco menos que imposible que posteriormente se resignen a entregarlo. La ampliación de las bases de apoyo social al actual Gobierno tiene dos mecanismos: el éxito en las medidas sociales (de mejoramiento económico inmediato) y el crecimiento del poder obrero. Aunque la primera es más masiva, la segunda es mucho más sólida, sobre todo si va acompañada de un adecuado proceso de educación política y técnica de los trabajadores.

¿Cómo se opera para socializar las empresas?

La transformación del sistema económico ha puesto de actualidad algunos vocablos cuyo contenido es necesario explicar. Incluso los entendidos no se han puesto aún de acuerdo sobre el uso de algunos de ellos.

Lo esencial es el traspaso de la propiedad de las empresas de los capitalistas a la sociedad: por ello el término más genérico es *socialización*. Se puede distinguir la propiedad social estatal, que lleva al uso del término *estatización*, y la pro-

piedad social empresarial que algunos llaman simplemente social en un intento de desprestigiar la propiedad estatal o de toda la sociedad. Cuando los ex propietarios son extranjeros se habla de *nacionalización*, aunque algunos extienden este término a todo el proceso de recuperación para el Estado de los recursos económicos. Según la explicación anterior se puede decir que se trata de *recuperar* para el Estado lo que le pertenece y *devolver* a los trabajadores lo que les ha sido injustamente quitado.

Cuando el traspaso de la propiedad se hace de mutuo acuerdo entre las partes, se trata simplemente de una *adquisición* o compraventa. De hecho el Gobierno ha operado de esta manera con algunas acciones empresariales (bancos, CAP, INSA, etc.). Una forma adicional de controlar una empresa consiste en ampliar el capital mediante una inversión estatal como ha acontecido con la RCA.

Cuando el traspaso es impuesto por ley se habla de *expropiaciones*: es lo que acontece con la Reforma Agraria y la nacionalización de la Minería. Además de estas leyes generales que tienden a la socialización de esos sectores existen en Chile disposiciones legales que permiten la expropiación cuando se paraliza una empresa: es lo que ha acontecido en Purina, Bellavista, etc.

La misma disposición anterior y las atribuciones legales de la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) permiten la *requisición* de las empresas. Esta opera en caso de desabastecimiento o de ineficiencia para producir de acuerdo con su capacidad; es lo que se ha aplicado a la mayoría de las grandes empresas textiles y a algunas otras empresas. La requisición no implica traspaso del dominio de la empresa, sino de su administración (uso); no es definitiva, pero sí indefi-

nida en el plazo. Al parecer la idea es mantenerlas mientras se aprueba una ley para el traspaso definitivo de esas empresas. Sin embargo, las requisiciones no siempre tienen que ver con el proceso de socialización sino que son medidas para enfrentar el desabastecimiento.

La requisición implica la intervención del Gobierno en las empresas, para lo cual se designa un administrador que recibe el nombre de interventor. También se denomina así a otros ejecutivos que se nombran para dirigir las secciones de cada empresa. Pero existe otro tipo de *intervención* distinta de la anterior. Nos referimos a los *decretos de reanudación de faenas* que proceden cuando hay un conflicto laboral y alguna de las partes pide la intervención del Gobierno. En tales casos este nombre, a través del Ministerio del Trabajo y no del de Economía como en los casos anteriores, a un interventor. Este mecanismo puede ser de simple supervisión o bien de administración en el caso de que los administradores dificulten la labor del personero del Gobierno.

Así se aclaran los diversos procedimientos que permite la actual legislación chilena. El público suele confundir con ellos algunos mecanismos ilegales, tales como las *ocupaciones* de fundos y de fábricas. Estas son situaciones que resultan de conflictos particulares o de tácticas políticas cuya validez depende del contexto en que se den y de los resultados que produzcan. En el caso del Gobierno Popular crean más dificultades que ventajas a la progresiva conquista del poder obrero. Por esta razón el Gobierno, de acuerdo con la ley, trata de impedir estos mecanismos ilegales y de hecho ellos han decrecido claramente. No obstante, la prensa opositora magnifica esas ocupaciones para formar la imagen de que el país vive en un caos, lo cual es una actitud antipatriótica movida por

intereses egoístas. Otro objetivo de esa campaña opositora es empujar al Gobierno a que reprima sangrientamente esas ocupaciones y así se desprestigie ante el pueblo, táctica que tampoco ha tenido éxito.

En todos los mecanismos de traspaso de poder se paga un *precio* o una indemnización cuando es por mandato de la ley. Sobre ello trataremos después de haber analizado los mecanismos legales de las expropiaciones.

Explicadas las ideas generales es conveniente conocer cómo se concretizan en el proceso chileno. Es sabido que la Unidad Popular ha decidido que tal proceso debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente o con las leyes que puedan aprobarse. Esto crea una serie de limitaciones que hay que enfrentar.

La legislación básica de Chile es la *Constitución de 1925* que, inspirada en principios de la democracia liberal, expresa en lo substancial la defensa de la propiedad oligárquica. Por esta razón, para poder realizar la Reforma Agraria y la Nacionalización de la Minería ha sido preciso introducir reformas a esa Constitución y luego aprobar leyes al tenor de tales reformas. Teniendo ya los mecanismos legales para la agricultura y minería se hace indispensable contar con un cuerpo legal para la Industria, Comercio y Finanzas. Tal reforma y sus consecuentes leyes deben obtenerse en forma rápida, pero es seguro que ella topará con serios tropiezos dada la configuración del Congreso. El Gobierno acaba de presentar el proyecto respectivo.

Mientras no exista esa herramienta legal, el Gobierno tiene que operar con las posibilidades que le ofrecen la actual legislación y las instituciones imperantes en el país. En este sentido hay dos hechos positivos. Por un lado está el creciente

desarrollo de instituciones estatales para el control de la economía y la existencia de varias empresas estatales. Por otra parte tenemos el famoso Decreto Ley 520 y sus modificaciones que dan fuertes atribuciones requisitorias a la DIRINCO, cuyas disposiciones han resultado muy útiles para permitir el proceso legal de cambio en el poder económico.

El Gobierno opera actualmente con tres tipos de mecanismos: las leyes agraria y minera, los convenios de compraventa con algunos capitalistas y las expropiaciones requisitorias al tenor del mencionado Decreto 520 y de las leyes que dicen relación con la facultad del Ejecutivo para asegurar el abastecimiento de la población; ya se ha aclarado que las intervenciones del Ministerio del Trabajo no dicen relación directa con el proceso de socialización.

La no existencia de una ley de socialización de las empresas industriales claves, financieras y de comercio mayorista y el alto costo y dificultades que implica la adquisición de ellas, ha inducido al Gobierno a utilizar el Decreto Ley 520, herencia casi olvidada del período revolucionario de 1932, en todo lo que puede dar. Este mecanismo es analizado en detalle por el profesor E. Novoa, experto en estas materias.

"Uno de esos Decretos Leyes, el que lleva el N.° 520, pervive hasta hoy. Cierto que ha experimentado variaciones en su texto original. La entidad que él creaba, llamada primitivamente Comisariato General de Subsistencias y Precios, se llama hoy Dirección de la Industria y Comercio (DIRINCO).

"Las modificaciones introducidas legalmente a dicho Decreto-Ley N.° 520, abundantes a lo largo de los años posteriores a su dictación, constituyen ciertamente, fuera de la reiterada aplicación por los tribunales de algunos de sus artícu-

los, una configuración legislativa y jurisprudencial inamovible de su eficacia. Tantas fueron esas modificaciones legales que en 1953 se expidió un texto refundido Decreto N.° 1262). En 1966, por mandato del artículo 167 de la Ley N. 16.464 del mismo año, parte importante de sus disposiciones fueron incorporadas a un "texto revisado y refundido" de la legislación económica sobre costos, precios y abastecimientos de bienes y servicios de primera necesidad. Los preceptos vigentes de aquel primitivo Decreto-Ley 520, poco conocidos y recordados hoy, constituyen instrumentos de gran importancia para imponer en nuestra economía una ordenación que facilite el tránsito al Estado Socialista.

"De acuerdo con las disposiciones aludidas... la expropiación de empresas industriales y de comercio y establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de primera necesidad, procede por las causales siguientes:

a) Por mantenerse en receso el respectivo establecimiento industrial o comercial;

b) Por no cumplir un productor con la obligación de producir o elaborar en su establecimiento, empresa o explotación, artículos declarados de primera necesidad en las cantidades, calidades y condiciones que determine el Presidente de la República;

c) Por negarse injustificadamente un productor a mantener un ritmo normal de producción, produciendo deficiencias en el abastecimiento de la población;

d) Por especular el productor o distribuidor mayorista con precios de artículos de primera necesidad;

"Puede apreciarse la amplitud de los preceptos que autorizan expropiaciones en el ámbito industrial y como algunos

de ellos (especialmente el señalado en la letra b) otorgan al Poder Ejecutivo facultades discrecionales que éste puede ejercer con considerable margen de libertad".

Estos mecanismos, que han sido aplicados a algunas grandes empresas pueden ser extendidos a muchas otras, si el Ejecutivo quisiera fijar márgenes de producción, pero su deseo no es molestar porque sí a las empresas. En este momento hay una polémica entre la Contraloría y el Gobierno que se refiere, no a la legalidad del uso del Decreto 520, sino a los pasos que se requieren para su aplicación. El Gobierno sostiene que es a la DIRINCO a la que le corresponde el problema técnico de señalar que hay desabastecimiento y en cambio la Contraloría sostiene que ella puede juzgar si la decisión técnica de la DIRINCO es correcta, lo que implica asumir funciones de otros organismos estatales. La Constitución consulta el Decreto de insistencia para superar estos conflictos, el cual ha sido usado por este Gobierno, como lo hicieron los anteriores. Este problema jurídico, que no es la única dificultad que ha encontrado el proceso de socialización, está en vías de solución, pero significa un gasto de energías del Gobierno y un mecanismo que emplea la oposición para oponerse a la devolución de las empresas a los trabajadores.

El Ejecutivo cuenta con muchos mecanismos para presionar a las empresas por medios indirectos, tales como la tributación, el manejo del crédito, la fijación de precios, el control de las superintendencias, etc., como asimismo, los partidos de la UP podrían provocar conflictos laborales que justificase la intervención pero, al revés de lo que dice la prensa capitalista, no hay intención de usar tales mecanismos y la mayor parte de los conflictos no se originan por dirigentes de los partidos de Gobierno. Incluso debe recordarse que muchos em-

presarios que están en situación crítica tratan de sacar lo más posible de sus empresas y enseguida entregárselas al Estado, por lo cual éste tiene que tener especial cuidado para no "cargar con muertos" de la administración capitalista.

Otros problemas son la dificultad para echar a andar la nueva organización empresarial y la disponibilidad de suficientes administradores y técnicos para reemplazar a los que se van y los que se niegan a colaborar con los trabajadores. Un problema muy especial es el de las *indemnizaciones*. Cuando se adquiere una propiedad se paga un precio por ella, y cuando se expropia en virtud de una ley se paga al dueño una indemnización para resarcirlo de los daños que esta acción le cause. Es importante comprender la diferencia entre precio e indemnización: esta última no es un pago por el bien expropiado, sino que es un mecanismo para aminorar daños y se supone que obedece a la necesidad de restaurar la justicia.

La preocupación por las indemnizaciones (por su monto) proviene de varios sectores. La burguesía pretende que la indemnización sea un precio comercial y para ello hace que su prensa exija una "justa" indemnización, lo cual significaría no reparar la injusta apropiación, como se ha visto en el caso del cobre. La gente común, influenciada por esta mentalidad, considera que el proceso de expropiación de las empresas será justo sólo si se indemniza adecuadamente a los propietarios, pero no todos comprenden que indemnización adecuada no significa sino respetar lo que legítimamente se ha conseguido (que es muy poco) y de garantizar que las personas no queden en situaciones deterioradas en su nivel de vida. Por último desde sectores revolucionarios también preocupa el problema porque se teme que las indemnizaciones dejen intacto el poder económico y además que, por su monto, impidan

que el Estado pueda controlar las grandes empresas o bien ello genere grandes problemas financieros.

El criterio del Gobierno ya ha sido enunciado en las aplicaciones de las leyes de Reforma Agraria y de Nacionalización de la Minería. La idea discrepa tanto de la "justa" indemnización o valor comercial que pretende la burguesía, como de la consigna de "expropiación sin indemnización" que plantean algunos sectores de la izquierda. Se trata de pagar una indemnización castigada, de acuerdo con lo que la ley dispone, y pagadera en bonos a plazos más o menos largos. Generalmente estos bonos no son liquidables, pero sus intereses sirven para asegurar un ingreso a las personas que por efecto de la ley y de su situación concreta carecerían de ingresos futuros. La expropiación sin indemnización es justa en la mayor parte de los casos, pero es políticamente inaplicable y puede provocar más dificultades que ventajas. Si los mecanismos legales y científicos que otorga la Constitución determinan el no pago de indemnización se procederá de esa manera a base de la racionalidad y a la soberanía nacional.

Debemos señalar al respecto que la gente tiene una idea equivocada de que el Gobierno gasta en la socialización capitales o dinero que podría invertir en otros destinos. La verdad es que no hay nada de eso. Las acciones que se adquieren se pagan con bonos del Banco Central, y a menor precio que si se expropiaran los activos según los libros. Cuando se trata de aportes de capital éste se hace también a plazo y en todo caso implica una nueva inversión productiva. Ya es sabido que las indemnizaciones agrarias y mineras son también a plazos.

En suma la política del Gobierno puede resumirse en los siguientes puntos: a) procurar que se apruebe una *ley general*

que permita la socialización de las empresas industriales, financieras y distribuidoras en términos convenientes para la mayoría nacional; b) procurar *acuerdos* con las empresas que acepten el cambio de organización económico, ya sea adquiriendo acciones o mediante aportes de capital nuevo o considerando como tales los créditos públicos; c) mientras se cuenta con una ley general en el sector industrial y comercial se operará requisando de acuerdo con lo dispuesto en el *Decreto 520* y en las atribuciones legales del Ministerio de Economía; d) limitar el proceso a las pocas empresas que señala el Programa de la Unidad Popular y evitar las ocupaciones ilegales.

De esta manera se cumple por un lado con la decisión de transformar la economía nacional y por el otro de hacerlo legalmente. Es claro que el cambio no se reduce a la socialización de las empresas, sino a los criterios y directrices económicas, lo cual se irá analizando en sus distintos aspectos. A continuación veremos el problema de la determinación de las áreas o de las empresas que serán incorporadas al área social.

¿Cuáles empresas serán expropiadas? Los límites de las áreas.

Los trabajadores se preguntan, con ansias o con preocupación, ¿cuándo le tocará a nuestra empresa? Los capitalistas señalan que la no definición de cuáles empresas serán socializadas origina inseguridad empresarial y cierta paralización productiva. Para comprender la respuesta a estas inquietudes lo primero es consultar el Programa de Gobierno.

"Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminado con el poder del capital monopolista nacional y

extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo. En la nueva economía la planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo.

"El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir una área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:

1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;

2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;

3) El comercio exterior;

4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;

5) Los monopolios industriales estratégicos;

6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa y el papel".

"Todas estas expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista.

"El área de propiedad privada comprende aquellos sec-

tores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanecerá vigente la propiedad privada de los medios de producción. Estas empresas en número serán la mayoría. Así por ejemplo en 1967, de las 30.500 industrias (incluyendo la industria artesanal), sólo unas 150 controlaban monopólicamente todos los mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al resto de los empresarios industriales del país vendiéndoles cara la materia prima y comprándoles baratos sus productos. Las empresas que integran este sector (el área que se mantendrá en la propiedad privada) serán beneficiadas con la planificación general de la economía nacional. El Estado procurará la asistencia financiera y técnica necesarias a las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional, atendido el número de personas que trabajan en ella, como el volumen de la producción que generan. En estas empresas se deberán garantizar los derechos de *obreros y empleados* a salarios y condiciones de trabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y los trabajadores de la empresa respectiva.

"(Habrá además una área mixta) que se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares. Los préstamos o créditos concedidos por los organismos de fomento a las empresas de esta área podrán serlo en calidad de aportes para que el Estado sea socio y no acredor. Lo mismo será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos con el aval o garantía del Estado o de sus instituciones".

Nótese la exactitud con que se ha ido cumpliendo con el orden de prioridades señaladas en el Programa. Los problemas principales se encuentran en los números cinco y seis de

la lista de sectores que se incorporarán al área social y a ello nos referimos específicamente.

De esto se desprenden dos conclusiones muy claras. Primero, que *para la transformación económica es esencial la formación de un área social de la economía; y segundo, que esa área sólo será formada por un pequeño número de grandes empresas manteniéndose las demás en la llamada área privada.* Para comprender mejor esto, hay que recordar que en el país hay más de treinta mil empresas y el área social será formada cuando más por unas ciento cincuenta, si bien es cierto que ellas permiten el control de la economía por su influencia en el sistema global.

Sin duda que el planteamiento del Programa es general y sólo especifica algunos casos, por lo cual se explica el interés por determinar cuáles empresas quedarán en cada área. La revista *Panorama Económico*, señala: "Mientras más ambigua sea la política o actitud del Gobierno respecto a los límites del proceso de estatización, mayor será el sector de la economía privada que se sentirá amagado por él. En especial ocurrirá si, además de guiarse por normas mal definidas, el Estado procede con lentitud. En tal caso se prolonga el período durante el cual numerosas unidades del sector privado no contribuyen con la eficacia que podrían hacerlo al desarrollo de la economía. En estas circunstancias tienden a ser incorporadas a la esfera estatal unidades que ninguna razón económica o política de carácter esencial puede justificar. Si así ocurre, en lugar de ser la concepción doctrinaria o estratégica del Gobierno la que decide el curso del proceso, son los acontecimientos los que deciden qué unidades productivas pasan a formar parte del área pública"

Se han hecho eco de este planteamiento tanto los sector-

res empresariales a través de sus organizaciones como los sectores políticos. Se discuten los criterios para determinar los *límites de las áreas* señalando que ellos no deben ser meramente cuantitativos (volumen de producción, capital o trabajadores) ni tampoco punitivos sino que deben obedecer al concepto general de *básicos para el desarrollo económico.*

Aunque el problema es complejo se pueden señalar dos criterios principales y otros adicionales. Los criterios principales son el carácter estratégico y el monopólico. Son *estratégicas* aquellas empresas que influyen en forma decisiva en la economía, como es el caso de las que producen materias básicas (acero, cemento, energía, derivados del petróleo), las que manejan las finanzas (bancos), las que producen bienes de capital (maquinarias, instalaciones). Son empresas *monopólicas* las que pertenecen a grupos económicos que controlan conjuntos empresariales que son decisivos para manejar la economía o un sector de ella. Conviene señalar que el concepto de monopolio se emplea en su sentido moderno de grupos de poder determinante y no en el sentido que se hablaba el siglo pasado, lenguaje que aún conservan algunas personas que han opinado sobre este problema. Algunas de las empresas socializadas tienen alguno de estos dos caracteres y otras tienen los dos, como ha acontecido con las empresas textiles que son monopólicas (en el sentido de oligopolios), y que son determinantes para fijar una política de precios en los consumos populares. También se considera estatégicas a las empresas que producen un volumen importante de *excedentes* que se deben destinar a la producción y no a consumos suntuarios de unos pocos privilegiados.

Los criterios adicionales son dos situaciones excepcionales: que gran parte del capital de las empresas pertenece ya al

Estado en forma directa o a través del crédito como ha sucedido con las pesqueras y/o que las empresas se encuentren en virtual paralización por mal manejo de los antiguos propietarios, lo que ha acontecido en varios casos (Indesa, Purina, Bellavista, etc.). Estos criterios adicionales son los que han confundido el panorama porque han llevado a socializar empresas medianas y aun pequeñas, lo cual no estaba consultado en el Programa, pero en todo caso está claro que se aplican sólo cuando se presentan las circunstancias excepcionales ya descritas.

Se protesta por la demora del Gobierno en fijar oficialmente estos criterios y se exige un cuerpo legal al respecto. La verdad es que, sin perjuicio de preparar tal proyecto, el Gobierno a través del Ministerio de Economía ha ido fijando en forma precisa las empresas que deberán formar el área social. En vez de publicar en forma apresurada una lista que no consulta las situaciones específicas, el Gobierno ha preferido ir fijando la política por sectores señalando concretamente las empresas de cada sector que serán socializadas y cuáles no lo serán en todo el curso del Gobierno. Ello ha acontecido con los sectores textil, financiero, energético y de comunicaciones, minero básico, y se está en proceso de fijación para los sectores de bienes de capital, alimenticio, metalúrgico, vestuario y calzado, etc.

El Gobierno ha presentado un Proyecto de ley, llamado Antimoponolios, para socializar las empresas industriales, comerciales, de servicios y financieras que plantea el Programa de la UP. La democracia cristiana ha presentado también un proyecto sobre la misma materia, lo que expresa la voluntad mayoritaria de legislar al respecto. Es evidente que la burguesía tratará de poner trabas a este acto de justicia ya sea

"amarrando" al Gobierno Popular, imponiendo indemnizaciones que no corresponden o demorando el proyecto; de hecho el proyecto de la DC tiene un artículo regresivo que pretende echar pie atrás en lo ya conseguido. Aunque el número de empresas por socializar es pequeño, el proyecto es útil, pues consolida este cambio del poder económico pero, para que sea justo y eficiente, no puede considerar indemnizaciones más fuertes que las consultadas en la Agricultura y Minería y debe tener la suficiente flexibilidad para que pueda realmente operar y no se convierta en un arma de defensa de la burguesía sino de justicia para los trabajadores.

La configuración del área mixta pareció en un principio de importancia secundaria, pero a medida que avanza el proceso se revela como un excelente mecanismo para que pueda operar la transformación económica en las condiciones particulares que presenta nuestro país. Se trata de empresas en que el capital y la gestión se comparten entre el Estado y capitalistas privados. Tal mecanismo es especialmente útil cuando el aporte del capitalista no es sólo financiero, sino principalmente tecnológico. Ello ha acontecido por ejemplo con las industrias RCA e INSA y al parecer será el mecanismo más práctico para el sector productor de bienes duraderos modernos (línea blanca, automotriz, electrónica, etc.) Creemos, sin embargo, que en estos casos de capitales mixtos no debe permitirse el empleo arbitrario de los excedentes para que así no sigan las relaciones capitalistas: lo cual significa concretamente que las utilidades deben ser reinvertidas de acuerdo con los criterios nacionales. En cuanto a la gestión, nos parece interesante que se intente un tipo de administración tripartita (Estado, delegados de los trabajadores de la empresa y capitalistas privados): así se garantizará el control obrero de

la producción de esas empresas sin que se deteriore el desarrollo técnico de ellas. Un hecho notable es la disposición de muchos empresarios a esta forma de enfrentar la inevitable transformación económica del país: ello es una manifestación más de la esperanza de que la revolución chilena implique un progreso radical sin un costo doloroso.

Respecto a las pequeñas y medianas empresas el panorama es aún más complejo. Ya hemos visto que la voluntad del Gobierno es que tales empresas se mantengan en el área privada. Sin embargo algunas personas aún no captan el sentido de esta determinación. No hace mucho un funcionario de Gobierno afirmó a un grupo de pequeños empresarios que podían trabajar tranquilos porque en este año no serían expropiados. Este tipo de respuestas no sólo es muy poco tranquilizadora, sino también absolutamente equivocada porque el Gobierno no piensa expropiar estas empresas en ningún año de su mandato y más aún su política es facilitar su eficacia mediante ayuda crediticia y técnica.

Esta política es cuestionada por algunos sectores que consideran que el control obrero de la economía implica la socialización de todas las empresas. A ello agregan que siendo la explotación generalmente más intensiva en las pequeñas empresas es natural que la movilización popular tienda a apropiarse de ellas. Pero la razón más fuerte de este planteamiento es que al entregar estas empresas a los trabajadores se cambiará definitivamente la correlación de fuerzas y se haría irreversible el proceso, pues los trabajadores jamás devolverían sus fábricas y lucharían en su defensa. Esta manera de ver las cosas desconoce la naturaleza del proceso chileno y no comparte la estrategia revolucionaria de la clase obrera organizada. Tal estrategia implica centrar el esfuerzo en las áreas

claves y permitir la consolidación del poder político y económico de los trabajadores, para lo cual las ocupaciones de las pequeñas y medianas empresas dificultan el proceso obligando a destinar recursos técnicos, administrativos y humanos escasos, dificultando así la producción, cuyo crecimiento es indispensable para la progresión del proceso dentro de la vía chilena de cambios. La liquidación del poder de la burguesía debe empezar por el tronco y no por las ramas.

No obstante estas observaciones, es justo decir que la política respecto a todo el amplio sector privado requiere de mayor atención y probablemente de una estrategia más flexible. No hay duda que los intereses generales de la clase trabajadora no pueden considerarse liberados de los problemas angustiosos que viven algunos trabajadores de pequeñas empresas. Nos parece que sin implicar una extensión de la función estatal debe haber una estrategia discriminatoria en esa área que liquide los abusos y el boicot de algunos de esos empresarios y apoye sólo a los que colaboran con el nuevo orden económico. Algunas personas se preguntan por el futuro de esas empresas en las etapas siguientes a la construcción socialista. Al respecto sólo se puede decir que las condiciones en cinco años más serán muy distintas y el proceso de socialización se hará seguramente sin necesidad de expropiaciones. Por el momento podría ser incluso aconsejable el desarrollo de cooperativas de producción en ese sector.

SITUACION DE CONTROL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS AL 30-IX-71

1.—*Pertenecían previamente al Estado*:

FF. CC.; ETC (Transporte urbano); LAN; EMPREMAR

claves y permitir la consolidación del poder político y económico de los trabajadores, para lo cual las ocupaciones de las pequeñas y medianas empresas dificultan el proceso obligando a destinar recursos técnicos, administrativos y humanos escasos, dificultando así la producción, cuyo crecimiento es indispensable para la progresión del proceso dentro de la vía chilena de cambios. La liquidación del poder de la burguesía debe empezar por el tronco y no por las ramas.

No obstante estas observaciones, es justo decir que la política respecto a todo el amplio sector privado requiere de mayor atención y probablemente de una estrategia más flexible. No hay duda que los intereses generales de la clase trabajadora no pueden considerarse liberados de los problemas angustiosos que viven algunos trabajadores de pequeñas empresas. Nos parece que sin implicar una extensión de la función estatal debe haber una estrategia discriminatoria en esa área que liquide los abusos y el boicot de algunos de esos empresarios y apoye sólo a los que colaboran con el nuevo orden económico. Algunas personas se preguntan por el futuro de esas empresas en las etapas siguientes a la construcción socialista. Al respecto sólo se puede decir que las condiciones en cinco años más serán muy distintas y el proceso de socialización se hará seguramente sin necesidad de expropiaciones. Por el momento podría ser incluso aconsejable el desarrollo de cooperativas de producción en ese sector.

SITUACION DE CONTROL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS AL 30-IX-71

1.—*Pertenecían previamente al Estado*:

FF. CC.; ETC (Transporte urbano); LAN; EMPREMAR

(Transporte marítimo); ENTEL (Comunicaciones); ENDESA (Electricidad); ENAP (Petróleo); ENAMI (Comercialización y fundición de minerales); ECA (Comercialización agrícola); IANSA (Azúcar de remolacha); ENAFRI (Frigoríficos); FAMAE y ASMAR (del Ejército y Marina); (INFORSA (Celulosa y papel); Banco del Estado (casi 50% del crédito nacional). A ellas habría que agregar otras de menor cuantía y algunas creadas recientemente (SOCOAGRO, DINAC).

2.— Han sido *traspasadas al sector público* (*Area de Propiedad Social*) ya sea por ley, por adquisición de la mayoría de sus acciones o por expropiación legal:
Las cinco grandes empresas del Cobre (Chuquicamata, El Teniente, El Salvador, Exótica y Andina); SOQUIMICH (Salitre); Lota-Schwager (Carbón); Romeral (Hierro); CAP (Acero); CHILECTRA (Electricidad de Santiago y Valparaíso); SOCOMETAL, INDAC, SGM y otras metalúrgicas. La mayor parte de las empresas pesqueras y la mayor parte de los bancos (unos quince), lo cual significa el control del 70% del sistema bancario.

3.— Están *requisadas y/o intervenidas* por problemas de abastecimientos y de acuerdo con la ley:
Las mayores empresas textiles (YARUR, SUMAR, HIRMAS, industrias de Tomé) algunas de las cuales tienen varias plantas o empresas subsidiarias;
Las dos principales productoras de cemento (MELON y POLPAICO);
CTC (Teléfonos); MADECO (Manufacturas de cobre); CCU (Cervecera); Ford Motors. Además de muchas menores, algunas de las cuales están intervenidas sólo por problemas laborales y no deben incluirse en esta lista.

(Transporte marítimo); ENTEL (Comunicaciones); ENDESA (Electricidad); ENAP (Petróleo); ENAMI (Comercialización y fundición de minerales); ECA (Comercialización agrícola); IANSA (Azúcar de remolacha); ENAFRI (Frigoríficos); FAMAE y ASMAR (del Ejército y Marina); (INFORSA (Celulosa y papel); Banco del Estado (casi 50% del crédito nacional). A ellas habría que agregar otras de menor cuantía y algunas creadas recientemente (SOCOAGRO, DINAC).

2.— Han sido *traspasadas al sector público* (*Area de Propiedad Social*) ya sea por ley, por adquisición de la mayoría de sus acciones o por expropiación legal:
Las cinco grandes empresas del Cobre (Chuquicamata, El Teniente, El Salvador, Exótica y Andina); SOQUIMICH (Salitre); Lota-Schwager (Carbón); Romeral (Hierro); CAP (Acero); CHILECTRA (Electricidad de Santiago y Valparaíso); SOCOMETAL, INDAC, SGM y otras metalúrgicas. La mayor parte de las empresas pesqueras y la mayor parte de los bancos (unos quince), lo cual significa el control del 70% del sistema bancario.

3.— Están *requisadas y/o intervenidas* por problemas de abastecimientos y de acuerdo con la ley:
Las mayores empresas textiles (YARUR, SUMAR, HIRMAS, industrias de Tomé) algunas de las cuales tienen varias plantas o empresas subsidiarias;
Las dos principales productoras de cemento (MELON y POLPAICO);
CTC (Teléfonos); MADECO (Manufacturas de cobre); CCU (Cervecera); Ford Motors. Además de muchas menores, algunas de las cuales están intervenidas sólo por problemas laborales y no deben incluirse en esta lista.

4.—Están en *trámites de formar sociedades mixtas* con administración conjunta con representantes de capital privado: IRT (Ex RCA, ya finiquitado); INSA y FIRESTONE (Neumáticos); MADECO (provisoriamente intervenida); Industrias automotrices (esperando definición sobre licitación); CHIPRODAL (Alimentos, en trámite de arrendamiento). En esta misma línea de formar empresas mixtas se mantienen conversaciones con varias empresas productoras de bienes de capital y de bienes de consumo duraderos (artefactos y electromecánicas).

5.—*Se mantienen en el sector privado* a pesar de su carácter estratégico o monopólico:
Las empresas de Comercio Mayorista (ocho principales);
Las distribuidoras de derivados de petróleo y gas;
Las empresas de la Construcción y PIZARREÑO (Materiales de construcción);
Las industrias productoras de bienes duraderos (FENSA-MADEMSA, CIC, SINDELEN, FAMELA - SOMELA, etc.);
Algunas productoras de bienes de capital (Promotora Industrial Andina, INDURA, ELECMETAL, COMPAC, ARMCO) con algunas de las cuales hay gestiones para constituir empresas mixtas;
Cía. de Papeles y Cartones y de celulosa; Compañía Industrial; ambas en trámites de adquisición;
CRAV (Refinación de azúcar); VIPLA (Vidrios); PHILLIPS (Electrónica);
BATA (produce casi el 50% del calzado); algunas empresas navieras;
Banco de Chile (25% del crédito nacional).
En total el APS está formada por unas 150 empresas, pero

sólo unas 70 de ellas forman parte del conjunto que se consideró necesario incorporar según el Programa del Gobierno y la integración al control social de algunas de ellas no está consolidado aún por la ley. Cabe hacer notar que en muchas empresas privadas el Estado tenía previamente participación en su capital y muchas veces se consideran del APS aún cuando el Estado es sólo propietario de la mayoría de las acciones y subsiste capital privado.

Todos estos datos demuestran que el proceso de socialización de la revolución chilena ha sído, en su primer año, más acelerado que casi todas las revoluciones anteriores. El Programa de la Unidad Popular establece que el resto de las empresas, unas seiscientas medianas y más de treinta mil pequeñas y artesanales, se mantendrán decididamente en el sector privado o mixto.

Sentido y forma de la lucha antiimperialista

La lucha contra el imperialismo es una de las consignas más antiguas y persistentes de la izquierda chilena. Como todas las cosas, al concretizarse en estos momentos, adquiere modalidades muy específicas que es necesario comprender.

Hay plena conciencia de que el capitalismo constituye un sistema mundial que se caracteriza por el imperialismo, es decir por el hecho de que los grupos económicos de unos pocos países controlan la economía del mundo provocando una gran desigualdad y relaciones de producción que confirman la dependencia de los más y acrecienta las desigualdades. En el caso concreto de Chile, ello se expresa en el control del cobre, pilar de nuestra economía. A su vez este problema se vincula con las relaciones internacionales y con el comercio

exterior de Chile, aspectos entrelazados que determinan el éxito económico de un gobierno.

Para entender bien la situación hay algunos elementos concretos que tomar en cuenta. Conciencia de que la lucha proletaria tiene carácter mundial y por lo tanto es esencialmente antiimperialista. El panorama de relaciones entre los bloques socialistas e imperialistas ha variado con la introducción de la política soviética de coexistencia pacífica y la evolución del conflicto histórico. Chile tiene un alto índice de comercio exterior, uno de los más altos entre los países subdesarrollados, y por lo tanto su economía depende en gran medida de cómo se desarrollen estas relaciones. El hecho de que la economía chilena haya alcanzado una cierta complejidad y creciente dependencia técnica del imperialismo al punto que no puede interrumpirse sin que la economía sufra alteraciones negativas substanciales. El cambio en las bases del desarrollo imperialista y de sus relaciones con el mundo dependiente.

Esta larga lista de hechos determinan la forma en que Chile debe enfrentar la lucha contra el imperialismo.

El punto crucial es la nacionalización del cobre. Es sabido que ella fue decisión unánime de las fuerzas políticas del país tomada de acuerdo con la soberanía nacional y de acuerdo con la Constitución. Pero la gente tiene dos reservas al respecto: la capacidad para seguir operando con eficiencia las empresas y vendiendo el producto y las proyecciones que esta actitud pueda tener en las relaciones financieras, técnicas y aun políticas con los Estados Unidos. Sobre el primer punto se ha discutido bastante, pero nos parece más complejo e importante el segundo aspecto.

El Gobierno chileno está decidido a ir superando las re-

laciones imperialistas y su dependencia subordinada, pero la política no implica una ruptura total de relaciones con el mundo desarrollado porque ello no es necesario ni conveniente para sus intereses. En esta política está dispuesto a llegar a acuerdos que resguarden el interés nacional como se ha hecho con la Bettelem, la Cerro Pasco, la RCA, la Firestone, la General Tire y otras empresas. Pero el desarrollo de estas relaciones no depende sólo de su voluntad sino de la actitud de las empresas y gobierno norteamericanos y del resto del mundo capitalista. En estos días hemos visto que, a pesar de sus declaraciones de respeto a la soberanía de los países, los Estados Unidos de hecho condicionan su política a los intereses abusivos de las grandes empresas; el gobierno norteamericano ha presionado a través del Eximbank y de la AID para que el Gobierno chileno pague a las empresas del cobre indemnizaciones de acuerdo con los intereses de empresas que se han llevado veinte veces el valor de sus reales inversiones. Estas actitudes pueden hacer temer una generalización de una política boicoteadora de la economía chilena, pero ello es aventurado.

Es indiscutible que a las empresas y al gobierno norteamericano les desagrada y les resulta claramente inconveniente la política liberadora del actual Gobierno, pero no podemos olvidar que han tomado conciencia de que este proceso es inevitable en toda la América Latina y que deben y pueden adoptar un nuevo tipo de relaciones frente a estos hechos. Saben que su propia estabilidad depende de la habilidad y flexibilidad con que vayan enfrentando la nueva situación mundial; por ejemplo es posible que si los Estados Unidos se niegan a tener relaciones económicas y financieras con un país, otra nación capitalista o socialista pasará a ocupar su

lugar en el mercado de ese país y esto tiene sus límites, no tanto por la competencia del bloque socialista, como por la que existe entre los propios países capitalistas industrializados (Japón, Alemania, Francia, EE. UU.). Es significativo que actualmente la suma de compras de cobre chileno por parte de Alemania y Japón sean superiores a las de Estados Unidos y que la mayor parte del reequipamiento industrial haya sido aportado por países como Italia y Alemania.

Es claro que los países capitalistas tienen mecanismos para poner serias dificultades a la economía chilena, dada la internacionalización que ella ha alcanzado (comercio exterior creciente y dependencia tecnológica). Sin embargo, no hay indicadores de que ésta vaya a ser la actitud, que por lo demás no se justifica. La negación de créditos y algunas restricciones de inversiones y aporte técnico son más bien hechos aislados. Por lo demás la política del Gobierno chileno es mantener y desarrollar tales lazos con la única salvedad que se resguarden los intereses nacionales en cuanto a liberar progresivamente a la economía chilena de relaciones de subordinación que lesionen sus intereses.

La prensa norteamericana hace decir a muchos chilenos que la lucha contra el imperialismo es cambiar un amo por otro, EE. UU. por la URSS. Este viejo argumento de la reacción para evitar que Chile recupere lo suyo ha sido totalmente desprestigiado y ello ha quedado muy en claro por el hecho de que Chile se ha incorporado plenamente al *bloque de los países no alineados.*

Las relaciones internacionales tienen también una dimensión respecto a las relaciones con los países limítrofes y muy particularmente con los que forman el Mercado Subregional Andino. En ello también se ha hecho manifiesta la voluntad

del Gobierno de proseguir en esta línea de integración que viene desde hace tiempo, pero ha encontrado grandes dificultades para lograr los beneficios esperados. Un aspecto técnico particular es el problema del cambio monetario y del contrabando de productos existentes en Chile hacia los países limítrofes, dado el precio favorable que tienen en nuestro país por la política gubernamental de congelación del dólar bancario.

Estas consideraciones nos recuerdan que la revolución chilena está determinada por el contexto mundial en que se desenvuelve y que la lucha no es de carácter meramente local. El mundo imperialista depara en este aspecto reiteradas sorpresas y nadie puede estar seguro de sus reacciones. Las apariencias señalan que la contraofensiva capitalista que se aprecia al cumplirse un año de la elección de Allende está sincronizada con una mayor dureza del imperialismo norteamericano, que al principio se mostró más dispuesto a aceptar la soberanía chilena. No hay duda que una ofensiva imperialista pondría en dificultades serias a la economía chilena no tanto en el aspecto financiero (negación de préstamos), como en el aspecto comercial y tecnológico (abastecimiento de repuestos y asistencia técnica a las empresas que operan con patentes y procedimientos norteamericanos); la economía chilena en este sentido es una de las más vinculadas al comercio y tecnología de los países industriales. Esta actitud significaría que el pueblo chileno tendría que aprontarse a enfrentar tales dificultades, pero tendría la virtud de aglutinar en torno a la Unidad Popular a todos los verdaderos patriotas y probablemente subiría la temperatura de la revolución.

La decisión del Gobierno y la vía chilena de tránsito al socialismo implican también una actitud de progresiva liberación de la subordinación, pero no una ruptura de relaciones

económicas con los países capitalistas. Si esta ruptura se produce no será por culpa de Chile, y en ello el Presidente se ha movido con habilidad, especialmente en su reciente viaje a los países del Pacto Andino. Cuando un pueblo inicia una revolución de la trascendencia de ésta debe estar dispuesto a jugar todas las cartas y enfrentar todas las dificultades que ella significa.

La nueva organización económica y la participación popular.

Frente al proceso de transformación del sistema económico la gente se pregunta cómo funcionará el nuevo sistema económico. La respuesta se relaciona con el problema del tipo de socialismo que se piensa desarrollar en nuestro país. Las preocupaciones se refieren a la eficiencia que tenga la nueva economía y a *la real participación* que tendrán en ella los trabajadores, incluyendo el problema de la situación personal en el nuevo sistema.

Es claro que sería una pretensión excesiva, o tal vez un error, tratar de responder en forma completa y definitiva para describir un proceso que está en pleno desarrollo y cuya consolidación está aún por verse. Sin embargo, es posible aclarar la configuración inmediata de la nueva economía porque la política del Gobierno no consiste sólo en expropiar, sino en ir construyendo una nueva organización económica que vaya haciendo efectiva la democracia. No se improvisa sino que se tiene un proyecto inmediato de la nueva organización económica, aunque su configuración definitiva está aún por construirse. En todo caso, conviene tener presente que *la nueva economía se caracteriza tanto por una nueva estructura de*

cada empresa como por una nueva estructura de la economía global del país. Lo uno no tiene sentido sin lo otro, aunque mucha gente cree que el problema se centra en el funcionamiento de cada empresa.

Un sistema económico se caracteriza principalmente por tres elementos: los criterios de decisiones, los mecanismos de decisiones y la estructura del poder económico, incluida la propiedad de los medios de producción. Estos elementos generan *las relaciones de producción* que distinguen a un sistema de otro. Nos referiremos a cada uno de estos puntos.

El fundamento de toda organización económica son los *criterios de decisiones,* o la manera de concebir los objetivos y la forma más eficiente de funcionamiento de la economía. Esto parece algo muy vago y general, pero tiene alcances muy concretos y precisos. Se trata del criterio con que se toman decisiones sobre qué y cuánto producir, cómo distribuir los productos, en qué y cuánto invertir, qué técnicas emplear, cuánto pagar en sueldos y salarios, cómo contratar personal, qué precios cobrar, etc.

La revolución chilena implica un cambio radical en estos criterios de decisiones, lo cual podemos apreciar en torno a cuatro ideas específicas:

a) *La supremacía de la dirección racional social de la economía* sobre la conducción por la iniciativa particular o privada. Esto, que tiene proyección a largo plazo en el mundo, cobra carácter de urgencia evidente en los países subdesarrollados donde la iniciativa privada ha sido objetivamente incapaz de superar tal situación. La superioridad de la racionalidad social significa dirección global de la economía, pero no necesariamente centralización absoluta de la dirección económica.

b) La afirmación de que *el objetivo de la gestión económica no es la mayor utilidad de las empresas, sino la progresiva satisfacción de las necesidades masivas crecientes de la población*. Para la vieja economía sólo interesaba el éxito de las empresas existentes y la satisfacción de las necesidades de los grupos privilegiados del país. Para la nueva economía el objetivo es que haya suficientes empresas y actividades que permitan la satisfacción de las necesidades de toda la población y el crecimiento racional de los niveles de vida de los diversos sectores, sin que ello signifique un crecimiento clasista de ellos. Es obvio que en este contexto también interesa el éxito y eficiencia de las empresas, pero dentro del éxito y eficiencia globales de la economía;

c) La convicción de que *los factores dinamizadores* del desarrollo operan de manera mucho más eficiente cuando son conducidos y *controlados por la voluntad social* y en esta situación cambian totalmente las leyes de funcionamiento del sistema. Por ejemplo en el sistema capitalista una expansión del circulante se traducía de hecho en alza de precios; en cambio en la nueva economía, gracias al control social de precios, tal expansión se debe traducir en un aumento de la producción. Las leyes sobre tendencia al consumo, al ahorro, a la inversión, etc., que estudia la economía capitalista, no tienen aplicación en la nueva situación y los mecanismos indirectos de incentivación (facilidades tributarias y crediticias, protecciones aduaneras, etc.) que eran distorsionadas por el usufructo capitalista serán reemplazadas por mecanismos directos impuestos por los intereses mayoritarios. Esto significa no sólo una nueva orientación económica sino contar con mecanismos para aplicar en forma efectiva sus directrices evitando las deformaciones de la persistencia de elementos capita-

listas. Mayor rapidez de movilización de capitales, ocupación plena, jerarquización de los consumos, etc., son medidas que permite la nueva economía y que la constituyen.

d) La convicción de que, dadas las condiciones del cambio chileno, se deben combinar los factores dinamizadores actuales que sean eficientes con nuevos factores dinamizadores. Esto se traduce en la complementación entre las áreas social, mixta y privada de la economía, en la colaboración técnica sin fronteras y en la combinación de los incentivos materiales y morales para la eficiencia económica.

Entre los criterios y factores del desarrollo alcanza especial importancia el problema de los *incentivos*. Muchos trabajadores piensan, con razón, que si la gente no tiene expectativas de mejorar y se tiende a la nivelación de los ingresos o a la mayor preponderancia de las decisiones partidistas en las promociones en el trabajo se resentirá la eficiencia general de las empresas y de la economía. Por su parte, algunos revolucionarios piensan que la nueva sociedad debe suprimir los incentivos materiales y egoístas y reemplazarlos por los incentivos morales y la conciencia de clases. Uno y otro enfoque son equivocados: el primero porque no es efectivo que haya una nivelación absoluta de los ingresos, sino que habrá sólo una mayor justicia y acercamiento de ellos para evitar diferencias clasistas, y el segundo porque peca del idealismo de pretender dar saltos en la historia. Es efectivo que el cambio de los valores y de las conductas es consubstancial con la revolución, pero es idealismo pretender que tales cambios operan eficientemente de la noche a la mañana. Algunos creen afirmar el planteamiento moralista en la política de la Cuba de Fidel Castro, por lo que resulta útil saber lo que éste ha dicho al respecto:

"Ni métodos idealistas que conciban al total de los hombres guiados disciplinadamente por los conceptos del deber, porque en la realidad de la vida actual no podemos pensar en eso, si bien podremos pensar más y más en la medida en que se vayan formando las nuevas generaciones de nuestra Patria. Ni tampoco aquellos caminos que busquen, por encima de todo, despertar en el hombre el egoísmo, o que, sin buscar precisamente eso, conduzcan a eso, de manera que el hombre quiera actuar bien pensando en que actuar bien equivale a una recompensa para él y no a un profundo deber moral".

Y más adelante: "Absurdo sería que intentáramos que la gran masa de los hombres que se ganan el pan cortando caña, fuesen cada uno de ellos a hacer el máximo esfuerzo diciéndoles que han de hacerlo por un deber, independientemente de si ganan más o si ganan menos. Sería idealista hacer eso.

"Pero creemos que dondequiera que un hombre tiene una responsabilidad ante el pueblo, dondequiera que un hombre ha recibido el honor de ser responsabilizado con algo, dondequiera que un hombre ha sido designado administrador o jefe cualquiera de un frente de trabajo, tenemos el deber y el derecho inalienable de exigir que ese hombre cumpla su deber y lo cumpla en el grado más alto posible, independientemente, por completo, de la remuneración que reciba".

Esta es la visión realista cuya validez es aún mayor en el caso chileno. En la nueva economía se mantendrán los incentivos materiales y cada trabajador recibirá más en la medida que se esfuerce y produzca más. Ciertamente es preciso crear los mecanismos adecuados para que esta incentivación sea más justa, para que sea controlada socialmente y, sobre todo, para que se vaya complementando con los incentivos morales y con

una nueva visión y conducta económica más solidaria y menos egoísta, sin lo cual la revolución no es integral ni verdadera.

El problema de los *mecanismos de decisiones* se relaciona directamente con el problema de la *participación* de los trabajadores y democratización de la economía. Respecto a ello hay varios enfoques y uno de ellos consiste en considerar que esto es lo único que interesa en el problema olvidando sus bases que son los criterios de decisiones y la estructura del poder económico.

Pero el error más común es creer que la participación de los trabajadores se da principalmente al nivel de cada empresa como un medio de mejorar las relaciones dentro de esa empresa. La verdad es que las decisiones más importantes en la economía moderna son aquellas que afectan a todo el sistema y se dan al nivel global de la sociedad. Por esta hazón *el Gobierno Popular y la CUT conciben la participación, no como un mecanismo a través de la cual los trabajadores toman una parte del poder, sino el proceso por el cual los trabajadores asumen el poder de decisión*. Tal poder opera en dos niveles: uno nacional o global como clase trabajadora y otro empresarial como grupo de trabajadores de una empresa. En la medida que se trata del control del poder y principalmente del control como clase trabajadora, se dice que la participación es un problema político en el cual los trabajadores deciden sobre su trabajo y sobre el empleo de su producto. El nivel nacional y el nivel empresarial son dos expresiones del poder de decisiones de los trabajadores.

Para comprender cómo opera esta participación o esta democratización de los mecanismos de decisiones hay que aclarar algunos hechos. El problema de los mecanismos consiste en quiénes toman las decisiones, y de allí que resulta previo

distinguir los tipos de decisiones. Según el nivel podemos distinguir decisiones globales o nacionales, decisiones intermedias, decisiones empresariales y decisiones particulares. Las decisiones intermedias se refieren a un grupo de empresas (sectoriales) o a la economía de una región determinada (regionales). Las decisiones particulares se refieren a algún aspecto, sección o departamento de una empresa. En otro sentido, podemos distinguir tres tipos de decisiones: la *gestión* propiamente tal, que es la determinación de políticas o decisiones generales en cualquier nivel; la ejecución, que consiste en aplicar las políticas o tomar las decisiones específicas que determine la gestión; y la *generación y control* del poder, que consiste en la designación de las autoridades, su remoción y en la supervisión de la aplicación de las políticas acordadas.

De acuerdo con lo señalado la política de la CUT y del Gobierno implica el desarrollo de un *socialismo descentralizado en el cual las decisiones son compartidas por el nivel global de la clase* (*Estado*) *y por el nivel empresarial* (*Asamblea o colectivo de trabajadores de cada empresa o planta*). En consecuencia la generación o designación de las autoridades corresponde a esos niveles como asimismo el control y supervisión de la aplicación de las políticas acordadas. Igualmente es útil señalar que la *gestión* o toma de decisiones generales es *colegiada*, es decir asumida por esos mismos detentores del poder: el Estado, los partidos que lo sustentan y los organismos de trabajadores de las empresas. En cambio la *ejecución* es de carácter *unipersonal*, es decir responsabilidad de las autoridades designadas por los organismos que corresponda.

A nivel nacional la principal diferencia en la toma de decisiones entre la antigua y la nueva economía es que en la economía capitalista las decisiones las toman principalmente

los grandes monopolios o empresas poderosas y el organismo de planificación del Estado sólo hace estudios y da algunas normas generales indicativas o promueve mecanismos de control indirecto. En cambio en la nueva economía existirá un organismo nacional que tomará decisiones generales, asignará recursos y fijará metas a los sectores de la economía y tomará las medidas que conduzcan a la concretización de los objetivos que se propone la nueva racionalidad económica. Por el momento tal función corresponde al *Consejo Nacional de Desarrollo* constituido por ministros, jefes de organismos estatales y representantes de trabajadores y de empresarios. Este aparato central se está recién desarrollando aunque tiene atribuciones de dirección económica, tales como conocer los planes y recomendar la política de financiamiento de ellos.

Mucho más avanzados están los comités de planificación y dirección *sectorial* de la economía (por ej., textiles, pesca, bienes de capital, etc.) los cuales operan en la CORFO. La razón de esto es que tales comités sectoriales se van desarrollando a medida que se configura y consolida el área social en cada uno de ellos. En la práctica la dirección de la economía nacional opera a través de estos comités bajo la tuición del Comité de Dirección Económica. Junto con ello y en un plano de localización de necesidades y recursos operarán los comités u oficinas *regionales* que coordinarán la actividad económica en sus respectivas regiones.

En el plano de cada empresa opera un mecanismo de participación que ha sido elaborado por un trabajo conjunto de la CUT y del Gobierno. Este reglamento distingue los casos en que la empresa opera con una sola planta y aquellos en que la empresa tiene varias plantas o fábricas. En cierto

sentido la esquema es el mismo con multiplicación de situaciones y centralización de decisiones en el segundo caso.

La gestión empresarial compete al *Consejo de Administración* o Comité Directivo de cada empresa. Este Consejo está compuesto por el Administrador, cinco representantes del Gobierno y cinco representantes de los trabajadores. Para designar a estos últimos se procede a elegir representantes elegidos por la asamblea de trabajadores distinguiendo en ella tres sectores que deben estar representados en el Consejo: *tres por los obreros o trabajadores director, uno por los empleados administrativos y otro por los profesionales y técnicos.* Aquí puede apreciarse que la gestión es colegiada, pero la ejecución es unipersonal responsabilizada en el Administrador. Esto significa que el Consejo acuerda las políticas a seguir y actúa como una especie de legislativo, pero la administración es la encargada de ponerlas en práctica. Puede que más adelante, cuando el sistema se vaya consolidando, el administrador sea elegido por los propios trabajadores o designado por el Gobierno a propuesta de la asamblea.

Como todas las empresas están divididas en departamentos o secciones, a nivel de ellas se presenta un esquema similar. En cada uno de ellos funciona un *Comité de Producción* integrado por el jefe respectivo y los representantes de los trabajadores de cada sección o departamento. Las atribuciones de los Comités de Producción son asesorar al jefe del departamento respectivo y supervisar la ejecución de la política acordada en general. Cuando una empresa tiene varias plantas hay un Comité de Producción por cada planta, además de los correspondientes a los departamentos. Puede observarse una vez más que se conjuga la ejecución unipersonal con la gestión colegiada.

En esta forma de organización el Sindicato conserva su autonomía como expresión de los intereses ocupacionales de los trabajadores. Sin embargo, dada la expresión de clase que tiene la nueva organización, el Sindicato debe colaborar a la ejecución de la política global de la clase trabajadora. Para ello en cada empresa existe un Comité Coordinador de Trabajadores integrado por los representantes de los trabajadores ante el Consejo administrativo, los dirigentes sindicales y los delegados de los distintos comités de producción que existan. Este comité tiene justamente la función de unificar las políticas empresariales para que respondan a la política general de la clase trabajadora.

Debe señalarse que esta organización empresarial rige para las empresas que conforman las áreas social y mixta de la economía con algunas salvedades para esta última, dependiendo de la participación que tenga en ellas el Estado. Para el área privada se mantiene naturalmente su actual estructura. Sin embargo, a fin de procurar que este sector colabore en la política económica general y no la dificulte se han creado los *Comités de Vigilancia* que tienen la función de supervisar y exigir el desarrollo normal y creciente de las empresas, de acuerdo con los planes del Gobierno y las capacidades de la empresa. Estos comités deben ser promovidos por los sindicatos o los trabajadores mismos cuando no los haya.

En el siguiente organigrama podemos apreciar lo explicado sobre la organización de las empresas socializadas:

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Vice Presidente o Director designado por el Gobierno
5 representantes de los Trabajadores
5 representantes del Estado
El Comité Coordinador de Trabajadores coordina la labor de los representantes con el Sindicato
Todos los trabajadores eligen a cinco representantes:
3 del sector productivo
1 del sector administrativo
1 del sector técnico profesional
Candidatos de los sectores
Productivo
Administrativo
Técnico Profesional
Los trabajadores eligen
Asamblea de Trabajadores (todos los trabajadores de la empresa)

Puede llamar la atención que al explicar el nuevo sistema económico no se haya abordado el problema de la *propiedad* cuyo traspaso ha caracterizado el cambio y ha originado los problemas más críticos de él. Pero si nos preguntamos quiénes imponen los criterios que dirigen la economía y de dónde se deriva el poder para tomar las decisiones y por lo tanto quiénes las toman, vemos que ello depende de quien sea el dueño de las empresas, de los medios productivos. Imponer criterios y tomar decisiones constituyen el poder económico y para ejercerlo es necesario controlar los medios productivos. Hay quienes sostienen en teoría que es posible ejercer el poder de decisiones sin tener la propiedad o dominio de los medios productivos, pero la experiencia real demuestra que ello no es posible. Otra cosa es que sea posible dar título jurídico de propiedad y al mismo tiempo garantizar que el dominio y uso de ella sea social. Por ejemplo, podría establecerse que todo chileno o todo trabajador de una empresa tenga el título de una parte (por ej. un determinado número de acciones) de la propiedad social, pero que tal título no le permite heredar, enajenar, liquidar, dejar de emplear, o utilizarlo para enriquecer a costa del trabajo ajeno. Algo similar a esto plantea la ley de Reforma Agraria aprobada bajo el gobierno de Frei y en realidad significa que el título jurídico es "particular de todos" pero el dominio y uso es social, que es lo que interesa. Creemos que por razones políticas pueden consultarse mecanismos de este tipo aunque repulse a ciertas consideraciones teóricas. En esto acontece lo mismo que en el problema de los incentivos en que el idealismo puede convertirse en un enemigo del proceso revolucionario.

Pero, aparte del problema de la propiedad la gente tie-

ne otras reservas frente a la nueva organización económica, algunas de ellas con bastante fundamento.

Una observación muy común pero que revela un buen porcentaje de ignorancia, es la que dice que se reemplazan los monopolios particulares por un solo monopolio estatal y la clase capitalista por una nueva clase formada por los dirigentes de los partidos. Respecto a lo primero baste decir que en la medida en que el Estado representa a todos los trabajadores el monopolio del Estado sería el de los trabajadores y ello es justamente lo que se busca: que los trabajadores sean dueños del fruto de su trabajo. Obviamente el monopolio que es de todos deja de ser monopolio en el sentido de control injusto por unos pocos de lo que pertenece a todos. En cuanto a lo segundo es efectivo que se puede producir una explotación burocrática si algunos funcionarios designados por el Estado ganan más de lo que merece su trabajo (como parece ocurrir en ciertos casos), pero ello no constituye una clase. Lo que caracteriza a la clase capitalista no es el hecho de mandar, sino que el hecho de que incremente su poder (agrande sus empresas) a costa del trabajo ajeno y en cambio los funcionarios, por muy bien pagados que estén (lo cual tiene por lo demás un límite legal), jamás podrán disponer de los medios de producción y por lo tanto no constituyen una clase dominante. Ello sin contar que los funcionarios son designados por decisión e intereses de las mayorías o de las autoridades elegidas por ella, y que, en cambio, los capitalistas actúan por sí solos y en contra de la mayoría. No es lo mismo una autoridad que emana de la mayoría que una que se impone a ella para explotarla.

Lo de los sueldos altos de los funcionarios medios nos ubica en un problema que sí es real y se ha podido apreciar

en los comienzos del proceso. Nos referimos a la confusión que tienen algunos militantes de partidos de Gobierno que *creen que el poder de la clase trabajadora se traduce en su poder personal o de grupo*. Ha acontecido que consideran a las empresas como mecanismos para repartirse el poder y de hecho han pretendido multiplicar los privilegios que antes tenía el capitalista y sus secuaces. A tal punto que en vez de suprimirse los privilegios se han multiplicado y con ello se han multiplicado los problemas. Esta repartición por grupos del poder obrero es uno de los mayores defectos en que caen aún algunos que saben mucha teoría del poder proletario y ello compromete todo el éxito de la nueva economía.

Queda aún el problema de la eficiencia del nuevo sistema económico y las reservas que la gente tiene al respecto. No hay duda que ello es un problema delicado y real. Por de pronto en un principio es natural que haya deficiencias pues se reemplaza un sistema por otro y ello produce desajustes. El capitalismo basaba su eficiencia en la dictadura que ejercía el patrón en la empresa y al reemplazarse ésta por una dirección colectiva se producen problemas de relajamiento, especialmente si la dirección colectiva está profundamente dividida en varios partidos como acontece en nuestro caso. Esta es una de las desventajas del pluripartidismo, la cual se agrava por el acendrado sectarismo que han mostrado algunas personas. Sin embargo, el nuevo sistema puede encontrar mecanismos eficaces para solucionar estos problemas y restablecer un orden empresarial y aumentar la eficiencia de las empresas, como ya se ha logrado en algunas de ellas gracias al esfuerzo del conjunto de trabajadores. El principio más importante es que *el aumento de ingresos debe basarse en el aumento de la producción por persona*, es decir, en el

mejoramiento de la productividad. Junto con él debe operar el principio del control colectivo y solidario de la eficiencia, lo cual requiere de una gran educación política de los trabajadores y de mecanismos técnicos para hacerlo efectivo. Estas tareas tienen una gran urgencia en la actualidad.

Muchas de las críticas de la oposición se basan en problemas secundarios o demagógicos, como defender a los trabajadores que se niegan a cooperar con sus compañeros en la nueva organización social. Es natural que haya muchos de ellos, pues los antiguos patrones le ofrecían privilegios a costa del trabajo de la mayoría. Igualmente se utiliza la demagogia de seguir aumentando los privilegios de algunos sectores laborales con lo cual logran que estos sectores se pongan en contradicción con los intereses generales de la clase trabajadora. Dadas las tradiciones reivindicativas del país esto es muy posible y de hecho ello explica las votaciones sindicales y la actitud laboral en parte de los trabajadores del cobre y de algunas empresas y reparticiones públicas. De esto trataremos al hablar de la situación de los trabajadores y en la parte referente al Desafío Económico profundizaremos más en el problema de la eficiencia en las empresas estatizadas.

Una última observación de importancia. Lenin insistía con toda razón que en la construcción de la nueva sociedad *la participación no consiste sólo en tomar parte en las decisiones y en el producto social, sino especialmente en asumir responsabilidades y cumplir tareas en todos los niveles de la economía.* La principal participación es mejorar el trabajo social para beneficio de todo el conjunto de trabajadores y de cada uno de ellos. La participación no es un problema de elegir autoridades, sino de actuar socialmente.

La situación de los trabajadores

En la situación real de Chile el desarrollo de un nuevo sistema de organización económica origina en un amplio sector de trabajadores una serie de inquietudes que dicen relación con su situación personal y de grupo. ¿Mantendré mi trabajo? ¿Mejorarán los sueldos y salarios? ¿Tendré perspectivas de avanzar en la escala ocupacional o ello dependerá sólo de que pertenezca a algún partido y tenga influencia en él? Son preguntas muy concretas, cuya respuesta se dificulta porque están impregnadas de la mentalidad que el sistema existente hasta ahora ha logrado penetrar en el fondo de la gente.

A pesar de ello es necesario responder a ellas, pero antes es necesario hacer tres observaciones generales. La primera es que se idealiza mucho sobre la situación existente bajo el régimen que ha imperado hasta ahora; la verdad es que la seguridad del empleo, el aumento real de las remuneraciones y las perspectivas de ascenso estaban limitadas a poquísima gente, los demás se encontraban objetivamente en una situación de inseguridad y de estancamiento apenas paliada por los sueños de un futuro mejoramiento, sueño que era más poderoso en los jóvenes que estudiaban profesiones. En segundo lugar no puede olvidarse que un cambio de sistema económico implica un desajuste más o menos grave de la economía y por ello resulta muy difícil esperar un mejoramiento inmediato de las condiciones de los trabajadores; lo esencial es el cambio de condiciones para un mejoramiento sustantivo futuro el cual debe ser masivo e integral. En tercer lugar no puede olvidarse que el mejoramiento de la situación

de un trabajador o de un grupo de ellos depende básicamente del mejoramiento de la situación general del país y eso es justamente lo que procura la nueva economía.

Hechas estas aclaraciones podemos referirnos a cada una de las inquietudes señaladas anteriormente.

En cuanto a la *seguridad del empleo* el problema se ha clarificado rápidamente. El cambio de gobierno originó una contracción inicial de la ocupación, la cual fue superada a tal punto que el nivel de desocupación actual es uno de los más bajos de los últimos veinte años; naturalmente la seguridad de trabajo es mayor cuanto menor es la cesantía. Una de las paradojas de la revolución chilena es que nunca ha habido más inercia ocupacional, es decir dificultades para echar a alguien de su empleo que ahora que hay un proceso revolucionario, es decir cuando más cambios debían producirse al respecto. Las sucesivas leyes de inamovilidad y el escándalo político que se hace por cualquier cambio, que antes eran habituales e inadvertidos, configuran esta extraña situación. Es posible que algunas fusiones empresariales originen algunos cambios de ocupación, pero en ningún caso ello significa pérdida de trabajo o deterioro de los ingresos. Tanto para los efectos de garantizar la estabilidad del empleo como para resolver al mismo tiempo el problema de la lucha contra el sabotaje se hace necesario un "Estatuto de trabajadores" por sectores y una legislación sobre sabotaje económico.

En cuanto al *nivel de ingresos* ya se ha señalado que el mejoramiento inmediato de los ingresos personales no puede ser considerado como un objetivo inmediato de ninguna revolución ya que todas ellas producen trastornos que dificultan esta posibilidad y deben sacrificar una estabilización provisoria en aras de poner las bases para un mejoramiento ma-

sivo y progresivo verdadero. Sin embargo, la naturaleza del proceso chileno ha permitido un cierto mejoramiento global y sectorial que en todo caso es limitado. Seguramente la oposición aprovechará de esta circunstancia para engañar a los trabajadores haciéndoles creer que la revolución tiene como primer objetivo el mejoramiento de las rentas y azuzando demagógicamente la lucha por reajustes aparentemente fuertes pero que en la experiencia inflacionaria capitalista ya se apreciaron como ilusorios. Para evitar estos mecanismos politiqueros de la burguesía, la que usará para ello a los democratacristianos y otros grupos centristas, se hace indispensable una legislación sobre "Racionalización General de Rentas" que supere esas luchas sectoriales estériles a que nos tenía acostumbrado el capitalismo. En este sentido la CUT tiene una clara conciencia de la situación y ha actuado con mucha consecuencia al respecto.

El punto que más desalienta a muchos trabajadores es el cambio de las perspectivas, pues se presenta la imagen de que para *progresar en el trabajo* lo que vale es la militancia partidista mientras que el esfuerzo y la capacidad pasan a un lugar muy secundario: en esta materia los hechos reales desmienten cualquier entusiasta discurso. Claro está que en la apreciación de ello hay un engaño sobre los mecanismos promocionales bajo el capitalismo; en él la promoción también está sujeta a decisiones políticas, no necesariamente partidistas, pero sí al hecho de que progresaba sólo aquel trabajador que estaba dispuesto a seguir la política patronal y en consecuencia a traicionar los intereses de sus propios compañeros de trabajo. No es el empeoramiento lo que se teme, sino que cambie una tergiversación por otra, el patronalismo por el sectarismo partidista. En este sentido es efectivo

que muchos militantes populares, y a menudo aquellos que se declaran más revolucionarios, han confundido el poder de los trabajadores con el poder de las directivas partidistas y el mejoramiento de la clase trabajadora con el mejoramiento personal. En esto se junta el problema de la promoción con el de las rentas: si bien es cierto que se ha fijado un límite de veinte vitales en las empresas propiamente públicas este límite no rige para las empresas estatizadas y, lo que es peor, muchos han creído que el triunfo de la revolución consiste en duplicar y aún triplicar sus ingresos personales. Esta es una deformación clara, concreta y desgraciadamente frecuente de la revolución. Nadie que proceda en ese espíritu deformado tiene real derecho a hablar de una revolución proletaria.

Los fundadores del socialismo alcanzaron a prever esta situación e insinuaron algunas medidas concretas para evitar tal deformación burocrática y pequeño burguesa: 1) No sólo elegibilidad, sino removilidad en cualquier momento (se entiende de los funcionarios jefes); 2) sueldo no superior al salario de un obrero; 3) inmediata implantación de un sistema en el que todos desempeñen funciones de control y de inspección y todos sean "burócratas" durante algún tiempo para que, de este modo, *nadie* puede convertirse en "burócrata". En la experiencia chilena muchos revolucionarios adolecen de un sospechoso olvido al respecto. La fijación del tope de veinte vitales es muy positiva, pero ello no debe significar que todos los funcionarios designados desde arriba deban esforzarse, para cumplir con la revolución, en aproximarse a ese tope.

Con esto no queremos negar la necesidad de que los nombramientos de ejecutivos superiores de las empresas y servicios tengan carácter político. Ya hemos dicho que los par-

tidos no son organismos distintos de la clase, sino su expresión superior como clase y por lo tanto *para aplicar una política de clase es necesario que ésta sea aplicada por los cuerpos orgánicos y disciplinados de ella, es decir por los partidos.* Lo que criticamos es confundir esta necesidad de hacer efectivo el poder de la clase con la mentalidad que confunde la revolución proletaria con la repartición de cargos, la batalla de la producción con la batalla de la ubicación, el poder de los trabajadores con el poder propio y de su grupo, el socialismo con el oportunismo.

III. EL DESAFIO ECONOMICO

El objetivo principal del Gobierno de la Unidad Popular es iniciar la transformación de la sociedad chilena en el sentido que acabamos de analizar. Sin embargo los esfuerzos actuales están centralizados en ganar la "Batalla de la Producción" en el sentido de aumentarla en forma significativa. Por su parte la oposición aprovecha cualquier oportunidad para ir formando la imagen del fracaso económico del Gobierno. Ambos están dando en el clavo. El avance o frustración del socialismo en Chile depende actualmente del éxito o fracaso económico del Gobierno que lo impulsa.

Esto no es lo frecuente en las revoluciones. Ellas se justifican, no por el éxito económico inmediato, sino por la transformación general de la sociedad para sentar las bases de un progreso mayor y mejor repartido y de una verdadera democracia. Pero en Chile la situación es distinta por la naturaleza del cambio. Nuestra revolución exige que la gente apoye electoralmente el proceso y ello no es posible si no siente que

su condición a lo menos no se empeora y que puede esperar un mejoramiento sólido futuro.

De allí que la lucha ideológica y noticiosa se centre en las imágenes que se forman sobre la situación económica del país. La empresa de diarios de la burguesía (*El Mercurio*) en forma simulada o abierta insiste día a día en su campaña sobre desabastecimiento, aunque luego niegue cínicamente que realiza una campaña. No hay duda que existen problemas, pero la situación no es substancialmente distinta de la que el país ha vivido tradicionalmente y es esta prensa la que le ha dado caracteres que no tiene. De allí también que los diarios de Gobierno, en su tarea de destruir tales imágenes, tiendan a presentar una imagen optimista que no siempre corresponde a la realidad.

La economía chilena se pinta actualmente de blanco o negro y cuesta captar el color gris que realmente tiene. Este matiz de nuestra economía no es una novedad ni menos un producto del Gobierno Popular. Ha sido el color crónico de ella que se ha convertido en color negro para grandes sectores de la población. No hay duda que algunos tipos de desabastecimientos se han acentuado recientemente, pero ello no debe hacer olvidar que la escasez ha sido la tradición para mucha gente. Puede ser una novedad que, por algunas razones circunstanciales, haya aguda escasez de pollos, pero no es una novedad que el 48% de los niños chilenos está decididamente mal alimentado y eso es más importante de resolver. La eficacia de la campaña de la oposición se basa en que en Chile siempre han opinado sólo algunos sectores, pero la gran mayoría ha sufrido en silencio las estrecheces que el capitalismo le ha significado.

Los enemigos de la revolución resumen su actitud for-

mando la idea de que ella producirá inevitablemente una *crisis económica* aguda y que ya estamos a las puertas de ella. Los profetas de esta crisis fundamentan su aseveración en un conjunto de elementos que podemos resumir de la siguiente manera:

—Explosión de la inflación que estaría artificialmente contenida.

—Aumento de la cesantía.

—Crisis de la producción agropecuaria.

—Dificultades en la producción de cobre y consecuentemente en nuestra disponibilidad de divisas o capacidad de importar.

—Problemas en la producción industrial por la inseguridad empresarial ante el proceso de socialización (necesidad de limitar las áreas).

—Deterioro general de la producción por la ineficiencia de las empresas estatizadas.

—Falta de inversiones, descapitalización y estancamiento tecnológico.

Ya se han analizado algunos de estos problemas. En esta parte abordaremos los restantes.

La lucha contra la inflación y el Plan de 1971

Aunque la inflación no es el problema económico más importante de Chile, es el síntoma que mejor capta la gente para saber si un gobierno tiene o no éxito en su política económica. Es por lo tanto el de mayor incidencia electoral.

Las políticas económicas no son medidas aisladas, sino que forman conjuntos de iniciativas que operan como totali-

dades. Por ello el Gobierno Popular al *enfrentar la inflación* lo ha hecho conjugadamente con una política de *reactivación económica*, de *redistribución de los ingresos* y de *absorción de la cesantía*.. Estos objetivos configuran el Plan económico para 1971.

Los mecanismos empleados para obtener estos objetivos han sido aparentemente simples y se reducen a los siguientes:

—Se han otorgado reajustes de remuneraciones entre un 35% y un 40%.

—Se está limitando el alza de precios a un nivel anual del orden del 15%, lo cual significa que algunas cosas han subido más y otras se han mantenido congeladas.

—Como el aumento efectivo del circulante ha sido del orden del 35% y el de precios de sólo 15% se ha producido un aumento real de la demanda de un 20%, lo que debería repercutir en un aumento similar de la producción. Esto se considera factible debido a que había una sub utilización de de recursos productivos (capital instalado y fuerza de trabajo) que puede estimarse en un 30%.

—La diferencia entre los reajustes de remuneraciones y de precios ha debido ser absorbida por las utilidades de las empresas o por los mejoramientos de la productividad y disminución de costos innecesarios; la verdad es que las ganancias globales de las empresas no han disminuido ya que han aumentado las ventas.

Junto con estas medidas básicas se han tomado otras que tienden al objetivo de redistribución de los ingresos: exención de impuestos a las rentas menores y de contribuciones a las propiedades de bajo avalúo, gratuidad de algunos consumos y reajustes de las asignaciones familiares.

Para aplicar esta política se ha debido recurrir a las emisiones inorgánicas y, en algunos casos excepcionales, a las bonificaciones. Algunos políticos han objetado duramente estos mecanismos en gran parte porque no los comprenden adecuadamente. Dentro del sistema capitalista tales mecanismos han producido siempre efectos negativos porque en él falta la dirección social y racional de la economía y todo está entregado a los intereses de las grandes empresas y de los especuladores. Bajo una nueva orientación y dirección económica las cosas operan de otra manera. Las emisiones inorgánicas constituyen mecanismos de activación económica cuando no repercuten en alzas de precios y cuando hay recursos productivos ociosos. Las bonificaciones, que en total no inciden en más de un 2% en el aumento global de precios, son positivas porque con ello se evita el alza de un 20% en bienes o servicios que seguirían la ola alcista si no hubiese una política congelatoria que incluye bonificaciones en casos justificados.

Esta política lleva casi diez meses de aplicación y es posible hacer un cierto balance de ella, pero antes conviene responder a una pregunta que se formula mucha gente: ¿cómo es posible que si esto era tan fácil no lo hubiesen hecho los gobiernos anteriores? La extrañeza al respecto es la que hace desconfiar del éxito de tal política.

Ciertamente la aplicación de esta política requiere de bases que no existían previamente y con ello se demuestra que no es una simple medida aislada para tratar de detener la inflación sino que es indicativa de *una nueva economía nacional*. Esta nueva orientación económica se caracteriza porque las decisiones las impone la mayoría nacional para servir sus intereses y no los clanes de poder económico que manejaban

la economía al servicio de sus ganancias. En esta nueva situación cambian las leyes económicas y resultan fuera de foco las observaciones que se hacen a base del funcionamiento del sistema capitalista determinado por oligopolios.

Además de ellos hay razones económicas y sociales que han permitido la aplicación de estas medidas. La razón económica es que en Chile había una capacidad ociosa de recursos productivos; es decir no se ocupaba plenamente el capital (por ejemplo, en muchas industrias se hacía un turno pudiendo hacer dos o tres) y de la fuerza de trabajo. La razón social es que por primera vez un gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores organizados que tienen un nivel de conciencia que les permite comprender sus intereses a largo plazo y saber armonizar con ellos los inmediatos. Por último existe la razón política de que el Gobierno está realmente decidido a imponer su criterio sobre los clanes económicos, cosa que nunca antes sucedía, pues a pesar de la DIIRINCO, los grupos de poder encontraban siempre mecanismos para quebrar las políticas gubernamentales.

Pero el hecho de que haya factores favorables y de que se esté aplicando una política nueva no significa necesariamente que ella esté teniendo pleno éxito. Es necesario evaluar lo sucedido y precisar tanto las actuales dificultades como las perspectivas objetivas que presenta hacia el futuro inmediato. Es evidente que para hacer esta evaluación hay gran disparidad de pareceres y resulta muy difícil ser objetivo. Más aún, hay personas que menosprecian todo análisis señalando que son teóricos y afirmando que lo único que vale es la experiencia diaria personal, sin convencerse de que no representa sino una parte de la realidad. El análisis se hace sólo para las personas que realmente quieren tener una visión

global y así comprender mejor su experiencia personal que sin duda tiene validez como tal.

El índice oficial de precios determina un alza de 12% al mes de septiembre, lo cual permite con realismo esperar que el margen anual no suba del 15% contra un 35% del año anterior. El senador Musalem de la DC ha hecho un estudio, que él considera científico, para señalar que el alza real es de un 30% al mes de septiembre. Gran parte del público considera, como lo ha considerado siempre, que el índice oficial no expresa la realidad, basándose en las fuertes alzas que efectivamente han tenido algunos productos alimenticios. La desconfianza de las cifras oficiales ha sido tradicional, pero es totalmente efectivo que ellas tienen actualmente la misma metodología y validez que en el gobierno anterior y que su margen de error anual no es superior al veinte por ciento de la realidad (en este caso el alza máxima sería de 14%). La razón de la discrepancia entre la gente que compra habitualmente y las cifras estadísticas es que la primera siente los precios que suben pero no los que se mantienen, y así olvida por ejemplo que no han subido el calzado, la vivienda, la locomoción, etc. y que muchos productos han subido menos del 10%; en cambio siente que los mariscos, carne, verduras y otros han subido un 20 o un 30 por ciento, aún cuando algunas de estas alzas son temporales.

Algo similar acontece con el problema de la producción industrial y general. Se esperaba un aumento del orden del 15 al 20 por ciento. La oposición dice que no sólo no se ha producido tal aumento, sino que se ha deteriorado o, a lo menos, está estancada. La verdad es que entre noviembre de 1970 y abril de 1971 hubo un notable deterioro de la producción como producto de la acción de parte de la reacción frente

al nuevo gobierno. Pero a partir de ese mes se ha producido una reactivación que fue primero espectacular y luego más moderada, pero firme y progresiva. Los organismos de Gobierno afirman que la producción manufacturera en los pirmeros 7 meses ha subido en un 8% respecto a los mismos meses del año anterior y que el aumento anual será del 18%. Puede dudarse de estas cifras, pero es útil compararlas con las que proporciona la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) que es un organismo de los empresarios capitalistas: esta institución señala que el aumento ha sido de un 6,7% y que se espera un aumento anual del 10%. Como se ve las cifras no difieren demasiado. Sin embargo es justo reconocer que el aumento global de la producción está por debajo de la meta esperada. Este punto lo analizaremos en detalle más adelante.

Aparte de estos hechos es necesario mencionar el problema de los abastecimientos y los brotes especulativos. Sobre los primeros se ha discutido demasiado pero con honestidad se pueden reconocer tres hechos. Primero: efectivamente ha habido serios desabastecimientos, sostenidos en algunos productos como las carnes y transitorios en otros como fideos, lana, conservas, etc. Segundo: esto se debe en parte a que efectivamente hay un consumo superior al de años anteriores como efecto de la mayor demanda y muchos sectores que no consumían algunos productos ahora lo hacen originando escaseces para algunas personas que estaban acostumbradas a disponer de todo lo que se producía en el país. Tercero: ha sido tradicional que en el país falten temporalmente algunos bienes, lo que es más explicable en un período revolucionario por los naturales trastornos que provoca, y en este caso han influido también factores adicionales como temporales y acaparamientos por parte de sectores pudientes.

Pero más allá de estos hechos directos y evidentes es necesario analizar los factores que dificultan el éxito de la política y los riesgos que ella debe afrontar. Por sobre todo predominan dos hechos claves. El primero es que estamos en una revolución y ello significa necesariamente alterar la vida económica porque el sistema que funcionaba entra en crisis y el nuevo demora en operar con eficiencia. Concretamente esto se traduce en que algunos empresarios se asustan y se van, otros sabotean la producción y son pocos los que siguen el proceso en forma más o menos eficiente. El segundo hecho es que la economía chilena es ya tan compleja, es decir tiene tantos mecanismos, que una nueva política la complica aún más hasta el punto que es muy difícil prever y manejar todos los escapes o irregularidades que puedan producirse. Dos casos ilustran esto último: la inesperada fuga de escudos y las adquisiciones de repuestos importados por parte de turistas argentinos.

En cuanto a los riesgos podemos distinguir los inmediatos de los mediano plazo (1972-1973). Los primeros son principalmente los mecanismos que puede aplicar la burguesía para evitar el éxito de la nueva política, los cuales son muy variados. A ello habría que agregar los posibles errores del cálculo que pueden originar nuevas dificultades. Veamos algunos. La falta de mecanismos de control eficiente pueden hacer brotar (y lo han hecho) tendencias especulativas en muchos bienes que no tienen prioridad de supervisión (automóviles, diversiones, productos de ferretería y librería, mariscos, etc.). El aumento efectivo del circulante ha sido menor que el esperado porque la burguesía ha contraído de tal manera el crédito comercial e interpresarial que ello ha moderado el aumento del dinero efectivo. La esperable fiebre por el dó-

lar y la inesperada fuga de escudos para comprar los dólares que deberían traer los turistas pagándolos a un mayor precio en el extranjero y restando así las divisas a Chile. La dificultad para aumentar la producción de determinados bienes cuya oferta resultó mucho menos elástica de lo que se creía. La falta de atención a una serie de detalles, aparentemente pequeños pero que producen graves dificultades en la producción. La falta de mecanismos y de personal de control de la economía.

Entre los riesgos a mediano plazo priman dos: el problema de la lucha por *reajustes a principios de 1972* con la consiguiente dificultad para cargar nuevamente diferencias a las ganancias y el problema de la necesidad de *nuevas inversiones* para mantener y aumentar la capacidad productiva del país. Una y otra deben resolverse mediante una Ley General de *Racionalización de las Rentas y de Ahorro Nacional*, incluidas las necesarias reformas tributarias y la proyectada Escala Unica de Sueldos. Esto es particularmente necesario porque no hay duda de que la oposición tratará de empujar a los trabajadores a demandas que hagan fracasar la política estabilizadora. A ello hay que agregar la preocupción por ampliar la capacidad industrial y la eficiencia tecnológica.

Tal vez la mejor manera de asegurar que el aumento de la demanda se traduzca realmente en un aumento de la producción sería la programación de los consumos masivos y la comercialización directa de ellos mediante acuerdos entre industrias y organizaciones populares con la mediación de la banca pública y descuentos por planillas. Es decir generalizar para todos los productos duraderos lo que se está haciendo con los televisores populares.

En suma el éxito del programa inmediato, que ciertamen-

te deberá proyectarse hacia 1972, requiere de un conjunto de medidas complementarias para su éxito. Nos parece que las principales serían:

—Programación de los consumos y comercialización directa entre empresas y organizaciones populares con intervención financiera de organismos públicos. Esto permitiría programar la expansión de gran parte de la industria a niveles efectivos de más de un 20% de aumento. En este sentido opera la fijación del contingente de producción por empresa.

—Legislar en forma general para los reajustes y racionalización de todas las rentas, incluyendo en tal legislación medidas de ahorro nacional obligatorio y voluntario e igualmente reformas tributarias.

—Legislar para controlar efectivamente la especulación y especialmente para enfrentar el problema de los alimentos que son los que han tenido alzas más fuertes y antipopulares.

—Desarrollar mecanismos técnicos para programar la expansión industrial (reinversiones y asesoría tecnológica) y para enfrentar el sinnúmero de problemas que surgen de la nueva situación, los cuales aunque pequeños pueden provocar alteraciones sustanciales del nivel productivo.

¿Disminuirá o aumentará la cesantía?

Gran parte de la propaganda opositora en las elecciones de regidores de abril se basó en el aumento de la cesantía. La recuperación económica de mayo y junio hizo disminuir la desocupación de un 10 a un 5 por ciento. Aparentemente el problema crítico está superado, pero el asunto es mucho

más difícil. Lo más sinificativo es el alto grado de cinismo que ha tenido la oposición capitalista y la facilidad con que ha engañado a mucha gente poco conocedora de lo que es la desocupación y de cómo se produce.

El problema de la subocupación de la fuerza de trabajo en Chile es mayor y más complejo de lo que dicen las estadísticas y de lo que afirman los políticos. En un estudio anterior hemos probado que en Chile trabajan sólo el ochenta por ciento de la gente que debería trabajar, o en otras palabras que hay unos 600.000 desocupados. A ello debemos agregar que hay grandes sectores de trabajadores de muy baja productividad o que aportan muy poco a la economía nacional y contribuyen a la carestía de bienes y servicios. Como contrapartida hay que señalar que el despegue económico de nuestro país está íntimamente ligado a una política de ocupación plena y de mejoramiento de la productividad, fenómenos ambos compatibles con la política financiera que hemos analizado en el artículo anterior.

La alta cuota de desocupación es un fruto característico y directo del capitalismo dependiente. Por ello resulta de un gran cinismo que los defensores de ese sistema que se oponen al Gobierno Popular sean los que llaman la atención sobre el problema de la cesantía. En la economía capitalista el criterio predominante es la ganancia empresarial y las empresas ganan más pagando menores salarios o aumentando los precios y trabajando con bienes de consumo de la gente acomodada. Por esta razón mantienen un ejército de reserva, es decir un gran número de trabajadores desocupados que al presionar en busca de trabajo tienden a bajar los salarios; además las empresas capitalistas no tienen interés en aumentar el poder adquisitivo popular porque ganan más con los productos que

consumen los sectores de ingresos altos y medios y su objetivo es aumentar los precios más que la producción de bienes.

Con mayor énfasis se afirma que el actual Gobierno es culpable del aumento de la cesantía por el desorden económico y la inseguridad que ha originado su política de expropiaciones. En esto hay algo de efectivo porque algunos empresarios no se resignan al cambio de dirección económica y han promovido paralizaciones de empresas o suspensiones de programas de expansión de la producción. Cabría preguntarse si los culpables de esto son los dirigentes políticos que cumplen con el compromiso de devolver el poder económico a los productores o los que se niegan a aceptar el veredicto mayoritario y tratan de mantener su injusta dominación.

Pero el problema de la subocupación es más complejo. Algunos piensan que la solución es que los desocupados encuentren alguna actividad en la que puedan percibir ingresos y así se desarrollan políticas de contrataciones en obras públicas, en servicios estatales o en las nuevas empresas. Con ello no se resuelve el problema, ya que lo importante no es aumentar los ingresos sino la producción de bienes, es decir, crear empleos realmente productivos y mejorar la productividad. Si se aumentan los trabajadores de una empresa sin un aumento correlativo de la producción se encarecen los productos, disminuyen los ingresos y no hay real progreso económico. Además del peligro de extender una mentalidad pasiva de exigir de la sociedad sin entregarle lo que uno puede dar, lo cual ya se ha visto en algunos sectores de cesantes. En la economía actual crear empleos productivos exige inversiones muy altas en capital instalado y ello es más cierto cuanto más productivas son las actividades. El problema se agrava por el volumen de nuevos empleos que hay que desarrollar

Además del déficit de arrastre de quinientas mil vacantes hay que agregar un crecimiento anual del orden de los sesenta mil, que es la resta entre los nuevos trabajadores y los que se van retirando de la fuerza de trabajo. La política de ocupación plena debe ir acompañada de una política de mejoramiento de la productividad y ambas son posible en nuestro país siempre que se tomen las medidas adecuadas. Nuestro comercio exterior permite la importación de bienes de capital y el capital líquido interno u operacional se asegura con la política financiera actual. Estas providencias, y sobre todo la programación de la expansión productiva pueden obtener los siguientes nuevos empleos en los próximos cinco años, siempre que ello se emprenda con la necesaria audacia económica:

Plan de viviendas	120.000
Obras de infraestructuras	60.000
Expansión de la industria de bienes durables	80.000
Expansión de industrias básicas	40.000
Nuevas industrias de equipo y bienes durables	60.000
Minería y energía	30.000
Expansión de consumos habituales	60.000
Expansión racional de servicios	150.000
	600.000
Más reemplazos	200.000
	800.000

Puede apreciarse que no se considera aumento de la ocupación agropecuaria, pues los técnicos expresan que ella debe estancarse y sólo mejorar la productividad de la actual obra de mano empleada en esa actividad.

La política de ocupación plena y de expansión especial de las actividades productivas debe ser planificada acuciosamente y constituir uno de los pilares del desarrollo económico. El público en general tiene razón al asignarle tanta importancia a la lucha contra la desocupación y a menudo los políticos se conforman con soluciones mediocres que no apuntan a la real naturaleza del problema. Ello consiste en más trabajo pero sobre todo en mayor producción para que puedan aumentar realmente los bienes y servicios, es decir los ingresos reales.

El fantasma de la crisis y de los racionamientos

Antes de la elección la propaganda de la burguesía afirmaba que el socialismo significaría crisis económica y racionamientos. Naturalmente olvidaba decir que toda revolución implica una alteración de la economía y que la gran mayoría de la población chilena había estado siempre racionada por el sistema capitalista que ella sustenta. No hay que extrañarse entonces de que la escasez de alimentos, que no es crítica pero sí real, sea intensamente aprovechada por la reacción para dar la imagen de crisis. (Para convencerse de que esto constituye una campaña de los capitalistas, basta hacer un análisis objetivo de las fotofónicas del diario *La Segunda*).

Una crisis económica es algo más que una escasez de carnes, pero no faltan elementos para echar más leña a lo ho-

guera propagandística. Se repiten frases como: "vengo llegando del sur y allá nadie quiere sembrar", "la producción de cobre se ha venido al suelo", "en las empresas estatizadas reina el desorden". En cada una de estas afirmaciones hay un diez por ciento de verdad y un noventa de mentira, pero los capitalistas, desesperados porque los trabajadores están recuperando lo suyo, gastan todo su poder en convencer a la gente de que todo eso es verdad y logran hacerlo con los incautos y con los que quieren convencerse por su resentimiento contra las mayorías organizadas de trabajadores.

Ya hemos dicho que no es fácil formarse una idea acertada de la real situación: los hechos y las cifras pueden ser empleados de las más diversas maneras. Por ejemplo es perfectamente posible que una economía que sufre desabastecimientos sea una economía en avance si el consumo real es superior al precedente y asimismo es posible que una economía que aumenta la producción sea una economía en retroceso si lo hace a costa de un deterioro de la productividad. Para tener una visión aproximada de la situación analizaremos los problemas más discutidos: la producción agropecuaria, la producción de cobre y el comercio exterior, la producción industrial; en forma separada analizaremos el problema de la eficiencia en las empresas socializadas.

Para comprender el problema de la *producción agropecuaria y del abastecimiento de alimentos* en Chile hay que tomar en cuenta muchos elementos y en particular el proceso de la *Reforma Agraria,* el cual no podemos analizar en este trabajo, pues se requeriría de mayor extensión. Chile ha tenido situaciones contradictorias en cuanto a alimentos. Por una parte presenta déficit tradicionales masivos en ciertos consumos esenciales y por otra parte tiene una variedad excepcio-

nal en el mundo en cuanto a verduras, frutas y carnes. Eso ha significado una alimentación clasista en que unos pocos están acostumbrados a esta variedad alimenticia y grandes masas han tenido una alimentación deficitaria. Desde hace unos veinte años, Chile ha estado importando alimentos en forma creciente en valores que se acercan al 15% de su disponibilidad de divisas y en verdad en nuestro país es posible enfrentar una crisis alimentaria en base a su gran comercio exterior y siempre que éste mantenga sus tendencias progresivas. Por último hay que recordar las tendencias previas de nuestra producción agropecuaria: inercia de la producción cerealera y de papas, creciente deterioro de la producción ganadera, gran variabilidad, especialmente de precios, en la producción de hortalizas y chacras* y crónicos desabastecimientos parciales acompañados de olas especulativas.

A ello hay que agregar los antecedentes inmediatos. La cosecha de cereales, papas y legumbres del año 1970-1971 fue relativamente buena y los indicadores existentes permiten señalar que no variará substancialmente para el año 1971-1972. La crisis del cambio y la inevitable profundización de la Reforma Agraria, unida a las ocupaciones ilegales de predios, originaron un desconcierto que puede resentir en alrededor de un quince por ciento la producción agropecuatria, pero ello se compensa con un año climático que parece bueno. Esta crisis originó particularmente una pérdida de ganado vacuno de unas trescientas mil cabezas (doscientas mil llevadas a la Argentina por ganaderos antipatriotas y otras cien sacrificadas irracionalmente), lo cual unido a la destrucción de granjas avícolas por un temporal de nieve ha originado una situación muy difícil en el abastecimiento de carnes, el cual se agrava porque la disponible es rápidamente adquirida por la

gente adinerada, más que dispuesta a hacer todo lo posible por agravar la situación. La especulación en los precios de hortalizas es el remanente de una irracionalidad no superada en esta materia. Lo clave es que, si bien hay un grado real de desabastecimiento, el consumo de alimentos ha sido superior al del año pasado con el problema, para los privilegiados, que ahora consumen leche y carne sectores que antes no lo podían hacer.

Lo que sí merece una preocupación especial es la actitud de los campesinos frente al cambio nacional. La explosión de las aspiraciones campesinas y la demora en lograr una nueva forma de organización eficiente han hecho deteriorarse la productividad agraria, lo cual ha repercutido en los precios y en el endeudamiento de los campesinos con el Estado. (Por efecto de la gestión agraria DC, cada familia de asentados debe E° 70.000 al Fisco).

La amenaza de crisis agrícola cedió paso en la prensa burguesa a los vaticinios sobre los *efectos negativos de la nacionalización del cobre*. A ello contribuyeron la baja internacional del precio y el estancamiento de la producción (con bajas en algunos centros) motivadas por problemas técnicos y la salida de los supervisores que se opusieron a la democratización de las rentas y pretendían mantener los privilegios que les daban los imperialistas. Una vez más es necesario tomar en cuenta los hechos gruesos para no perderse con los detalles. En 1970 la producción de cobre fue de unas 680.000 toneladas por un valor cercano a los novecientos millones de dólares a un precio promedio de sesenta centavos de dólar la libra: de esa cantidad las empresas sacaban unos 150 millones de dólares por diversos mecanismos. Durante el gobierno de Frei se hicieron inversiones de casi quinientos millones

de dólares, que aunque no constituyeron dólares nuevos, aumentaron efectivamente la capacidad productiva, a tal punto que la producción en 1972 debería pasar del millón de toneladas. En este año el precio del cobre ha bajado a un promedio ligeramente inferior a los cincuenta centavos la libra; esta menor entrada es compensado en gran parte por el hecho de que la nacionalización permite dejar para Chile la totalidad del valor y no un 80% de él como era antes. Algunos problemas técnicos dejados por la administración anterior más las dificultades de reemplazo administrativo y la oposición de algunos técnicos reaccionarios han originado un estancamiento en la producción, el cual ha significado en algunos centros productivos disminuciones transitorias. En general la estimación es que la producción será aproximadamente la misma del año pasado, lo cual en sí es negativo, pues es urgente aumentar la disponibilidad de divisas para enfrentar las necesidades de la reactivación económica y mantener la solidez del país para enfrentar eventuales dificultades en el abastecimiento de productos agropecuarios e industriales.

Está en plena actualidad el problema de las indemnizaciones que ha permitido por un lado ver la real voluntad del Gobierno y por la otra el verdadero temor de la burguesía. Según la Reforma Constitucional, aprobada por la unanimidad del Congreso (con mayoría opositora), se pagará a las compañías la diferencia que quede entre el valor de sus bienes según lo determina la contabilidad (o valor de libros) restándole las utilidades excesivas retiradas desde 1955 (fijadas en 774 millones de dólares por un procedimiento técnico y jurídico por el Presidente de la República), y la de-

preciación estimada por el Contralor (*). Esto significa que a las grandes empresas que trabajan desde hace cincuenta años no hay que pagarles indemnizaciones y sólo se les pagará a las empresas que han hecho inversiones recientes sin haber recuperado éstas (Andina y Exótica), aunque su cantidad es pequeña. Con la primera de estas empresas (Cerro Corporation) ya se han logrado acuerdos que le permiten seguir asesorando técnicamente a las empresas nacionalizadas. Estas medidas, totalmente constitucionales, han sido duramente criticadas por la prensa y voceros imperialistas con lo cual se evidencia su verdadero carácter antidemocrático y su falta de respeto por las soberanías nacionales.

Es necesario señalar que las compañías, que en cierto modo sabían que tenían sus días contados, trataron de sacar lo más posible y dejaron en muy malas condiciones técnicas la explotación, culminando así cincuenta años de saqueo de nuestras riquezas. Por último conviene destacar que los problemas de costos y rentabilidad están relacionados con los precios y con un cierto deterioro de la productividad que debe ser rápidamente resuelto para lo cual se requiere la colaboración de los técnicos y trabajadores patriotas. En cuanto a comercialización no hay problemas porque está prácticamente vendida la producción nacional. Al analizar la lucha antiimperialista nos referimos a los eventuales problemas en el *comercio exterior*, los cuales no parecen críticos por el momento aunque la forma de reaccionar del imperialismo es

---

(*) No se paga por los yacimientos, ya que éstos siempre han pertenecido al Estado y las pertenencias adjudicadas a particulares son simples concesiones de explotación a las que el Estado puede poner término sin tener que pagar por ello.

imprevisible, sutil y puede endurecerse a raíz de las decisiones chilenas sobre indemnizaciones. Valga señalar que además del cobre incide en esto la explotación del hierro y del salitre y que sólo esta última ha tenido aumentos substanciales.

Tal vez el problema más decisivo —aunque al menos publicitado— en la batalla de la producción es el de la *actividad industrial*. Ello no porque presente síntomas críticos, sino porque es el sector que estaba en mejores condiciones de responder a la reactivación económica provocada por el aumento de la demanda y además era el único que realmente podía absorber fuerza de trabajo desocupada en condiciones eficientes. Entre noviembre y marzo la producción industrial se resintió en forma muy seria debido a la inseguridad del cambio y a la propagación de actitudes obstaculizadoras de parte de algunos empresarios. Pero la presión de la demanda originó un espectacular repunte entre abril y julio para volver luego a un nivel superior al del año pasado, pero insuficiente para cumplir los objetivos de absorción del nuevo circulante y de la fuerza de trabajo. Como ya hemos señalado la producción de los primeros siete meses de este 1971 ha sido un 7%, más alta que la del mismo período del año anterior y ello en cifras de la Sociedad de Fomento Fabril, es decir de organismos patronales que difieren de la política del Gobierno Popular. Sin embargo, esta cifra es baja en relación con lo que exige el aumento de la demanda y de lo que permitiría la capacidad productiva no utilizada. Ya se ha dicho que la solución para ello es la *programación del consumo-demanda* generalizando los mecanismos de comercialización y financiamiento que se aplican actualmente con los televisores populares. Aparte de ello es necesario resolver un conjunto de problemas que enfrentan algunos industriales, los cuales, aunque

pequeños, suelen tener efectos muy negativos como son los desabastecimientos de algunos insumos industriales. En este panorama no debe olvidarse el carácter dinamizador que tiene la construcción de viviendas y por lo tanto la gravedad que implicó el retraso con que entró en la reactivación económica. Para el sector privado deben operar los *convenios de producción* que fijan los contingentes o niveles que debe alcanzar cada empresa.

En suma: no hay dudas de que la economía chilena ha mantenido algunos de sus problemas tradicionales y ha encontrado otros nuevos en los comienzos de este Gobierno de proyectos revolucionarios, pero esto no autoriza a hablar de crisis económica ni se ven antecedentes serios para pensar que ésta se aproxima. Todo lo contrario: *en forma excepcional para un proceso revolucionario la economía chilena ha sido reactivada* aunque en menor escala de lo esperado, y es notable que ello se logre juntamente con la transformación básica del sistema. El carácter de la revolución chilena implica que la transformación de la sociedad no produzca una crisis general, sino que por el contrario libere las fuerzas productivas para un aumento mayor de la producción y sobre todo para una distribución más justa de ella. El lograr esta tarea incluye dificultades esperadas e inesperadas y significa una política que se resume en la *batalla de la Producción*, pero que tiene muchas facetas.

Algunos sectores populares cuestionan la legitimidad de la *Batalla de la Producción* en el sector privado aduciendo que ello significa contribuir a que siga en enriquecimiento y fortalecimiento de la burguesía y la explotación de los trabajadores. Es un hecho indiscutible. Pero también es claro que tales sectores no quieren comprender que es *un hecho mucho*

más importante el que los trabajadores tienen, gracias a su actual dirección política, la posibilidad real de destruir el es- razón de la explotación capitalista (la socialización de las empresas estratégicas) y que una clase revolucionaria sabe ordenar sus quehaceres y darle prioridad a los hechos claves sobre los secundarios por valiosos que éstos sean. Ello no quita que la dirección política deba arbitrar medidas para orientar los excedentes del sector privado a las reinversiones y para moderar sus formas de explotación en la fase actual y suprimirlas en la consecución de la tarea popular.

Las dificultades provendrán en su mayor parte de la reacción de la burguesía monopolista herida en su poder de explotación y dominio. Esta reacción se traduce en actitudes políticas agresivas no sólo de la derecha, sino también del centrismo que espera vanamente reconquistar el poder y se expresa en la campaña de imagen de fracaso que multiplica cada problema por diez. Por ejemplo, hace seis meses que la burguesía rumorea que están listas las tarjetas de racionamiento. En sí el racionamiento no es malo, pues puede significar que se reparta más equitativamente lo que antes consumían sólo los poderosos y los sectores medios, pero la verdad es que no hay tal racionamiento y si lo hubiera la clase trabajadora estaría dispuesta a aceptarlo en aras de su objetivo superior irrevocable: la liquidación del capitalismo explotador.

LAS DOS VISIONES DE LA ACTUAL SITUACION ECONOMICA

La opinión pública recibe una información de la realidad económica muy distinta según sea quien la proporcione. En las páginas anteriores hemos dado una visión, lo mejor fue-

damentada posible y para complementarla nos parece útil hacer el siguiente resumen de los enfoques opuestos.

OPOSICION: Es falso que el alza de precios haya sido sólo de un 12 por ciento. El alza real ha sido del 30%, lo cual se oculta por las bonificaciones, la baja de calidad de los productos y los precios no controlados.

GOBIERNO: El aumento de precios en ocho meses ha sido del 12,7% contra un 28,5% en el mismo período del año anterior. Si bien nunca el índice oficial expresa la exacta realidad, es el único mecanismo objetivo de comparación y los métodos y personal que hace las encuestan son los mismos del gobierno de Frei.

OPOSICION: El déficit fiscal de este año es de 11 mil millones de escudos y el aumento del circulante del 100%, lo cual hará reventar la inflación.

GOBIERNO: La expansión real del circulante ha sido del orden del 40%, ya que hay que restar la disminución del crédito comercial y de la velocidad de circulación. Este aumento, que explica el déficit fiscal programado, ha permitido aumentar la demanda-producción y ocupar recursos ociosos.

OPOSICION: Se mantiene un alto índice de desocupación por inseguridad empresarial.

GOBIERNO: La desocupación ha bajado de un 10,2% a un 5,6%.

OPOSICION: El desabastecimiento de carnes es de un 40% y hay también serios desabastecimientos de fideos, conservas, lana, géneros, repuestos, etc.

GOBIERNO: Hay efectivamente un desabastecimiento de carnes que ha sido crónico y que se ha agravado por los temporales y por la actitud de agricultores antipatriotas que se han llevado ganado a la Argentina o han sacrificado irracio-

nalmente muchos animales. Los demás desabastecimientos han sido transitorios y provocados principalmente por el aumento de la demanda y algunas actitudes saboteadoras.

OPOSICiON: La producción agraria descenderá entre un 25 y un 50 por ciento.

GOBIERNO: La producción agrícola será normal y no tendrá una variación superior al 10% y se incrementará notablemente en el año 1972-1973.

OPOSICION: Debido a la inseguridad e ineficiencia la producción industrial aumentó en los primeros cinco meses sólo un 2,7% lo cual es inferior al ritmo anterior.

GOBIERNO: En los primeros ocho meses la producción industrial aumentó en un 7,9% (6,7 según SOFOFA) y en el año aumentará en un 12% lo cual es uno de los índices más altos desde 1955.

OPOSICION: La producción de los tres principales yacimentos de cobre ha descendido en un 6% por la ineficiencia de la administración estatal.

GOBIERNO: La producción de la gran minería (incluidas Exótica y Andina) ha aumentado en un 7,1% a pesar de las pésimas condiciones en que dejaron las minas los administradores norteamericanos. La producción total será de más de 700.000 tons., la más alta de la historia.

OPOSICION: Se han gastado 240 millones de dólares en importar alimentos (un incremento del 60%) lo que ha hecho bajar las reservas, que había dejado Frei, de 497 a 284 millones de dólares. En este año habrá un déficit en la balanza de pagos no inferior a 210 millones de dólares.

GOBIERNO: Frei dejó reservas de casi quinientos millones, pero al mismo tiempo deudas por dos mil quinientos millones de dólares y ello ha significado tener que pagar, en

1971, 250 millones en su servicio. El déficit en la balanza será del orden de los 150 millones, lo cual ha sido normal en los últimos veinte años y se explica por la baja del precio del cobre, porque las empresas norteamericanas no pagaron 170 millones de utilidades de 1970 y por el tráfico de dólares que han hecho los que han huido del país.

OPOSICION: La construcción está paralizada en un sesenta por ciento.

GOBIERNO: Se han contratado 50.000 viviendas y en el año se construirán 85 mil contra promedios inferiores a 40.000 en el pasado.

OPOSICION: Las importaciones de maquinarias han disminuido en un 66% y los aportes de capital extranjero de 28,3 a 2,9 millones de dólares, todo lo cual se traduce en que no hay inversiones ni nuevas industrias.

GOBIERNO: En 1971 se ocupó la capacidad industrial ociosa y en 1972 se invertirá el 20% de los excedentes. La restricción de capital norteamericano se compensará con 440 millones de dólares que facilitan los países socialistas y con la mantención de nuestro crédito en los países de Europa Occidental y Japón.

¿Bajará la eficiencia en las empresas estatizadas?

Profundizando más en las perspectivas económicas de Chile entramos a la discusión sobre la eficiencia del capitalismo y del socialismo para alcanzar mejores niveles económicos. Tal discusión se plantea para mucha gente en términos muy sencillos: las empresas estatales son menos eficientes porque no hay estímulos y el esfuerzo se reemplaza por la protección

partidista. La falta de incentivos y la politización de la economía serían su ruina.

Para tener una visión certera de este problema hay que aclarar muchos elementos: ¿en qué consiste la eficiencia?, ¿cómo se logra?, ¿qué sistemas o realidades deben compararse?

La eficiencia, en general, es el grado en que determinados medios permiten obtener determinados fines. De manera que la eficiencia no se mide en sí, sino en relación con los fines u objetivos que se quieren obtener. Para el capitalismo la economía tiene como objetivo real el que determinados grupos tengan más y mejores bienes de confort; para el socialismo el objetivo es que la totalidad de los trabajadores cuenten con medios elementales de vida, que puedan progresar y que los medios de confort sean adquiridos por el esfuerzo solidario y no por la competencia de poder. Dos enfoques muy distintos que dificultan cualquier comparación.

En el terreno mismo de las comparaciones es también un error comparar los países capitalistas metropolitanos con los socialistas en proceso de independencia. La comparación posible es entre Chile bajo el capitalismo dependiente y Chile bajo otro sistema y ello todavía no puede lograrse. Por último el error más frecuente es confundir la eficiencia real de algunas empresas públicas dentro del capitalismo con la de las empresas socializadas. Las empresas públicas dentro del capitalismo generalmente atienden servicios no comerciales y son focos de fuentes de ocupación partidista, cosa que no puede acontecer cuando todas las empresas son sociales. Además hay empresas públicas que tienen alta eficiencia al punto de que las remuneraciones de empresas, tales como ENDESA y ENAP están entre las más altas del país, y en cambio la

intervención de empresas privadas ha demostrado que en muchos casos su eficiencia era un mito que ocultaba gestiones muy incompetentes.

La eficiencia se obtiene por factores generales, o del sistema, y particulares o de empresas y personas; en otro sentido se obtiene por factores técnicos, socioeconómicos y conductuales. El problema del sistema fue tratado anteriormente. Ahora interesa discutir algunos factores de eficiencia que son cuestionados por la mentalidad ambiental.

Sin duda que en el capitalismo hay algunos factores que operan más fácilmente. Tal es el caso de la autoridad unipersonal en las empresas y por lo tanto la rapidez y homogeneidad de las decisiones. Igualmente tenemos el caso de los incentivos materiales selectivos para mejorar la eficiencia de personal clave ofreciéndole remuneraciones superiores. La mayor libertad para incorporar personal, para despedirlo cuando es ineficiente y para promover a los que trabajan más intensamente y el interés directo de los empresarios en la eficiencia de sus empresas y por lo tanto en su engrandecimiento.

Pero también hay factores capitalistas que operan en contra de la eficiencia y en forma muy seria. En primer lugar la orientación misma de la economía global, que no permite la ocupación de toda la capacidad productiva. En seguida la escasa o nula cooperación de los trabajadores en la medida que se saben explotados. Y lo que es más grave la eficiencia económica del capitalismo se logra a costa de la ineficiencia para satisfacer las necesidades masivas El éxito de los países desarrollados se ha logrado al precio del subdesarrollo de las mayorías humanas.

El socialismo permite superar algunas de las dificultades

del capitalismo, pero implica también algunas dificultades nuevas. Estas se hacen mucho más complejas en los períodos de transición en el cual se pierden algunos de los factores positivos del capitalismo, como son los incentivos, sin que logren operar todavía los factores positivos del socialismo. Ese es el problema en que nos encontramos.

En nuestra breve experiencia ya se ha podido observar cómo operan estos factores respecto a la eficiencia económica. Se ha apreciado una actitud distinta de grandes sectores laborales que están interesados en aumentar la producción y han logrado reales mejoramientos (salitre, carbón, textiles, etc.). Igualmente se ha apreciado que el retiro de algunos técnicos que tenían expectativas dentro del capitalismo ha resentido transitoriamente algunas actividades y, por último, se ha comprobado que la influencia partidista ha determinado alzas de costos en algunas empresas por contratación de personal adicional sin aumentar la producción. Incluso a veces se ha generado una cierta anarquía de decisiones por conflictos internos de los partidos y por indisciplina de algunas personas que confunden el socialismo con la multiplicación de los privilegiados.

Dos puntos tienen especial importancia al respecto: el de los incentivos y el de la influencia de la política partidista. Respecto a los incentivos hay una gran discusión teórica acerca de si se debe o no dar importancia a los incentivos materiales. Las experiencias china y cubana difieren radicalmente en este punto de la experiencia soviética. Nos parece que es peligroso idealizar los problemas al punto de creer que las grandes metas de la historia pueden ser alcanzadas de inmediato sin tomar en cuenta la realidad en que operan los pueblos. Concretamente creemos que en la realidad chilena, con

mecanismos de promoción y superación muy desarrollados por el capitalismo, no será posible dar saltos en el vacío y los incentivos materiales deben mantener un lugar general junto con la posibilidad de desarrollar desde ya los incentivos morales. Creemos, sobre todo, que el control social de la eficiencia de cada cual permitirá mejorar substancialmente la productividad creando mecanismos para eliminar las ineficiencias de algunos trabajadores.

Respecto a la influencia partidista es obvia que ella tiene raíces en la historia nacional donde las empresas estatales se han empleado tradicionalmente como mecanismos de poder partidista. Esto *debe ser superado decididamente si queremos que la revolución sea realmente socialista y no burocrática.* No negamos la necesidad de la dirección política de la economía y sobre ello se habló detalladamente, pero es necesario recordar que en nuestro país hay tendencias históricas a desvirtuar esta importancia. Ello se agrava hasta límites críticos por el hecho de que el Gobierno está integrado por un conjunto de partidos, de manera que a la lucha principal contra la burguesía se agrega la lucha interna entre trabajadores que a veces alcanza carácter de principal. Los conflictos por el control de las empresas entre los diversos partidos es negativa no sólo para la eficiencia empresarial, sino sobre todo crea una imagen desalentadora en la mayoría de trabajadores independientes y ello es la principal causa de que muchos no se sientan inclinados a apoyar al Gobierno Popular. Una cosa es la dirección política de la economía, que es el mecanismo a través del cual la clase trabajadora controla la producción, y otra cosa muy distinta es la partidarización de las empresas, que es lo que ocurre a veces. Ello no sólo engendra ineficiencia,

sino también burocratización, aburguesamiento y frustración de la revolución proletaria.

La clase trabajadora tiene las herramientas para superar estos problemas, o a lo menos puede tenerlas. Los partidos de la clase trabajadora, los sindicatos, los consejos administrativos de las empresas y aun los comités de producción deben obtener información detallada al respecto: nivel de producción, nivel de empleo, escalas de remuneraciones, funciones específicas del personal, etc., y más aún deben tener facultades para decidir por encima de las camarillas o de los acuerdos de grupo que interfieren en sus intereses. De no hacerlo los costos se irán a las nubes, el criterio de promoción y estabilidad ocupacional (y por lo tanto de mejoramientos de ingresos) no será el de la eficiencia sino la protección burocrática que se autogenera y se defiende a sí misma. El capitalismo fallaba por la irracionalidad global del sistema y por las arbitrariedades de los capitalistas; no es justo tener que aceptar que el socialismo, o al menos la economía de transición sea igualmente afectada por irracionalidades que surgen de la ineficiencia de cada empresa, de cada funcionario y de los grupos de poder. La revolución no es sólo un cambio de sistema sino también un cambio de las conductas; la gente tiene razón cuando señala que en última instancia son las conductas personales las que generan el fracaso o el éxito en la lucha por el progreso y la felicidad.

Los problemas de la economía de transición

Toda revolución implica un período de transición económica configurado por el reemplazo del sistema económico imperante por uno nuevo. En la revolución chilena este fenó-

meno se complica por la decisión de que tal transformación se haga en forma gradual y con el consenso electoral mayoritario, lo cual significa que se hace indispensable compatibilizar el cambio del sistema con un aumento de la producción que permita mejorar las condiciones de vida popular. Esto es excepcional ya que las anteriores revoluciones se dieron en tal forma que fue posible que la reactivación económica pudiese esperar un tiempo largo y que primero se completara el proceso transformador, el cual significó crisis económica que no fueron juzgadas por la elección popular, sino subordinadas por las vanguardias revolucionarias a los objetivos superiores del proceso. Toda esta situación, ya de por sí excepcional, se complica aún más por hecho de que el Gobierno actual pretende compatibilizar el cambio del sistema con el éxito económico sin tener el control del poder legislativo, es decir, sin contar con el poder político necesario para obtener simultáneamente dos objetivos ya de por sí difíciles.

Algo se ha teorizado sobre la economía de transición, pero naturalmente muy poco sobre la transición pacífica y gradual y nada sobre la transición legal sin el control del poder político. Para comprender la naturaleza específica de la experiencia chilena, además de estas paradojas políticas, hay que tomar en cuenta algunas situaciones excepcionales de su economía.

Queremos precisar que al hablar de *transición* lo hacemos en el sentido específico del cambio del sistema dominante en un país y no en el sentido más general de cambio de todo el modo de producción dominante en el mundo ni menos aún de un cierto *estado* de transición que algunos teóricos definen como la posible coexistencia de dos sistemas dominantes. La transición, tanto en un país como en el mundo entero, in-

cluye una fase de destrucción del viejo sistema y una fase de desarrollo del nuevo modo de producción. Es obvio que es imposible que el nuevo sistema se desarrolle plenamente si no se produce la transformación a escala mundial. Nos referimos al período, cuya duración y modalidad es variable, en el cual se trata de destruir lo substancial de un viejo sistema y reemplazarlo por otro dominante, aun cuando se mantenga la salvedad de posibles recesos en la medida que no se hayan desarrollado totalmente las condiciones materiales y sociales que hagan total e irreversible el cambio.

La economía chilena en vísperas del proceso revolucionario presentaba *características que la diferenciaban claramente de la de otros países que han emprendido un cambio similar y ellas, junto con las características sociales y políticas, son las que han fundamentado la vía chilena de transición*. La economía chilena es una de las más diversificadas del mundo y ha desarrollado actividades capaces de producir la mayor parte de los bienes que consume. Sin embargo esta autonomía aparente es muy relativa porque depende en alto grado de la tecnología, materias primas y financiamiento externo. Esta doble situación significa por un lado que un corte total de sus relaciones con el mundo imperialista no crearía una total carencia de bienes, pero al mismo tiempo cualquier dificultad tendría consecuencias en las empresas chilenas ya que el vínculo con el imperialismo está muy lejos de limitarse al problema del cobre. Otra característica ha sido que el progreso económico se ha dado en varias etapas y ha implicado el desarrollo de sectores de trabajadores con niveles de ingresos superiores al promedio y acostumbrados a presionar por reajustes de sueldos mayores dentro de la anarquía tradicional generada por la inflación crónica. Este es otro factor que obliga a que

el cambio no implique un retroceso económico sino, por el contrario, un mejoramiento que induzca a esos sectores a participar en el proceso revolucionario.

Para afrontar tal cúmulo de problemas el Gobierno de la Unidad Popular ha planteado una estrategia económica que puede resumirse en los siguientes puntos:

—Lograr una reactivación de la economía mediante el expediente de aumentar la demanda otorgando reajustes de salarios superiores a los de precios y aprovechando la capacidad productiva no utilizada.

—Procurar leyes para la socialización de las empresas en términos convenientes a la mayoría nacional e incorporando un sistema de participación directa de los trabajadores en una administración bidimensional de la clase trabajadora (como clase como unidad económica) que es muy distinta a la cogestión de dos clases.

—Mientras se consiguen tales leyes se exige que las empresas claves entren en esta nueva economía y al no hacerlo, aplicarles la legislación existente sobre requisiciones e intervención del Estado; este mecanismo, además de enfrentar los problemas de abastecimiento, permite el control de los puntos estratégicos de nuestra economía.

—Con estas medidas preparar el poder político y las bases económicas y sociales necesarias para enfrentar la construcción del socialismo como fenómeno general, lo cual no implica mayor alteración sino un nuevo ordenamiento general de la economía.

Tal estrategia, por las condiciones en que debe desenvolverse, implica riesgos inmediatos y otros de mediano plazo que es necesario puntualizar.

Los *problemas inmediatos* son los más evidentes. La opo-

sición de la burguesía al cambio, manifestada en las más variadas formas, y otras dificultades coyunturales han creado algunas dificultades de abastecimiento sectorial y de especulación en algunos rubros que, aunque no configuran de ninguna manera una crisis, han servido de base para que se pretenda extender una imagen de fracaso económico. Una situación típica se ha presentado con las conservas. La producción aumentó en más de un diez por ciento en relación al año anterior, pero la demanda ha crecido en un veinte por ciento, por lo cual se generó un déficit de un diez por ciento que por efecto de acaparamientos fue elevado al veinte y por efecto de la propaganda al cuarenta por ciento. Una visión exacta de la realidad es muy difícil, pero la mayoría de los trabajadores tienen conciencia que la escasez de carnes es menor importante que la transformación del sistema y está más dispuesta a sacrificios de lo que cree la burguesía; por lo demás la escasez y la especulación no son novedad para ella. Los efectos negativos del cambio pueden multiplicarse en la medida de que la naturaleza del proceso permite a la mayor parte de la burguesía mantener su poder económico y particularmente su poder cultural. Pero ya es en sí una hazaña que en Chile se haya compatibilizado el cambio inicial del sistema con un aumento de la producción superior al período precedente.

Los *riesgos a mediano plazo* son también importantes aunque menos públicos. El primero es el estancamiento de las inversiones en nuevas industrias y en ampliación y renovación de los equipos existentes, lo cual exige una participación creciente del Estado en esta materia, que ya se consulta en el programa de 1972. Relacionado con ello está el problema del comercio exterior y de nuestra capacidad para importar

los efectos negativos que puede tener la contracción de las inversiones y del abastecimiento desde Estados Unidos (sobre todo a raíz de las nacionalizaciones) son compensadas por la mantención de la política de parte de países como Alemania y Japón con quienes tenemos un intercambio muy fuerte y a los que no les conviene alterar relaciones favorables; incluso la sola suspensión del pago de la deuda extrena (setecientos millones de dólares en dos años), es más útil que cualquier nuevo empréstito de países capitalistas. Por lo demás los países socialistas han otorgado créditos por 440 millones de dólares para enfrentar este problema de equipamiento productivo. Sin embargo no debe perderse de vista la posibilidad de un agravamiento de esta situación internacional, lo cual pondrá a prueba la capacidad y la dignidad de la nación y probablemente tendrá la ventaja de unir a los chilenos en defensa de su dignidad.

El cambio mismo del sistema tiene sus propios problemas que son de orden político, económico y social. En el plano político es crítica la falta de legislación para socializar las empresas estratégicas y para enfrentar con éxito los naturales desórdenes que produce el cambio (sabotaje y especulación). Los problemas económicos se refieren a la eficiencia de las empresas donde se debe reemplazar la disciplina y a menudo la tecnología capitalista por una nueva disciplina socialista y por técnicos que naturalmente carecen de la necesaria experiencia específica. Los problemas sociopolíticos se refieren a la necesidad de superar las tradiciones oportunistas y sectarias en el manejo de las empresas públicas y a la necesidad de generar una real participación de los trabajadores en la nueva economía.

Un problema adicional reside en el hecho de que gran

parte de la economía sigue en manos privadas y de hecho las actuales coyunturas permiten el enriquecimiento de muchos grupos que tratan de aprovechar al máximo la situación originando nuevas dificultades. El sector privado merece una atención especial, tanto por su incidencia en la transición como por el hecho de que en él se generan muchos movimientos espontáneos originados por las condiciones de explotación intensiva que suele presentar. En general subsiste el problema que significa enfrentar gradual y parcialmente el cambio dejando en manos de la oposición poderes suficientes para dificultar en alto grado la revolución y de hecho es muy difícil lograr éxitos económicos manteniendo en forma indefinidas situaciones tensas o conflictivas.

Otro problema de fondo es precisar si lo que se está instaurando es realmente una base socialista de la economía o un mero *capitalismo de Estado*. La inquietud proviene de sectores revolucionarios y también, aunque con otro sentido, de sectores opositores. El capitalismo de Estado se caracteriza por el control de la economía por parte del Gobierno sin que por ello cambien las relaciones de producción ni la orientación global de la economía que sigue buscando las máximas ganancias y desarrollando la explotación de los trabajadores. El capitalismo de Estado encierra el gran peligro, muy factible en nuestro caso, de consolidar una alianza del burocratismo con la pequeña burguesía. Es razonable hacer todos los esfuerzos para evitar tal deformación.

La transformación del sistema económico es el problema de fondo de la revolución chilena. Todo lo demás pasa a segundo plano ante este hecho principal. Todas las seudorreticencias sobre la democracia, la libertad y los abastecimientos y todas las falsas lamentaciones sobre las injurias o la prepo-

tencia quedan evidenciadas en su verdadera naturaleza cuando los medios imperialistas protestan por la recuperación de las riquezas nacionales, hecha con el más riguroso respeto a la constitución chilena y al derecho internacional, y cuando los empresarios, en la voz de sus dirigentes, se lanzan en picada contra un gobierno que ha devuelto a los trabajadores las empresas levantadas con su esfuerzo, aun cuando tal devolución se haya hecho con estricta sujeción a las leyes y a la constitución vigentes.

Este cambio implica necesariamente dificultades. Las más publicitadas son los problemas de abastecimiento y algunos estrangulamientos en determinadas actividades. Pero la más importante dificultad es la falta de poder político para hacer efectivo el cambio y para superar las dificultades que origina. La actitud de la DC puede agravar este problema o ayudar a superarlo, pero esta alternativa no hace variar la decisión de iniciar el cambio. Un endurecimiento de los que se oponen al cambio, legal y gradual, puede llevar a la Unidad Popular a sobrepasar su propio programa y devolver a los trabajadores todas las empresas de más de cien trabajadores (unas setecientas) empleando para ello el recurso legal de fijar contingentes de producción y requisar a las que no los cumplan. Los trabajadores no devolverán las empresas cuyo control adquieren y así se decidiría la lucha actual por el poder.

Por lo demás la Unidad Popular plantea un cambio gradual y legal, pero esto no significa un gradualismo espasmódico o de un pretendido equilibrio indefinido ni significa una legalidad interpretada por la burguesía. El cambio es y debe ser de un *gradualismo progresivo* que no implique alteraciones críticas ni persecución a los pequeños y medianos empresarios que colaboren con el cambio, pero que sí signifique un cons-

tante avance hacia el socialismo. Es un sueño pretender un equilibrio largo y es explicable la inseguridad de todos los empresarios, pero debe quedar en claro que el programa de la Unidad Popular señala un camino que permite la incorporación progresiva y racional de todos al cambio y es una seguridad para todo trabajador, empresarial o asalariado, que no pretenda seguir explotando. Lo principal es que el cambio se ha iniciado y existe la voluntad mayoritaria de llevarlo adelante por encima de cualquier dificultad.

IV. LOS CAMBIOS POLITICOS Y CULTURALES

La revolución dista de ser un proceso puramente económico. Aunque este aspecto sea lo básico, la revolución implica necesariamente una transformación de la organización política y de la estructura ideológica y conductual. Los procesos tienen dos prioridades que hacen que estos aspectos no puedan estar claros de partida: el desarrollo del poder político para hacer efectivo el cambio revolucionario y las bases económicas y sociales de esta revolución. Pero el hecho de que los cambios políticos y culturales no puedan tener un pleno desarrollo inicial no significa que sean olvidados. Por el contrario, el planteamiento de la Unidad Popular es desarrollar la integralidad de la revolución desde sus comienzos y no dejar para después los problemas culturales. Los planteamientos programáticos al respecto son sumarios y sólo debemos referirnos a lo que puede concretizarse. El Programa de la UP respecto al Estado Popular señala:

"Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.

"Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.

"La Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.

"Normas específicas determinará y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, Ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos, con el fin de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del Gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria".

Y en lo referente al cambio cultural:

"El proceso social que se abre con el triunfo del pueblo irá conformando una nueva cultura orientada a considerar el trabajo humano como el más alto valor, a expresar la voluntad de afirmación e independencia nacional y a conformar una visión crítica de la realidad.

"El nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a través de un sistema educacional radicalmente transformado, como a través del establecimiento de un sistema nacional de cultura popular.

"(Los) medios de comunicación (radio, editoriales, televisión), prensa, cine) son fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cultura y un hombre nuevo. Por eso se deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios eliminando en ellos la presencia nefasta de los monopolios".

"Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.

"La Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.

"Normas específicas determinará y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, Ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos, con el fin de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del Gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria".

Y en lo referente al cambio cultural:

"El proceso social que se abre con el triunfo del pueblo irá conformando una nueva cultura orientada a considerar el trabajo humano como el más alto valor, a expresar la voluntad de afirmación e independencia nacional y a conformar una visión crítica de la realidad.

"El nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a través de un sistema educacional radicalmente transformado, como a través del establecimiento de un sistema nacional de cultura popular.

"(Los) medios de comunicación (radio, editoriales, televisión), prensa, cine) son fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cultura y un hombre nuevo. Por eso se deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios eliminando en ellos la presencia nefasta de los monopolios".

¿Habrá o no dictadura del proletariado en Chile?

Una de las tesis básicas del marxismo-leninismo es que la transición del capitalismo al socialismo requiere de un período de *dictadura del proletariado*. Se pueden citar decenas de frases de Lenin que afirman que en el tránsito al socialismo es inevitable la dictadura del proletariado y que no se puede renunciar a ella sin frustrar la revolución. Por su parte, hay muchos que señalan que la vía legal chilena al socialismo implica que en nuestro país no habrá dictadura del proletariado. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción?

La reacción pretende escandalizarse respecto a la posibilidad de la dictadura del proletariado y usa los más negros colores para pintarla. De hecho tergiversa por completo el sentido de esta necesidad histórica y engaña al común de la gente. Por ello algunos procuran una cierta conciliación con la burguesía y guardan silencio sobre este punto sobre el cual es clave tener claridad en un proceso revolucionario.

La dictadura es un concepto histórico sujeto a las más diversas interpretaciones: ningún historiador, por más sesudo que sea, ha podido definir lo que es dictadura en términos incontestables. La dictadura tiene dos sentidos: un sentido general que implica la dominación de una clase y un sentido particular que implica determinadas modalidades que asume la dictadura en cada caso concreto. Lo primero es el concepto válido para toda revolución verdadera; lo segundo no tiene otra validez que la del caso particular de que se trate.

El Centro de Estudios Económicos (CESO) ha tenido toda la razón al titular *Dominación del Proletariado y Participación de las Masas* una recopilación que ha hecho de textos leni-

nistas referentes a este problema crucial de la revolución. Con ello afirma que el concepto de dictadura que tiene validez general para el tránsito hacia el socialismo es el de dominación de una clase mayoritaria y revolucionaria. Pero ¿qué significa dominación? ¿Y por qué ha de ser del proletariado?

Dominación significa imposición de un grupo sobre otros. En nuestra realidad actual hay dominación de la minoría burguesa sobre la mayoría. Ella impone las reglas del juego que le interesan en las relaciones económicas y políticas; ella determina quién trabaja y a quién se le expulsa de una industria; ella determina cuánto se ha de pagar en salarios y cuánto se cobrará por los productos; ella determina que las leyes defiendan como algo sagrado la propiedad de los ricos; ella ha determinado que el Congreso sea renovado parcialmente para así asegurar que la voluntad del pueblo por los cambios resulte inoperable con un Senado que paraliza y se opone a la voluntad popular, como lo hemos visto concretamente en 1965 y en 1971. Esto es dominación, esto es la dictadura de la burguesía. En un país como el nuestro ella opera principalmente en forma legal e institucional y secundariamente en forma represiva y arbitraria. En otros países, como el Brasil por ejemplo, ella opera principalmente en forma represiva y secundariamente en forma legal. Pero de todas maneras es dominación, de todas maneras es dictadura.

Si el orden actual es una dominación dictatorial de la burguesía capitalista sobre las clases trabajadoras, para cambiar tal orden es indispensable que se imponga la dominación de las mayorías trabajadoras sobre las minorías explotadoras. Esta necesidad es tanto mayor cuanto más consolidado está el orden actual, es decir las reglas del juego actual favorecen el dominio de la minoría. *Sin una fuerza capaz de cam-*

biar tal orden la revolución se convierte en un puro buen deseo, es una hipocresía. Dominación no significa arbitrariedad ni necesariamente represión física: significa simplemente que se impongan los intereses de unos sobre otros. Esta imposición puede ser legal o puede ser arbitraria. Siendo legal la dictadura de la burguesía, se procura con razón que también lo sea la del proletariado.

Así lo expresa el párrafo del Manifiesto Comunista citado por Lenin en "El Estado y la Revolución":

"...Como ya hemos visto más arriba, el primer paso de la revolución obrera es la transformación del proletariado en clase dominante, la conquista de la democracia.

El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas".

Ahora bien, la palabra *proletario* se ha tergiversado en el uso histórico. Proletario es todo trabajador dependiente y desposeído de poder económico y, en ese sentido, en el caso concreto de Chile implica el ochenta por ciento de la población. No importa que tal trabajador tenga un título técnico, desempeñe un trabajo administrativo o indirecto o tenga un nivel de vida un poco mejor que el de las grandes masas más explotadas. Otra cosa es que dentro de ese proletariado la clase propiamente obrera industrial sea la más explotada y la que mayor importancia tiene en la economía moderna y por lo tanto en la revolución.

De allí entonces que afirmar que en Chile debe haber una dominación o dictadura de la mayoría es lo más demo-

crático que se puede afirmar, y resultan totalmente hipócritas las declaraciones de aquellos que se escandalizan porque se afirma algo tan elemental en toda democracia: que el poder lo debe tener la mayoría y que para hacer cambios democráticos esa mayoría tiene que imponer sus intereses a los grupos que se resisten a aceptar los derechos mayoritarios.

La imposición es de distinta modalidad según la situación en que se encuentre cada sociedad. Aquí viene el sentido concreto particular de la dictadura del proletariado. En algunos países la contrarrevolución fue tan fuerte que desató guerras civiles e invasiones y los trabajadores se vieron obligados a ejercer su dominación en forma férrea y con fuerte represión física de los contrarrevolucionarios. Este no es el caso de Chile. Aquí la dominación, por lo menos mientras se mantengan las actuales condiciones del conflicto, se ejercerá por mecanismos legales. El proletariado, la clase trabajadora impondrá con su voto una nueva forma de organización política, impondrá leyes para que las empresas sean devueltas a los trabajadores como ya se ha logrado con algunas de ellas y particularmente con el cobre; usará el poder ejecutivo para aplicar las leyes en beneficio de las mayorías como ya se ha hecho con las requisiciones; se empleará el poder del Estado para obligar a los explotadores a aceptar la voluntad mayoritaria de terminar con sus mecanismos y se perseguirá a los que cometan delitos, ya sean individuales o contra los derechos sociales.

La Unidad Popular sabe que en Chile habrá un período de dominación del proletariado, pero no actualiza este problema por dos razones. Primero porque en esta etapa inicial no se consulta tal situación y segundo porque la dictadura del proletariado no tendrá en Chile las características que el

lenguaje común le asigna sino que será simplemente la imposición de la voluntad de las mayorías, para cambiar un régimen injusto.

Es cierto que el concepto de Lenin es de dictadura, pero no es menos cierto que él llamaba también dictadura al dominio burgués, fuese éste legal o arbitrario. Este es un problema de lenguaje histórico. Es efectivo que la dictadura del proletariado en Chile no significará supresión de las actuales formalidades democráticas; si la dictadura de la burguesía ha sido legal no hay ningún impedimento para que también lo sea la de los trabajadores, con la salvedad de que el cuerpo legal e institucional debe ser eficiente para lograr el cambio de la situación.

Oponerse al control del poder político por la mayoría es *ser antidemocrático en la teoría*. Oponerse a que la dominación de la mayoría sea proporcional o tenga la fuerza necesaria para liquidar el dominio de las minorías es *ser antidemocrático en los hechos*. Este es el sentido científico de la dictadura del proletariado a la que no se piensa renunciar y la cual aumentará las libertades y en ningún caso significará una restricción de las justas libertades existentes.

En Chile debe haber un período transitorio de dictadura de los trabajadores, pero ello, lejos de ser un período de arbitrariedades como lo pintan los que no comprenden la historia o se interesan en tergiversarla, será el mayor salto histórico hacia la verdadera democracia y, en la medida que todos colaboremos con la vía chilena de tránsito, será un salto que no tendrá que pagar el alto precio que fue necesario allí donde la reacción quiso vanamente oponerse al avance de la humanidad.

Asamblea Popular o Cámara Unica

En el quehacer político hay tres tareas que distinguir: la conquista del poder de los trabajadores para hacer la revolución, la forma de organización política durante la transición y la forma de organización política de la futura sociedad democrática que surja de la revolución. El primer punto ha sido ya discutido y el último no puede aún ser descrito en forma detallada. Por lo tanto lo concreto es precisar los cambios que se promueven como objetivos inmediatos en el proceso de tránsito hacia el socialismo.

Ya hemos visto lo que plantea el Programa de la UP al respecto. El punto concreto y crítico de este Programa es el de la Asamblea Popular. La discusión de este proyecto ha puesto de manifiesto toda la capacidad de tergiversación de los hechos que tiene la reacción a través de sus mecanismos. La Asamblea Popular no es más que la aspiración por un régimen representativo al estilo que operan en la mayoría de los paíess actuales, tanto socialistas como capitalistas. Sin embargo, algunos políticos y periodistas han hecho todo lo posible por formar una imagen de ella que le da caracteres de totalitarismo que no tiene en absoluto; incluso, en el colmo del cinismo, les molesta que se hable de una asamblea popular, es decir realmente representativa de las mayorías.

Esta tergiversación es intencionada, pero en algunos casos se aprovecha la ingenuidad o la ignorancia de algunas personas. Un hecho muy significativo aconteció hace poco. Cuando el Presidente de la República dijo en el Congreso —defendiendo la vía legal— que nada impedía que el Congreso se convirtiera en una verdadera expresión del pueblo, de inme-

diato el Presidente del Senado, señor Alwyn, creyó conveniente declarar que el Congreso ya era una auténtica expresión del pueblo. Es decir, para este senador y profesor de Derecho las cosas son como dicen las leyes que deben ser y no como realmente se presentan en la práctica. Porque, a pesar de los buenos deseos de los pretendidos demócratas puros la verdad es que mientras que en el país el 80% de la gente pertenece al proletariado, menos del 20% de los parlamentarios son expresión de esta clase y en cambio los grupos dominantes que son clara minoría nacional son absoluta mayoría en el Congreso. Esa es la realidad histórica y no la arregla la declaración solemne de un Presidente del Senado que considera que en Chile todo el mundo paga los partes policiales porque así lo establece la igualdad constitucional ante la ley.

Las dificultades políticas del Gobierno han llevado a considerar que la forma inmediata de aplicar este proyecto es propiciando el reemplazo del actual Congreso bicameral por una Cámara Legislativa Unica. Esta es una vieja aspiración de muchos políticos y además es un postulado que cuenta con gran apoyo de la mayoría nacional que siempre ha visto de muy mal grado toda la tramitación politiquera que se realiza en nuestro Congreso. La *Cámara Unica* reduce las tramitaciones de las leyes y permite tomar medidas más expeditas para el cambio. Se diferencia del proyecto de la Asamblea Popular en cuanto no implica necesariamente el establecimiento de un sistema parlamentario y por lo tanto de la supeditación de los órganos derivados: ejecutivo y judicial.

Pero la verdad es que el problema es algo más que la transformación del sistema legislativo en unicameral. Lo que hay de fondo en esto es la indispensable necesidad de una

Reforma Constitucional que porporcione los mecanismos para aplicar la voluntad mayoritaria. Porque el sistema constitucional chileno está hecho para evitar los cambios revolucionarios y la mayoría nacional tiene plena conciencia de ello. Es una experiencia demasiado repetida que la politiquería parlamentaria no deje gobernar a los presidentes y la gente desea que esto termine. La verdad es que la idea de simplificar el sistema legislativo y procurar una identidad entre el Ejecutivo y el Legislativo es una aspiración que, bien explicada, encuentra respaldo mayoritario en el país.

Concretamente la Reforma Constitucional debe significar un paso inicial sencillo y que se refiera específicamente a esta clarificación del poder político. Ello implica varios elementos: que sea una Cámara Unica; que permita que cualquier bloque que tenga la mayoría relativa del país pueda operar como mayoría eficiente para gobernar sin necesidad de maniobras politiqueras; que una parte importante de la Cámara Unica sea elegida por las organizaciones de trabajadores (federaciones sindicales y confederaciones vecinales y comunitarias); que la Cámara Unica tenga un cuerpo asesor técnico que haga expedita la legislación. Todas estas medidas tienen apoyo popular y particularmente la participación orgánica de los trabajadores, además de la que surge de la elección directa. Esta doble representación de los que trabajan es por demás justa y racional. Antes de las eleciones de 1973 debería lograrse la reposición de los pactos electorales (Ley de Elecciones) y la reforma señalada.

La reforma constitucional chilena tiene de por sí procedimientos un tanto demorosos y puede ser complicada con maniobras politiqueras de la DC y Derecha (reforma sobre empresas). En este caso se tiene la impresión de que la ma-

yoría del Congreso no aceptará los predicamentos del Ejecutivo y en tal caso operará el mecanismo del *Plebiscito* que establece la Constitución. Tal plebiscito se convierte en un mecanismo decisivo en el proceso chileno. La dinámica de las fuerzas demuestra que los planteamientos de los partidos populares y del Gobierno actual están en condiciones de ganar tal plebiscito siempre que se haga con una adecuada clarificación complementada con la intensificación de medidas tanto de mejoramiento inmediato como de traspaso de poder económico a los trabajadores. Esto porque la mayoría nacional es partidaria de que se deje gobernar a los presidentes y que no impongan sus trabas los partidos.

La razón de la urgencia de la Reforma constitucional no se refiere sólo a la Cámara Unica, sino a la necesidad de contar con mecanismos legales adecuados para la socialización de las empresas, para el control del delito económico y de la especulación, para el impulso de las inversiones y de la economía nacional. Tal vez el problema mayor sea la demora y en ese sentido la lucha por la Reforma es compatible con otros mecanismos políticos (coincidencias con la DC) para lograr mecanismos básicos de operación transformadora.

En cuanto a la forma de organización futura de la vida nacional sólo es posible señalar que tendrá bases democráticas reales, la democracia económica, y necesariamente implicará una participación activa y racional de los trabajadores y pobladores en la gestión del gobierno.

Legalidad y Justicia

Puede acontecer que un Gobierno constituido por dirigentes revolucionarios se encuentre con las manos atadas por

ra cumplir sus propósitos. Es más difícil cambiar las herramientas legales que a los hombres encargados de ejecutarlas y es evidente que las leyes que existen en un país tienen como función mantener el régimen vigente y de por sí constituyen obstáculos a cualquier cambio profundo. Esto es particularmente grave cuando se quiere realizar una revolución respetando la legalidad existente.

Hay conciencia nacional de que nuestras leyes son anticuadas y requieren de una actualización para hacerlas expresivas del proceso que vive el país. Pero no siempre se presta bastante atención a la inercia de las instituciones públicas y a las prácticas clasistas de la justicia. Los sectores populares se han formado clara conciencia sobre el carácter de clase de la administración de justicia, pero los poderes interesados se las han arreglado no sólo para negar algo que es evidente sino, lo que es peor, han logrado mantener su vigencia en contra del proceso que la mayoría nacional ha acordado. Para ello cuentan con el apoyo de solemnes personas que defienden la justicia siempre que no perjudique sus intereses. El ochenta por ciento de la administración de la justicia se gasta en que los acreedores poderosos persigan a sus deudores. Nadie duda de que la ley siempre favorece al que puede pagar. Hemos visto casos flagrantes en que la justicia, con diversas argucias, ha protegido a conspiradores, traficantes de divisas, especuladores, etc.

Cuando se afirma que la revolución chilena respetará la legalidad existente no se quiere decir que la mantendrá indefinidamente. Todo lo contrario: la revolución involucra necesariamente un cambio de la legalidad, el reemplazo de las leyes que defienden a las minorías por leyes que sirvan a los intereses de la mayoría. Pero tal cambio no se hará violentando

el aparato legal existente, sino utilizándolo para el cambio mismo, en la medida que es un aparato que permite tal cambio cuando se logra el poder político.

En esta materia se procede con cautela porque la reacción, consciente de que no puede exponer sus verdaderos puntos de vista, trata por todos los medios de formar la imagen de que este Gobierno está violentando la legalidad. Nadie defendería los intereses de la burguesía, por eso ella, que realmente defiende sus empresas, pretende defender la legalidad porque con ello consigue un apoyo mayor y de paso evita la recuperación de las empresas por parte de los trabajadores. El procedimiento no es en absoluto nuevo. Cuando el inglés que se apoderó de nuestro salitre quiso derrocar a Balmaceda que se oponía a su prepotencia, logró convencer a muchos políticos que jamás dijeron que defendían al imperialismo, pero que lucharon hasta contra Balmaceda acusándolo de inconstitucional utilizando un simple pretexto legal. No hay que extrañarse de que los que ahora defienden la explotación burguesa aparezcan con el pretexto de defender la legalidad.

La capacidad de la reacción de evitar el esclarecimiento respecto de la justicia quedó de manifiesto con el proyecto de *Tribunales Vecinales*. Este proyecto ha sido desvirtuado por completo por la Derecha, ya que era una sencilla idea de procurar medios de justicia y tranquilidad social en las poblaciones y la propaganda burguesa lo ha convertido en un proyecto de "tribunales populares". Estos últimos son muy necesarios en las revoluciones para poner las cosas en su lugar, pero en nuestro país no hay la menor intención de instaurarlos, a lo menos en su carácter sumario y extraordinario. Naturalmente que a la burguesía no le preocupa el desorden e intranquilidad reinante en las poblaciones adonde no llega

el aparato legal existente, sino utilizándolo para el cambio mismo, en la medida que es un aparato que permite tal cambio cuando se logra el poder político.

En esta materia se procede con cautela porque la reacción, consciente de que no puede exponer sus verdaderos puntos de vista, trata por todos los medios de formar la imagen de que este Gobierno está violentando la legalidad. Nadie defendería los intereses de la burguesía, por eso ella, que realmente defiende sus empresas, pretende defender la legalidad porque con ello consigue un apoyo mayor y de paso evita la recuperación de las empresas por parte de los trabajadores. El procedimiento no es en absoluto nuevo. Cuando el inglés que se apoderó de nuestro salitre quiso derrocar a Balmaceda que se oponía a su prepotencia, logró convencer a muchos políticos que jamás dijeron que defendían al imperialismo, pero que lucharon hasta contra Balmaceda acusándolo de inconstitucional utilizando un simple pretexto legal. No hay que extrañarse de que los que ahora defienden la explotación burguesa aparezcan con el pretexto de defender la legalidad.

La capacidad de la reacción de evitar el esclarecimiento respecto de la justicia quedó de manifiesto con el proyecto de *Tribunales Vecinales*. Este proyecto ha sido desvirtuado por completo por la Derecha, ya que era una sencilla idea de procurar medios de justicia y tranquilidad social en las poblaciones y la propaganda burguesa lo ha convertido en un proyecto de "tribunales populares". Estos últimos son muy necesarios en las revoluciones para poner las cosas en su lugar, pero en nuestro país no hay la menor intención de instaurarlos, a lo menos en su carácter sumario y extraordinario. Naturalmente que a la burguesía no le preocupa el desórden e intranquilidad reinante en las poblaciones adonde no llega

el aparato actual de justicia y de control social, lo que obliga a los pobladores a un esfuerzo propio, poco conocido pero que en algunos campamentos es ejemplar.

Las necesarias reformas de la legalidad chilena no pueden limitarse a proyectos de mejoramiento del sistema carcelario o a multiplicación de organismos de justicia. Nos parece que hay un cierto retraso y elementalidad en el programa de transformación del aparato jurídico que debería implicar un cambio integral de él. Mucho más lento y difícil es cambiar a los organismos administradores de la justicia porque allí la inercia es decisiva. Por lo demás no hay que extrañarse de que muchos magistrados se opongan decididamente a la revolución democratizante. Ya frente a la revolución de la independencia el organismo más reaccionario fue la Real Audiencia que equivale a nuestra Corte Suprema. Nada nuevo bajo el sol.

El pluralismo y la lucha ideológica

La lucha de clases, que es la substancia de toda revolución verdadera, se da en los planos económico, político e ideológico. Este último alcanza una importancia particular cuando la revolución se desarrolla a base de decisiones electorales y cuando se da en un país como el nuestro acostumbrado a una gran libertad cultural, aún cuando ella sólo rija en los hechos para las clases dominantes.

La lucha ideológica presenta en el proceso chileno varias facetas de interés, pero un hecho predominante: la poderosa contraofensiva de la burguesía frente al proceso de desnudamiento de la realidad que implica toda revolución. Los fundamentos de esta contraofensiva son el largo proceso de men-

talización que le permite contar con imágenes y conceptos ya formados y el hecho de que el tipo de cambio chileno implica la mantención del aparato mentalizador burgués. Tres son los blancos preferidos de esta ofensiva: la *concientización* que ejercen los medios revolucionarios, la *llamada campaña de injurias* y la imagen de que *se restringen las libertades de información* y por lo tanto el pluralismo que sostiene la Unidad Popular. Todo ello tiende a un objetivo fundamental: tratar de ocultar el problema de fondo de la revolución, es decir la lucha desencadenada entre trabajadores y burguesía, confundir el problema principal con los hechos secundarios y sobre todo con el falso dualismo de marxismo y democracia que la burguesía capitalista ha empleado en todas partes del mundo, cada vez que los trabajadores luchan por sus derechos.

Es acertado señalar que ahora *se concientiza* a la gente, cosa que antes no se hacía. Lo que resulta desconcertante es que ello se considere un defecto y no la virtud propia de una revolución verdadera que necesita de un pueblo consciente. Decir que antes no se concientizaba no significa afirmar que no se mentalizaba. En la sociedad burguesa se evitaba la conciencia con el silencio de los problemas fundamentales, se enseñaba la ignorancia. Por ello resulta que cuando los profesores o periodistas señalan las verdades fundamentales es muy fácil decir "están haciendo política". Efectivamente, hacen la política del futuro mientras que los que guardan silencio sobre los problemas para evitar que sea cuestionado el sistema, hacen la política del pasado, la política que trata de impedir que las generaciones jóvenes transformen la sociedad. Lo que sí es muy cierto es que la concientización debe ser verdadera, es decir, debe inducir a que la gente descubra la verdad y no se le debe atosigar con verdades digeridas, con slogans

catequísticos ni menos con una visión que sólo vea lo bueno en el lado propio y lo malo en el adversario: la gente no es tan ingenua como algunos malos concientizadores parecen creerlo.

Cada vez que la burguesía es detectada en su verdadera naturaleza hace lo mismo que el pulpo: desparrama la tinta haciéndose la *víctima de injurias* para ocultar su cuerpo. Para ello le sirven muy bien una pléyade de falsos idealistas que hablan en nombre de la dignidad humana, pero que a la vuelta de la esquina demuestran su verdadero papel de defensores de la explotación. Nadie duda de que las ofensas personales y la forma como cierta prensa está acostumbrada a tratar los problemas no ayuda a comprender la verdad y todos estamos de acuerdo en que sería deseable que terminasen los odios y rencillas entre todos nosotros. Pero ¿dónde empiezan los odios y cuál es la causa profunda y la mayor manifestación de él? No era otra cosa que la explotación que día a día hace el capitalista del trabajador, no otra cosa que el hecho de que la burguesía no sólo domine a las mayorías sino que le arrebate el bienestar de sus familias. Que terminen los mecanismos de explotación, que los bienes medios productivos sean de quienes los trabajan y terminarán los verdaderos odios e injurias. Ese es justamente el objetivo de la revolución y a ello se oponen, con toda su saña, los que ejercían un injusto poder de dominación. Por lo demás ¿de cuándo acá es injuria decirle a un explotador que lo es?

La propaganda anticomunista ha identificado siempre socialismo con supresión de *la libertad de información* y por ello no puede menos de molestarle que en Chile se esté dando un real proceso revolucionario manteniendo intactas las libertades de prensa existentes y se agarren de cualquier pretexto

para formar una imagen adversa aunque sea en el extranjero porque el que está en Chile no duda que en este país ahora, igual que siempre, todo el que puede dice lo que quiere. Pero en este afán de mantener y defender la libertad de información se está manejando una alteración total de la democracia y de la verdad que es necesario precisar.

En primer lugar debemos distinguir los dos aspectos principales de la libertad: el aspecto positivo que es el poder hacer algo y el aspecto negativo que es el que no se impida hacer algo. La burguesía insiste en el segundo aspecto porque sabe que el poder hacer depende del poder económico que ella tiene. Bastará que no se prohíba fundar diarios para que los que tienen dinero puedan hacerlo y en cambio la gran mayoría no pueda expresarse por carecer de poder económico. Es lo que se llama libertad clasista que ha imperado tradicionalmente en nuestro país. La democracia consiste, no en salvaguardar los privilegios existentes sino en hacer efectivos los derechos de todos.

Libertad y pluralismo ideológico significan que los grandes grupos nacionales puedan expresarse públicamente ya que es imposible que se exprese cada uno de los habitantes. En consecuencia, además del Gobierno que representa a toda la nación, deben tener posibilidades de expresarse las grandes organizaciones sociales (CUT, organismos de pobladores, de campesinos, etc.), políticas (los partidos de acuerdo a los votos obtenidos) y culturales (universidades según número de alumnos). Pero acontece que el dominio de la burguesía ha creado privilegios antidemocráticos que asignan más derecho a una familia rica (los Edwards, por ejemplo) que a un millón de familias de trabajadores y a algunas instituciones culturales sobre otras más representativas. En este sentido la

democracia consiste no en mantener tales privilegios, sino en poner las cosas en su lugar, sin embargo la propaganda burguesa hace aparecer estas tendencias democráticas como antilibertarias como ya ha acontecido en el caso de los canales de televisión.

Son innumerables los ejemplos que demuestran que se mantiene intacta la mentalidad burguesa en la mayoría nacional. Veamos un solo caso. La gente que consideraba normal que las empresas capitalistas hicieran su publicidad en sus órganos de prensa ahora se escandaliza y se extraña porque las empresas de trabajadores la hacen en los órganos del proletariado. ¿Qué quieren? ¿Que los trabajadores, que tras una dura lucha han conseguido una cuota de poder, la utilicen graciosamente en favor de sus enemigos? Esto es el colmo del oscurecimiento mental que sufren muchos intelectuales y aun algunos que posan de progresistas.

Para qué hablar del uso de conceptos y vocablos como los de democracia, nacionalismo, justicia, libertad, dignidad personal, etc. Nos parece necesario responder con las mismas armas masivas dándoles el uso correcto a estos términos. Se debe hablar insistentemente de prensa democrática, educación democrática, turismo democrático, libertades democráticas, para oponerlas a la prensa, educación, libertad, etc., burguesas.

Es el colmo que con dineros públicos se sigan manteniendo privilegios de minorías. Es claro que el derecho de las mayorías a expresarse no niega el que las minorías también pueda hacerlo proporcionalmente. En esta materia en la revolución chilena se presenta una situación única en el mundo. Mientras dominaba la minoría las mayorías no tenían derecho legal a expresión, pero ahora que las mayorías controlan el Gobierno las minorías tienen derechos garantizados legalmen-

te (ley de televisión y reforma de garantías constitucionales), de manera que nadie puede decir que las minorías no tienen derechos en Chile.

Nadie en el extranjero creería que mientras se corrigen estas páginas el canal estatal de televisión está exhibiendo un noticiario anticomunista. Por lo demás, el siguiente cuadro, hecho a base de datos de la revista *Ercilla* (democratacristiana), muestra la relación de fuerzas en los medios de comunicación:

Diarios	*Tiraje (Burguesía)*	*Tiraje (Trabajadores)*
El Mercurio de Antofagasta	50.000	
El Mercurio de Valparaíso	65.000	
La Estrella de Valparaíso	45.000	
El Mercurio de Santiago	160.000	
Las Ultimas Noticias	120.000	
La Segunda	60.000	
La Tercera	190.000	
La Prensa	25.000	
Tribuna	25.000	
Cadena Sopesur	25.000	
El Sur y Crónica	50.000	
Clarín		190.000
Ultima Hora		25.000
Puro Chile		40.000
El Siglo		20.000
La Nación		25.000
Diario Color		20.000
	815.000	320.000

En radios la distribución es de 65,6% de la audiencia controlada por periodistas que están al lado de los trabajadores y 18,3% al lado de la burguesía.

En la lucha ideológica ocurre algo parecido a las peleas de circo. Mientras la burguesía daba todos los golpes, su prensa decía: "siga la pelea", pero ahora que por primera vez los trabajadores propinan algunos golpes y hay esperanza de equilibrio, la prensa burguesa grita: "pare la pelea". Los trabajadores no están dispuestos a hacer el papel del tony tonto.

El cambio cultural y el hombre nuevo

Se ha dicho que la Revolución crea a un hombre nuevo y al mismo tiempo necesita de él. Los burgueses satirizan frecuentemente esta afirmcaión con lo que demuestran que les duele y tienen conciencia de ser hombres viejos. Pero la gran mayoría de la gente se pregunta qué significa concretamente esto del hombre nuevo, si es una simple frase o tiene validez real. El tema se relaciona con la necesidad de una Revolución Cultural y con una afirmación común muy cierta, aquella que señala que el éxito del cambio depende en gran medida de la conducta de la gente y que no sólo deben cambiar las estructuras, sino junto con ellas deben transformarse las personas.

En la tesis de la gestación y necesidad de un hombre nuevo hay dos elementos conjugados. Uno se refiere a que las nuevas condiciones sociales y materiales producen un nuevo tipo de hombre. El otro se refiere a la necesidad de una nueva moral para enfrentar el quehacer revolucionario.

Marx afirmaba que la abolición de las clases sociales se-

ñalaría el fin de la prehistoria y el surgimiento de la verdadera historia, es decir la actividad creadora de una humanidad liberada de trabas esenciales a su desarrollo. Ampliando esta idea podemos señalar, desde el punto de vista histórico, que la revolución socialista culmina un proceso que se inició allá por el siglo quince y que ha significado un cambio substancial en el vivir humano. Este cambio se ha expresado en múltiples aspectos: dominio de la naturaleza, socialización de la vida, revolución industrial y diversificación de los medios de bienestar, revoluciones políticas y avances hacia la democratización, racionalidad y superación de los mitos, etc. Toda la historia moderna y contemporánea es la historia de esa transición y la cultura burguesa es la última expresión de las culturas tradicionales. No podemos precisar detalladamente cuáles serán las características esenciales de la nueva sociedad, pero sí se puede afirmar con seguridad que ella significará que la definición misma del hombre será distinta de las que nos habían dado las sociedades antiguas y este cambio no sólo se expresará en el nivel económico y social sino que en forma más profunda en los niveles políticos, ideológicos y conductuales. Esto demuestra lo precario que resulta actualmente hablar del concepto del hombre.

Tal sociedad y tal nuevo hombre serán el resultado de un proceso que está en pleno desarrollo y sería absurdo pretender que ya hubiesen surgido. Pero es necesario que en la construcción del socialismo esté siempre presente la idea de que no sólo cambian las estructuras sino que principalmente las personas, para que así realmente culmine este cambio histórico integral. Fidel Castro ha afirmado: "Nosotros estamos haciendo las dos cosas. Lo importante del trabajo que ustedes han realizado es que han trabajado en los dos sentidos: han

estado ayudando a crear la base material que junto con la educación y la conciencia nos permitirá vivir bajo formas verdaderamente comunistas; es decir, bajo normas verdaderamente humanas, en que cada hombre o cada mujer verá al otro como su hermano y nadie verá en ninguno de los otros un enemigo, en ninguno de los otros un rival. Y esa es, precisamente, la fuerza que dan a los hombres el socialismo y el comunismo: es la fuerza de los hermanos frente a la debilidad de los que se dividen y se odian". Esta afirmación de Fidel está en el contexto de su tesis de que el socialismo y el comunismo deben formar un mismo proceso continuo.

Para empujar este quehacer revolucionario es indispensable que la vanguardia dé el ejemplo con hechos y no con discursos, que opere realmente con nuevos valores y que destierre día a día los viejos valores que frustran la revolución. En este sentido específico el quehacer del hombre nuevo es una tarea inmediata, de hoy.

En el sentido personal del hombre nuevo como una nueva actitud vital la revolución socialista no hace otra cosa que retomar una idea esencial del cristianismo. La auténtica revolución cristiana implica un cambio total de las personas frente a la vida, la muerte del hombre viejo esclavo de sus pasiones y el nacimiento de un hombre libre y fraternal. Socialismo y cristianismo coinciden en plantear un quehacer integral para superar las limitaciones que ponen a la existencia humana el desarrollo clasista de la existencia y el sentido competitivo de la vida. Por ello es que los verdaderos cristianos colaboran en la construcción del socialismo y se oponen a ella los que nunca pudieron superar el atavismo de la vieja condición individualista.

Se suele tener una idea muy superficial sobre lo que es la mentalidad burguesa. Algunos creen que ella consiste en ser ordenado, tener un nivel de vida mediano o en gozar de las comodidades que pueden dar el trabajo y el progreso social. Pero es algo muy distinto lo que ha sido precisado por la sociología moderna. La mentalidad burguesa se caracteriza por la obsesión por el tener (unidimensionalidad) y por el carácter competitivo de la existencia según el cual cada persona se considera exitosa sólo en la medida que obtiene más que los otros. Adicionalmente la ideología burguesa se caracteriza por la valoración de las tradiciones clasistas y de las formalidades: esto último, característico de toda cultura en decadencia.

Es muy difícil precisar cuáles serán los valores de la nueva sociedad, y por lo tanto del hombre nuevo, pero en contrapunte con lo que domina actualmente se pueden atisbar algunos elementos de ellos:

—Superación de los formalismos y tradiciones clasistas descubriendo lo que verdaderamente realiza las capacidades del hombre contemporáneo.

—Sentido social del éxito vital y espíritu solidario que se alegra del progreso de los demás y colabora con él.

—Valoración del trabajo, cualquiera sea su naturaleza, como fuente del bienestar humano.

—Aprovechamiento integral del mayor tiempo libre para el desarrollo de las capacidades de cada cual (creatividad, comprensión de la naturaleza y de la sociedad, recreación física, etc.).

—Término del sentido de dominación y dependencia en todas las formas de vida, especialmente en la familiar.

—Superación de la anarquía conceptual y de los falsos dualismos y mitos que han creado las culturas clasistas.

En cuanto a las aplicaciones práctica de la moral revolucionaria en el momento presente, ellas se manifiestan en la lucha por los ingresos, en el trabajo voluntario, en la responsabilidad y control social de la eficiencia, en la liquidación del sectarismo y del oportunismo, en la superación del dogmatismo, etc.

Sobre esta materia las generaciones jóvenes tienen una alta responsabilidad creadora y constructiva.

V. EL CAMBIO VERDADERO

Los Fundamentos Ideológicos y la Estrategia de la Revolución Chilena

Una revolución no es una simple alteración del orden, sino un proceso histórico que tiene causas precisas, finalidades que configuran su proyecto histórico y una manera determinada de conseguir tales objetivos. La concepción de las causas y objetivos constituyen los *fundamentos ideológicos* de la revolución; la manera de precisar y de lograr tales objetivos constituyen su *estrategia.* Unos y otra determinan la dirección del proceso.

En los fundamentos ideológicos podría distinguirse dos aspectos que forman un solo hecho. Primeramente la convicción de que el sistema capitalista dependiente que ha imperado en nuestro país produce tres principales efectos negativos que son el resumen de nuestros problemas: estancamiento

del desarrollo, injusta distribución del producto y estructura clasista del poder, lo que impide el desarrollo integral de las grandes mayorías. Ello porque es un sistema basado en el uso de los medios de producción como mecanismo de poder y dominación de las minorías y en una dirección social basada en los intereses de esas minorías, es decir al servicio del incremento del poder y de las ganancias de ella a costa del trabajo, la subordinación y el estancamiento de las clases trabajadoras. Conviene recordar que tales minorías son nacionales e imperialistas. No se trata de que neguemos toda posibilidad de progreso dentro del capitalismo, y de hecho lo ha habido en Chile, sino que de señalar que nuestro desarrollo ha llegado a un *punto crítico caracterizado por el estancamiento general y el crecimiento de las tensiones sociales*. Pero lo más grave del capitalismo es que por su dinámica misma es un sistema en el cual la división de la sociedad en dos clases antagónicas es creciente y por lo tanto los conflictos van constantemente agravándose sin tener posibilidad de una superación de ellos dentro del sistema. En los países subdesarrollados esto revienta a corto plazo y en los países imperialistas a más largo plazo. Obviamente Chile está en el primer caso.

Junto con ello se plantea que la manera de superar estas limitaciones substanciales al progreso humano es procurar una nueva forma de organización humana en que los medios de producción sirvan para su objetivo y no constituyen formas de apropiación ni de poder de minorías y en que la economía y la vida social estén en manos de los que trabajan y al servicio de ellos y de sus familias. La tesis de la propiedad social de los medios productivos se basa en el hecho de que el trabajo, base de la vida humana, es social y por lo tanto sus

instrumentos también deben serlo. El capitalismo ha distorsionado esta situación convirtiendo los medios de producción en instrumento de poder y en mecanismo de explotación en que unos progresan a costa del trabajo ajeno. Esto significa que el objetivo final o proyecto histórico de la revolución es una sociedad de trabajadores solidarios, es decir la verdadera democracia o sociedad comunista, la cual implica, no la igualdad de todos, sino la abolición de las bases materiales y concretas de los egoísmos que impiden la liberación humana.

En último término la base de la revolución no es la voluntad de los revolucionarios ni la imaginación de una nueva sociedad. Es el hecho, científicamente observado, de que las nuevas formas técnicas de producción exigen nuevas formas de organización y de relaciones en el trabajo; la crisis del capitalismo consiste justamente en esa inadecuación entre lo que el hombre ha logrado frente a las cosas y lo que ha logrado en su propia convivencia.

La mentalidad de la gente común está tan impregnada de la ideología burguesa que a la mayor parte no le agradaría estar colaborando para el desarrollo del comunismo, pues éste le ha sido pintado con los peores colores. La verdad es que la sociedad comunista, que aún no existe en ninguna parte, es la meta a la que marcha actualmente la humanidad en su creciente progreso, meta que le da el carácter humanista y libertario a la historia y a esta revolución que iniciamos.

La larga mentalización burguesa explica que una parte importante de los trabajadores acepten otras ideologías, se nieguen a colaborar con esta revolución y más bien se alegren de sus dificultades. Este es el caso del tercerismo demócrata-cristiano que dice estar de acuerdo con la crítica al capitalismo, pero que plantea como objetivo de la revolución el

desarrollo de una sociedad comunitaria como algo distinto y opuesto al comunismo. Según ellos habría una diferencia total de propósitos, pero si pasamos de las palabras a los hechos y concretizamos en qué consisten la sociedad comunitaria, veremos que ella o es una sociedad de iguales oportunidades (y entonces es una sociedad comunista) o es una sociedad en que unos pocos tienen poder para explotar y dominar a los demás (y entonces no es más que un capitalismo un poco reformado). No hay alternativas: o los medios de producción sirven a la sociedad o son patrimonio de unos pocos para dominar a los otros. O la sociedad progresa como competencia entre grupos o con criterios solidarios que expresen los intereses de la totalidad. Los comunitarios o son socialistas que tienen una particular manera de concebir el proceso, por ejemplo acentuando la participación de las comunidades empresariales, y en tal caso colaborarán en *lo principal que es construir el socialismo*, o bien es un capitalista disfrazado que hará todo lo posible para que fracase el esfuerzo de los trabajadores para organizar la sociedad de acuerdo a sus intereses. Los hechos nos permiten discernir a unos de otros.

Alguien puede observar que esto es una ideología marxista y ello es exacto. Este hecho molesta a los capitalistas y a los que son dominados mentalmente por ellos, pero resulta natural para los trabajadores que sienten interpretados a través de él sus intereses. El marxismo en sus líneas generales no es más que la expresión más avanzada de la conciencia humana, aunque no necesariamente la última. Por ello es que constituye la ideología de las mayorías trabajadoras y al mismo tiempo de la ciencia de la sociedad en la actual etapa de la historia. Conviene sí recordar que se puede llegar desde otras ideologías a conclusiones que coincidan en lo substan-

cial la suplantación del capitalismo; esto ha acontecido con las fuerzas que respaldan al actual gobierno chileno.

Este es el sentido general de la revolución actual. En la práctica histórica las revoluciones se logran por procesos llenos de dificultades que requieren una dirección eficiente: es lo que se llama *la estrategia de la revolución*. Para determinar tales estrategias hay que tomar en cuenta dos clases de elementos: las experiencias generales de la historia humana y las condiciones concretas en que se da la revolución en cada lugar y tiempo.

La consideración de la experiencia general de la humanidad es indispensable porque Chile no es una isla en el mundo y los cambios que se dan en nuestro país no son más que parte de la transformación general del mundo actual. La mayor hipocresía de los reaccionarios es pretender que la experiencia chilena no tiene nada que ver con el resto del mundo. Sería lo mismo que afirmar que la independencia chilena no tuvo nada que ver con la independencia de América. Los problemas presentan características especiales en Chile, pero son los mismos problemas del mundo y por ello lo racional es que la experiencia mundial sirva de guía para tener el mejor éxito y cometer los menos errores posibles.

La experiencia general de la humanidad, ordenada por los grandes revolucionarios, constituye la *teoría de la revolución* expresada en leyes del desarrollo histórico o de los cambios sociales.

Un simple enunciado de estas leyes podría resumirse de la siguiente manera:

a) *Carácter de clase* de la revolución, ya que implica un enfrentamiento entre la mayoría que busca el poder que legítimamente le corresponde y una minoría que lo detenta injus-

tamente y se niega a entregarlo pacíficamente. Este enfrentamiento ha sido siempre violento, pero el grado y forma de esta violencia han sido y pueden ser variados.

b) El papel protagónico que le corresponde a la clase trabajadora moderna o *proletariado* industrial como fuerza principal de la gestión revolucionaria, por constituir la fuerza que proporciona las bases del progreso en la actual etapa de la humanidad.

c) Desarrollo del proceso por *etapas*, las cuales pueden variar de modalidad y duración pero en términos generales es posible distinguir tres: etapa revolucionaria, etapa de dominación del proletariado o socialista, y etapa comunista. La primera puede ser insurreccional o legal y brusca o gradual.

d) Necesidad de un período de dominación impositiva de la clase revolucionaria o *dictadura del proletariado*. Este período debe ser capaz de cambiar radicalmente la estructura del poder y superar la resistencia que preste la minoría que usufructa del sistema anterior. La fuerza y carácter de esa dominación depende de la eficiencia de las medidas ordenadoras y de la resistencia de la reacción.

e) Utilización, durante la etapa de transición, del *Estado* como mecanismo o aparato de poder para transformar la sociedad.

f) Necesidad de una dirección política única de la revolución, dirección que asumen los *partidos del proletariado* como vanguardia consciente y organizada de él. La unidad de la dirección es garantizada o bien por la existencia de un partido único del proletariado o bien por un bloque unitario que represente los diversos sectores de esta fuerza.

Hay otras experiencias generales que deben tomarse en cuenta en los procesos revolucionarios. Tal es el caso de la necesidad de que el proletariado cuente con mecanismos eficientes para derrotar la eventual contrarrevolución armada. En general la experiencia revolucionaria enseña que la reacción juega todas las cartas, dificulta seriamente la revolución y se hace necesario tomar las medidas adecuadas a cada caso para asegurar el éxito del proceso. La experiencia es muy rica para probar que muchos procesos que se inician son frustrados por la reacción ante la incapacidad de la dirección revolucionaria para enfrentarla eficazmente: Guatemala, Brasil, Santo Domingo y Bolivia son ejemplos muy claros en la historia reciente de América Latina.

Los propios políticos, y con mayor razón la gente común, suelen comprender muy mal estas leyes del desarrollo revolucionario y de ello se aprovechan los reaccionarios para formar una imagen desfigurada de las revoluciones. La dictadura del proletariado, el papel del Estado y de los partidos, el carácter violento de la revolución, etc., son interpretados de manera muy diferente a lo que realmente significan como experiencias de la humanidad.

Tal vez el error más grande de todos es olvidar que cada revolución es una experiencia histórica distinta, ya que las leyes no son más que generalizaciones sobre el acontecer de ellas. Con palabras de Lenin: "La historia en general, y la de las revoluciones en particular es siempre más rica, más variada de formas y aspectos, más viva y más "astuta" de lo que se imaginan los mejores partidos, las vanguardias más conscientes de las clases avanzadas". Cada revolución no es una simple aplicación de la teoría revolucionaria sino que es una creación histórica del hombre, cuya riqueza depende

de sus protagonistas. De allí que la comprensión y utilización teórica de las leyes revolucionarias merezca algunas observaciones.

Primeramente hay que aclarar que estas leyes no constituyen deseos ni elecciones de los que hacen la revolución; se trata más bien de situaciones que hay que enfrentar. Algunas personas plantean la posibilidad de hacer los cambios sin tener que pasar por las dificultades y dolores que ella origina. Tal pretensión de hacer una revolución pura no es más que un idealismo que en la práctica se traduce en la negación de la revolución. La historia humana se hace dificultosamente: tratar de hacerla saltándose los riesgos equivale a negarse a ir adelante con ella.

Pero ya se ha dicho que el error más crítico no es menospreciar estas experiencias o leyes generales, sino el asignarles un carácter que no tienen. Algunos políticos consideran que la tarea revolucionaria consiste en ir aplicando cada una de las afirmaciones de los clásicos de la revolución y convierten los análisis sobre estrategia en discusiones bíblicas acerca de lo que dijeron o no dijeron Marx, Lenin, Mao o Fidel. Este *dogmatismo lleva a darle carácter de ley no sólo a la experiencia general sino a las modalidades específicas de cada revolución*. Por ejemplo, es un hecho comprobado que toda revolución implica un enfrentamiento violento entre las clases pero ello no significa que siempre tal enfrentamiento se traduzca en una guerra civil o una lucha contra la invasión, ya que esas son modalidades específicas. Puede que en determinadas condiciones la violencia sea política y legal dentro de las normas que otorgue el consenso mayoritario y ello es lo que se pretende hacer en Chile. No le podemos negar a la revolución chilena la posibilidad de aportar una nueva expe-

riencia a la historia humana que siempre se está haciendo y de ninguna manera está hecha.

Sobre todo si esta apreciación, que pretende basarse en el marxismo, se funda en una visión mecanicista de la relación entre las clases y el aparato legal y entre la clase dominante y las fuerzas armadas, visión que ha sido superada hace largo tiempo en la historia del marxismo.

Lo que le da el carácter específico a cada revolución son las condiciones particulares en que cada una se desenvuelve. El senador comunista Luis Corvalán afirma: "Nosotros estamos convencidos como el que más de que la revolución socialista tiene sus leyes generales que no se pueden pasar por alto y que a la vez cada revolución tiene sus propias características que también deben tenerse rigurosamente en cuenta. Lo que interesa es esto y no el esquema". Cada sociedad presenta *condiciones concretas específicas* y sólo de la confrontación realista y cuidadosa de estas condiciones con las leyes generales del cambio puede surgir una estrategia que garantice el éxito de la revolución.

Anteriormente hemos hecho una descripción de las que se pueden considerar como principales condiciones particulares de la realidad chilena. Esa descripción se puede resumir en los siguientes puntos:

a) El desarrollo del proletariado en Chile que es cuantitativamente fuerte, que se ha ido enriqueciendo con diversos sectores de él y que ha tenido una dirección política sólida que no ha conocido renuncios. Aunque tal desarrollo ha tenido antibajos sindicales y lento crecimiento electoral se reforzó cualitativamente al producirse su unificación en la UP, la cual permitió el triunfo electoral de 1970.

b) El fortalecimiento de la revolución mundial socia-

lista y las vacilaciones y cambios de tácticas de la burguesía internacional, lo que hace menos difíciles las revoluciones nacionalistas y proletaria, aun cuando no es predecible la forma de reacción del imperialismo ante ellas.

c) El relativo desarrollo económico chileno que implica diversificación de la economía y desarrollo de sectores de trabajadores con condiciones de vida superiores a las de la simple subsistencia. Esto origina la imposibilidad de hacer una revolución que implique un salto en el vacío o que no tome en cuenta a tales sectores que presionan por un estilo revolucionario distinto.

d) La tradición legalista del país y el desarrollo de su aparato estatal, lo cual por un lado dificulta al proceso revolucionario, pero por otro dificulta también a la contrarrevolución insurreccional (Golpe de Estado) y permite un mayor manejo de la economía al cambiar la orientación del aparato estatal.

e) El análisis de otras experiencias revolucionarias, lo que permite tomar precauciones para garantizar el éxito del proceso y evitar las deformaciones que otras circunstancias han motivado.

La consideración de las leyes generales y de las condiciones particulares de Chile han llevado a formular la estrategia de nuestra revolución, la cual ha sido desarrollada por las fuerzas que constituyen la vanguardia organizada del proletariado, es decir los partidos que forman la Unidad Popular. Tal estrategia puede resumirse en los siguientes puntos:

—El carácter *pluralista*, en el sentido de que ella es posible gracias a una alianza de fuerzas que coinciden en el objetivo común de transformar la sociedad chilena con miras a

la construcción del socialismo. Esta alianza se expresa en el pluripartidismo de la dirección revolucionaria.

—El carácter *gradual* en el sentido de que el ritmo de la etapa revolucionaria irá de acuerdo con lo que permita la correlación de fuerzas políticas y así ir consolidando los pasos y logrando el apoyo popular masivo a las medidas que vayan radicalizando el proceso.

—El carácter *legal y electoral* en el sentido de que la revolución chilena empleará los cauces democráticos existentes en el país, incluso para lograr la transformación de la estructura política y económica. Esto significa que el cambio del sistema y legalidad burgueses se hará por el consenso mayoritario y controlando la violencia para evitar males que son evitables como la guerra civil o la violencia generalizada. Se puede decir que es un camino mixto o de violencia controlada.

Hemos agregado como característica la integralidad del proceso en el sentido de que procura no sólo el cambio de las estructuras políticas y económicas, sino también de las personas y de sus conductas. Igualmente implica que desde un principio se procurará la distribución del poder de los trabajadores entre sus distintos niveles y se procurará la democracia integral. Pero tales características corresponden más bien al modelo socialista que a la estrategia inmediata.

En suma, lo específico de la revolución chilena es que en ella la etapa revolucionaria o de lucha y cambio de poder de la burguesía al proletario tendrá aquí un carácter menos brusco y violento del que ha tenido en otras experiencias y con ello se procura que el cambio tenga el menor costo social posible. En concordancia con esta estrategia se formulan en esta etapa inicial los siguientes objetivos:

1.º Conquistar el poder para la clase trabajadora;

2.º Echar las bases para la transformación de la sociedad y la construcción del socialismo.

No se trata por lo tanto de instaurar el socialismo de inmediato ni de la transformación total de la sociedad, sino de poner las piedras fundamentales del edificio. Esta es una concepción realista que constituye un elemento clave para comprender nuestro proceso.

Los dos objetivos señalados están muy relacionados entre sí. No hay revolución socialista sin poder obrero, y no hay poder obrero sin que el poder político y económico pase a la clase trabajadora y para ello se requiere el cambio de la estructura legal y la socialización de los principales medios de producción en nuestra economía.

En función del primer objetivo es necesario atender las necesidades reivindicativas inmediatas para ampliar las bases de apoyo social al gobierno popular. Este objetivo funcional exige éxito en la gestión económica para proporcionar las bases materiales de esas medidas democráticas. Igualmente se requiere preservar al Gobierno de las tentativas golpistas, acentuar la educación y organización de las masas y dar las batallas tendientes a consolidar el poder mayoritario de los trabajadores (Reforma Constitucional, elecciones).

En función del segundo objetivo se señalan tareas progresivas y encadenadas: nacionalización de la minería, liberación progresiva de la dependencia imperialista, establecimiento del área social de la producción y profundización de la reforma agraria. Por ello se afirma que en esta etapa la revolución es antiimperialista y antioligárquica, sin olvidar que esas tareas constituyen las bases iniciales de la construcción del socialismo y son inseparables de ésta.

Debemos reconocer que en la interpretación de esta es-

trategia hay algunos puntos que se van aclarando en el desarrollo mismo del proceso. Dos puntos tienen especial interés; el carácter de la alianza y el carácter de la etapa inicial. Sobre lo primero trataremos al hablar de la Unidad Popular. Por el momento baste señalar, según se ha ido clarificando, que más dé una alianza de clases se trata de la unificación política de los distintos sectores y fuerzas del proletariado, aunque sin duda hay también presente una alianza entre el proletariado y la pequeña burguesía y una actitud de no beligerancia con la mediana burguesía.

Respecto a lo segundo hay que señalar que al parecer aún quedan restos de una visión de la historia chilena que creía que antes de iniciar la revolución socialista había que desarrollar previamente la revolución democrático-burguesa. Por eso se planteaba como objetivos estratégicos el completar la independencia nacional, el profundizar la democracia y tímidamente el preparar la base material del socialismo. Esta visión se conjugaba con la convicción de que la UP es esencialmente una alianza de clases y se traducía en que los objetivos de la etapa inicial deberían ser sólo aquellos que interesaban a todas las clases aliadas dejando para después los objetivos socialistas que favorecen a los trabajadores proletarizados en cualquier grado y forma. Entendemos que tal visión ha sido superada y que la etapa inicial se considera como iniciación de la revolución socialista, de acuerdo con las modalidades que exigen las condiciones chilenas. En la actual etapa de nuestro desarrollo y, sobre todo del desarrollo mundial, no parece realista separar los objetivos democráticos y antiimperialistas de los objetivos socialistas ni menos aún pretender que la burguesía se comporte solidaria de una política que nacionalice las empresas extranjeras y los grandes monopolios

nacionales. La burguesía tiene demasiada conciencia de lo que implica el desarrollo del poder obrero cuando es substancial, cualquiera que sea su extensión. Lo que sí es cierto es que no es adecuado saltar etapas pretendiendo hacer la revolución socialista sin haber desarrollado el poder indispensable para ello.

La conveniencia de una revolución democrática como paso previo y preparatorio a la revolución socialista se planteó en el pasado y en otras condiciones de la historia mundial. Hoy en día, y particularmente en Chile, la situación es otra. Por un lado la revolución democrática, desarrollada desde 1924, y especialmente desde 1938, ya ha dado de sí todo lo que puede. Por otra parte en el momento actual toda lucha frontal contra la burguesía imperialista no puede sino ser parte de la revolución socialista. La modalidad gradual y legal es sólo una forma específica de ella; no es ni un tránsito pacífico a "lo socialdemócrata" ni una anacrónica revolución democrática, que postergue el día de los trabajadores para un plazo lejano.

Curiosamente este planteamiento de una revolución democrática o moderada como paso previo a la revolución socialista, que antes plantearon los comunistas, ha sido reactualizado en distinto enfoque por sectores de la inquierda radicalizante. Antes de la elección del 4 de septiembre ellos negaban la posibilidad de que la burguesía permitiera el ascenso electoral del poder proletario y en realidad ello está por verse a pesar de la conquista del Gobierno por fuerzas populares; al mismo tiempo tenían una actitud muy crítica frente a la Unidad Popular. Una consideración más atenta de los sucesos les ha hecho cambiar, no el planteamiento estratégico, pero sí la valoración de las posibilidades del Gobierno Popular, a tal

punto que muchos, especialmente el MIR, consideran que ésta es una coyuntura particularmente favorable para iniciar la revolución. Para ello conciben la actual etapa como preparatoria a la radicalización del proceso: casi podría decirse como la revolución de febrero que preparó la de octubre en Rusia. Lo más grave de todo es que algunos sectores de la Unidad Popular al compartir este criterio, que no descalificamos, pero que consideramos que no corresponde al de la UP, hacen el doble juego de compartir responsabilidades en este Gobierno y no jugarse por ellas con la esperanza alienante de que lo harán cuando se radicalice el proceso, lo cual naturalmente resiente el éxito de esta etapa y de toda la revolución. Quienes se embarcan en la revolución, pero muy dispuestos a abandonar el barco apenas haga agua, constituyen peligrosos enemigos de ella y comprometen seriamente su éxito.

Naturalmente que no todo el mundo cree en esta estrategia. La reacción acusa a las fuerzas populares de que no son sinceras y de que el pluralismo y el legalismo son tácticas transitorias para imponer el grado de violencia de otras revoluciones; incluso están predispuestas a ver el rebasamiento de la legalidad en cualquier indicador aunque ello no sea más que esporádico y propio de cualquier país subdesarrollado. Por su parte algunos sectores de la izquierda dicen que tal estrategia no tiene ninguna posibilidad de éxito, que el actual Gobierno no es más que una acentuación del reformismo burgués y que se hace inevitable la guerra civil. Es justo reconocer, y lo haremos en su oportunidad, de que dentro de esos sectores el MIR tiene una actitud más dialéctica y está atento al desarrollo de los hechos tratando de adecuar su capacidad revolucionaria para ponerla de todos modos al servicio de la revolución proletaria.

Lo importante es señalar que la estrategia descrita es la que realmente corresponde a las fuerzas más representativas y organizadas del proletariado y es responsabilidad de todos los militantes de la Unidad Popular y de todos los que están con la causa de los trabajadores el jugarse por su éxito.

El Poder de los Trabajadores; Clase, Estado y Partido

Los principales problemas de la revolución: dictadura del proletariado, papel del Estado, función del partido, participación de los trabajadores, etc., se centran en un problema clave: *la conquista del poder por los trabajadores.* No es extraño que sea un punto crucial de preocupación de los revolucionarios y un elemento muy utilizado por los críticos de las formas concretas que va asumiendo nuestro proceso.

Se trata por lo demás del carácter de clase de la revolución el que ha sido ampliamente desarrollado por la teoría revolucionaria y es claramente explicado en un documento reciente editado por el MAPU con el título de *El Carácter de la Revolución Chilena*, el cual contiene además otras explicaciones bien logradas, como es el caso de la naturaleza del actual Estado chileno y del papel hegemónico del proletariado dentro de la alianza popular.

La gente se pregunta por qué se habla sólo del poder de la *clase trabajadora proletaria* marginando a los demás sectores sociales. Esta inquietud se debe a una incomprensión de lo que es la vida humana y a las características actuales de su desarrollo.

La base de la vida humana es el trabajo: sin él no hay progreso ni bienestar humano. Ser hombre es ser trabajador.

Pero en la historia las formas del trabajo y el progreso humano van adquiriendo características especiales: en la etapa actual la forma más progresista del trabajo es la producción industrial que es la más productiva. Ahora bien en la sociedad capitalista tal trabajo está proletarizado en el sentido de que el trabajador no posee más que su trabajo, no dispone ni del producto de él ni de los medios con que lo produce y por el contrario está subordinado enteramente a los propietarios de esos medios, los que acrecientan su poder y disponen del producto del trabajo obrero.

Esta clase obrera o proletariado industrial constituye pues el sector más avanzado y progresista de la humanidad, pues es el que aporta lo esencial de su progreso y puede tomar conciencia de su situación en la medida que está concentrado en las ciudades; por ello se dice que es la clase más avanzada y la que a través de su vanguardia puede emprender la tarea de la revolución. En este sentido la revolución es obra del proletariado, de la clase trabajadora moderna.

Vale la pena señalar algunas diferencias entre la naturaleza y extensión del proletariado en el período previo a la revolución rusa y la situación actual de Chile. A principios de este siglo (1900 a 1940) y aún actualmente en muchos países el proletariado industrial es minoría y está proletarizado principalmente por el empresario o capitalista directo. En cambio en la situación de Chile el proletariado industrial es mayoría y está proletarizado, tanto por cada empresa como por el sistema en general y está compuesto no sólo por trabajadores estrictamente fabriles sino por numerosos productores que trabajan técnicamente en medios de producción mucho más desarrollados. Esto explica que muchos trabajadores aparentemente no proletarios, como son los artesanales o algunos

trabajadores independientes, e incluso los campesinos, de hecho estén proletarizados por el sistema (abastecimiento de materias primas, precios, sistema de créditos, etc.). Al mismo tiempo explica que la clase obrera en su verdadero concepto de productora directa de bienes modernos sea mucho más amplia que lo que nuestro código y nuestro concepto social consideran como obreros, y que comprenda a muchos sectores técnicos y administrativos que erróneamente son considerados como de clase media.

Esta evolución histórica objetiva nos permite comprender mejor el alcance verdadero de lo que significa el proletariado en la actual situación de Chile. De hecho es la clase trabajadora moderna, es decir la situación adonde va la totalidad de la humanidad.

La proletarización de los trabajadores no se entiende sin la existencia de la burguesía capitalista o pequeño número de personas que controlan el poder económico de la sociedad. Hay dos errores muy comunes sobre la burguesía; algunos piensan que son los ricos y otros que son personas cómodas. Ni lo uno ni lo otro: *burgués es objetivamente el que vive y sobre todo el que acrecienta su poder gracias al trabajo ajeno* pagando a los trabajadores menos de lo que producen. La burguesía es más o menos poderosa según el tipo de empresas que controla y la explotación que ejerce.

Proletariado y burguesía son las principales clases sociales, pero entre ellas existen algunos sectores que no están claramente en una ni otra aunque de hecho se vinculan a alguna de ellas. Tal es el caso de los dueños de empresas pequeñas, los funcionarios de confianza de la burguesía, los que trabajan su propio capital y los trabajadores independientes no proletarizados: los primeros forman la pequeña burguesía y

los segundos los trabajadores no proletarios. El concepto común de clase media no se relaciona necesariamente con estas situaciones, sino con los trabajadores proletarios que han alcanzado un *status* o situación mejor que la promedia, como es el caso de profesionales, técnicos, empleados administrativos, fuerzas armadas, pequeños comerciantes, etc. En realidad no pertenecen a una clase media sino principalmente al proletariado y el concepto de clase media es un pretexto de la burguesía para confundir a los trabajadores. Es notable la sorpresa con que algunas personas que ganan unos diez vitales por el carácter de su trabajo, llegan a comprender que sin duda pertenecen a la clase trabajadora y no a una pretendida clase media.

La revolución es la lucha por la cual el proletariado se libera de la dominación y explotación de la burguesía, especialmente de los sectores más poderosos de ella. Por eso se dice que la principal clase revolucionaria es el proletariado y que su enemigo principal es la gran burguesía. Los demás sectores sociales o son aliados del proletariado o de la burguesía dependiendo ello de su situación real en la producción y del carácter que asuma la revolución.

Una última observación es que la revolución implica la liquidación de la burguesía en cuanto clase explotadora *pero no la liquidación de la función empresarial*. El trabajo empresarial es necesario en toda producción pero es sólo un tipo de trabajo: el empresario es enemigo del proletariado en cuanto capitalista o representante de él, pero no en cuanto jefe de las tareas productivas. En la economía socialista también se necesita de empresarios para aplicar una economía que represente y defienda los intereses generales de los trabajadores. En el fondo la revolución procura que empresario y trabaja-

dor de cualquier grado de la escala del trabajo sean una sola fuerza laboral con intereses comunes.

Pero la liquidación de la explotación capitalista y la asunción del control de la sociedad por los trabajadores no se da en el aire, sino sobre una situación de poder dada: la dominación de la burguesía que utiliza innumerables mecanismos económicos, políticos, culturales y militares para mantener su poder. Las formas de esta dominación pueden ser variadas: arbitrarias o legales, moderadas o sangrientas, pero lo importante es que de todas maneras es una imposición de la minoría explotadora, o sea es una dictadura de la burguesía. En el caso chileno se trata de una dictadura legal con formalidades democráticas, por lo cual en el sentido de nuestro lenguaje no es dictadura, pero sí en el sentido del lenguaje histórico. Pues bien: para liquidar esta dominación y el poder burgués se requiere de una fuerza capaz de lograrlo, esa fuerza es la imposición o dominación del proletariado, es decir la imposición de los intereses de la clase realmente humana, la que produce el progreso y debería ser la única situación social.

Y con ello entramos en el problema de la *dictadura o dominación del proletariado*. Este punto ha sido suficientemente analizado en la cuarta parte de este trabajo.

No se puede hablar de dictadura sin referirse al *papel del Estado* en el proceso. El Estado es interpretado con distintos conceptos: expresión de la sociedad global (nación organizada), aparato técnico de coordinación de los intereses comunes, aparato de represión de una clase sobre otras. En la práctica histórica este último hecho es el que ha prevalecido, por ello los marxistas dicen que el Estado debe desaparecer cuando desaparezcan las clases y por eso afirman tam-

bién que para abolir las clases el Estado debe ser el principal instrumento en manos de la mayoría. No es fácil imaginarse cómo será la organización humana al no existir clases, pero sí es evidente que la desaparición del Estado significa desaparición del aparato represivo de clases.

Hay gente que dice, el poder debe ser para los trabajadores y no para el Estado y usan este argumento para oponerse a las políticas de estatización de las empresas. Con ello confunden a algunas personas. Hay dos razones que justifican y hacen necesaria la propiedad y control estatal de la economía; una permanente y otro transitoria.

Los trabajadores son conjuntos concretos de personas. Primeramente es el conjunto de todos los trabajadores de una nación y en seguida es el conjunto de trabajadores de una empresa; este segundo conjunto es parte del primero. Cuando las personas dicen el poder para los trabajadores, pero no para el Estado quieren decir el poder para unos pocos trabajadores pero no para todos los trabajadores. Pero resulta que los bienes que el hombre necesita son producto del trabajo social de todos los trabajadores y no de los de una empresa. Los trabajadores del calzado necesitan ropa, viviendas, alimentos y muebles y los trabajadores textiles necesitan calzado, vivienda, etc. Por lo tanto hay una interdependencia del conjunto total de trabajadores. Los bienes de producción tienen como función satisfacer las necesidades de todos y no de los trabajadores de una empresa: su función es producir y no convertirse en poder de unos pocos. Por lo tanto, para que haya una sociedad igualitaria, los bienes de producción deben ser de la sociedad y no de trabajadores en particular. Y el Estado representa actualmente a la sociedad global: propiedad estatal

en un Estado de trabajadores es propiedad de todos los trabajadores.

Por otra parte, ya hemos visto que en el período de transición se requiere un control de la economía y el único mecanismo utilizable para este fin es el aparato estatal. Transitoriamente el Estado alcanza un papel preponderante en la economía y combatir este papel resulta en la práctica un mecanismo para dificultar el control de la economía por los trabajadores: de allí el interés que tienen los que siempre defendieron el capitalismo en entregar el poder a grupos parciales de trabajadores. Esta es la razón transitoria que hace necesario el poder del Estado en la construcción de la nueva sociedad.

Es efectivo que se puede cometer el error de considerar al Estado como único depositario de poder y de las decisiones. En el período de transición hay decisiones y responsabilidades que la clase trabajadora debe y puede asumir en sus niveles parciales o en forma directa. En cierto sentido el Estado es una expresión o mediación de la clase trabajadora y es factible que se produzca una autonomía o desvinculación entre la Clase y el Estado que la mediatiza. Eso es lo que se llama *burocratismo* y es un riesgo real que hay que evitar, para así preparar efectivamente el poder de los trabajadores.

Se discute sobre el carácter del actual Estado chileno. Para algunos es un Estado de trabajadores, para otros es un Estado burgués y para otros un Estado Popular. Este último juicio significa que es un Estado cuyo poder controlan varias clases sociales con predominio de los trabajadores. Este juicio, aunque más próximo a la realidad no la expresa adecuadamente. En realidad estamos en presencia de un Estado transicional y en plena lucha por el poder, que tiene perspectivas de

democratización y de convertirse en un estado de trabajadores. Ello porque el Ejecutivo por primera vez en la historia es controlado por una alianza popular en que tiene predominio el proletariado. Es tan dinámica la realidad que los adjetivos no pueden tener otro fin que el facilitar la comprensión de ciertas situaciones complejas. Pero no es bueno que estos calificativos enturbien la visión de la realidad que deben tener los dirigentes políticos.

El Estado no es una institución abstracta sino un aparato concreto que es manejado por determinadas fuerzas que normalmente constituyen *partidos políticos*. A veces gobiernan militares o caudillos, pero siempre en defensa de determinados grupos o fuerzas sociales.

Al hablar del poder y de la acción de los trabajadores debemos distinguir dos niveles: uno general y otro parcial. Cuando los trabajadores luchan por la socialización de los bancos están actuando en un nivel general, esto es, defendiendo los intereses de la clase trabajadora. Cuando los trabajadores del salitre deciden aumentar la producción o los del cobre deciden luchar por un reajuste mayor que el promedio actúan en un nivel parcial como parte de la clase. Puede que haya concordancia entre los intereses parciales y los generales o puede que haya contradicción: es lógico que en este caso deben predominar los intereses generales, pues afectan a todos los trabajadores. Pues bien, debido a la forma de operar del capitalismo y a la mentalización que ejerce en los trabajadores, en la acción del proletariado tiende a predominar la visión de los intereses parciales o de grupos, es decir la acción "economicista" que tiende a obtener ventajas para determinados grupos sin comprender que a la postre ellas dependen del sistema imperante. Por eso se dice que la acción

parcial tiende a ser *espontánea* en la cual los trabajadores se guían por el *instinto de clase* para defender sus intereses directos en relación con la empresa. En cambio, en la acción general o *política* predomina la *conciencia de clase* que comprende que sus intereses más importantes dicen relación con el sistema imperante. Por ejemplo, es mucho más importante detener la inflación que lograr un determinado reajuste en una empresa.

Tanto la acción general como la acción parcial son organizadas. La primera, en organizaciones generales llamadas *partidos políticos*; la segunda, en organizaciones funcionales llamadas *organismos de masas* (sindicatos, juntas vecinales, asambleas de trabajadores, etc.).

Pues bien ¿qué es un partido político? Se dice que es un conjunto de personas que siguen un Programa, tienen una Organización para llevarlo a efecto y asumen determinadas conductas políticas para la dirección del Estado. La gente se une por intereses e ideologías comunes que se expresan en los programas y sobre todo en las actitudes políticas concretas. Las ideologías pueden tomarse en un sentido abstracto como visiones de la naturaleza humana y de su quehacer o en un sentido concreto como visión de la situación concreta de las personas y del sentido de sus vidas: por ello existen ideologías del proletariado, de la burguesía, etc., ya que ellas son las principales formas reales en que vive la gente. Es frecuente que los trabajadores asuman ideologías que no corresponden a sus intereses debido a distorsiones que crea la mentalización ambiental. Las ideologías políticas a veces interpretan los intereses reales de la gente y a veces los ocultan; por ejemplo un trabajador puede comprender que a él le conviene que las empresas sean de todos, pero puede que haya otros que estén

imbuidos de la idea de que ellos no pueden administrarla y que necesitan de los patrones capitalistas. Donde se aprecia mejor la diferencia de intereses que defiende cada partido es en los programas y especialmente en la acción política concreta. Los programas en general aparecen buenos, pero es la acción real en favor o en contra de determinadas medidas lo que distingue la acción de los partidos.

En consecuencia es correcto decir que el partido político es la expresión orgánica de los intereses generales de una clase. Por ello se dice también que son las vanguardias organizadas de las clases, en el sentido de que agrupan a la gente que tiene conciencia de clase y dirigen la acción general de ésta en defensa de sus intereses.

De allí que el *partido político y su acción no son algo distinto de la clase, sino sólo la expresión orgánica del nivel general de ella*, por lo cual es artificioso pretender que de por sí exista un conflicto entre la clase trabajadora y sus partidos políticos. Lo que sí es cierto es que se pueden cometer algunos errores en la forma como los partidos expresan a las clases. Uno de ellos es olvidar que la clase se expresa tanto en los partidos como en los organismos de masas u organismos de acción directa. Algunos incluso le asignan el carácter de clase sólo a la acción de los organismos de masas, lo cual sin duda es un error como también lo es pretender que la acción y el poder de la clase se reduce sólo al nivel de los partidos políticos. El otro error se presenta cuando en la estructura interna de los partidos predomina una dirección de arriba abajo que no expresa los puntos de vista de la vanguardia de la clase sino sólo de los dirigentes que pretenden institucionalizar la expresión de los intereses de clase (burocratismo). Esto se relaciona con la estructura y dinámica de los partidos, las cua-

les dependen de las condiciones concretas en que ellos se desarrollan.

Con estos antecedentes es posible comprender dos problemas que ya se presentaron en la revolución rusa y que reaparecen en la revolución chilena, aunque con distinto énfasis y contenidos. Alrededor de 1922 el dirigente revolucionario León Trotski criticó el excesivo predominio de la dirección del Partido en el proceso revolucionario y preconizó una mayor participación directa de la Clase a través de los organismos de masas, aduciendo que sólo así se lograba el real poder de la clase trabajadora y la verdadera Revolución. En la revolución chilena son muchos los que critican la excesiva participación del Estado en detrimento de los organismos de masas u organizaciones directas de la clase. En este contexto se ubica la consigna: las empresas para los trabajadores y no para el Estado. Ambas posiciones reaccionan contra un defecto similar... y cometen un error igualmente similar.

Reaccionan contra la tendencia burocrática que le asigna cierta autonomía y excesivo poder a la acción partidista y estatal sobre la clase trabajadora. Pero al hacerlo pretenden plantear una falsa distinción y a una oposición entre la clase y los partidos y entre la Clase y el Estado manejado por los partidos proletarios. De hecho cometen el error de creer que la acción de clase es sólo la acción parcial de grupos y olvidan que es mucho más importante el poder general como clase. De esta manera al crear una oposición artificial entre los intereses parciales y los generales de la clase dificultan seriamente el proceso revolucionario especialmente en una situación en que está en pleno juego la lucha por el poder de los trabajadores. Esto explica el entusiasmo que pone la oposición en acentuar estos conflictos, ya que, aunque nunca ha creído

en los intereses de los grupos laborales, ve ahora en ello una buena oportunidad para ponerle dificultades a la revolución proletaria cuyo impedimento es su objetivo principal como también su éxito es el objetivo principal de los trabajadores.

Lo señalado sobre los partidos se aplica al Estado que es el instrumento por el cual domina una clase determinada. Cuando el Estado es dominado por la clase capitalista, tanto la acción parcial de los trabajadores como su acción global como clase, luchan contra el Estado en la medida que expresa intereses opuestos a los suyos. Pero cuando el Estado es dirigido por los partidos de la clase trabajadora la acción general de la clase se expresa en el control del Estado y el sentido de la acción parcial debe variar, ya que no es acertado pretender los intereses parciales por encima de los generales. En la actual situación de Chile el Estado es transicional y se llama popular porque aunque no es la expresión cabal del proletariado, éste domina en el Ejecutivo que es el que dirige la economía y la transformación global del sistema. Por lo demás ya hemos visto que en el período de transición el Estado es expresión del conjunto de trabajadores y es utilísimo aparato de dominación para imponer el cambio necesario. Por esa razón la propiedad social de los trabajadores se traduce concretamente en propiedad estatal y la dirección de la clase trabajadora se traduce en la dirección estatal de la economía como expresión de los partidos de esta clase. Sólo con la abolición de las clases sociales se extinguirá el Estado como aparato represivo.

No obstante, es efectivo que pueden asomar tendencias burocratizantes y es necesario que la clase trabajadora tome providencias y adopte medidas al respecto. Estas tendencias se

manifiestan de dos maneras: primero, como tendencia a considerar en forma absoluta como acción de clases a la acción partidista y estatal menospreciando la acción y responsabilidades directas de los organismos de masas, lo que se combate mediante la participación efectiva de los trabajadores y la distribución racional de funciones; segundo, como tendencias al dirigismo descendente de los partidos y a extender la acción de éstos más allá de lo necesario.

La Unidad Popular, la lucha por el poder y el momento actual

Los problemas generales que acabamos de analizar se presentan en formas muy concretas en el actual proceso chileno. El hecho de que podamos hablar del comienzo de la Revolución se debe a que el 4 de septiembre de 1970 fue elegido un Gobierno integrado por una alianza de partidos dispuesta a poner las bases para la construcción del Socialismo en Chile. Para comprender la naturaleza de la Unidad Popular y la situación actual es necesario recordar las relaciones entre clases y partidos que se traducen en la correlación de las fuerzas políticas.

Las *fuerzas políticas* se consideran agrupadas de diversas maneras. Fundamentalmente se distinguen las fuerzas del proletariado y las de la burguesía, ya que son las dos clases antagónicas de la sociedad, pero el panorama real está lejos de responder a esta simplificación general y ello por dos razones.

Primeramente porque la formación de las clases en una sociedad es un largo proceso en el cual se van presentando fases que originan situaciones específicas dentro de cada clase

y aún sectores que no se identifican plenamente con algunas de las clases fundamentales. Así dentro del proletariado existen los obreros de empresas tradicionales (de bajas rentas), los obreros de empresas modernas, los trabajadores de servicios, los empleados administrativos y técnicos, el campesinado (con sus distintas situaciones). En la burguesía hay diversos niveles e incluso restos de la oligarquía terrateniente. En situaciones aparentemente intermedias se encuentran los trabajadores independientes, los pequeños empresarios y los profesionales dependientes de la burguesía, todos los cuales se pueden considerar o bien como trabajadores insuficientemente proletarizados o bien como pequeña burguesía que tiende a identificarse con la clase dominante. En la historia de Chile tiene particular importancia el desarrollo desigual dentro del proletariado de los sectores tradicionales de baja renta y de los sectores modernos mejor rentados y con gran protección social. Estos últimos, junto con los empleados, han sido distinguidos y defendidos por leyes especiales (Código del Trabajo, previsión, sueldo vital), con lo cual *configuran los sectores medios* que, siendo trabajadores proletarios, tienen sin embargo una extraordinaria importancia específica tanto objetiva (situación real) como subjetiva (conciencia de capas medias).

En segundo lugar está el hecho de que las posiciones políticas de las clases y sectores sociales están interferidas por influencias ideológicsa que no siempre corresponden a su situación real. Tal es el caso de los sectores medios, que no se sienten proletarios y creen, equivocadamente y con muchos pretextos, que no les conviene el socialismo. De este hecho surge esa agrupación de fuerzas políticas en izquierda, derecha y centro, la cual oscurece la comprensión de la situación real.

Pero, ¿cuál es el panorama concreto de las fuerzas políticas en Chile? Es sabido que en nuestro país existen numerosos partidos pero históricamente podemos apreciar corrientes muy constantes en la política nacional. Aproximadamente un tercio se ha mostrado durante los últimos años decidido partidario del socialismo, fuerza que en el actual proceso (septiembre-abril) llegó a crecer hasta un cincuenta por ciento del electorado. Hay otro tercio que es decididamente antisocialista, ya sea porque constituye la burguesía (10%) o ya sea porque está decididamente ideologizado en una actitud anticomunista. Por último ha habido un tercio que se declara partidario de cambios moderados: tal tercio es el que se ha ido definiendo en el proceso, ya sea incorporándose a las fuerzas revolucionarias o bien se ha mantenido en posiciones reformistas, especialmente en la Democracia Cristiana. La evolución electoral de este tercio, que se ha mostrado inestable, es decisiva para la suerte del proceso y allí se explica el interés de la reacción por mantenerlos de su lado.

En este panorama destaca el hecho de que en Chile en forma sólida y progresiva se ha ido configurando una coalición de clases y partidos que coinciden en los objetivos de liquidar el capitalismo y terminar con la subordinación al imperialismo y procurar una nueva forma de organización social más justa, eficiente y democrática. Estas coincidencias mayoritarias son las que dieron origen a la Unidad Popular y permitieron la iniciación del camino chileno hacia el socialismo.

Aunque coincidentes en lo esencial, existen dos tendencias interpretativas de la Unidad Popular, y del actual Gobierno.

La primera visión, que consideramos *mecanicista*, centra la explicación en un análisis de la correlación de fuerzas sociales en Chile siguiendo un esquema muy general. Según esta

apreciación lo crucial en Chile es que la correlación de fuerzas no está aún madura para intentar una revolución proletaria y sí en cambio hay condiciones para que se haya producido una alianza de clases coincidentes en la lucha contra el imperialismo, los monopolios y los latifundios. En esta alianza se unen el proletariado (PC y PS) y la pequeña burguesía (PR, Socialdemócratas, MAPU e Independientes), manteniéndose dentro de ella el predominio o hegemonía del proletariado. Debido a la configuración de esta alianza los objetivos de esta etapa, que es todo el Gobierno de Allende (seis años), deben ser aquellos comunes a las clases aliadas. En los hechos, tales objetivos constituyen a la vez una especie de complementación de la revolución democrático burguesa (completar la independencia nacional y profundizar la democracia) y una preparación para la revolución socialista (preparar su base material). Sólo a través de esta etapa es posible una maduración de las condiciones para que el proletariado alcance el poder e impulse la revolución proletaria. Esto supone una visión optimista sobre el desarrollo progresivo de ella en las condiciones señaladas.

La interpretación *dialéctica*, en cambio se basa fundamentalmente en el análisis real y específico del proletariado en Chile y en las condiciones particulares de la sociedad chilena en la actual etapa de la realidad mundial. Según ella, lo crucial es que el proletariado en su evolución se ha ido expresando en diversos partidos según las coyunturas de estas fases y actualmente ha llegado en su nivel político a una unificación en función del objetivo fundamental: la construcción del socialismo. Esto significa que los diversos sectores del proletariado (tradicional, moderno, campesino, empleados, etc.) se han ido expresando en diversos partidos (Comunista, Socia-

lista, Radical, Democracia Cristiana, MAPU, MIR, etc.), algunos de los cuales asumieron posiciones políticas netamente reformistas explicadas en parte porque junto con el proletariado agruparon a otras clases, tales como la pequeña y mediana burguesía. Debido a la incapacidad del reformismo para superar nuestros problemas y gracias al constante y sostenido esfuerzo esclarecedor de los Partidos Comunista y Socialista, los dirigentes de esos partidos se han convencido de que no queda otro camino que el socialismo y han promovido la reunificación política del proletariado. La superación de los inevitables resabios reformistas está garantizada por los partidos proletarios y por la creciente conciencia política de los dirigentes de los otros partidos. Es obvio que la UP debe aún incorporar a muchos trabajadores que aún se mantienen, por diversas razones en posiciones reformistas e incluso netamente reaccionarias. A esta situación se agrega que las condiciones específicas de Chile aconsejan una forma gradual y legal de transición al socialismo a fin de evitar crisis económica y políticas que son evitables y que de producirse tendrían consecuencias impredecibles y en todo caso indeseables. En las condiciones chilenas otra foram de cambio tendría escasas posibilidades de éxito.

La visión mecanicista se basa en un análisis de clases simplista y esquemático. La visión dialéctica se basa en un análisis de la evolución real de las clases en nuestro país y de las condiciones específicas de nuestra realidad. *Para la visión mecanicista la Unidad Popular es esencialmente una alianza estratégica de clases* y dentro de ella se da la unificación política del proletariado; *para la visión dialéctica la UP es esencialmente el bloque político unitario del proletariado* y adicionalmente implica la alianza táctica con otras clases. Para la vi-

sión mecanicista el Gobierno de Allende es una especie de prerrevolución; para la visión dialéctica es la etapa inicial de la revolución socialista, etapa que tiene características que le impone la realidad chilena.

La visión mecanicista puede tener proyecciones negativas, tales como el confundir la *revolución legal* con una *revolución a medias*. La primera es factible, pero la segunda está condenada al fracaso porque no es posible mantener por mucho tiempo situaciones indefinidas y altamente tensas. Igualmente se comete el error de tener un optimismo irreal respecto a la actitud de la burguesía como si fuera posible actualmente separa las reacciones de los capitalistas. Pero el error más serio del mecanicismo consiste en considerar a algunos partidos de la UP, en teoría como aliados estratégicos y en los hechos como aliados tácticos que son instrumentalizados transitoriamente. Tales partidos se dan cuenta de esta visión que no corresponde a un análisis marxista de nuestra realidad y ello debilita enormemente el frente político que sustenta al actual Gobierno e incluso crea reticencias en sectores que pueden incorporarse a él.

La visión dialéctica en cierto modo refleja la intuición de la tesis socialista del Frente de Trabajadores pero, por el mérito político del PC, incluye a los trabajadores que se consideran de los sectores medios, ello sin olvidar que el proletariado industrial es la única fuerza netamente revolucionaria cuyo predominio en la unidad garantiza el carácter revolucionario de ella. Sería un error tomar la visión dialéctica como una justificación teórica del reformismo dentro del actual proceso, ya que sostiene la continuidad socialista del proceso y su acentuación en la etapa actual sobre la base de la elevación de la conciencia política de los trabajadores que la

respaldan. La visión mecanicista aparece en cambio, como una simulada reactualización de las posiciones socialdemócratas de E. Bernstein.

Podría decirse que en nuestra situación se ha concretizado en la Unidad Popular lo que decía A. Gramsci: "Este principio tiene importancia política porque la verdad teórica, según la cual cada clase tiene un solo partido, está demostrada en los cambios decisivos por el hecho de que los distintos agrupamientos, que se presentaban cada uno como partidos "independientes", se reúnen y forman un bloque único. La multiplicidad existente al principio era sólo de carácter "reformista", o sea, concernía a cuestiones parciales; en cierto sentido era una división del trabajo político (útil en sus límites); pero cada parte presuponía a las otras, tanto que en los momentos decisivos, cuando las cuestiones fundamentales fueron puestas en juego, la unidad se formó, el bloque se verificó" (*).

La Unidad Popular no es ni una simple alianza de partidos ni el partido único del proletariado. Constituye una forma de unificación política de una clase y puede convertirse en una nueva fórmula de organización política, siempre y cuando la unidad se imponga sobre la lucha interna por la hegemonía partidista. La naturaleza de la división de partidos dentro de la UP debe ser distinta de la que opera tradicionalmente entre los partidos, no puede tener el mismo carácter competitivo la diferencia entre el PC y el PS que las diferencias entre el PC y el PN. Más aún el éxito mismo de la experiencia chilena exige acentuar la unidad política del proletariado sobre toda otra tarea política. Desgraciadamente esta

(*) A. Gramsci, *Maquiavelo y Lenin*, Santiago, Nascimento, 1971, pág. 59.

necesidad no ha sido bien comprendida por todos ni ha sido bien desarrollada esta fórmula unificadora que debería darle carácter de partido a la Unidad Popular misma.

La formación y consolidación de la Unidad Popular ha tenido la virtud de permitir la iniciación del proceso revolucionario chileno y de interpretar las condiciones particulares de Chile para hacerlo por una vía que resulta menos dura que otras. Pero también tiene sus desventajas y encierra peligros que pueden ser tan críticos como los de otras experiencias revolucionarias.

La primera desventaja es *el peligro de que el pluripartidismo se convierta en una dirección múltiple del proceso revolucionario;* una cosa es el pluralismo partidista en la dirección revolucionaria y otra cosa la multidirección de ella. La Unidad Popular debe significar que la revolución chilena debe tener una sola dirección, lograda y enriquecida con los aportes de los distintos partidos, pero única en la orientación de las tareas revolucionarias. Ya hemos llamado la atención sobre el peligro que representa que algunos grupos políticos del proletariado no tomen con suficiente dedicación los quehaceres revolucionaros alienados con la perspectiva de que a la postre se va a jugar una estrategia distinta de la que acuerde la UP. Una cosa es ayudar a hacer las necesarias correcciones y adecuaciones a la estrategia y otra cosa es "jugar un partido distinto" que el de las fuerzas orgánicas del proletariado.

El segundo y más grave problema es el desarrollo del *sectarismo* y del *oportunismo* en el seno de los partidos populares. El propio Presidente Allende ha indicado que el sectarismo es el peor enemigo interno de la revolución. La heterogeneidad de posiciones de clase, las tradiciones políticas nacio-

nales y el afán de cada partido por tener más incidencia en la UP o simplemente por subsistir han llevado a que muchos militantes le asignen más importancia a la lucha entre los partidos populares que a la lucha común contra el enemigo principal. De esto tienen conciencia todos los partidos y hacen declaraciones contra el sectarismo, pero en los hechos no se toman medidas concretas y esta desviación sigue operando en todos los niveles. A ello se une el oportunismo que proviene de la larga tradición reformista de la política nacional. Los militantes están acostumbrados a considerar la conquista del gobierno no como una conquista del poder de la clase trabajadora sino como conquista de posiciones dentro del Estado para ejercer el poder de grupos y usufructuar de él; ya hemos dicho que muchos confunden la batalla de la producción con la batalla de la repartición del poder del Estado y luchan desesperadamente no por construir el socialismo sino por ubicarse y ubicar partidarios en puestos que impliquen poder y mejor renta formando zonas de influencia en el creciente sector público en abierta contradicción con lo que dice el Pacto de la Unidad Popular: "Las fuerzas populares declaran su decisión de evitar absolutamente la parcelación y el establecimiento de zonas de influencia en las diversas reparticiones de la Administración Pública". El sectarismo y el oportunismo tienen un doble efecto: deterioran y dificultan seriamente el éxito económico del Gobierno y dificultan la ampliación de sus bases políticas y sociales, desalentado y enajenando la necesaria y posible incorporación de nuevos sectores de trabajadores. En la revolución chilena las divisiones internas pueden constituirse en un peligro más serio que la propia reacción burguesa.

Todos estos hechos se relacionan con la inquietud de

algunos de acelerar las condiciones para la configuración del *partido único del proletariado*. A ello se agregan los recientes cambios políticos como la formación de la Izquierda Cristiana y el fraccionamiento del PR para formar la conciencia de que debe haber un reajuste en las fuerzas de la Unidad Popular y en general en la política nacional. Sobre el partido único los dirigentes parecen coincidir en el planteamiento del PC que veremos más adelante expresado en las palabras de su secretario general con el cual coinciden otros partidos y especialmente el MAPU al decir: "Pensamos que esta alianza fundamental puede desarrollarse en la perspectiva de un partido único del proletariado, producto natural y necesario de los combates comunes. Sin embargo, las condiciones actuales... no permiten convertir este objetivo fundamental en un objetivo inmediato". Es decir: lo que está en primer lugar de la tabla es consolidar la Unidad Popular y hacer única la dirección de la revolución. La formación del partido único dependerá de la evolución real del proceso, la cual nadie puede adelantar.

En cambio la necesidad de un reajuste de las bases políticas del Gobierno y por lo tanto de la Unidad Popular parece ser un problema más imperioso determinado por los recientes acontecimientos políticos y la naturaleza del momento actual lo que debemos analizar cuidadosamente.

Para comprender el *momento actual* es necesario analizar el panorama general del proceso revolucionario y el panorama específico de las fuerzas políticas.

El *panorama general* se puede resumir en los siguientes hechos claves:

a) La Unidad Popular controla el Ejecutivo y el mando de las instituciones estatales, es minoritaria en el Congreso

(por unos diez diputados y tres senadores) y no cuenta con el aparato legal, judicial ni contralor; las Fuerzas Armadas han reafirmado su decisión de respetar la Constitución y el control mismo del Gobierno parece bastante sólido;

b) A pesar de esta situación y utilizando el amplio poder que tiene en Chile el Ejecutivo, que reside en el Presidente, el Gobierno Popular ha iniciado un proceso de transformación del sistema económico y de cambio del poder, ya sea obteniendo leyes de nacionalización (minería) o ya sea utilizando sus facultades de dirección económica y de requisición en los casos precisados por la ley. Este proceso se ha tratado de compatibilizar con medidas democráticas tendientes a reactivar la economía, detener la inflación y redistribuir el ingreso en orden a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores;

c) La ejecución de esta política, que se inició con bastante celeridad, ha encontrado serias dificultades a diez meses de Gobierno. Las principales dificultades son: carencia de herramientas legales para socializar las empresas (industriales, comerciales, financieras) y al mismo tiempo controlar realmente el proceso económico y evitar olas especulativas o mal uso de los excedentes; dificultades de producción y abastecimiento derivadas del proceso mismo de transformación y de algunos factores circunstanciales y agravadas por la política saboteadora y la propaganda reaccionarias; desarrollo del sectarismo y del oportunismo en el seno de los partidos populares, lo cual dificulta el éxito de las empresas y servicios estatales y crea una imagen adversa en los trabajadores que no habiendo votado por la UP deberían sumarse a la tarea común de transformar el país en beneficio de los trabajadores.

d) Los hechos anteriores han introducido tendencias re-

cesivas en la dinámica del proceso revolucionario. El fuerte impulso inicial y la tradición "presidencialista" del electorado chileno hicieron subir la votación de la UP de un 36,5% en septiembre de 1970 a un 50,5% en abril de 1971, lo cual hizo hablar de un "empate político" en el país. Sin embargo actualmente hay índices de que las dificultades económicas y las tradiciones políticas negativas han hecho detenerse y tal vez retroceder el apoyo social al Gobierno. De esta situación se ha aprovechado la reacción para desarrollar una poderosa contraofensiva que tiene como propósito formar la imagen de fracaso del Gobierno y consolidar las tendencias derechistas de algunos sectores del centrismo democratacristiano, lo que ha conseguido al precio de marginarse de ese partido ocho parlamentarios más consecuentes con los intereses populares. Con ello a la vez la derecha logra detener el avance de la socialización de la economía utilizando argucias jurídicas y políticas.

El punto crítico en que se encuentra el proceso chileno reactualiza el problema de la factibilidad de la vía chilena al socialismo. Creemos que en lo substantivo mantiene su plena validez la estrategia de la Unidad Popular en el sentido de plantear una revolución gradual, legal y pluralista. Gradual en el sentido de no pretender hacerlo todo de la noche a la mañana y en el sentido de no prescindir de la compleja realidad del país; legal en el sentido de utilizar las leyes para quitar a la burguesía un poder que no le corresponde y ubicarla en su exacto lugar en la sociedad; pluralista en el sentido de que coincidan distintos partidos en un objetivo y tarea común. Pero ello no puede significar pretender una revolución legal sin poder político substancial, ni una graduación espasmódica del proceso que lleve una línea zigzagueante ni

mantener viejas tradiciones pequeño-burguesas de utilizar el Gobierno con fines personales o de pequeños grupos.

Para dominar legalmente a la gran burguesía y lograr éxito en el desafío económico, el Gobierno Popular necesita de tres o cuatro herramientas legales que sólo un Congreso favorable puede darle. Estas herramientas son: Ley de Socialización de Empresas y de Participación de Trabajadores; Ley de Racionalización de Rentas, Reforma Tributaria y Ahorro; Ley de Delitos Sociales que impida la especulación, el sabotaje y el desorden social. Junto con ello se hace necesaria una Reforma Constitucional que permita realmente gobernar a la mayoría popular. Junto con estas herramientas se requiere de una actitud real de unidad proletaria de los partidos y sobre todo una mayor eficiencia y responsabilidad de cada una de las personas para llevar adelante el proceso.

El problema del *control del poder político* se da al nivel de las elecciones masivas y al nivel de las directivas políticas. Concretamente lo primero significa luchar para la mayoría electoral en las elecciones parlamentarias de 1973 y lo segundo estrujar todo lo que pueda dar el actual panorama parlamentario para conseguir tales leyes. Para comprender las perspectivas de una y otra salida es necesario examinar cuál ha sido la evolución de las principales fuerzas políticas en estos doce meses.

La Derecha, que se asustó en un principio y trató de acomodarse después, no ha tardado en darse cuenta de que ella no puede aceptar una revolución verdadera y progresiva por muy legal y pluralista que sea y al mismo tiempo ha captado las debilidades del Gobierno Popular, todo lo cual la ha llevado a tomar una actitud ofensiva, cuyo objetivo principal es doble: por un lado impedir el avance del proceso y por otro

hacer lo posible para que fracase el actual Gobierno y así tener la esperanza de recuperar la parte del poder perdido, escudada detrás de la Democracia Cristiana. En este panorama los intentos sediciosos no constituyen lo esencial, sino que son sólo tácticas complementarias en el caso de que el Gobierno acelere el proceso o como un mecanismo para formar la imagen de fracaso y de caos de la actual experiencia.

La Democracia Cristiana se ha sentido desde un principio como árbitro de la situación, debido a su posición parlamentaria. Este arbitraje que en un principio pareció favorecer las posibilidades de la vía chilena al socialismo ha virado hacia una posición en que lo substancial es contribuir a que el proceso no siga adelante con la evidente esperanza de que el fracaso de este Gobierno le permitiría volver al poder con el apoyo de la Derecha. Este planteamiento práctico tiene gran eco en las bases oportunistas de la DC, pero no es compartido por todos sus dirigentes, como ya lo demostraron los que formaron la Izquierda Cristiana. Esta obsesión por la reconquista del poder dificulta aún la claridad de análisis de los poderosos sectores de ese partido que son sinceramente cristianos y anticapitalistas; incluso ellos aún mantienen la ilusión de encabezar un proceso revolucionario con el apoyo de la UP. Nos parece que el momento actual y las iniciativas próximas terminarán por definir a los políticos conscientes y sinceros que hay en ese partido; para eso ya no les servirán declaraciones unitarias o folletos sobre el comunitarismo. La historia juzga de la sinceridad de los hombres a base de hechos concretos y substantivos.

Las fuerzas de la UP, aunque decididas a llevar adelante el proceso sufren en gran parte el desconcierto natural que origina al situación crucial en que éste se encuentra. Es esen-

cial mantener la serenidad suficiente para evitar derrotismos suicidas o transiciones con el oportunismo; ello implica un cambio radical en las actitudes de los partidos para liquidar sectarismo y oportunismo. Sin embargo, a pesar de las predicciones de la reacción, la unidad de los trabajadores se ha fortalecido en vez de debilitarse.

La gran masa de la gente que no tiene una definición clara frente al proceso se debate entre el interés por seguir adelante con cambios necesarios, pero dentro de la moderación planteada, y el desaliento que provocan las dificultades, las cuales son ampliadas y tergiversadas por la reacción con el fin de sacar dividendos: la tergiversación mayor consiste en ocultar el hecho clave y aturdidor con problemas secundarios.

En este panorama lo esencial es *procurar las fórmulas para superar la situación*. Estas fórmulas dicen relación en primer lugar con problemas de control del poder y específicamente del Congreso y en segundo lugar con problemas de actitudes partidarias y personales para superar las deficiencias evidenciadas.

Respecto al problema del control del poder político existen varias alternativas, pero preferimos referirnos a tres substanciales.

La primera es que los parlamentarios y dirigentes realmente cristianos y revolucionarios que aún hay en la DC se convenzan de que en esta coyuntura lo honesto es mejorar la experiencia de los trabajadores y no tratar inútilmente de liquidarla, pues lo más que harán será postergarla por un tiempo y a un precio muy alto. Si tales parlamentarios se unen con la Izquierda Cristiana para formar una especie de Unión Cristiana Socialista, el Gobierno Popular tendría el control

necesario del poder para llevar adelante el proceso con los aportes perfeccionadores que tal fuerza pueda proporcionar.

Esta solución implica un cierto reajuste de la base política del Gobierno, lo cual de todas maneras se hacía necesario, debido a los últimos acontecimientos. Ya desde un principio era evidente la diferencia entre los grandes partidos (PS, PC y PR) y las agrupaciones menores y ello se complicó cuando fueron ocho los grupos de la UP, lo cual ya es una degeneración del pluralismo y lleva las luchas internas a límites insostenibles. El senador Luengo ha dado una versión que parece simplificar y expresar adecuadamente el ideal de lo que debe constituir la Unidad Popular: el Partido Socialista, el Comunista y la Social Democracia (incluyendo a las dos fracciones radicales y a la Izquierda Cristiana). Creemos que tal ideal no corresponde bien a la realidad y parece más exacto señalar que hay cuatro fuerzas principales que apoyan la actual revolución y que, de concretarse la tesis anterior, tendrían muy similar poderío parlamentario (cada una alrededor de siete senadores y de veinte diputados) ellos serían: Partido Socialista, Partido Comunista, Unión Social Demócrata y Unión Cristiana Socialista. Alguien podría señalar que esto implicaría un retroceso del proceso por existir equiparidad entre fuerzas revolucionarias y reformistas, pero la verdad es que las directivas, tanto de la eventual Unión SD como especialmente de la Cristiana Socialista están muy lejos de ser reformistas y en la práctica resulta más reformista el oportunismo de los partidos revolucionarios. Creemos que la firmeza de la alianza PS y PC, más la seriedad de dirección de otros partidos (el MAPU por ejemplo), superan cualquier reserva reformista al respecto. La revolución chilena debe buscar fórmulas que eviten tanto las tendencias metafísicas de modelos idea-

les como las tendencias pragmáticas que caen en el oportunismo de buscar el poder por el poder.

La segunda alternativa sería continuar tal como estamos, tratando de jugar con las cartas que se tienen y esperando el eventual apoyo de la DC a algunas iniciativas del Gobierno y así prepararse a dar una lucha decisiva en las elecciones de 1973. Pareciera que esta es la solución preferida del Presidente de la República, sobre la base en confiar en su habilidad política.

La tercera alternativa combinaría con la anterior la presentación de un proyecto de Reforma Constitucional que a lo menos implique pactos electorales y renovación total del Senado (lo de la Cámara Unica no es tan importante, salvo como mecanismo de apoyo popular). Al parecer esta es la solución favorita del PS y es la más comentada en círculos políticos.

Creemos que las crecientes dificultades que surgen de la falta del control de los problemas económicos y sociales y particularmente de la lucha gremial dejarán en condiciones muy precarias a la UP en las elecciones de 1973 si no se logra una Reforma Constitucional pues, aunque obtuviese mayoría, no lograría controlar el Parlamento con las actuales reglas del juego. Por esta razón creemos que se debe intentar la primera solución (que no excluye a la tercera) y en todo caso debe plantearse la tercera, tanto en lo que se refiere a la Reforma Constitucional como en cuanto a impulsar en forma acelerada los proyectos legales que le proporcionen al Gobierno las herramientas indispensables para salir adelante.

Sin duda que hay que mantener la tesis de que no se trata sólo de asegurar el éxito económico o la estabilidad política del actual Gobierno sino de *asegurar el curso revoluciona-*

mo del proceso. Por esta razón ninguna solución es tal si tiene como resultado la congelación del proceso revolucionario. Hemos sostenido que la revolución chilena es una sola y que el Gobierno Popular es su iniciación y no una simple etapa previa a la revolución, de allí que lo necesario y la razón de ser de los movimientos políticos es asegurar el curso socialista del proceso. Sin embargo, queda claro que esta radicalización del proceso y este planteamiento de ofensiva se tornan posibles sólo a través del manejo del poder político y electoral.

Pero mirando las cosas desde el punto de vista de la gran masa de chilenos la solución a la crisis revolucionaria chilena tiene una enorme proyección. El más grande error es creer que el fracaso de Allende sería similar al de otros gobiernos anteriores. Esto parece olvidar un hecho crucial: que es primera vez que las fuerzas productivas organizadas, la mayoría nacional armada con la teoría revolucionaria, están dominando el Ejecutivo y que de hecho ya se ha ido entregando poder a los trabajadores organizados. Esto significa que el sueño de echar atrás el proceso, ya sea mediante la vuelta de la DC o a través del expediente de la contrarrevolución armada, no podrá significar una solución ni una pacificación, sino por el contrario un agravamiento de la situación hasta límites insospechados. No podemos negar que también una tendencia revolucionaria hacia un conflicto armado o una deformación staliniana implicarían un futuro oscuro para la nación. De allí entonces que el gran desafío y el interés común de los chilenos es mejorar la revolución, hacer posible el camino chileno hacia el socialismo y asegurar que sus modalidades tengan el carácter de una verdadera democracia socialista con la posibilidad de todos de participar y colaborar en la construcción social y en la obtención del bienestar común.

Brevemente se puede resumir la situación en los siguientes hechos. En Chile actualmente no sólo hay un nuevo Gobierno, sino que se ha iniciado un proceso revolucionario que cambia totalmente el cariz de nuestra política en que la lucha entre partidos y los detalles se pierden frente al conflicto frontal desencadenado entre las clases fundamentales de nuestra sociedad. Una revolución es de por sí un proceso doloroso y creciente en intensidad; la decisión de los dirigentes del proletariado es que ella se haga con el menor costo social y en forma que no implique una violencia generalizada en nuestro país, pero ello no significa que se puedan hacer concesiones o que se tenga que ir al compás de lo que exija la burguesía porque ello sería renunciar a la revolución. La debilidad clave de las fuerzas revolucionarias es la falta del poder político que permita el cambio de sistema en las condiciones propuestas. En esta coyuntura es decisivo el papel de las fuerzas que han sido tradicionalmente centristas, las cuales deberán definirse o en contra o a favor de los trabajadores. Actualmente estas fuerzas usan mil pretextos para ubicarse al lado del capitalismo: el fracaso del Gobierno, el sectarismo, las deformaciones del socialismo, etc. Todo ello es secundario y el proceso lo evidenciará; ningún pretexto permite ocultar lo principal. Hay sin duda problemas, defectos, pero ellos deben ser resueltos desde dentro de las fuerzas revolucionarias, pero el pretender hacerlo desde afuera es simplemente luchar contra los trabajadores y en beneficio de la burguesía. La imposibilidad de tener el poder político sólo significará trasladar la lucha a un campo principalmente económico y social y desencadenar en Chile un largo proceso de conflictos violentos e incontrolables. De allí que la tarea de todo el que diga estar al lado de los trabajadores no puede ser otra

que sumarse a sus fuerzas para triunfar en lo principal y para enmendar, con legitimidad, lo que es necesario mejorar. El proceso está iniciado y no puede detenerse; lo que puede variar es su modalidad.

La movilización popular y el papel de los organismos de masas

La experiencia revolucionaria señala que cuando un proceso se encuentra en una crisis lo que decide la situación es la *movilización del pueblo*. Con ello se recuerda que el verdadero protagonista de las revoluciones es el pueblo y que no se pueden reducir a una cuestión de decisiones de alto nivel ni a tradiciones electoralistas y de "muñequeo". Más aún, es cierto que la tendencia a resolverlo todo desde los altos niveles tiene dos consecuencias muy negativas: proporciona las condiciones objetivas para las deformaciones burocráticas y asigna un alto grado de debilidad a la revolución frente a las tentativas contrarrevolucionarias, ya que es fácil derrocar a un gobierno pero muy difícil liquidar a un pueblo en pie de guerra.

Esta posición es correcta, pero es fácil deformarla por una errada apreciación de los procesos revolucionarios. Si bien es cierto que hay dirigentes que no valorizan adecuadamente la movilización popular, esto no autoriza a confundir el panorama global y pretender desligar y aun oponer la movilización masiva con la lucha que se libra a nivel del control político del Estado. Es equivocado asignarle a la movilización popular, entendida como lucha directa de las masas, una autonomía y valor que no tienen. La tesis correcta es que la revolución exige como condición indispensable la movilización

directa del pueblo, pero que ella es inseparable y forma un solo todo con la dirección política de la revolución.

Bien entendida la movilización popular es la acción organizada del proletariado para conquistar el poder. Ella se da tanto al nivel del control del Estado como al nivel del control de las fábricas, fundos, poblaciones, instituciones locales, etc. Uno y otro nivel constituyen en conjunto la movilización popular y ambos niveles deben marchar en la misma dirección, pero en el lenguaje corriente muchos entienden por movilización popular sólo el nivel de la lucha directa de las masas. El grado de movilización del pueblo depende de la correlación de las fuerzas sociales, el grado de conciencia revolucionaria y del desarrollo de órganos adecuados para concretizarla. Por ello en este análisis incluimos esos aspectos empezando por una visión del panorama de las fuerzas sociales frente al proceso revolucionario.

Las revoluciones producen una elevación de la conciencia de clase y una radicalización de las posiciones de todo el mundo. Los trabajadores descubren sus verdaderos intereses y se van incorporando al quehacer revolucionario, a su vez que la burguesía se reagrupa contra la revolución y el centro se ve obligado a decidirse por una u otra posición. Pero cuando los procesos son moderados y legales como el nuestro la situación no es tan clara. Veamos como se presenta la dinámica en las posiciones de los principales *sectores sociales*: obreros industriales, campesinado, capas medias, sectores femenino y juvenil.

Donde mejor se confirma la teoría revolucionaria es en el *proletariado industrial*, ya que no hay duda que el proceso de recuperación de las empresas ha elevado la conciencia de clases de ese sector y ha llevado a los trabajadores a asumir

responsabilidades concretas en el desafío de administrarlas para el éxito común. Las actitudes reaccionarias de unos pocos trabajadores son casos excepcionales y explicables: así de tres mil quinientos trabajadores que tenía una empresa los antiguos patrones favorecían a unos cien en perjuicio de los demás y esos cien, naturalmente, son los que prefieren volver al antiguo sistema. Esto acontece en casi todas las empresas socializadas. En cambio es más importante la existencia de algunos sectores que por trabajar en empresas más productivas o estratégicas estaban acostumbrados a un poder de presión privilegiado y obtenían reajustes mayores que se esfumaban en la inflación, tal es el caso de los trabajadores del cobre y de otras empresas e instituciones, situación que aprovecha la reacción para empujarlos demagógicamente contra el Gobierno Popular con el fin de dificultar la lucha general de los trabajadores.

En los *sectores medios* formados por los empleados administrativos y técnicos, de gran volumen en la realidad chilena, el panorama es similar al del proletariado de empresas modernas, aunque más dinámico. En estos sectores predominan claramente las vacilaciones, las inseguridades por falta de adecuada educación política y por la alta sensibilidad a las imágenes que amplifican los sectores opositores a la revolución. Sin embargo, la perspectiva en este sector es más bien optimista porque había sido muy estancado por el sistema anterior y hasta el momento no ha perdido nada, de manera que si se hace una tarea de explicación del proceso y se dan garantías sobre seguridad y promoción ocupacional (Estatutos) es perfectamente superable la vacilación de ellos y lograr un mejoramiento substancial de la correlación de fuerzas en favor de los intereses de los trabajadores.

En el *campesinado* el panorama es por demás complejo y difícil. Esto no debe extrañar, ya que ha sido común a las revoluciones aunque en el caso chileno tiene una incidencia cuantitativa y cualitativa mucho menor. Entre los campesinos hay quienes son partidarios de los antiguos patrones, los que son fervorosos partidarios del freísmo, los que participan de la UP y los que han sido conquistados por las posiciones más radicales del movimiento popular.

Las *conductas políticas y electorales de las mujeres* preocupan a todos. Lamentablemente no preocupan con igual intensidad la situación objetiva de la mujer chilena, especialmente la de los sectores populares, lo cual explica sus conductas electorales. No es efectivo que la UP haya perdido electorado femenino, sino más bien se ha mantenido la antigua mayor disponibilidad de la mujer a preferir soluciones moderadas y reformistas. Por el contrario una ventaja es que la mujer es más constante en sus preferencias políticas y cuando se ubica en posiciones de avanzada es más difícil moverlas de ellas. Creemos que lo que falla es que no se han dado pasos substanciales para terminar con la tradicional postergación que ha sufrido la mujer popular que ha debido llevar el peso de la explotación capitalista y ahora de los aspectos difíciles del cambio. Además del desarrollo de salas cunas y jardines infantiles se hace indispensable tomar otras medidas decisivas como la previsión de las dueñas de casa, el aumento de la asignación familiar, la lucha contra la especulación, la atención sanitaria familiar y el establecimiento para las madres de reales vacaciones que no impliquen sólo el cambiar de lugar para realizar sus pesadas tareas.

Al revés de lo que cree la gente *la actitud de la juventud* frente a la revolución no es mucho más acentuada que la

de los adultos y más bien presenta las mismas tendencias que en el plano general. Una investigación sobre la votación de los jóvenes demuestra que su variación no es muy grande: en una comuna popular los jóvenes votaron por la UP en un 65% y los adultos en un 63%; en una de sector medio el 38% contra el 37% de los adultos y en una popular el 17% contra el 15% de los adultos. Y en la propia experiencia directa uno aprecia más bien la radicalización hacia la derecha de gran parte de la juventud estudiantil. Este fenómeno es muy complejo, pero debe llamar la atención, pues la garantía de la revolución está en las generaciones jóvenes. En este sentido ha sido ejemplar la actitud de algunas organizaciones juveniles en los trabajos voluntarios y la generosidad con que se desempeñan cuando les asignan tareas precisas y organizadas.

Este panorama que constituye la correlación real de las fuerzas sociales se traduce en las elecciones políticas y en la dirección y orientación de sindicatos, juntas vecinales, etc. Cada cual pone énfasis en sus respectivos triunfos y la verdad es que hay triunfos de unos y de otros. Lo grave no es que esté ganando la oposición, porque ello no es cierto: lo grave es el lento avance y la inestabilidad de las posiciones proletarias y ello sí que es cierto. En algunos casos, como el de los colegios profesionales (abogados, médicos, etc.) ello no debe extrañar ni preocupar porque se trata de grupos que estaban acostumbrados a gozar de los privilegios de explotación burguesa y naturalmente no les convienen la justicia ni la democracia que significa el poder de los trabajadores, pero sí debe preocupar el problema de los sectores acostumbrados a ejercer presión por reajustes especiales, ya que ellos son fácil presa de la reacción.

RESULTADOS DE ELECCIONES SINDICALES Y SIMILARES EN 1971

Por votaciones	*UP y fuerzas de Izquierda*	*DC y fuerzas de Derecha*
CAP, Sindicato único del Acero	1.750 + 780	1.610
El Salvador, Sindicato Obrero del Cobre	870 + 260	350 + 90
La Africana (Cobre)	320	90
Chuquicamata (Cobre elección comités paritarios)	784	1.425
CHILECTRA	2.297	655
Yarur (Delegados al Consejo de Administración)	2.700	340
Cemento Melón Calera	753	433
Obrero Ferroviarios	1.355	659
Empleados de El Teniente	347	439
Caja de EE. PP. y PP.	370	219 + 356
Caja de Crédito Prendario	406	270
CORA	742	993
Dirección de SNS	467	224 + 105
Banco de Chile	285	622
Banco Edwards	204	235
ENAP (Empleados)	303	378 + 59

Ministerio de OO. PP. (delegados)	182	88
Empleados Particulares (votos representativos)	25.088 + 10.738	5.428
Estudiantes Secundarios	13.287 + 3.268	15.050 + 2.826
Colegio de Periodistas	487	599
IANSA (Linares)	1.073 + 435	222

Por dirigentes:	*UP y fuerzas de Izquierda*	*DC y fuerzas de Derecha*
FENSA	4	1
FAMELA	4	1
El Romeral (Obreros del Hierro)	5	0
Empleados de Cemento Melón	2	3
Trabajadores de la Vivienda	8	5
Dirección del Trabajo	1	5
Refinería Ventanas	4	2
ENAMI	10	1
Textil Progreso (Consejo de Administr.)	5	0
Yarur (id)	3 + 2	0
Hirmas (id)	4 + 1	0
Empleados de El Tofo	1	3
Oveja Tomé	1	4
C.C.U.	5	0

Control de Sindicatos sin datos específicos:

Aprovisionamiento del Estado, Caja de Amortización, Cerro Negro (Hierro), María Elena (Salitre), Pizarreño, Ahorromet, Agua Potable, Cía. Andina, Constructora de Establecimientos Educacionales, Empleados de El Romeral.

Notas.—A menudo las cifras que expresan votos no corresponden a igual número de votantes, pues se vota por varios puestos y debemos dividirlas. Respecto a los sindicatos de el Cobre, sólo ha habido elecciones en El Salvador, ya que el Sindicato de Chuquicamata y El Teniente aún no cumplen sus tres años de plazo. Algunos dirigentes de CORA y Cía. Minera Andina que aparecen como DC se han ido al MAPU e Izquierda Cristiana.

En esta materia se expresa claramente la naturaleza del proceso que vive el país. La información al respecto se hace muy difícil, pues se ha radicalizado la lucha de noticias entre la burguesía y los trabajadores. Los órganos de la primera sólo informan de los resultados que favorecen a la DC y los de los trabajadores sólo de los que les favorecen. Nótese por ejemplo como la prensa burguesa destacó el triunfo de la DC entre los estudiantes secundarios y en cambio silenció en forma total el abrumador triunfo de la UP entre los estudiantes industriales que tienen una posición de más directa relación con el trabajo productivo. En general se puede observar que en los centros laborales la situación es muy favorable a la UP, aunque se nota un repunte de la DC en algunos de ellos. El alborozo que producen a los capitalistas los triunfos de la DC han hecho reflexionar a los jóvenes y trabajadores sobre el real significado de ellos. En cambio en secto-

ges no directamente productivos ha habido triunfos muy magnificados por la Derecha, como es el caso del Colegio de Periodistas donde ganaron los periodistas comprometidos con la burguesía (*El Mercurio*, con su habitual cinismo, los llama no-comprometidos). En general la información al respecto se hace muy difícil y la mayor parte de la gente está informada sólo en un sentido y ello lleva a cometer errores de apreciación.

En la actitud de los diversos sectores sociales frente a la revolución influyen factores socioeconómicos objetivos (reajustes, poder, inflación, abastecimientos), capacidad de atracción de los militantes revolucionarios e influencia de las imágenes que forman las campañas ideológicas. En el caso chileno todos estos factores son cruciales, pues se trata de un proceso que exige el consenso mayoritario, pero en especial deben preocupar el problema de las conductas políticas de los militantes de la UP y la lucha ideológica porque su debilidad actual compromete y dificulta la primera tarea.

En consecuencia, para ampliar las bases de apoyo social del Gobierno se requiere en primer lugar proporcionar bases objetivas de adhesión mayoritaria y esas son el mejoramiento económico concreto, la entrega de responsabilidades como el control obrero de las industrias, la lucha contra los privilegiados, la batalla de la producción, etc. En segundo lugar se requiere de una amplia y organizada campaña de educación política masiva particularmente en las industrias y en las oficinas. En tercer lugar se requiere de un cambio de actitud de los militantes de la UP frente a los eventuales simpatizantes y en general frente a los compañeros: sólo los saboteadores requieren de una actitud agresiva, pero los tra-

bajadores no son enemigos por el hecho de que no militen en ninguno de los partidos de la UP.

A propósito de esto es necesario referirse al papel decisivo que juega en la revolución la *lucha ideológica* y el trabajo en el campo de la vida intelectual, la educación y la comunicación masiva. Nuestra impresión es que en el momento actual esta lucha se presenta favorable a la reacción. Estas derrotas que estamos sufriendo en el campo ideológico se deben a dos razones: a que la "vía chilena" permite la mantención y aún el acrecentamiento del aparato mentalizador de la burguesía y a la falta de un trabajo unitario de educación política por parte de las fuerzas proletarias. El laudable esfuerzo que se hace en el campo artístico (musical y teatral) se ve atenuado por la poderosa ofensiva ideológica de la burguesía en la formación de imágenes masivas hasta el punto de que ha llegado a convencer a muchos de que decir la verdad es entrar en una campaña de injurias.

Respecto de los organismos de masas (en los cuales se expresan en forma orgánica las fuerzas sociales) hay mucho que decir, pero nos vemos obligados a abreviar. En Chile el aspecto *organizativo* de los sectores sociales ha sido bastante desarrollado: cerca del sesenta por ciento de los trabajadores están sindicalizados (el dato de Debray es inexacto, pues no toma en cuenta a los gremios y a las organizaciones campesinas); la ley de organización vecinal aprobada en el gobierno anterior significa que en cada población o unidad vecinal debe haber una organización legal; las organizaciones femeninas y juveniles están muy extendidas y el proceso de socialización de las empresas ha reglamentado la participación de los trabajadores en forma orgánica (Asambleas de Trabajadores, Consejo de Administración, Comités de Producción y de Vigilan-

cia). Pero en el plano *activo* el panorama no es tan ...pi-cioso. Predominan las tendencias *superestructuralistas* (es de-cir: funcionan las directivas, y no siempre, pero las masas se desentienden de las tareas efectivas) y las tendencias *econo-micistas* (es decir: la búsqueda de beneficios para la empresa y para la localidad, pero no la búsqueda del beneficio común de los trabajadores). El superestructuralismo se extiende al control proletario de las organizaciones, ya que algunos par-tidos consideran que manejando las directivas controlan la base social respectiva, lo cual es absolutamente equivocado.

Veamos lo que dice R. Debray respecto a la naturaleza de la acción popular: "Por ahora el campo popular ofrece dos puntos débiles por donde podría presentar blanco a un ataque adversario. Primero, un retraso acentuado de la concien-cia de clase sobre el instinto de clase; es decir que la con-ciencia política de los trabajadores (o conciencia de los inte-reses a largo plazo, estratégicos del proletariado y de sus alia-dos en la lucha por la hegemonía), no parece estar a la altura de su voluntad espontánea de defender sus intereses inme-diatos. Y segundo retraso, redoblamiento del primero al nivel superior, el retraso de las organizaciones de clase (en canti-dad y calidad) sobre la conciencia de clase misma. El hecho es notable a nivel sindical: una cuarta parte de la clase obrera está sindicalizada y como es natural el sindicalismo quedará todavía un tiempo impregnado de la vieja mentalidad reivin-dicativa y economicista de los peores días del pasado. Lo es también a nivel político de los partidos... fenómeno acen-tuado por la absorción de los cuadros políticos disponibles en los aparatos administrativos o gubernamentales. Esta cas-cada de retrasos o desfases desembocan finalmente sobre una cierta carencia de dirección política, susceptible de movilizar

y estimular a todos los niveles el movimiento de masas. La función gubernamental no puede por sí misma confundirse con la función de vanguardia política".

No hay duda de que la revolución significa esencialmente un cambio y elevación del nivel de acción y de la responsabilidad de los organismos de masas. La función de estos organismos no puede ser visualizada en un plano abstracto o ideal sino en el contexto histórico en que operan. En la sociedad neocapitalista dependiente que imperaba en Chile los organismos de masas tenían como fin esencial la obtención de ventajas dentro de ese sistema y la lucha global de la clase para sustituir el sistema estaba entregada principalmente al nivel político partidista y sólo muy excepcionalmente participaban en ella algunos destacamentos de los organismos sociales o de masas. En el proceso revolucionario se producen dos cambios al respecto: se tiende a la radicalización de tales organismos cuya acción no puede sustraerse a la definición revolucionaria y se produce una vinculación mucho más estrecha entre la lucha política y las luchas directas de masas. Esto significa concretamente que los organismos políticos, administrativos y reivindicativos siguen una misma orientación aunque cumplen funciones distintas.

La situación actual de Chile respecto a la acción de los organismos populares es por demás compleja. Por una parte porque se controla sólo una parte del Estado y por lo tanto se mantiene una separación más clara de las funciones; por otra parte el pluralismo partidista hace que el control de los organismos de masas sea disputado por los diversos partidos de la UP con lo cual se resiente su eficacia. Uno y otro hecho hacen difícil precisar las funciones de cada organismo y significan además un recargo para los militantes y una con-

fusión para las masas, ya que proliferan los organismos sin que la clase trabajadora se identifique plenamente su poder con alguno de ellos.

Este último punto alcanza especial importancia. En Rusia el problema del poder se definió al concretizarse la consigna de "todo el poder para los soviets" (comités de obreros, soldados y campesinos organizados a todo nivel). En Cuba, cuando la revolución enfrentó un momento crítico, surgieron como respuestas los Comité de Defensa de la Revolución que fueron la concretización del poder popular en los niveles básicos o de acción masiva. En Chile habría que preguntarse cuáles son los organismos del poder proletario tendríamos una lista muy larga; la Unidad Popular, cada partido, los sindicatos, los organismos administrativos (Consejos de Administración, Comités de Producción y de Vigilancia, las Juntas Vecinales, las instituciones públicas, etc.).

No es fácil resolver el problema y el no hacerlo significa no controlar la situación y perder energías revolucionarias que son preciosas en estos momentos.

Durante la campaña presidencial la Unidad Popular operaba a nivel del Pacto Nacional y al nivel de las local en los *Comités de Unidad Popular* (*CUP*) que algunos consideraron como el llamado a ejercer el poder de los trabajadores. Sin embargo tales organismos han decrecido en su acción y sólo en algunas unidades funcionan con cierta regularidad y eficiencia. La creación de los Comités de Producción y de Vigilancia pareció ser un nuevo mecanismo del poder obrero, pero tampoco esto ha operado con suficiente claridad, ya que persiste el problema de papel de los sindicatos.

Sin pretender resolver el problema de racionalización de los organismos populares, de activación de ellos y de concre-

tización del poder de los trabajadores, creemos posible señalar algunas directrices generales que es importante tener en cuenta en esta coyuntura:

a) Es urgente que la Unidad Popular, como dirección política de la revolución, adopte y aplique una política clara y unitaria sobre la acción de los organismos de masas. Tal política debe tomar en cuenta tanto la importancia de la movilización popular como la densidad y complejidad de nuestro proceso revolucionario y por lo tanto debe distribuir responsabilidades y asignar prioridades a cada tipo de organismos.

b) Tal política debe precisar las funciones de los tres campos de la acción y poder populares: el político (partidos y órganos de poder general), el administrativo (empresas socializadas e instituciones públicas) y el social (sindicatos, juntas vecinales, organizaciones femeninas y juveniles). Es claro que en la actual coyuntura chilena el poder obrero no se identifica con uno de estos organismos, sino que se distribuye entre ellos con mayor o menor intensidad. Es necesario también precisar las funciones de estos organismos en sus diferentes niveles (nacional, regional o sectorial, macrounitario y local o microunitario).

c) Se debe precisar la diferencia de funciones entre los organismos políticos y los funcionales (administrativos y sociales). Es fundamental afirmar en la práctica que unos y otros configuran el poder de los trabajadores y deben ser complementarios y tener funciones específicas que sean respetadas. Los primeros son de militantes, pero los segundos son abiertos a todos los trabajadores dispuestos a asumir responsabilidades en la tarea común y deben ser mecanismos de incorporación de nuevos militantes revolucionarios, por lo cual no tiene sentido aplicar en ellos actitudes sectarias. Igualmente

es necesario afirmar que cada uno debe tener su estructura propia y si bien es explicable el dirigismo descendente en algunos partidos, en los organismos de masas debe primar la democracia ascendente.

d) La Unidad Popular debe procurar y aplicar fórmulas unitarias en los organismos administrativos y sociales para terminar con los conflictos internos que dañan la eficiencia y la mística de la revolución. Tal vez mecanismos como el aplicado en las Municipalidades, listas únicas obligatorias de candidatos o precisión de atribuciones y decisiones de los administradores, pueden ser algunas de estas fórmulas. En este sentido los Comités de Unidad Popular deben ser los organismos de coordinación políticas que apliquen esta política general. De esta manera los CUP deben operar en función de los organismos administrativos y sociales y como unidades de coordinación no requieren sino de representantes y de reuniones espaciadas y funcionales. No parece factible pretender armarlos como órganos principales del poder trabajador.

e) Especial importancia debe darse a algunos organismos que unen lo administrativo con lo social como son por ejemplo los Comités de Coordinación en las Empresas socializadas y los posibles Comités de Coordinación Poblacional: los primeros unen a la directiva sindical con los delegados de los trabajadores a la administración y los segundos podrían unir a las juntas vecinales con los jefes de servicios poblacionales. Concretamente creemos que estos organismos podrán ser los más indicados para fortalecerse como los más representativos del poder popular.

f) Hay algunos puntos específicos que resolver, tal como la función de los sindicatos, en gran parte resuelto por la CUT que ha decidido acertadamente mantener su independen-

cia como tal, aunque debe implicar también una función distinta según se trate de empresas socializadas o privadas, y creemos que el énfasis debía estar en este último sector ya que allí los sindicatos (incluidos los Comités de Vigilancia) deben asegurar el éxito de este sector clave. Igualmente es necesario precisar funciones de los organismos poblacionales, ya que ella no ha sido muy precisa y convincente. Por último es necesario tomar en cuenta que no todos los organismos sociales son controlados por militantes revolucionarios. Los que lo son debe considerarse como organismos de clase y operar en ese sentido pero cuando no lo son hay que adoptar una política que signifique tanto la lucha por ellos como garantizar el funcionamiento de organismos complementarios que puedan cumplir su función de lucha revolucionaria.

VI. LOS PARTIDOS POLITICOS

Todo proceso revolucionario intensifica la vida política de la sociedad que la emprende. Esto produce una natural reacción adversa en muchas personas a quienes la polémica y la lucha política termina por fatigar. Sin embargo, guardando la proporción de que la política es sólo parte del quehacer humano, es natural que sean ahora más las personas que se interesen por participar en partidos y que la vida de éstos sea más intensa. Ello se agrega al permanente deseo de muchas personas por saber qué representan realmente los diversos partidos y justifica que en este trabajo hagamos una breve descripción de los principales partidos chilenos.

No se trata de un estudio profundo de los partidos, sino de una descripción en su actual función. Un trabajo más cien-

ífico requeriría de investigaciones sobre la composición de clases, sobre la historia y de un esquema o método específico de interpretación. Estas páginas constituyen más bien una descripción desde afuera y sin mayores pretensiones.

Una afirmación muy común es que en Chile hay demasiados partidos, lo cual se ha confirmado en determinados períodos en que han proliferado pequeñas agrupaciones partidistas. Sin embargo, bien miradas las cosas, es posible discernir en la historia política nacional no más de tres fuerzas claramente delineadas y ello se acentúa en la situación actual. La multiplicidad de partidos, que no se da en las sociedades estabilizadas, es muy explicable en una nación en crisis de cambio para el cual se plantean diversos caminos y fuerzas. Más que la multiplicación llama la atención la intensidad de la lucha interpartidista, sobre todo dentro del bloque que propicia la revolución, es decir dentro de la izquierda chilena. El éxito de la revolución exige una actitud más unitaria en torno al objetivo básico común. Esto no significa que cada partido pierda su personalidad ni su disciplina, sino que tenga efectivamente prioridad la lucha contra el enemigo común sobre la lucha entre los partidos populares. No puede ser que los conflictos y disputas entre las fracciones radicales, entre el PC y el MIR y entre el PS y PC tengan más vigencia real que la lucha de todas esas fuerzas contra el enemigo común, menos todavía en un momento tan delicado como este en que la burguesía forma un solo frente para hacer fracasar un proceso decisivo en que cualquier descuido o debilidad compromete el éxito de la revolución, tarea superior del pueblo.

Para ubicarse en la importancia de los partidos, reproducimos los porcentajes de la votación nacional obtenida en las elecciones de regidores de abril de 1971. Conviene recordar

que en esa oportunidad aún no tenían carácter de partido el MAPU, la API ni la Izquierda Cristiana.

Partido Demócrata Cristiano	25,62%
" Socialista	22,38%
" Nacional (Derecha)	18,12%
" Comunista	16,97%
" Radical	8,00%
" Democracia Radical (Derecha)	3,83%

El Partido Socialdemócrata (PSD), el Partido Democrático Nacional (PADENA) y la Unión Socialista Popular (USOPO) obtuvieron menos del 2%.

¿Cómo es el Partido Comunista chileno?

El solo hecho de que la reacción centre toda su artillería sobre el Partido Comunista disipa cualquier duda que se pueda tener sobre la incidencia de este partido en la empresa que ha iniciado la clase trabajadora de nuestro país. A pesar de que se lo considera muy moderado, la burguesía comprende que la presencia del PC en la revolución indica que no se está jugando con ella ni que se trata de una simple aventura pasajera. Y tiene razón.

Nadie puede ignorar que el Partido Comunista es expresión del proletariado que se define por su lucha contra el capitalismo y que su objetivo es la instauración del socialismo como paso hacia la sociedad comunista. Pero a menudo se olvida que la vía chilena de tránsito es principalmente la expresión de la política del PC chileno, largamente sostenida

y muchas veces incomprendida. Su gestación ha sido explicada en un reciente libro de L. Corvalán ("Camino de Victoria"). En cierto sentido ello no es extraño, ya que fue también este partido el que, a nivel mundial, logró el primer camino eficiente para transformar la sociedad capitalista. Y en la historia lo que queda son los hechos y no las teorías.

En enero de 1972 el Partido Comunista de Chile cumple cincuenta años de vida, que en realidad son sesenta, pues en 1922, bajo la dirección de Luis Emilio Recabarren, se le dio el nombre de Comunista al Partido Obrero Socialista fundado en 1912, es decir prácticamente junto con el comienzo de la lucha obrera en Chile.

El PC chileno es la expresión nacional del movimiento comunista internacional que, bien sabemos, tiene la primera palabra en al historia contemporánea. Este movimiento, inspirado en el marxismo, se convirtió históricamente en la vanguardia política del proletariado al asumir la dirección de las revoluciones socialistas en condiciones por demás difíciles. Esta trayectoria hizo que fuera *el partido* de la revolución, estructurado bajo la dirección de Lenin. Pero más de medio siglo de historia le han significado características y posiciones que no sólo le han atraído los más duros ataques y sangrientas represiones de la reacción burguesa, sino también las críticas de sectores izquierdistas que desearían otras formas de conducción revolucionaria. La actitud de la reacción es natural, pero para comprender la actitud de sus críticos de izquierda hay que recordar algunos hechos recientes.

El informe de Nikita Jruschov al XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (1956) implicó una crítica al período anterior llamado "stalinista" y formuló una nueva estrategia de la revolución mundial caracterizada por

la coexistencia pacífica y la lucha legal sobre la base de la consolidación de un bloque mundial socialista capaz de garantizar y respaldar el movimiento obrero mundial. La crítica al stalinismo parecía dar razón a los trotskistas que aseguraban que el socialismo soviético era una desviación esencial del marxismo, pero para los comunistas esto sólo había sido una deformación de carácter secundario y superable. Ello originó el período del deshielo y un avance hacia modalidades más democráticas y auténticamente socialistas, a las cuales la reacción llama liberalización de la URSS.

Entre 1958 y 1962 dos nuevos hechos vinieron a complicar la situación. El desacuerdo chino con la nueva estrategia soviética y la revolución cubana en la cual triunfó la vía insurreccional desencadenada por un movimiento ajeno al Partido Comunista cubano aunque éste posteriormente se integró plenamente a la revolución. La China de Mao calificó de revisionismo y de renuncia a la revolución proletaria mundial a la política de coexistencia pacífica y preconizó la Revolución Cultural para lograr efectivamente la construcción del comunismo. Por su parte algunos revolucionarios latinoamericanos rechazaron la vía electoral y de alianzas y proclamaron la vía armada como única alternativa para América Latina. A ello se unieron las críticas de muchos marxistas europeos a las modalidades soviéticas llegando algunos a señalar que para construir en ese país el comunismo sería necesaria una nueva revolución. Ello configura la multiplicidad de interpretaciones marxistas, que caracteriza al momento actual de la historia humana.

El Partido Comunista chileno es uno de los más antiguos del mundo y empezó a vivir junto con los primeros pasos de la lucha proletaria hasta el punto que en nuestro país el Mo-

vimiento Obrero y el Partido Comunista forman una misma historia. En el conflicto originado en la América Latina por los hechos señalados anteriormente, el PCCH ha sido uno de los poquísimos que no ha sufrido divisiones internas y ha mantenido una misma línea que representa una asimilación consecuente de la evolución histórica. Ya en la década del veinte sostuvo que el sindicalismo anarquista era insuficiente para hacer la revolución y enfatizó la necesidad de la lucha política organizada. En 1938 integró sin vacilaciones el Frente Popular para impulsar la revolución democrática burguesa. Ahora considera que la correlación de fuerzas mundiales marcha a favor del proletariado y por ello es posible iniciar las nuevas construcciones socialistas sobre la base del poder político de estas fuerzas crecientes y por lo tanto con menos costo social y en forma más integral, o sea evitando las deformaciones stalinistas. Y este es el sentido de la vía chilena de tránsito que algunos llegados más recientemente a la tarea revolucionaria, objetan, y que el PC ha defendido con el mayor énfasis. Y es también el correcto sentido de lo que la prensa imperialista califica torcidamente de actitud prosoviética.

En gran medida la seriedad política de este partido se explica por su composición de clase eminentemente proletaria (alrededor del 70% de sus militantes) y por la excepcional disciplina y honestidad que exige a su gente.

Pero junto con estos méritos políticos el Partido Comunista tiene algunas características que explican el recelo de algunos sectores de trabajadores. Naturalmente no nos referimos a la imagen que ha formado de él la burguesía, que ha comprendido que este partido es la expresión de su sepulturero, sino a aquellas características que pueden ser criticadas desde dentro del proletariado. En primer lugar su estructura

permite que predomine la dirección descendente sobre la ascendente: esta característica necesaria en los tiempos de Lenin, parece inadecuada al actual proceso de democratización que el comunismo ha conseguido con su propio esfuerzo. En segundo lugar la mantención de la antigua tendencia a institucionalizar la verdad y el bien en fórmulas incapaces de comprimir la rica complejidad de la existencia humana. Una y otra característica se traducen en un cierto dogmatismo que, aunque está muy lejos de ser la obediencia ciega de que habla la reacción, se expresa todavía en frases como: "es verdad porque lo dijo un dirigente" o "es el mejor hombre porque fue designado por el partido". Por último, en el caso chileno es particularmente dañina la tendencia a creer que la condición de vanguardia política del proletariado se traduce en el control superestructural de sus organizaciones, descuidando el trabajo en la base y mostrando actualmente cierta pobreza de cuadros medios.

La estrategia y características del PC chileno han hecho que muchos revolucionarios se hagan las siguientes preguntas: ¿Es realmente capaz de dirigir un proceso verdaderamente revolucionario o por su adhesión a una línea legalista puede convertir la revolución en reformismo? ¿Ha asumido realmente en su praxis la autocrítica del marxismo o mantiene intactas y latentes las deformaciones stalinistas? ¿Cree sinceramente en el pluripartidismo o utiliza esta táctica para luego imponer la hegemonía del partido identificándola con la hegemonía del proletariado?

Sobre la primera pregunta los hechos son mucho más elocuentes que las palabras; si el partido comunista fuese realmente reformista hace tiempo que sería protegido de la burguesía, cosa que obviamente está muy lejos de ocurrir. En

cuanto a lo segundo es algo que todavía está por verse aunque hay pleno derecho a que su propia condición marxista haga evolucionar al partido. En cuanto a lo tercero, nada más elocuente que oír lo que dijo su secretario general Luis Corvalán nada menos que en el 24.° Congreso del Partido Comunista de la URSS:

"Nuestros enemigos afirman que la composición pluripartidista del Gobierno Popular de Chile es un fenómeno pasajero y que los comunistas chilenos trataremos muy pronto de saltar sobre estas características, para ir al establecimiento de un sistema de partido único. Nosotros nada tenemos que objetar sobre este sistema allí donde existe por razones históricas conocidas. Pero sí tenemos que decir aquí y donde sea que en nuestro país todo lo concebimos, incluida la edificación del socialismo, sobre la base de la colaboración, indefinida en el tiempo, entre comunistas y socialistas, entre todos los partidos integrantes de la Unidad Popular. No tenemos otro camino y, por supuesto, no estamos descontentos con éste que nos indica nuestra realidad social y política".

Hay mucha gente que no teme al socialismo, pero sí al Partido Comunista. Eso obedece principalmente a que la burguesía ha utilizado todos los mecanismos para formar esta imagen negativa. Para ella este Partido es el rostro del trabajador sublevado y ese es una imagen indeseable, tanto para los que tienen mentalidad de amo como de esclavo. Pero, para el obrero o para el hombre que sabe comprender la historia, el Partido Comunista es la expresión actual del avance de la historia. Como toda expresión tiene virtudes y defectos propios de la condición humana, lo importante es que este partido ha mostrado en la experiencia concreta de Chile su capacidad de asumir el progreso de la historia y superar las defor-

maciones que le ha significado la responsabilidad de conducir los procesos. En la misma medida que la vía chilena es fruto particular de su política ella es también la garantía de su prosecución. Claro está que el éxito de esta tarea no depende sólo del PC sino de la conducta y fuerza de los demás partidos y sobre todo de la actitud de todos los trabajadores.

¿Qué representa el Partido Socialista de Chile?

La complejidad del PC es cosa de niños comparada con la historia del Partido Socialista de Chile. Nacido en 1932, en una de las épocas turbulentas de la historia nacional, ha tenido tantas vicisitudes y divisiones que llenarían un libro. Pero lo que interesa es analizar su actual posición e incidencia en la revolución chilena. Siguiendo una tradición el electorado chileno identificó al Presidente elegido con el partido al cual pertenece y en la elección de regidores fue el Partido Socialista el que recibió la mayor parte del crecimiento electoral de la Unidad Popular, pasando del 13 al 22,4 por ciento de la votación, con lo cual se convierte en el principal partido de la coalición de Gobierno. De allí la importancia de su conducta política.

Decir que el Partido Socialista surgió como la versión nacional del socialismo marxista sería simplificar demasiado las cosas. Pero la verdad es que esa ha sido su principal base electoral. Los latinoamericanos somos muy sensibles a las tendencias nacionalistas y los chilenos en particular tenemos una instintiva desconfianza de las tutorías y de las direcciones demasiado rígidas y por ello resultaba natural la existencia de un partido que articulara las necesidades del proletariado con estas tendencias y esa ha sido la explicación del

desarrollo del Partido Socialista. Podrían agregarse dos elementos a este análisis: que debido a estas características se prestó para la incorporación a él de algunos sectores pequeño burgueses y que sus dirigentes han tenido la enorme virtud de mantener en este partido una línea revolucionaria, totalmente ajena a las tendencias reformistas socialdemócrata que caracterizan a los partidos socialistas de todo el mundo occidental. Este último carácter es lo esencial del Partido Socialista, hasta el punto de que en los últimos diez años este partido ha proyectado la imagen de ser más revolucionario que el comunista e incluso la burguesía insiste en que tal radicalización implica la actual negación de la estrategia legal.

Para entender la actual posición del PS hay que recordar aspectos de su evolución. En 1938 participó con los partidos Radical y Comunista en el Frente Popular. Ya en esa experiencia tuvo dificultades con el Partido Comunista y las relaciones con ese partido durante más de treinta años han sido determinantes en el papel cumplido por el PS en la historia de Chile. La alianza Socialista-Comunista ha sido esencial para la revolución proletaria y, al mismo tiempo, los conflictos entre ambos partidos han sido un factor principal de sus dificultades. La parte más substancial del PS, bajo el nombre de Partido Socialista Popular, tuvo una gran oportunidad en 1952 con Ibáñez, la cual se frustró. En esa situación el grupo de Allende mantuvo su alianza con el PC, factor que ha sido decisivo en el reiterado apoyo prestado por el PC a Salvador Allende. Después del gobierno de Ibáñez se consolidó la alianza PS-PC en el Frente de Acción Popular (FRAP), base de la actual Unidad Popular.

En esta descripción histórica hay que agregar la penetración de las posiciones guevaristas en la política chilena. Tales

posiciones fueron asumidas por el MIR, pero también en gran medida por el Partido Socialista. Este hecho formó la imagen, hasta cierto punto valedera, de que el Partido Socialista se colocaba a la izquierda del Comunista y llegó un momento en que no sólo negó la conveniencia de la alianza de clases (tesis del Frente de Trabajadores), sino que incluso la posibilidad de la vía legal, situación superada con su participación en la Unidad Popular, en la cual mantiene una posición radicalizadora que es de vital importancia.

Toda esta dinámica ha influido en la formación de fracciones dentro del PS, con lo cual se ha especulado muchísimo. Las circunstancias objetivas de su desarrollo han configurado efectivamente varias posiciones: tendencias socialdemócratas y oportunistas, actitudes pro y anticomunistas, tendencias guevaristas y de ultraizquierda. Pero tales divisiones han sido superadas en gran medida por la actual dirección que se impuso a las tendencias demasiado impregnadas de la angustia de conquistar el poder por el poder y con escasa visión de la tarea principal del partido que es procurar la unidad del proletariado con miras a la revolución socialista. La verdad es que persisten algunas dificultades, especialmente en el campo de la disputa con el PC en las bases y en los centros de poder, pero es realista esperar la superación de ellas en la medida que se imponga la visión y política más auténticamente leninistas que tienen sus actuales dirigentes superiores y en esa medida, dado su peso electoral, el Partido Socialista es decisivo en el proceso chileno. Sin caer en visiones subjetivas o generacionales de la política, la verdad es que las circunstancias históricas han llevado a configurar una posición muy distinta entre los militantes mayores de cuarenta años y las generaciones más jóvenes. Los primeros han estado luchando durante

más de veinte años por la conquista del poder político y al lograrlo *se han entusiasmado más por la administración del Estado que por la tarea política de hacer la revolución.* En cambio las generaciones jóvenes están mucho más impregnadas de este segundo quehacer. Es de esperar que la consolidación de las designaciones administrativas y el cumplimiento efectivo de la decisión de que el ingreso a la administración no implique un aumento de los ingresos personales vayan terminando con esta peligrosa desviación que no sólo afecta al Partido Socialista, sino también a otros sectores de la UP.

Respecto a los aportes estratégicos y las tendencias radicalizadoras el Partido Socialista presenta elementos positivos y al mismo tiempo latencias obstaculizadoras de la revolución. Creemos acertada su posición de insistir en que el Gobierno Popular debe concebirse y actuar más como un frente de trabajadores que como una alianza de diversas clases, y que el proceso debe ir más a la ofensiva que a la defensiva. Pero en relación con lo primero hay una inconsecuencia del PS en su política indiscriminatoria frente a la DC, ya que olvida la gran tarea de atraer a las posiciones revolucionarias al proletariado que milita en ese partido. Respecto a lo segundo, algunos de sus elementos jóvenes suelen traducir la radicalización ofensiva indispensable en un cambio de estrategia, lo cual le da inseguridad al proceso por no obedecer a una dirección única y sobre todo porque proporciona una permanente disculpa a las vacilaciones y errores sin encararlos de manera frontal.

En suma, el Partido Socialista, que tiene la alta responsabilidad de ser mayoritario en la UP, representa aportes muy positivos y al mismo tiempo características que es necesario superar. Su fácil capacidad de captación de la mentalidad so-

cialista chilena, la claridad revolucionaria de sus dirigentes, su sentido unitario con el PC, que suele sufrir dificultades en las bases y niveles medios, y sobre todo su existencia como otro partido fuerte del proletariado, son elementos de gran importancia en nuestra revolución. El oportunismo y sectarismo de algunos viejos militantes y las tentaciones de inseguridad estratégica en sus generaciones jóvenes son sus principales dificultades.

El Partido Radical y la Social Democracia en la UP

Uno de los aspectos más incisivos de la campaña electoral de la Derecha en las elecciones de abril fue aquella que mostraba al Partido Radical como una pantalla del marxismo. Esta actitud era muy explicable porque los objetivos políticos de la reacción burguesa son evitar la izquierdización de la democracia cristiana y tratar de restarle al Gobierno Popular aquellos sectores de trabajadores que son llamados capas medias y elementos "democráticos". En esto hay una doble tergiversación: formar una imagen engañosa de las capas medias como si no fueran trabajadores e insistir en llamar democráticos a los que defienden el actual *status* que es esencialmente antidemocrático.

La estrategia burguesa para separar a los radicales del Gobierno no se detiene en escrúpulos. Una periodista de *El Mercurio* preguntó a un dirigente radical si no le molestaba la situación desmedrada de su partido en el Gobierno. Esta pregunta fue hecha luego de saber que ese partido había obtenido la cartera con mayor personal (Educación), la de mayor incidencia en la seguridad (Defensa) y la que controla las empresas del cobre (Minería). La razón de esta tergiver-

sación es que a esos periodistas no les interesa informar de la realidad, sino formar las imágenes que interesan a los dueños del capital.

Esta campaña se basa en algunos hechos concretos que la burguesía interpreta en provecho propio. En su centenaria trayectoria el Partido Radical se ha configurado tanto con elementos de la burguesía como del proletariado de "cuello y corbata" y ha participado en numerosos gobiernos. Estas circunstancias han desarrollado una mentalidad de ascenso pequeño burgués en muchos de sus militantes y han llevado al Partido Radical a posiciones pendulares, que ahora ha heredado la DC, y que en última instancia favorecieron la mantención del sistema capitalista.

Pero ambos hechos han sido superados en gran medida por el actual Partido Radical que, a partir de 1967, no sólo se ha reencontrado con sus viejos postulados socialistas, sino que ahora los ha llevado consecuentemente a la práctica incorporándose a la lucha revolucionaria efectiva por el socialismo y logrando que su participación en la Unidad Popular fuese decisiva en la victoria de septiembre 1970.

Este proceso ha significado una decantación social del Partido Radical que se ha traducido en un creciente predominio de los trabajadores, profesionales y administrativos, sobre la burguesía mediana o pequeña. Incluso la segregación de la Democracia Radical y la votación que ésta obtuvo en abril indicarían que la burguesía ya no se siente interpretada por el PR y se ha volcado a posiciones claramente derechistas (DR).

Pero nuevos acontecimientos han conmovido al viejo partido. Al mismo tiempo que se marginaron algunos parlamentarios de la DC para formar la Izquierda Cristiana, se produjo una división del PR debido a una Convención cuya

declaración ideológica algunos sectores consideraron marxista y alejada de la doctrina radical. Es evidente que en los jóvenes existe la tendencia a radicalizarse hacia posiciones marxistas pero creemos que es equivocado que en plena lucha de los trabajadores se pretenda resolver problemas académicos. Es justo plantear cuestiones de principios cuando ellos tienen real significación política, pero no es justo debilitar la difícil tarea actual con cuestiones puramente teóricas, ya que ambas fracciones radicales siguen la misma política concreta. Felizmente los disidentes, algunos de los cuales tienen una indiscutible trayectoria izquierdista, han manifestado su decisión de mantener inalterable su apoyo al Gobierno Popular. Sin embargo esta división complica el panorama político que, contrariamente, exige una clarificación y simplificación en fuerzas podërosas que sirvan de apoyo político al actual Gobierno. De allí que parezca acertada la proposición de que el PR oficial, el MRII (radicales disidentes), el PSD (pequeño partido socialdemócrata) y la API (agrupación de independientes) hagan todos los esfuerzos para formar una sola y poderosa Unión Social Demócrata que constituye un pilar realmente influyente en la vía chilena de tránsito al socialismo.

A propósito de esto conviene señalar la forma equivocada en que se interpretan las posiciones *socialdemócratas* en el proceso rveolucionario chileno. Es frecuente el predominio del esquematismo que simplemente aplica a la realidad chilena las categorías abstractas de la experiencia mundial. Según ellas las posiciones socialdemócratas son simplemente reformistas y antirrevolucionarias, ya sea porque expresan intereses de la pequeña burguesía o porque constituyen la deformación definitiva del pensamiento socialista que

puede apreciarse en la social democracia europea heredera de la traición de Bernstein y Kautsky al pensamiento proletario mundial. Pero en Chile, y específicamente en la UP, las posiciones socialdemócratas expresan principalmente un determinado nivel de desarrollo de la conciencia proletaria, es decir expresan la forma específica como conciben la revolución socialista los trabajadores que, ya sea por pertenecer a los sectores medios o por insuficiente claridad política, tienen reticencias frente al socialismo marxista. Incluso creemos que gran parte de este pensamiento no es más que una forma de evitar las deformaciones stalinistas del marxismo y de hecho más que socialdemócrata pueda considerarse como integrante del *socialismo crítico*. En todo caso es claro que *las posiciones socialdemócratas dentro de la UP no expresan intereses burgueses sino de determinados sectores del proletariado y no son antirrevolucionarias, sino que tienen una manera de concebir la revolución que coincide plenamente con la vía chilena de tránsito*. Es equivocado entonces enfatizar excesivamente su eventual carácter de freno a la revolución y su incidencia en la obstaculización al proceso no es mayor que la del sectarismo y oportunismo que afecta a algunos sectores teóricamente más revolucionarios. Es evidente que persiste el peligro de desarrollar posiciones socialdemócratas efectivamente reformistas y eso ya se ve en algunas interpretaciones de la estrategia de la revolución. Para evitarlos es indispensable la capacidad de los dirigentes para dar los pasos que eleven la conciencia política de esas fuerzas y hacer efectivos sus intereses objetivamente revolucionarios.

En cuanto al oportunismo que se atribuye al Partido Radical y a los sectores socialdemócratas, ya hemos visto que ello tiene una real base histórica, pero es conveniente señalar que

afecta también a otros sectores de la UP. Este oportunismo obedece a la tradición política chilena que ha empleado el control del Gobierno como mecanismo de aprovechamiento de grupos y no de revolución de clase y al esquema de progreso social que ha originado en el capitalismo la relación educación-ocupación. El Partido Radical es plenamente consciente de ello y junto con los demás partidos de la Unidad Popular, está comprometido en la tarea de superar tales vicios que pueden dificultar la tarea revolucionaria.

¿Qué es realmente el MAPU?

De los grupos menores de la UP el que más llama la atención es el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, tal vez porque es el más joven y dinámico, porque se disgregó de la democracia cristiana o porque cuenta con gran arrastre en la juventud y en los cuadros técnicos que son indispensables para la continuidad y éxito del proceso. El problema es que el MAPU capta simpatías intuitivas, pero la gente no está muy segura acerca de lo que representa y, si nos guiamos por los hechos recientes, esta inseguridad alcanzaba también a algunos de sus militantes.

Uno de los fundadores, el actual Embajador en Cuba, señaló que el MAPU "no es, sino que va siendo" y su Secretario General, Rodrigo Ambrosio, lo define como un partido proletario y por lo tanto absolutamente comprometido con la Unidad Popular en la construcción del socialismo en Chile. Esto define el proyecto histórico del partido, pero la gente se sigue preguntando ¿en qué se diferencia de los demás partidos?, o bien ¿qué aporte específico hace el MAPU a la Uni-

dad Popular y a la revolución chilena? Es el problema de la función o papel político del MAPU, que debe examinarse a la luz de la situación de clase y de las posiciones ideológicas.

Y aquí empiezan las diferencias de interpretación y de imagen. Para el Presidente Allende y para la mayoría de los chilenos el MAPU era el mecanismo orgánico para la incorporación de los cristianos avanzados a la revolución. Para otros sectores el MAPU representa a los sectores más radicales de la pequeña burguesía intelectual y estudiantil que aporta las virtudes (capacidad técnica) y los defectos (vacilaciones estratégicas) que le son propias. El propio partido MAPU, con razón, no acepta ni una ni otra versión.

El MAPU fundamenta su existencia en una visión de la evolución del proletariado, similar a la formulada por el italiano A. Gramsci y en las condiciones concretas de la lucha popular chilena. Según esta visión el proletariado ha tenido diversas fases en su evolución, las cuales van teniendo distintas expresiones políticas. En el caso concreto de Chile hay varios sectores del proletariado que presentan reticencias a incorporarse a los partidos tradicionales de esta clase. Tales sectores son: el campesinado que ha irrumpido recientemente en la lucha popular, algunos trabajadores de empresas modernas que tienen reservas frente a los viejos partidos proletarios ya sea por situaciones objetivas o por razones ideológico-políticas, los hijos de proletarios que han alcanzado altos niveles de estudios y los trabajadores no organizados de pequeñas empresas. Al expresar a estos sectores el MAPU se define como un partido del proletariado, pero asignarle como única función incorporar a estos sectores a la lucha revolucionaria le daría un carácter muy transitorio.

En nuestra opinión el MAPU tiene dos justificaciones o funciones políticas, una inmediata y otra a largo plazo. En lo inmediato su función es *elevar el nivel de conciencia y proporcionar un cauce orgánico de acción* a muchos trabajadores que simpatizan con al revolución pero que carecen de tales mecanismos. A largo plazo la función del MAPU es constituir una fuerza que busca la autenticidad del socialismo mediante una actitud crítica enriquecida con elementos científicos y también con la ideología cristiana. En esta función de expresar al *socialismo crítico* entra en competencia con los demás partidos de la izquierda.

Se ha especulado mucho con la alternativa ideológica entre cristianismo y marxismo en que viviría el MAPU, la cual se habría agudizado con la formación de la Izquierda Cristiana. Es justo señalar que al interior del MAPU no se vive tal angustia. Desde sus comienzos los dirigentes mapucistas comprendieron el peligro que había en identificar el pensamiento cristiano con intrusiones reformistas en la teoría revolucionaria y antes que utilizar al movimiento como mecanismo de incorporación de cristianos a la revolución prefirieron consolidarlo ideológica y orgánicamente con las características propias de un partido proletario. Para sus dirigentes está claro que el marxismo-leninismo proporciona los elementos ideológicos y orgánicos fundamentales de la acción política del proletariado, lo cual no se contrapone a que coincidan en esta práctica personas que basan su inspiración revolucionaria en fuentes cristianas: justamente en Chile es clave que tales personas cuenten con una acción política realmente eficiente en la lucha de los trabajadores. En lo substancial la alternativa política *cristianismo o marxismo* es inexistente y se resuelve en la actitud práctica, en el quehacer revolucionario.

Esta claridad ideológica explica la seriedad política con que el MAPU participa en la Unidad Popular.

Al revés de lo que piensan muchos, la formación de la Izquierda Cristiana no le ha quitado sentido ni función política al MAPU ya que ambos movimientos tienen distintos papeles en la revolución. Ya hemos visto que la función del MAPU es elevar la eficiencia de los trabajadores que simpatizan con la revolución. En cambio la función de la Izquierda Cristiana es incorporar al campo de la revolución a la gran masa de trabajadores que han sido engañados por el reformismo que pretende utilizar al cristianismo como arma para evitar el poder de los trabajadores. Lo que sí es decisivo es la falta de fuerza parlamentaria del Movimiento de Acción Popular Unitaria.

Además de este último problema el MAPU enfrenta otros dos: la falta de precisión sobre su aporte teórico a la revolución y el retraso con que llega a la lucha por ocupar un lugar verdadero en la vanguardia del proletariado. Lo primero se ha traducido en una tendencia sólo asimiladora y poco creadora en el campo ideológico y estratégico. Desde su período de facción rupturista de la DC (1967) al MAPU actual ha habido una evolución que aunque ha mostrado vacilaciones, le ha dado seriedad política que debería traducirse en aportes creadores. El segundo hecho es real, pero muy relativo. En nuestro país el proletariado presenta grandes sectores sin politizar de manera que hay campo y sobre todo quehacer para el MAPU. El problema radica en que se introduce un factor adicional de lucha dentro del proletariado y ello se agrava por la escasa dimensión cuantitativa de este partido. La consideración del MAPU sobre las perspectivas del partido único de la revolución ya las hemos analizado y las compartimos.

En suma, con las salvedades enunciadas, el MAPU se ha ganado una función política que tiene gran importancia cualitativa y vigencia en el momento actual de la revolución chilena.

La balanza de la Democracia Cristiana

Antes de intentar la vía legal hacia el socialismo, Chile fue el primer país subdesarrollado que experimentó un gobierno democratacristiano, similar a los europeos aunque más izquierdizante debido justamente a la condición de subdesarrollo. En 1964, agotadas algunas experiencias populistas y autoritarias, la burguesía chilena consideró que la única manera de salvarse de su derrota era apoyando al democratacristiano Eduardo Frei, el cual obtuvo en esas condiciones el 55% del electorado. En el año siguiente su partido obtuvo el 42% y el control de la Cámara, hecho excepcional en la política chilena. En 1969 obtuvo aún el 29,5, porcentaje muy similar al que obtuvo su candidato Tomic en la elección presidencial que se dio a tres bandas. Más aún: en pleno "boom" de la Unidad Popular, en abril de 1971, la democracia cristiana obtuvo todavía el 25,6 de los sufragios con lo cual siguió siendo el mayor partido del país, controlando actualmente un tercio de la Cámara y casi la mitad del Senado. Nadie puede dudar que su conducta es decisiva para la suerte de la revolución chilena.

No es fácil hacer un balance histórico de lo que significó la experiencia de seis años de gobierno democratacristiano, pero en términos simples puede señalarse lo siguiente. El gobierno de Frei respondió a las expectativas de la mayor parte de la gente que lo respaldó, pero defraudó a los que real-

mente querían un cambio estructural en el país, por la sencilla razón de que su concepto mismo de revolución obedecía en realidad a un plan de reformas típicamente neocapitalistas. Sus objetivos fueron impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de algunos sectores claramente postergados por el subdesarrollo capitalista: campesinos y marginales, utilizando para ello a un Estado paternalista. No cambió en nada el poder económico de las grandes empresas capitalistas y aunque mejoró substancialmente las relaciones con el imperialismo consolidó al mismo tiempo su presencia en la economía nacional. El gran mérito de esta experiencia es haber demostrado en la práctica las incapacidades del neocapitalismo para solucionar nuestros problemas. El triunfo de la Unidad Popular y el desarrollo de la vía chilena hacia el socialismo tienen mucho que ver con el paso por esa experiencia previa, es decir por el agotamiento de la última alternativa distinta.

El ascenso al poder de un gobierno decididamente revolucionario ha provocado una previsible crisis de definición de la democracia cristiana, que no puede seguir exhibiendo en forma convincente una tercera alternativa, sino que decididamente debe pronunciarse en la actual coyuntura a favor o en contra de los partidos que representan a la mayoría de los trabajadores, quienes ahora han conquistado el poder y han iniciado un proceso que efectivamente destruye el capitalismo para reemplazarlo por una sociedad de trabajadores. En julio de este año han desertado ocho parlamentarios y numerosos dirigentes juveniles y adultos para formar la Izquierda Cristiana con la afirmación de que la democracia cristiana es centrista y comunitaria en las palabras, y derechista y procapitalista en los hechos. Aparentemente esta situación terminaría

por clarificar el panorama y dar plena razón a los que afirman que la DC no es más que la cara moderna de la derecha capitalista y su verdadera tabla de salvación. Nosotros consideramos que la realidad no es tan sencilla, que aún queda mucho por ver y que para comprender la situación hay que tomar en cuenta los elementos que configuran la democracia cristiana y que fundamentan sus conductas políticas.

Son elementos claves de la DC su heterogeneidad de clases y la ideología reformista de inspiración cristiana. Pero en la práctica operan otros factores y especialmente dos: ser garantía de protección para todas las personas que, por diversas razones, se sienten perjudicadas por el socialismo, y la esperanza de recuperar el poder para probar la factibilidad de sus tesis. Estos hechos, instrumentalizados por mitos ideológicos, han confirmado en gran parte de sus bases un profundo anticomunismo.

La heterogeneidad de clases es tal, que en ese partido se expresan los extremos de nuestra estructura social. Hay en él burgueses modernos íntimamente vinculados al imperialismo y al mismo tiempo cuenta con fuerte votación en sectores marginales que fueron protegidos por su política paternalista. Pero la gran masa electoral de la DC la forman trabajadores de las llamadas capas medias.

En los fundamentos ideológicos de la DC se confunden los elementos cristianos con los puramente reformistas o socialdemócratas. Nuestra opinión ha sido que la verdadera ideología de la DC es el reformismo y que el cristianismo, en sus expresiones generales, sólo se usa como justificación de esa posición práctica, lo cual se evidencia en el hecho de que la mayoría de los sacerdotes comprometidos con la vida popular no apoyan a ese partido y asumen posiciones de más con-

secuente colaboración con el socialismo. No obstante todavía se mantiene como fundamento ideológico de la Democracia Cristiana la distinción del "socialismo humanista" como alternativa frente al socialismo marxista. Ya hemos probado que esta posición, a la que son tan adictos Jaime Castillo y otros, justificaría una colaboración crítica a la construcción socialista pero en ningún caso la oposición cerrada que asumen en la práctica sus personeros.

Debido a estas características la conducta política de la DC durante este año ha ido cambiando al tenor de las perspectivas. A ratos ha sido de colaboración en políticas generales pero, a medida que pasa el tiempo, se ha ido configurando una posición cada vez más opositora que se traduce no tanto en el Congreso cuanto en la tarea de formar una imagen distorsionada de lo que está sucediendo en Chile, llamando la atención sobre asuntos secundarios y tratando de ocultar el problema de fondo que es la lucha desatada entre la burguesía y los trabajadores. Esta actitud cuenta con el respaldo gozoso de la Derecha que ve en la DC el más efectivo aliado para lograr su objetivo fundamental: impedir el poder de los trabajadores.

Las razones de la creciente actitud opositora de la democracia cristiana son variadas y expresan a distintos sectores. En primer lugar a los que, ya sea porque son burgueses o porque están definitivamente mentalizados, no tienen nada de comunitarios y realmente se oponen a cualquier socialismo y son decididamente procapitalistas. En segundo lugar a los que se sienten, y a veces con razón, perseguidos o postergados por la Unidad Popular, y por lo tanto ven en la DC su tabla de protección. En tercer lugar a los que no ven, o no quieren ver, la naturaleza real del proceso que vivimos y siguen

pensando en términos de una rotativa tradicional en el gobierno y crea que el fracaso del Gobierno Popular significa automáticamente su vuelta al gobierno, apoyados por la Derecha, en las elecciones de 1976.

Creemos que la actual actitud de la DC es producto de la hábil instrumentalización que hacen la Derecha y el primer grupo de los restantes. Esto es más fuerte que la incidencia que pueda tener el liderazgo de Frei que, contrariamente a la opinión dominante, no creemos que sea lo esencial en el problema. Es cierto que el ex Presidente aparece como la gran carta de la burguesía para 1976 y que, mostrando las mismas características de su predecesor en el gobierno, salta a la palestra cada vez que cree herido su prestigio de gobernante. Incluso últimamente ha hecho una afirmación, aquella de que actualmente el comunismo impone su ley, que pierde toda proporción en un político como él y que sólo se explica por el ofuscamiento de la vanidad herida. *El Mercurio* la ha recibido con alborozo calificándola como una "aseveración que apunta al fondo de la realidad política nacional". Pero en la pesada política chilena los factores que juegan son más objetivos que un determinado caudillismo.

La derecha del PDC, que sabe bien adónde va, usa la conocida táctica de oscurecer la mente de sus adeptos distrayéndolos del problema central y llamando la atención sobre problemas secundarios como los despidos, las ofensas a sus líderes o los defectos de los militantes de la UP. Para esto utiliza el hecho de que los diarios, revistas y radios de la DC los poseen naturalmente los adinerados que hay en ella. Incluso han aprovechado con mucha habilidad los últimos conflictos y el repunte que ha tenido la organización de partido acicateado por la formación de la Izquierda Cristiana. Es bue-

señalar que tal repunte no significa reales ganancias, sino sólo recuperación de gran parte de lo que habían perdido desde septiembre de 1970. La insistencia de sus personeros democristianos en hablar de *oficialismo* y *oposición* es una manera de tratar de ocultar la real lucha entre *trabajadores* y *burguesía*.

Creemos que los políticos sinceros que hay en la DC cometen dos grandes errores. Primero: creer que este Gobierno y el proceso que impulsa es igual a los anteriores, que es un Gobierno más que se desprestigiará por sus propios errores y que entonces se podrá recuperar el poder para tratar de torcer la historia. La verdad es que en Chile la suerte está echada contra el capitalismo y contra cualquier reformismo que lo quiera hacer resucitar: un nuevo gobierno centrista, o sucumbirá ante el poder proletario ya instalado en la economía nacional o abrirá las puertas a una forma de fascismo que a lo más retrasará el triunfo de los trabajadores a costa de grandes sufrimientos para toda la nación. El segundo error es creer que la mejor manera de lograr que el socialismo sea auténticamente humanista es criticando desde fuera y no actuando desde adentro para hacer prevalecer lo que se estima justo.

La Democracia Cristiana aún no ha mostrado su rostro definitivo. Es cierto, como se ha dicho, que la Derecha a toda costa trata de arrastrar a la contrarrevolución, pero la DC misma, es decir sus dirigentes, aún no dicen la última palabra. Nos parece que su definición dependerá de la actitud de la Unidad Popular, la cual debe poner en la mesa las cartas claves que mostrarán el juego. No se trata de formar imágenes negativas ni de atacar, sino de impulsar proyectos radicales que obliguen a una definición. Entonces se verá si el partido cristiano y demócrata juega en los hechos a favor de los traba-

jadores o de la burguesía. No es imposible que apoye tales iniciativas. Si en cambio se imponen los intereses burgueses y mezquinos y se define a favor de mantener el poder antidemocrático y anticristiano no hay duda que sufrirá aun más profundas y definitivos desgarramientos. Ninguna "hoja de parra" le servirá para ocultar su carácter históricamente procapitalista y antiobrero; ni el fracaso de Allende, ni el sectarismo y prepotencia de la UP, ni menos el seudo-personalismo cristiano. Más aún esa posición será insostenible para los parlamentarios y militantes sinceramente cristianos que hay en ese partido, para los cuales la reconquista del poder está subordinada a su consecuencia con la justicia y con la construcción de una sociedad fraternal y no desean cumplir el papel de sepultureros del cristianismo. Nos parece que estos valores son importantes y no se deben menospreciar estas actitudes que pueden parecer muy subjetivas a algunos analistas, pero que tienen real peso en militantes de ese partido.

La balanza de la Democracia Cristiana todavía está pendiendo.

La Izquierda Cristiana y las relaciones cristiano-marxistas

En 1938 el Partido Conservador, que había representado por más de un siglo las posiciones políticas de la Iglesia, sufrió la marginación de su juventud que apoyó al candidato popular contra el candidato derechista y formó la Falange Nacional, la cual posteriormente se convirtió en el poderoso Partido Demócrata Cristiano. En 1969 la juventud y tres parlamentarios se separaron de este último partido para formar el MAPU y apoyar al candidato socialista Allende. En julio de 1971 se acaban de retirar de la Democracia Cristiana ocho

diputados, la juventud y varios dirigentes para formar la Organización de Izquierda Cristiana, a la cual se han incorporado los tres parlamentarios del MAPU.

Todos estos movimientos de la política chilena expresan la evolución del pensamiento y conducta de los cristianos en la política. Aunque no todos estos hechos se explican sólo por divergencias ideológicas de todas maneras se relacionan principalmente con el problema que se discute a nivel mundial: las *relaciones entre el marxismo y el cristianismo*, las dos principales fuerzas ideológicas del momento mundial. Tales relaciones alcanzan especial relieve en América Latina donde, debido a la extensión y en algunos casos profundidad del cristianismo, se ha dicho que la revolución no se puede hacer sin los cristianos. Esto parece especialmente válido para Chile aunque es justo decir que en nuestro país el cristianismo es más selectivo que masivo y la incidencia real del cristianismo en la política no afecta a más de un 10% de la población.

No es posible pretender en este breve estudio dar una visión completa del problema de las confrontaciones entre el pensamiento cristiano, base de la cultura occidental, y el pensamiento marxista, pilar de la historia contemporánea. Para entender el panorama chileno al respecto hay que tener en cuenta un hecho previo: la crisis filosófica actual, que abarca a una y otra ideología, es principalmente una crisis de conceptos-vocablos, es decir de precisar el contenido real de los juicios y por ello es imposible actualmente manejar con validez universal palabras tales como persona, Dios, trascendencia, determinación, materialismo, etc., que están en el centro de las discusiones respectivas. Exigir en este momento una plena claridad teórica es ignorar la radicalidad de la actual revisión conceptual que vive la conciencia humana.

Pero en términos más simples y concretos es posible seguir la evolución del pensamiento cristiano en este siglo. Podemos distinguir en este proceso tres fases: a) antagonismo categórico con el marxismo, traducido en la oposición al socialismo y al comunismo; b) fase de coincidencias y de condenación por igual al capitalismo y al socialismo marxista, etapa que se ha llamado del *cristianismo social*, en la cual se aceptaban coincidencias más o menos concretas con los marxistas; c) fase actual en que hay una posición de coincidencia substantiva con el marxismo en el plano concreto, la cual se extrema hasta una posición en la que el marxismo aparece como la concretización histórica del cristianismo y en la que desaparecen las diferencias y se plantea prácticamente una identificación dialéctica o síntesis entre cristianismo y marxismo.

Naturalmente que en esta evolución no todos avanzan al mismo ritmo y que por el contrario se producen grandes diferencias entre los que se quedan en una fase anterior y aquellos que avanzan con la actual y aún se adelantan a la futura. Los restos que sustentan la primera actitud prácticamente han desaparecido en Chile y los sostenedores de la segunda fase aún se expresan políticamente en la democracia cristiana. El problema radica con aquellos cristianos que han profundizado más en el avance histórico y han visto que tal ideología no puede ser un sustento de un sistema que se opone a sus principios ni debe ser utilizada en arriendo ideológico para evitar una sociedad más justa, concretizada históricamente en el socialismo. En esto hay dos posiciones.

Algunas de estas personas han llegado a vislumbrar una total identificación entre cristianismo y marxismo y tomando a éste como la expresión concreta actual de las intuiciones cristianas han aceptado plenamente una posición política mar-

...sista: de hecho disuelven históricamente el cristianismo en el marxismo. Otros, en cambio, consideran que cristianismo y marxismo llegan, desde distintos enfoques y caminos, a una coincidencia substantiva que se concretiza en la construcción de una sociedad básica y efectivamente socialista, lo cual es muy distinto a las coincidencias accidentales de los socialcristianos, cuya política en los hechos es a menudo de una coincidencia substantiva con el capitalismo.

El primero de estos pensamientos ha sido desarrollado principalmente en el MAPU y se ha traducido en el desarrollo de un marxismo crítico que atrae a muchos cristianos y personas de otras ideologías y que, por lo demás, se explica desde el punto de vista de las clases como expresión de sectores del proletariado que han surgido en situaciones que los alejan de su adhesión a los partidos marxistas tradicionales. La segunda posición es la que se ha concretizado ahora en la Izquierda Cristiana y ella difiere de la anterior en que considera que el cristianismo implica aportes específicos que no son absorbidos por el marxismo. Esto explica la adhesión de algunos mapucistas que no se sentían plenamente marxistas. En esta forma la IC está en mejores condiciones de atraer a los sectores cristianos al compromiso revolucionario, pero la verdad es que la especificidad del aporte cristiano está aún en desarrollo. El diputado Julio Silva Solar ha tratado de concretizarlo en los siguientes puntos:

"Primero, el pluralismo...

"Segundo, la legalidad democrática...

Tercero, la vía no capitalista que es precisamente el proceso gradual al socialismo...

"Cuarto, la doctrina comunitaria desarrollada por nosotros desde hace más de veinte años, que acentúa la partici-

pación directa de los trabajadores en el manejo de la economía, no sólo de los trabajadores representados en sus fuerzas políticas sino también a través de sus organizaciones de base . . .

"Quinto, otra afirmación de las formas cristianas de izquierda es el humanismo de la persona, frente a lo que podríamos llamar la estrechez clasista de cierto marxismo . . . creo que del lado cristiano puede venir un humanismo más cabal . . .

"Sexto, por último, la revolución y el socialismo requieren de un gran esfuerzo moral. En este esfuerzo moral el cristiano debiera tener mucho que entregar".

Y en un documento más reciente de la OIC se dice:

"Aspiramos a la creación de una República de Trabajadores para organizar institucionalmente el socialismo en nuestro país. Pensamos que dicho sistema debe comprender un Estado democrático y un conjunto de comunidades básicas que se relacionan entre sí y con el Estado mediante el plan y la cultura.

"El carácter democrático del Estado reside en su capacidad para expresar el proceso ininterrumpido de liberación de los trabajadores. Por ello: a) debe institucionalizar la hegemonía del proletariado y del pueblo trabajador; b) debe asegurar que dicha institucionalización guarde correspondencia con la pluralidad ideológico-partidaria que objetivamente presenta la clase obrera chilena; c) debe consultar el sufragio universal, secreto e informado . . .

"La gestión de los asuntos propios de la especialidad de las comunidades básicas corresponde al colectivo de trabajadores que se desempeña en ellas. Este proceso de auto gestión y las actividades del plan del Estado se combinan en forma flexible dando orígen tanto a zonas centralizadas como descentralizadas".

Aun cuando los aportes del cristianismo no difieren de los principios que se derivan del marxismo, no hay duda de que el establecer un mecanismo de unidad de los trabajadores que superen los falsos abismos ideológicos que sugiere la burguesía anticristiana para defender sus intereses, es del mayor interés para la revolución chilena. En ello está lo substancial del aporte de MAPU y de la Izquierda Cristiana. Por lo menos sus posiciones son más claras que las inconsistentes declaraciones de algunos que dicen aceptar el materialismo histórico pero no el dialéctico, que aceptan el marxismo como método pero no como tesis filosóficas, o que dicen estar de acuerdo con el socialismo pero no con el comunismo; los que hacen tales afirmaciones a menudo no saben bien lo que dicen, y suelen hablar así por simple oportunismo. Más simple y directa es la afirmación del poeta E. Cardenal que señala que la *religión* cristiana y la *ciencia* marxista coinciden en la tarea concreta de construir el socialismo.

Mucho queda aún por decirse en el diálogo de marxistas y cristianos. Los grupos mencionados tienen otras tareas históricas, además de las disquisiciones teóricas. Pero ambos aportan a la revolución chilena una parte importante del proletariado arrebatándoselo a la mentalización burguesa, y eso es lo positivo, eso es lo que cuenta para la historia de la construcción de la nueva sociedad. Nos parece que es pretencioso afirmar que este problema está definitivamente superado: la relación marxismo-cristianismo y la función de esta última ideología no está aún históricamente resuelta. Otra cosa es que para determinadas personas el problema no tenga vigencia, pero ello no puede significar proyectar sin más el fenómeno a toda la humanidad. De allí que es injusto tanto considerar que la Izquierda Cristiana es sólo una fase retrasada

de la evolución de los cristianos como el considerar que su única justificación es constituir un anzuelo para atraer personas de escasa conciencia política y de taras socialdemócratas.

La coincidencia substantiva de elementos esenciales del cristianismo y del marxismo en la construcción socialista tiene proyecciones políticas de extraordinaria importancia en la coyuntura política de Chile. Los dirigentes de la Izquierda Cristiana tienen clara conciencia de ello. Se niegan a considerarla como simple mecanismo de ampliación de las bases de apoyo a la UP y el doctor Cavalla niega con razón que sea una especie de socialdemocracia cristiana. Aunque se niegan a adjetivar el socialismo y, para ser consecuentes con su posición práctica, se declaran decididos partidarios del socialismo sin apellidos, de hecho constituyen una expresión del socialismo crítico y una forma de procurarlo más auténtico con el enriquecimiento y apoyo del pensamiento y, sobre todo, de las actitudes existenciales que se nutren del cristianismo. En la política concreta *se niegan a ser simples aliados tácticos del proletariado marxista y exigen ser considerados integrantes del bloque político del proletariado y aliados estratégicos de los partidos marxistas*. Por último están elaborando lo que constituiría su aporte específico a la revolución chilena.

Si bien la IC constituye una fuerza importante en Chile, no hay duda de que su fuerza mayor es la posibilidad de que se incorporen a ella los sectores anticapitalistas que aún hay en la DC. Tal vez estos últimos exigen como condición de su paso esta consideración de aliados estratégicos, la posibilidad real de hacer aportes substantivos y el que su definición no sea superestructural sino realmente masiva. Al dar ese paso cambiarían positivamente la suerte de nuestra revolución.

¿Crece o se debilita la Derecha chilena?

En el proceso actual chileno hay una gran interrogante que se formulan varios sectores: ¿cuál es la real fuerza y la estrategia de la Derecha chilena? La pregunta se la formulan los enemigos de los trabajadores que se inquietan al ver que el proceso avanza y se la hacen también los revolucionarios que necesitan conocer la fuerza y los pasos del enemigo para orientar su propia estrategia y sus tácticas.

Algo hemos señalado sobre este problema al analizar las perspectivas del actual proceso. Ahora se trata de precisar lo que representa la Derecha chilena y la forma como se manifiesta en los diversos planos de la vida nacional y particularmente en el político.

En la historia se entiende por Derecha la posición que tiende a defender un *status*. El contenido de lo que defiende —la fisonomía del status— varía, pero lo que define a la posición derechista es su actitud retardataria frente al progreso. Esta actitud depende de su situación objetiva en el sistema imperante y de las maneras de interpretar la situación. Esta última razón es la que hace que muchas personas que no tienen por qué defender el status asuman posiciones derechistas, ya que lo hacen simplemente porque están engañados en la apreciación de la realidad, del carácter de la situación y de su progresión histórica.

Esta breve síntesis nos permite distinguir varias expresiones de la Derecha. Fundamentalmente existen la Derecha económica, la Derecha ideológica y la Derecha política que de alguna manera expresa a las dos anteriores. La Derecha económica está formada por los que controlan el poder econó-

mico y el sistema de explotación; la Derecha ideológica es en parte la expresión de los intereses de los grupos anteriores, pero también expresa la posición de algunas personas que se engañan sobre sus intereses y que creen identificarse con la burguesía, aunque en realidad son trabajadores que por diversas razones simpatizan más con la Derecha que con las posiciones revolucionarias (en última instancia éstos son derechistas "despistados").

La Derecha se expresa en los planos económico, cultural y político. En lo económico mediante el control de las empresas, en lo cultural mediante el control de los medios de comunicación y de aculturación gracias al poder económico que detenta, y en lo político se expresa en las más variadas formas y partidos. Nunca la Derecha ha tenido un solo partido aunque a veces ha tenido una sola posición política, como está sucediendo frente a la actual situación.

Muchos identifican políticamente a la Derecha con el Partido Nacional, resultante de la fusión de los dos grandes partidos de la oligarquía chilena: el Conservador y el Liberal. Ello no es efectivo. La Derecha política se expresa en el Partido Nacional, en los partidos centristas y particularmente en la DC y en algunos grupos que actúan políticamente en tácticas conspirativas. El hecho más importante de la historia chilena es cómo la reacción ha logrado invariablemente filtrar las posiciones centristas y convertirlas en los hechos en sus aliados frente a las decisiones más importantes. Es cierto que a veces el centrismo reformista le ha hecho perder algunas batallas y de allí se explica la ácida crítica de la Derecha al freísmo, pero cuando se trata de la guerra la Derecha encuentra en el centrismo su principal aliado para evitar la derrota total. Entonces se olvida de los problemas secundarios y se une fer-

verosamente a las posiciones centristas para salvarse del descalabro; lo hemos visto en la elección de Valparaíso, en muchos casos concretos y lo veremos seguramente en la continuación del proceso.

Nos parece que la actual estrategia de la Derecha chilena se define en cuatro líneas principales.

Después de cierta confusión y vacilación, la Derecha se ha reagrupado en una forma de reacción que consulta como *primera prioridad hacer todo lo posible por detener el proceso de socialización y hacer fracasar económica y políticamente al Gobierno Popular* como medio de recuperar el poder perdido apoyando a la DC en 1976. Para ello le sirve admirablemente la falta de poder político del Gobierno y las ambiciones de poder revanchista de la democracia cristiana. Sin duda que entre ambas, debido a su mayoría parlamentaria, pueden obstaculizar seriamente el proceso revolucionario.

En forma complementaria a esta línea principal y sobre todo para enfrentar eventuales radicalizaciones del proceso, la Derecha trata de formar la imagen de que el Gobierno rebasa la legalidad y que el caos amenaza al país. Su objetivo es alentar posibles brotes sediciosos y aun intervenciones de las FF. AA., aunque han llegado a convencerse de la dignidad de estas últimas, las cuales se han negado a ser instrumentos de sus intereses mezquinos. En cambio para este objetivo le sirven no sólo los grupos y tendencias fascistas que han proliferado últimamente, sino también la mantención de su poder mentalizador y sobre todo el eventual y decisivo apoyo que le puede prestar la conjura del imperialismo y sus lacayos contra la democracia y la dignidad de Chile.

En tercer lugar la Derecha usa su táctica favorita de ataque por los flancos. Sabe muy bien que si expusiera clara-

mente sus verdaderos intereses y puntos de vista tendría muy escaso eco en el país. Por ello elude el problema de fondo y hace todo lo posible con distraer como temas míticos. El problema de fondo en Chile es la lucha entre la burguesía y los trabajadores y ella lo traduce en un conflicto entre democracia y marxismo con lo cual logran engañar a unos cuantos ingenuos. En esta lucha la Derecha defiende el derecho de explotación por parte de las minorías, pero dice defender la libertad, la legalidad, la dignidad de las personas, las clases medias y más cínicamente se declara nacionalista. Si planteara lo que realmente es la Derecha no tendría más del cinco por ciento del apoyo nacional porque a ello se reducen sus reales intereses.

Actualmente la Derecha centra sus esfuerzos en otra de sus tácticas favoritas: la instrumentalización del centrismo reformista para ocultar en él sus desmadres. En esto no tiene dónde perderse y, después de haber atacado en forma implacable a la democracia cristiana, no tiene ninguna vergüenza en apoyarla ahora en forma irrestricta en la medida en que ésta se opone al poder popular y aviva el juego de los derechistas de la DC con un entusiasmo por demás explicable. Es notable cómo su prensa magnifica cualquier posible ataque de la UP a la DC y cómo aplaude sin reservas la línea de endurecimiento del PDC, endurecimiento que no significa otra cosa de descarada definición derechista disimulada a veces con mecanismos politiqueros como negar presupuesto al Gobierno para que atienda los intereses de los trabajadores. Pero esta última carta no la juega con toda confianza porque sabe que en la DC hay muchos dirigentes que no son oportunistas ni se venden al primer postor.

Uniendo el ataque por los flancos con su preocupación

por el centrismo, trata la Derecha de ocultar su defensa de los capitalistas explotadores pretendiendo defender a las clases medias. Estas últimas, en la medida que pueden ser consideradas como capas medias, son los trabajadores de ingresos medianos y los trabajadores independientes que jamás fueron protegidos por la Derecha, sino que invariablemente perjudicados. En su afán de convencer de que representa y defiende a la clase media, la Derecha suele no entregar la dirección de sus partidos a sus verdaderas figuras sino a personas modestas cuyos apetitos de figuración y de dinero sabe aprovechar. Esto explica que los dirigentes políticos de la Derecha no sean burgueses sino personas de origen modesto que así ocultan los intereses que defienden. Tal es el caso de los señores Jarpa, Maturana, García y Durán, ninguno de los cuales representa a la oligarquía chilena pero la sirven con singular devoción.

La Derecha chilena carece de razones valederas para justificar su posición, pero tiene abundancia de herramientas para lograr su objetivo. La vía chilena ha hecho que conserve la mayor parte de su poder y, como muy bien lo ha dicho Allende, está muy lejos de haber sido definitivamente derrotada. Más aún, tiene conciencia de lo que pasa y junta todas sus armas para la pelea. Ello debería obligar al proletariado y la gente digna de este país a hacer lo mismo para derrotarla.

¿Ultraizquierda o Izquierda Revolucionaria?

La imagen que gran parte de los chilenos tienen sobre las posiciones que aparecen más a la izquierda de la UP es muy

por el centrismo, trata la Derecha de ocultar su defensa de los capitalistas explotadores pretendiendo defender a las clases medias. Estas últimas, en la medida que pueden ser consideradas como capas medias, son los trabajadores de ingresos medianos y los trabajadores independientes que jamás fueron protegidos por la Derecha, sino que invariablemente perjudicados. En su afán de convencer de que representa y defiende a la clase media, la Derecha suele no entregar la dirección de sus partidos a sus verdaderas figuras sino a personas modestas cuyos apetitos de figuración y de dinero sabe aprovechar. Esto explica que los dirigentes políticos de la Derecha no sean burgueses sino personas de origen modesto que así ocultan los intereses que defienden. Tal es el caso de los señores Jarpa, Maturana, García y Durán, ninguno de los cuales representa a la oligarquía chilena pero la sirven con singular devoción.

La Derecha chilena carece de razones valederas para justificar su posición, pero tiene abundancia de herramientas para lograr su objetivo. La vía chilena ha hecho que conserve la mayor parte de su poder y, como muy bien lo ha dicho Allende, está muy lejos de haber sido definitivamente derrotada. Más aún, tiene conciencia de lo que pasa y junta todas sus armas para la pelea. Ello debería obligar al proletariado y la gente digna de este país a hacer lo mismo para derrotarla.

¿Ultraizquierda o Izquierda Revolucionaria?

La imagen que gran parte de los chilenos tienen sobre las posiciones que aparecen más a la izquierda de la UP es muy

simple: un grupo de jóvenes que desean hacer las cosas en forma brusca y con métodos que no se compadecen con el "modo de ser chileno" y que, por lo demás, son casi todos burgueses que no representan realmente a los trabajadores. Tal imagen no corresponde a la realidad y pone en un mismo saco posiciones que son totalmente diferentes.

Básicamente las posiciones que se llaman de "izquierda revolucionaria" para distinguirlas de las de "izquierda tradicional", se generaron históricamente de los siguientes hechos:

—Crítica a las posiciones soviéticas posteriores a 1956 que preconizaron la coexistencia pacífica y que según sus críticos, y especialmente los chinos, significan renunciar a la revolución proletaria mundial, por lo que califican de revisionistas a los soviéticos.

—Desarrollo exitoso de la estrategia insurreccional en Cuba y afirmación de que tal vía es la única factible para la revolución latinoamericana (tesis del Che Guevara), lo cual produjo escisiones con y en los partidos comunistas que propiciaban la lucha electoral y frentista (de alianzas electorales).

—Autocrítica marxista de las modalidades del socialismo soviético, particularmente por las tendencias burocráticas y de camarilla de Stalin y por las tendencias desarrollistas en su economía, es decir por falta de integralidad y autenticidad del socialismo. En esto se notan reminiscencias trotskistas.

Pueden considerarse también como integrantes de las posiciones que analizamos las tendencias subjetivistas e incluso cierto revolucionarismo sicológico, aun cuando estos son fenómenos que afectan más bien a algunas personas que adhieren a tales posiciones.

Un clásico pasaje de Engels puede retratar la crítica de

la izquierda revolucionaria a la vía pacífica hacia el socialismo: "De que la violencia desempeñe en la historia otro papel —además del de agente del mal— un papel revolucionario; de que, según lo expresión de Marx es la partera de toda vieja sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva; de que la violencia es el instrumento con la ayuda del cual el movimiento social se abre camino y rompe las formas políticas muertas y fosilizadas, de todo eso no dice una palabra el señor Dühring. Sólo entre suspiros y gemidos admite la posibilidad de que para derrumbar el sistema de explotación sea necesaria acaso la violencia ..."

En forma muy variada estas posiciones se han ido expresando en movimientos políticos. En Chile, a diferencia de lo acontecido en otros países, este proceso no se tradujo en escisión del Partido Comunista sino en el surgimiento de un movimiento que expresaba tales posiciones: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Se suele identificar con estos planteamientos a otros grupos menores de la extrema izquierda tales como el PCR, VOP, etc., aun cuando son diferentes y actualmente tales diferencias son categóricas.

Aunque las posiciones de estos sectores de la izquierda coinciden en sus divergencias respecto a la estrategia y política del PC, la actitud del MIR, que por lo demás es el único que tiene fuerza real de partido, ha sido reajustada después del triunfo electoral de la UP. Aunque no ha alterado su tesis de que la revolución latinoamericana deberá resolverse en la lucha armada, considera que el actual Gobierno Popular es una oportunidad para provocar un ascenso cualitativo y decisivo del poder de los trabajadores y para desencadenar el proceso revolucionario; discrepa por lo tanto de las posiciones ultraizquierdistas que califican al Gobierno de Allende

como una nueva versión del reformismo burgués. El análisis sobre el carácter del actual Gobierno ha llevado al MIR a una posición de colaboración con él en cuanto permite la radicalización del proceso y la conquista del poder por la clase trabajadora. Tal estrategia implica tácticas que a veces coinciden plenamente con las de la UP, como en el caso de la lucha contra la sedición, y a veces difieren de ellas como en el caso de la política frente a las empresas pequeñas y a los predios agrícolas no expropiables.

Las posiciones del MIR no son ni el terrorismo sin destino que le asigna la propaganda burguesa ni la renuncia oportunista a la tesis de la vía armada que le achacan los grupos de la ultraizquierda. Su posición se va construyendo en función del desarrollo de los hechos sobre la base de que la lucha frontal y decisiva de la revolución está por darse y es necesario prepararse para enfrentarla en las mejores condiciones.

El problema crucial es que, a pesar de los positivos acercamientos, el MIR plantea aún una estrategia distinta de la de la UP. Sobre la base del análisis acertado de que el proletariado no ha conquistado aún todo el poder plantean que al única manera de lograrlo es radicalizando el proceso de traspaso del poder económico pasando por encima de la legalidad burguesa existente. Esto se opone claramente a la estrategia gradual y legal que ha escogido la Unidad Popular; no hay que extrañarse entonces de que las tácticas aplicadas por algunos grupos miristas creen situaciones difíciles al Gobierno. En este sentido puede decirse que al no seguir la línea central o cardinal de la revolución de hecho la dificultan. El movimiento popular organizado tiene una dirección principal, su carácter puede ser más o menos radical o presentar

vacíos y es perfectamente legítimo y revolucionario tratar de radicalizar o complementar *esa línea*, pero no lo es en absoluto desarrollar una línea divergente que pueda comprometer el éxito de la línea principal. Hacerlo es crear de hecho una división del proletariado en un momento crítico de sus posibilidades revolucionarias.

Procurar la radicalización y complementación substantiva de la estrategia de la clase trabajadora bajo su actual dirección es algo legítimo y necesario, sobre todo debido a las vacilaciones y estancamientos que plantea el proceso en determinados momentos y a sus vacíos programáticos. Pero obedecer a una estrategia distinta que pretende instrumentalizar el movimiento espontáneo del proletariado es alienar la lucha proletaria con la subconciente esperanza de una revolución "verdadera" que implicaría un conflicto armado. La primera posición se hace acreedora históricamente no sólo al título de izquierda revolucionaria, que por último importa poco, sino que se convierte en una fuerza decisiva para el desencadenamiento de la revolución. En cambio, alienar y debilitar la actual tarea revolucionaria del proletariado es objetivamente una posición desquiciadora que merece no sólo el calificativo de ultraizquierda sino de infantilismo y de subjetivismo revolucionario. Por lo que sabemos el MIR está en la primera posición.

Ahora bien: en la medida que la capacidad de resistencia de la burguesía y el desarrollo de los hechos evidencie con más fuerza los vacíos y debilidades de la estrategia de la UP se haría más clara y positiva la función política del MIR. Pero el fortalecimiento de la lucha proletaria en la realidad política actual significa concretamente el fortalecimiento y no el debilitamiento del Gobierno Popular, de manera que el aporte de la Izquierda Revolucionaria debe llevar a que todas las

fuerzas de los trabajadores se juege íntegramente en la prosecución del *actual* proceso revolucionario.

La fuerza del MIR no se limita a la militancia de cuadros de ese partido y a la que participa en la lucha de sus cuatro expresiones de masas (FTR, JPR, MCR y FER-MUI) sino que es la posición de muchos revolucionarios sin partido y ha impregnado a algunos sectores de la UP. En este último campo es donde operan los efectos negativos de una mala concepción de su carácter radicalizador y complementario, ya que tiende a debilitar el quehacer principal del movimiento revolucionario en su actual etapa. En cambio resulta altamente positivo el hecho de que otros pequeños movimientos que existían en la extrema izquierda se hayan disgregado o incorporado al MIR y a los partidos de la UP (MR-2, parte del PCR, partes del Movimiento Ranquil, etc.). Esto ha coincidido con una reciente política regresiva frente a su incorporación a la lucha unitaria del proletariado chileno.

Al revés de lo que mucha gente cree, el MIR es una de las fuerzas de mayor crecimiento actual, lo que aporta contingentes específicos indispensables para el éxito de la revolución.

La presión partidista y la situación de los independientes

Uno de los temores más extendidos frente al socialismo es que esta forma de vida puede significar la intromisión de las decisiones e influencias partidistas en todos los aspectos y niveles de la vida. Este temor, más que en la experiencia mundial, se basa en las prácticas chilenas tanto en gobiernos anteriores como en el actual. La diferencia está en que antes sufrían esta presión sólo las instituciones fiscales, pero al es-

barse las mayores empresas se teme que tales prácticas se extiendan a las principales actividades del país. La otra diferencia reside en que en el capitalismo el Estado es utilizado como mecanismo de compensación para las capas medias en su lucha por mejores situaciones o por simple poder, cosa que no tiene por qué ocurrir cuando toda la sociedad es socialista; pero esta diferencia aún no ha podido ser apreciada en la práctica.

El problema es además importante porque en nuestro país, aunque la gente vota por partidos, hay una fuerte tendencia a la independencia política en el sentido de no militancia en partidos. La apreciación general señala que de tres millones y medio de electores sólo aproximadamente un millón está inscrito en partidos y/o se declara adherente a ellos; y aun sólo unos quinientos mil practican una militancia activa. Esto no significa que todos los demás tengan la misma actitud frente a la política, ya que dentro del concepto de "independiente", que en términos absolutos no dicen nada, se incluyen diversas situaciones que podemos sintetizar en los conceptos de antipolítico, apolítico y político sin partido.

La actitud *antipolítica* es la que considera que la principal causa de los problemas de Chile es la política y que lo que habría que hacer es "liquidar a los políticos de todos los partidos sin distinción". Es una actitud muy común, pero claramente infantil e irracional ya que en una sociedad de todas maneras existe política: un gobierno de militares o de un caudillo personalista hace política en cuanto es gobierno y hace política partidista en cuanto favorece los intereses de un determinado grupo social.

Más común aún es el *apolítico* que dice "lo que a mí me interesa es poder trabajar tranquilo porque yo no vivo

de la política ni ella me da de comer". Esta posición es bastante legítima y tiene mucho de verdad, aunque olvida que el bienestar de cada cual tiene una relación muy estrecha con la manera de conducir la sociedad, o sea con la política. Además estas personas no pueden evitar que en determinados momentos de la vida de un país, por ejemplo cuando hay un proceso revolucionario, la política se convierta en el primer problema. Debido a esta doble situación es mucha la gente que actualmente se siente hastiada de la política, lo que en gran parte se debe a la forma como se la presenta. Para estas personas se requiere una información política esencial y elevada para que comprenda lo importante y no se le confunda en un mar de discusiones y polémicas en que nadie convence a nadie.

Los políticos sin partido son más escasos y son los que actualmente se sienten más impactados por la tendencia a ubicarse en algún partido para hacer un aporte efectivo en el proceso de cambio. Son las personas que tienen una posición política pero no militan en partidos, ya sea porque no se sienten interpretadas por ellos o más frecuentemente porque su carácter y su disponibilidad de tiempo no les permite militar. Decimos que estas personas son militantes porque casi siempre desarrollan funciones técnicas, directivas o intelectuales que constituyen una acción popular aunque ella no esté respaldada por un partido determinado.

El temor a la presión excesiva de los partidos tiene varios niveles. Para la gran mayoría de la gente es el temor a una interferencia de los partidos en todos los aspectos de la vida, lo cual es infundado y producto más bien de una campaña antipopular. Pero sí es válido el temor en lo que se refiere al trabajo, en el sentido de ingreso y mantención de una

ocupación y en el sentido de expectativas de promoción y mejoramiento: éste es el temor más común. La preocupación de los militantes sin partido por tener un lugar en la revolución es un problema más específico y preocupa a menos gente.

Para comprender bien la situación de los independientes y la influencia de la política hay que tomar en cuenta algunos hechos a menudo ignorados o poco conscientes.

El primero es poner las cosas en su lugar en cuanto a lo que se llama "hacer política" o a la influencia de la política en la vida. Mucha gente cree que en las empresas privadas no se "hacía política" y tampoco en las noticias, educación y mecanismos de comunicación dentro del capitalismo. La verdad es que en todo ello influía la política: los patrones contrataban a la gente y la promovían siempre que siguieran su política; la educación y las noticias que trataban de eludir los problemas hacían la política conservadora de mantener el sistema. Pues bien cuando una fuerza, en este caso los trabajadores, inician una revolución se ven obligados a discutir la situación y cambiar la política en forma total; entonces aparecen haciendo política cuando en realidad se hace lo mismo que antes pero con la diferencia que ahora se hace la política de las mayorías trabajadoras y antes se hacía la de las minorías capitalistas. Como para hacerlo hay que discutir y cambiar muchas cosas, ahora se nota más, pero eso no significa, como equivocadamente creen muchos, que sólo ahora se hace política.

En segundo lugar hay que comprender la diferencia entre la acción individual y la acción social y orgánica realizada por un partido. Estimamos acertada la afirmación leninista de que el independiente está impregnado de una mentalidad individualista pequeño burguesa que considera que el hombre vale sólo por sus méritos personales olvidando el carácter so-

cial de la vida humana. Por lo demás la revolución es un quehacer social en lo cual lo determinante son las decisiones y políticas comunes, en cambio las acciones individuales tienen menor incidencia por brillante que sean. Es natural entonces que cuando se trata de tareas sociales, como dirigir una empresa, deba prevalecer la política de la clase trabajadora expresada en sus partidos. A veces se discute que una persona es nombrada por un partido y se posterga a otros de mayor valor personal porque no militan. Ello es natural, ya que una persona, aunque no sea la más valiosa, crece con el apoyo social de la fuerza que la respalda y en cambio otra persona, por valiosa que sea, si no está integrada a una fuerza social vale objetivamente menos. En una decisión un independiente no representa más que a sí mismo, en cambio un militante de partido, aunque tenga menor claridad, representa a una fuerza social y ello le da mayor efectividad y valor a su participación.

Todas estas aseveraciones sobre el valor de la acción política organizada en partidos alcanzan mayor validez en un proceso revolucionario, en que hay menos lugar para los espectadores y no existen neutrales. Se produce una radicalización de posiciones y la gente, quiéralo o no, termina por colocarse de algún lado de la guerra. Por ello también es explicable que muchas personas que no militaban en partidos estén ahora tratando de ubicarse, aunque a veces detrás de eso haya la tendencia oportunista de tener una protección y cierta seguridad frente al proceso.

Esta valoración de la acción partidista, que la hace un independiente, no pude olvidar que en la práctica chilena este valor es distorsionado por aplicaciones erróneas de este principio general. La exigencia del carnet de partido para entrar

a cualquier tipo de trabajo, la consideración exclusiva de la militancia partidista para designar cargos técnicos, la tendencia de los militantes a utilizar al partido no como expresión de clase sino como protector y alero de sus intereses personales, la tendencia a ocultar o disimular tras la militancia la deficiente calidad técnica o moral de las personas, etc., son algunas de las graves desviaciones que sufre en la práctica diaria la teoría valedera de la supremacía de la acción de los partidos en el progreso social y especialmente en el quehacer revolucionario.

Está bien que se exija militancia para aplicar una política general en cargos directivos, pero no está bien que para conseguir el más modesto empleo se exija el carnet del partido. Algunos creen que con ello se asegurarán tener mayoría en esa empresa o institución y la verdad es que el efecto es al revés porque, al darse cuenta de esto, los demás trabajadores restan su apoyo a los partidos que mal utilizan el sentido de la política. Está bien que para un cargo responsable entre personas de similares condiciones se prefiera a la que milita, pero no puede estar bien que con ese pretexto se nombre en cargos de alta responsabilidad a personas que carecen en absoluto de capacidad técnica o de cualidades morales indispensables. Es cierto que la acción organizada de los partidos es la única manera eficiente de colaborar al progreso común, pero no es cierto que los partidos deban ser "protectores" de las inseguridades y de los apetitos personales de los que no tienen otro medio de valerse en la vida: eso es puro oportunismo, es decir el peor enemigo de las revoluciones.

Más aún, en la realidad del pluralismo partidista de nuestra revolución se producen dos hechos adicionales. Por una parte se acentúa la gravedad de un sectarismo partidista y,

por otra, de hecho militar es principalmente desarrollar labores concretas en beneficio de la revolución y dentro de la Unidad Popular, de manera que hay muchos independientes que de hecho son militantes de la UP y deben ser considerados como tales, a menudo con más derecho que aquellos que sólo exhiben el carnet y la obediencia. Se habla a menudo de la ambigüedad política de los independientes, pero la verdad es que en la experiencia chilena hemos visto vacilaciones en todas partes. Por lo demás, la ambigüedad no se resuelve por la pertenencia a un grupo, sino por la posición definida frente a los problemas concretos de la realidad.

No obstante debe quedar en claro que en la revolución el primer papel lo cumplen los partidos que constituyen la vanguardia de la clase revolucionaria y que la militancia partidista es la mejor manera de hacer un aporte eficiente a ella, por lo cual es útil y necesaria la creciente incorporación a los partidos. Pero al mismo tiempo deben irse liquidando en la práctica todas las tendencias a utilizar la política con mentalidad que hace de los dirigentes una cierta minoría dominante que, aunque no tiene carácter objetivo de clase en cuanto a la producción, sí lo tiene en cuanto al poder. De no ser así la revolución no logrará un verdadero socialismo sino un burocratismo pequeño burgués y desde ya apuntaría la tarea de las nuevas generaciones para realizar una revolución hacia la auténtica democracia de los trabajadores.

CONCLUSIONES

El proyecto de iniciar en Chile la construcción del socialismo por un camino legal y gradual despertaba hace un

año gran interés en el mundo, pero era asumido con bastante escepticismo en nuestro propio país, donde muchos creían que se trataba sólo de una táctica para ganar las elecciones.

En realidad el planteamiento se basaba en la actual correlación mundial de fuerzas y en las particulares características del desarrollo social y político de Chile, adecuadamente interpretadas por la Unidad Popular.

Un año de Gobierno Popular, si bien no autoriza para un balance definitivo, a lo menos permite visualizar lo que ha sido en la práctica esta experiencia y cuáles son las perspectivas del camino que queda por recorrer. Por de pronto hay hechos que llaman la atención y que confirman la particularidad de esta empresa.

Se ha logrado simultáneamente una profunda alteración del poder y dirección de la economía con un aumento de la producción global, que si bien no es espectacular a lo menos supera el ritmo histórico de crecimiento. Este resultado global, que no excluye algunos tropiezos, constituye una excepción en los procesos revolucionarios.

Al mismo tiempo se ha logrado que el cambio inicial en el poder económico, expresado en el control social de los sectores claves de la economía, sea compatible con un riguroso respeto a la legalidad vigente y sin alterar las libertades y las prácticas democráticas ganadas en su larga lucha por las mayorías nacionales. Pero se trata sólo de un éxito inicial, pues este control democrático de la economía no está aún consolidado.

En tercer lugar, lo que ha llamado la atención en el mundo pero no en Chile, es que se haya mantenido el respeto al gobierno constitucionalmente elegido a pesar de tener la profunda intención de transformar la sociedad chilena. Y ello sin

necesidad de recurrir a persecuciones políticas ni siquiera a medidas extraordinarias que se aplicaron en el pasado.

Pero todo esto no ha sido sencillo y, además, está recién empezando. La densa revolución chilena involucra necesariamente un complejo de problemas que es necesario visualizar en forma ordenada para enfrentarlos con éxito.

La mayor dificultad reside en que se intenta la transformación legal del sistema económico sin contar con el poder político, y específicamente sin el poder legislativo, que es indispensable para lograrlo y para superar los obstáculos que encuentra todo proceso de esta naturaleza.

Las deficiencias crónicas de nuestra economía, la actitud negativa de algunos empresarios y algunas situaciones circunstanciales, en las que no han faltado los defectos de la política revolucionaria, han mantenido y agravado algunos problemas de abastecimiento que, amplificados por la opinión antipopular, provocan desalientos en gran parte de la nación. Para enfrentar esta situación la Unidad Popular, con toda razón, ha centrado la lucha popular en la "Batalla de la Producción", ya que el éxito de la revolución chilena, que se basa en el consenso electoral, requiere de la ampliación del apoyo popular que se relaciona directamente con las condiciones de vida de las mayorías.

Estas dificultades se proyectan hacia el futuro y exigen mayor audacia y eficiencia en el quehacer revolucionario. Cuatro peligros concretos se ciernen en el futuro económico inmediato. El estancamiento o disminución de la capacidad de importar (divisas), el copamiento de la capacidad productiva y consecuente necesidad de nuevas inversiones, los obstáculos políticos al manejo del presupuesto fiscal para el beneficio popular y la creciente dificultad de controlar salarios, precios

y brotes especulativos. Este panorama torna crítica la falta de poder político y cuestiona además la concepción mínima de la estrategia revolucionaria. Nos parece iluso que, después de asestar golpes mortales a la burguesía, se pretenda maniobrar con una larga y tensa transición de equilibrio inestable; ello no haría otra cosa que alimentar las latencias contrarrevolucionarias. El gradualismo de nuestro proceso debe ser encauzado pero progresivo y controlado por la mayoría nacional. Actualmente tenemos la paradoja de que la gente honrada vive un clima que considera artificial e inseguro y en cambio los especuladores tienen amplia libertad operativa y son muchos los que juegan al "sálvese quien pueda" con grave deterioro del futuro de la nación. La Unidad Popular ha puesto las cartas sobre la mesa y ha señalado que la totalidad de los trabajadores y el noventa por ciento de los empresarios no tienen nada que temer sino todo lo contrario, ya que la nueva ordenación económica va en su directo beneficio; y esto no sólo por uno o dos años sino en la concepción total del cambio. Para lograrlo se requieren herramientas legales, tales como la Ley Antimonopolios y otras que deberán someterse a consideración del Congreso.

La histórica decisión de recuperar parte de lo que le han arrebatado las empresas extranjeras ha puesto al Gobierno chileno en el centro de la ofensiva imperialista, aún cuando ello se haya hecho con estricta sujeción a la constitución y al derecho internacional. Esto demuestra, una vez más, que el imperialismo cuando siente heridos sus injustos intereses borra de una plumada todas sus hipócritas peroratas sobre la democracia y la legalidad. Su modernización consiste en que la justicia debe impedir que el ladrón siga robando, pero debe dejársele que mantenga todo lo que ha expoliado durante un

siglo. El fundamento de la decisión chilena de castigar las indemnizaciones por la nacionalización del cobre se basa en el concepto de la justa ganancia establecida como promedio de rentabilidad mundial de las inversiones norteamericanas. Por lo demás, nuestro país no pretende romper con el mundo occidental ni se ha colocado en la órbita socialista sino que se ha incorporado plenamente a los países no alineados.

Pero no todos los problemas de la revolución provienen de sus enemigos. También los hay que han surgido del seno mismo de las fuerzas revolucionarias y dos son particularmente serios: el arribismo oportunista que confunde la tarea política de transformar el sistema económico con el objetivo pequeño burgués de administrar el Estado en provecho propio y el sectarismo que concede más intensidad a la lucha interna entre los trabajadores que a la lucha común contra la burguesía. Uno y otro defecto generan ineficiencias en las tareas revolucionarias y alejan de ellas a muchos trabajadores que por su situación de tales deberían apoyarlas sin vacilación. Esta falta de unidad férrea de las fuerzas proletarias se hace más crítica en los frentes de masas donde urge una política unitaria acordada y aplicada por la dirección política de la revolución.

Todo este panorama genera algunas dudas en el hombre común, las que son torcidamente interpretadas y utilizadas por la prensa capitalista que con toda razón se opone implacablemente a la democratización del país. Algunas de estas dudas son explicables, como el recelo ante el burocratismo y el excesivo partidismo en la vida social, pero otras no son más que incomprensiones del proceso que se vive.

La reacción burguesa no ha tenido éxito en su intento de transformar la lucha contra el capitalismo en un supuesto

siglo. El fundamento de la decisión chilena de castigar las indemnizaciones por la nacionalización del cobre se basa en el concepto de la justa ganancia establecida como promedio de rentabilidad mundial de las inversiones norteamericanas. Por lo demás, nuestro país no pretende romper con el mundo occidental ni se ha colocado en la órbita socialista sino que se ha incorporado plenamente a los países no alineados.

Pero no todos los problemas de la revolución provienen de sus enemigos. También los hay que han surgido del seno mismo de las fuerzas revolucionarias y dos son particularmente serios: el arribismo oportunista que confunde la tarea política de transformar el sistema económico con el objetivo pequeño burgués de administrar el Estado en provecho propio y el sectarismo que concede más intensidad a la lucha interna entre los trabajadores que a la lucha común contra la burguesía. Uno y otro defecto generan ineficiencias en las tareas revolucionarias y alejan de ellas a muchos trabajadores que por su situación de tales deberían apoyarlas sin vacilación. Esta falta de unidad férrea de las fuerzas proletarias se hace más crítica en los frentes de masas donde urge una política unitaria acordada y aplicada por la dirección política de la revolución.

Todo este panorama genera algunas dudas en el hombre común, las que son torcidamente interpretadas y utilizadas por la prensa capitalista que con toda razón se opone implacablemente a la democratización del país. Algunas de estas dudas son explicables, como el recelo ante el burocratismo y el excesivo partidismo en la vida social, pero otras no son más que incomprensiones del proceso que se vive.

La reacción burguesa no ha tenido éxito en su intento de transformar la lucha contra el capitalismo en un supuesto

dilema entre democracia y marxismo, pero ha logrado convencer a mucha gente con otro de sus mecanismos favoritos: tender una cortina de humo para ocultar el problema de fondo. Lo que ocurre en Chile es que los trabajadores, es decir la gran mayoría nacional, está arrebatando a los capitalistas el poder que legítimamente pertenece a toda la comunidad. Pero la Derecha y sus servidores hablan sólo de desabastecimientos, de persecuciones, de injurias, etc., es decir de problemas tradicionales y en parte efectivos, pero cuya importancia es muy secundaria respecto al gran salto hacia el futuro que está dando Chile por un camino que es ejemplar en la historia mundial. Es explicable que algunas personas sigan interesadamente este juego, pero los trabajadores y los políticos que están con ellos no deben dejarse confundir.

Muchas personas llegan a lamentar que el país se halle dividido entre revolucionarios y "enemigos reaccionarios" sin respetar posiciones independientes. La verdad es que eso ocurre en toda revolución verdadera. Por primera vez se trata de transformar efectivamente el sistema económico y social imperante y ello es lo principal: toda posición que en lo substancial obstaculice al Gobierno que emprende realmente el cambio es una posición que en los hechos tiende a mantener el capitalismo, quiéranlo o no los que la sustentan. Ello no quita el derecho a discrepar de los métodos y el tratar de que la nueva sociedad sea de una u otra forma pero frente a lo principal, que es lo crítico ahora, no hay más que dos posiciones: con los trabajadores o con los capitalistas. Es vano cualquier intento o pretexto para eludir la definición y muy pronto queda en descubierto su verdadero carácter. El dilema no es marxismo o democracia, ni Gobierno u Oposición, el dilema es capitalistas o trabajadores; su enemistad puesto que

son enemigos, no proviene de un pretendido odio de los dirigentes, sino de los largos años de explotación de las mayorías.

El peor error que se puede cometer es pensar que este Gobierno es igual a todos los anteriores, lleno de defectos y llamado a fracasar. Sin duda tiene muchos defectos, pero tiene una característica única que se presenta por primera vez en nuestra historia y es que ha iniciado una revolución. Frente a ella no cabe un simple fracaso que permita volver a un gobierno moderado. La revolución se desarrolla en forma encauzada o se desata la contrarrevolución de imprevisibles consecuencias. Se está con la una o con la otra.

El momento actual se define por algo que era de esperar y que es crítico: la contradicción entre la justicia del proceso y las crecientes dificultades que encuentra en su desarrollo. Ello porque la burguesía, aprovechando de los problemas anteriores y la tradicional tendencia de los chilenos a desalentarnos de los gobiernos, ha lanzado una contraofensiva cuyo objetivo principal es evitar que avance el proceso y hacer fracasar al Gobierno, con la esperanza de recuperar el poder perdido ocultándose en la democracia cristiana. La sedición y el golpe de Estado, azuzados por el imperialismo y sus sirvientes, no son más que mecanismos "por si acaso", ya que se han convencido de que nuestras Fuerzas Armadas están impregnadas de una dignidad y constitucionalismo que no deja cabida a la traición y ni a la servidumbre de intereses injustos escondidos bajo cualquier pretexto. La verdadera estrategia de la burguesía es empujar a la democracia cristiana a una oposición substancial contra el actual Gobierno para así salvar al capitalismo y hay que reconocer que está teniendo éxito gracias a la colaboración de los que dentro de ese partido le dan más importancia a su ambición de poder que a la lucha de

los trabajadores, ignorando que ya no es posible volver a un gobierno de equilibrio centrista y que cuando más logrará desencadenar un proceso que conducirá al fascismo que puede postergar el inevitable triunfo final de la mayoría.

Esto es particularmente grave porque apunta justamente a la falta de poder político de la revolución y a la carencia de herramientas eficientes para llevar adelante el proceso en forma programada. Eso se dice con la plena conciencia que el problema central no es la conquista del poder, sino que se le considera como instrumento para la transformación de la sociedad que es el objetivo final. Frente a esta situación el Gobierno Revolucionario tiene tres caminos. Lograr el concurso de los políticos que sepan comprender que la única actitud consecuente es ayudar a mejorar desde adentro el proceso y se incorporen a la revolución para hacer su necesario aporte. O bien apelar al pueblo a través del Plebiscito que originaría un Proyecto de Reforma Constitucional. O por último, si el camino político se obstruye, recurrir a la base del poder social y, rebasando su propio Programa, entregar todas las empresas a los trabajadores, lo cual se puede hacer legalmente y cambiaría decisivamente la actual correlación de fuerzas.

Nuestra revolución está empezando, de ello no hay dudas. El proceso es a la larga irreversible, pero puede tener tropiezos de consecuencias penosas para toda la nación. Es justo que los que han luchado durante muchos años no quieran "farrearse" esta oportunidad, pero no nos parece aceptable la actitud de aquellos que se dejan coger por el rápido desaliento y hablan de echar por la borda el pluralismo, la legalidad y la vía chilena. Ese pensamiento es propio de los que tienen un salvavidas asegurado, pero no del proletariado que por primera vez está dando una lucha general con posibili-

dades concretas de triunfo y que sabe perfectamente quién pagará las peores consecuencias de una contrarrevolución.

No hay duda de que hay muchos desengañados con el Gobierno Popular. Los principales desengañados son los burgueses que esperaban que éste fuera un gobierno más, populista y limitado en sus tareas pero no un Gobierno realmente dispuesto a arrebatarles su injusto poder como ha sido. Por el bien de Chile este desengaño debe seguir aumentando. Y también hay desengaños en el pueblo. Algunos provocados por esta neblina que ha extendido la burguesía, pero otros que dicen relación con intereses directamente populares. En primer lugar la clase trabajadora desea que se aseste golpes más decisivos a todos los especuladores, explotadores, aprovechadores de cualquier tipo y aun al desorden social que reine en los mismos ambientes populares. La clase trabajadora desea una revolución y no un simple cambio en los que mandan. Y está dispuesta a jugarse para salir adelante en el desafío. Como dijo un obrero del cobre: "como trabajadores chilenos estamos obligados a salir adelante en esto que nos hemos metido, si fracasamos será una vergüenza para todos".

La revolución chilena es difícil, pero al mismo tiempo sólida. Su fuerza proviene de que no se trata de una aventura improvisada. Por el contrario ella ha sido largamente gestada en el vientre de la historia por obra y gracia de la lucha obrera. Encierra, por lo tanto, muchos sufrimientos, muchas muertes y batallas perdidas. De allí la decisión de jugarse hasta las últimas consecuencias que se traduce en tareas muy precisas y es un quehacer de todos los trabajadores, de todo el pueblo. Una cosa es afirmar que a la revolución chilena no la para nadie y otra, más difícil, es dar los pasos necesarios para que la frase se convierta en historia.

INDICE

	Págs.
Advertencia preliminar	7
Introducción	9

PARTE I. LAS IDEAS GENERALES

Los propósitos del Gobierno y el momento actual	13
¿En qué consiste la "vía chilena" hacia el socialismo?	19
¿Cómo será el socialismo chileno?	28
¿Cuáles son las perspectivas de éxito de la experiencia chilena?	38

PARTE II. EL CAMBIO VERDADERO

¿Por qué las expropiaciones?	51
¿Cómo se opera para socializar las empresas?	56
¿Cuáles empresas serán expropiadas? Los límites de las áreas	65
Sentido y forma de la lucha antiimperialista	76
La nueva organización económica y la participación popular	81
La situación de los trabajadores	96

PARTE III. EL DESAFIO ECONOMICO

La lucha contra la inflación y el Plan de 1971	102
¿Disminuirá o aumentará la cesantía?	110
El fantasma de la crisis y de los racionamientos	114
¿Bajará la eficiencia en las empresas estatizadas?	125
Los problemas de la economía de transición	130

PARTE IV. LOS CAMBIOS POLITICOS Y CULTURALES

	Págs.
¿Habrá o no dictadura del proletariado en Chile?	140
Asamblea Popular o Cámara Unica	145
Legalidad y Justicia	148
El Pluralismo y la lucha ideológica	151
El cambio cultural y el hombre nuevo	157

PARTE V. LOS PROBLEMAS DE FONDO (*)

Los Fundamentos Ideológicos y la Estrategia de la Revolución Chilena	161
El Poder de los Trabajadores; Clase, Estado y Partido	176
La Unidad Popular, la lucha por el poder y el momento actual	188
La movilización popular y el papel de los organismos de masas	207

PARTE VI. LOS PARTIDOS POLITICOS

¿Cómo es el Partido Comunista chileno?	224
¿Qué representa el Partido Socialista de Chile?	230
El Partido Radical y la Social Democracia en la UP	234
¿Qué es realmente el MAPU?	238
La balanza de la Democracia Cristiana	242
La Izquierda Cristiana y las relaciones cristiano-marxistas	248
¿Crece o se debilita la Derecha chilena?	255
¿Ultraizquierda o Izquierda Revolucionaria?	259
La presión partidista y la situación de los independientes	264
CONCLUSIONES	270

(*) En el texto, por error, aparece como: V. El Cambio Verdadero.

DEPOSITO LEGAL

bnch
11(169-41)
c. 1
AdM 0821

BIBLIOTECA NACIONAL
-2 JUN 1972
SECC. CONTROL Y CAT.

BIBLIOTECA POPULAR NASCIMENTO

En un gran esfuerzo editorial lanzamos esta colección destinada a divulgar los grandes valores de la cultura universal y nacional en ediciones económicas de bolsillo. Gran parte de los títulos de la colección corresponden a textos auxiliares de educación para la enseñanza del castellano, pero son, al mismo tiempo, obras literarias de indudable interés general.

TITULOS EDITADOS

1. Alejo Carpentier: "Viaje a la Semilla y otros relatos".
2. Eduardo Barrios: "El Niño que Enloqueció de Amor".
3. Horacio Quiroga: "Sus Mejores Cuentos".
4. Nicanor Parra: "Poemas y Antipoemas".
5. Nicolás Guillén: "Antología Clave".
6. Antonio Gramsci: "Maquiavelo y Lenin".
7. Miguel de Unamuno: "San Manuel Bueno, Mártir".
8. Manuel Rojas: "El Vaso de Leche y sus Mejores Cuentos".
9. Sor Juana Inés de la Cruz: "Antología Clave".
10. Varios: "Narrativa de la Joven Cuba".
11. Hernán Cortés: "Relaciones de la Conquista de México".
12. Efraín Barquero: "La Compañera y otros Poemas".
13. F. Scott Fitzgerald: "El Gran Gatsby".
14. Baldomero Lillo: "Relatos Populares".
15. Varios: "Poesía Chilena 1907-1917".
16. Ramón del Valle-Inclán: "Tirano Banderas".
17. Alfonso Alcalde: "El Auriga Tristán Cardenilla y otros cuentos".
18. Pablo Neruda: "Crepusculario".
19. Vicente Grez: "El Ideal de una Esposa".
20. Gustavo Canihuante: "La Revolución Chilena".

TITULO POR APARECER

21. Carlos Sepúlveda Leyton: "Hijuna . . ."

VOLUMEN DOBLE